Historia
M·Í·N·I·M·A
de

Bolivia

HERBERT S. KLEIN

EL COLEGIO DE MÉXICO

Creative Commons
Esta obra se encuentra disponible en Acceso Abierto
para copiarse, distribuirse y transmitirse con propósitos no
comerciales. Todas las formas de reproducción, adaptación y/o
traducción por medios mecánicos o electrónicos deberán indicar
como fuente de origen a la obra y su(s) autor(es).

HISTORIA MÍNIMA DE
BOLIVIA

Colección
HISTORIAS MÍNIMAS

Director
Pablo Yankelevich

Consejo Editorial
Soledad Loaeza
Carlos Marichal
Oscar Mazín
Erika Pani
Francisco Zapata

HISTORIA MÍNIMA DE
BOLIVIA

Herbert S. Klein

Traducción de
Lucía Rayas

EL COLEGIO DE MÉXICO

TURNER

984
K641h Klein, Herbert S., 1936-
Historia mínima de Bolivia / Herbert S. Klein ; traducción de Lucía Rayas. - - 1ª ed. - - México, D.F. : El Colegio de México, 2015.
407 p.; 21 cm. - - (Colección Historias mínimas)

ISBN: 978-607-462-860-9

1. Bolivia - - Historia. I. t. II. Ser.

Creative Commons

Primera edición, 2015

Primera edición electrónica, 2016

DR © El Colegio de México, A.C.
Camino al Ajusco 20
Pedregal de Santa Teresa
10740 México, D.F.
www.colmex.mx

ISBN (versión impresa) 978-607-462-860-9

ISBN (versión electrónica) 978-607-462-921-7

Libro electrónico realizado por Pixe*lee*

ÍNDICE

PORTADA

PORTADILLAS Y PÁGINA LEGAL

PREFACIO

1. GEOGRAFÍA Y CIVILIZACIÓN PRECOLOMBINA

2. LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD COLONIAL

3. SOCIEDAD COLONIAL TARDÍA: CRISIS Y CRECIMIENTO

4. REVOLUCIÓN Y CREACIÓN DE UN ESTADO-NACIÓN, 1809-1841

5. LA CRISIS DEL ESTADO, 1841-1880

6. LAS ERAS DE LA PLATA Y EL ESTAÑO, 1880-1932

7. DESINTEGRACIÓN DEL ORDEN ESTABLECIDO, 1932-1952

8. DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL A LA GUERRA FRÍA, 1952-1982

9. LA CREACIÓN DE UNA DEMOCRACIA MULTIÉTNICA, 1982-2002

10. EL SURGIMIENTO DE UNA ÉLITE MESTIZA E INDÍGENA, 2002-2014

CRONOLOGÍA POLÍTICA

APÉNDICE ESTADÍSTICO

BIBLIOGRAFÍA
I. Obras básicas
II. Mundo precolombino y colonial
III. El temprano siglo XIX
IV. El siglo XIX tardío
V. Los primeros años del siglo XX
VI. De la década de 1930 al presente

SOBRE EL AUTOR

COLOFÓN

CONTRAPORTADA

PREFACIO

La evolución de los pueblos de Bolivia comprende una de las historias humanas más complejas y fascinantes. Es la más indígena de las repúblicas americanas, cuyos hablantes monolingües de español son minoría, incluso en la actualidad. Aún predominan las lenguas amerindias quechua y aymara, y aún se hablan lenguas pre-incas, como el uru. Bolivia no es simplemente una réplica colonial de su último conquistador, sino una compleja amalgama de culturas y etnicidades de siglos de antigüedad. La sociedad boliviana, en constante transformación, multiétnica y vital, se ha adaptado con éxito a una de las altitudes más extremas en las que se hayan asentado grupos humanos.

Para la mayor parte de los bolivianos, su cultura constituye una mezcla de normas e instituciones precolombinas y posteriores a la Conquista. Los sistemas de gobierno españoles se insertaron en organizaciones de parentesco prehispánicas, los asentamientos ecológicamente dispersos se convirtieron en poblados nucleados, y las religiones local y de Estado se sincretizaron en un nuevo catolicismo popular, muy mezclado con símbolos y mitos de la religión popular mediterránea.

Pero Bolivia es, y lo ha sido desde la Conquista española en el siglo XVI, una sociedad capitalista occidental, organizada en clases, en la que los indios han sido, durante muchos siglos, la clase explotada, aunque la élite misma se ha mezclado poco a poco, como en todas las sociedades multirraciales de este tipo, y a lo largo de los siglos ha surgido un nuevo agrupamiento biológico de antecedentes mixtos. De este modo, como la mayor parte de las sociedades multiétnicas de las Américas, ha llegado a definir “raza” como un término social más que genético o incluso fenotípico. Las clases altas, que hablaban español, llevaban ropa occidental y consumían alimentos no indígenas, eran los “blancos” o, como les llamaban los campesinos, la “gente decente”. Las

clases media y baja urbanas, y los agricultores propietarios que se vestían a la usanza europea y hablaban español y alguna de las lengua amerindias, eran los mestizos o, como se les llamaba en épocas anteriores, “los cholos”. Los campesinos monolingües, que hablaban alguna lengua indígena y consumían alimentos andinos tradicionales, eran los “indios”. Aunque estas dicotomías cambiaron con el tiempo, en especial desde la introducción de la educación masiva y de la democracia política efectiva, Bolivia aún presenta muchos de los elementos de una sociedad racista, aunque con una clase mestiza mucho más poderosa y agresiva que ninguna otra en la América india.

En su desarrollo económico, Bolivia también ha demostrado ser una nación relativamente inusual. En el espectro de las economías mundiales, ocupa un sitio en uno de los extremos, como un caso casi clásico de economía abierta. La economía boliviana se ha concentrado en los productos minerales y las exportaciones primarias desde el siglo XVI hasta la fecha. Pese a esta dependencia externa, también ha mantenido un nivel inusual de control nacional sobre sus propios recursos, en especial durante el periodo nacional, aunque sigue siendo una sociedad pobre y relativamente subdesarrollada. Sin embargo, incluso en estas condiciones, ha habido transformaciones profundas a lo largo de las últimas décadas que por fin han llevado la educación pública a la generalidad de la población y reducido el analfabetismo a un nivel bajo, incluso respecto a parámetros latinoamericanos.

En esta quinta versión de mi historia de Bolivia (cuatro ediciones en español: dos ediciones con la Oxford University Press y dos con la Cambridge University Press), me enfrento al problema usual de la definición de periodos en la historia contemporánea. Como notarán quienes han leído ediciones anteriores, he modificado constantemente la periodización posterior a 1952. Los puntos de inflexión clave son las percepciones, en constante transformación, de historiadores y científicos sociales bolivianos. Así, utilizo el proceso electoral de 2002 como hito entre los últimos dos capítulos, ya que algunos comentaristas nacionales han subrayado su relevancia política como pronóstico del surgimiento de un nuevo sistema político. Debe reconocerse que esta periodización no funciona para las tendencias sociales y económicas que claramente abarcan esta división, así como que muy probablemente ésta

se redefinirá en el futuro. También reconozco que planteo algunos juicios respecto a líneas contemporáneas, en medio de ciertas transformaciones muy profundas que se llevan a cabo en la sociedad y el sistema de gobierno bolivianos, y que futuros historiadores considerarán estas transformaciones desde perspectivas distintas. Es claro que algunos de estos cambios políticos, económicos y sociales contemporáneos conducirán a sucesos imprevistos.

En los años que han transcurrido desde la última edición en inglés, ha surgido una nueva generación de científicos sociales y de centros de investigación que han producido obras importantes que analizan los cambios contemporáneos. También ha habido un cambio sutil en las definiciones sociales dentro de la sociedad boliviana, que incluyen el lento abandono de la palabra "cholo", que en la actualidad se considera peyorativo, para adoptar el término más genérico de "mestizo". Quiero subrayar que la definición boliviana de "mestizo" difiere considerablemente del sentido más general que tiene este término para la mayor parte de la población latinoamericana. En Bolivia, el mestizo o la mestiza se identifican de manera más cercana con su pasado indígena que con la parte occidental de su cultura, y tienden a mantener la vestimenta y otros símbolos de identidad, aun cuando adopten el español como su lengua primaria. Igualmente, el término "indígena" se ha vuelto común para definir a todos aquellos que se identifican con algún grupo amerindio, aun si son mestizos. Aunque he adoptado esta nueva terminología en los últimos capítulos de este libro, he mantenido la vieja terminología intacta en los capítulos previos a 1980, ya que sus significados contemporáneos no estaban en uso en ese momento.

A menos que se indique lo contrario, toda la información estadística actual que cito proviene de fuentes gubernamentales bolivianas, sobre todo del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Banco Central de Bolivia (BCB) y de algunos ministerios pertinentes. Respecto a datos estadísticos comparativos para América Latina, me he basado en datos de la ONU y sus grupos de investigación para América Latina: la CEPAL y el Celade.

Para esta nueva edición, fue muy importante la labor de José Alejandro Peres Cajías como asistente de investigación, así como también la de mis amigos y exalumnos Clara López Beltrán, Manuel Contreras y Antonio

Mitre. Como siempre, mis colegas y amigos mencionados en las ediciones anteriores me han seguido ofreciendo su apoyo y consejo, el cual agradezco particularmente.

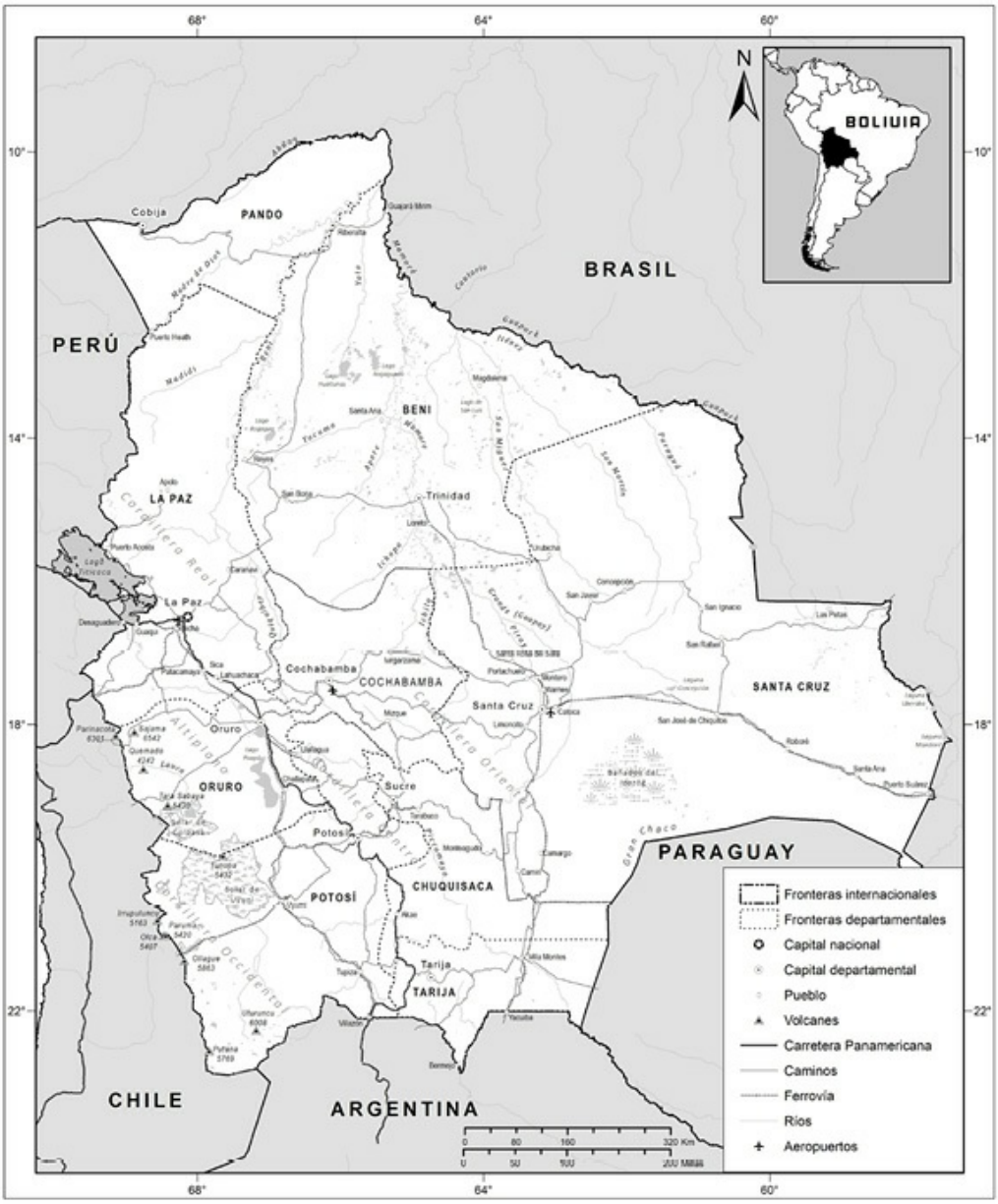
Menlo Park, California
Abril de 2015

1. GEOGRAFÍA Y CIVILIZACIÓN PRECOLOMBINA

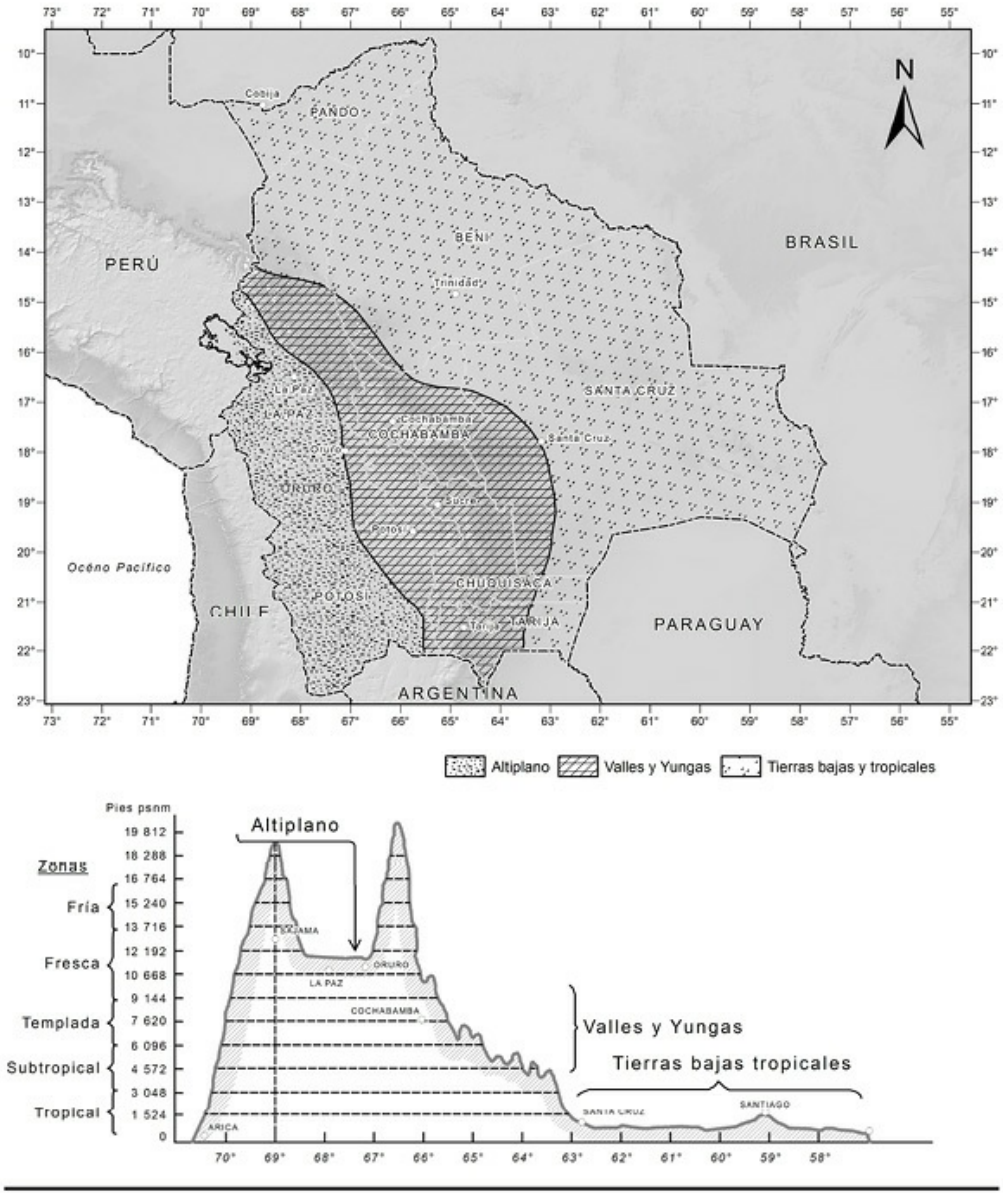
La sociedad boliviana se desarrolló en un medio inusual y muy complejo. Pese a situarse en latitudes tropicales, su ubicación, a una altitud extrema, la convierte en una sociedad comparable sólo con aquellas que habitan alrededor de la cordillera del Himalaya. Desde los primeros asentamientos humanos hasta el presente, gran parte de su población ha vivido en altitudes superiores a 1 500 msnm; la mayoría de la gente y sus culturas más avanzadas se encuentran a una altura de 3 600 msnm y otras, por encima de ésta. Sin embargo, no se trata de un medio totalmente prohibitivo, en virtud de que tienen tierras menos fértiles y climas mucho más fríos y secos, y enfrentan limitaciones ausentes en las tierras bajas. Su ecología exigió la domesticación de plantas y animales endémicos de dichas altitudes, e incluso tuvo un impacto contundente sobre la fisiología humana, ya que las poblaciones de los altos debieron adaptarse a un limitado abasto de oxígeno y a niveles muy diferentes de presión atmosférica.

Aunque dos terceras partes del territorio boliviano se localiza en bajíos tropicales y semitropicales, desde los desiertos de la costa del Pacífico de la región de Atacama (hasta el siglo pasado) al Oeste hasta los vastos tramos de tierras bajas orientales y planicies aluviales que forman parte de las cuencas de los ríos Amazonas y Pilcomayo al Este, la humanidad se ha concentrado en los altos desde la época más remota hasta la actualidad. Pero los altos y sus valles (véase el mapa 1.2) formaban sólo una pequeña parte del paisaje total boliviano.

Mapa 1.1. Bolivia



Mapa 1.2. Topografía de Bolivia



Mientras que las tierras bajas pudieron haber ofrecido mejores terrenos, así como un potencial de vida más fructífero, su inaccesibilidad, hasta años recientes, las hacía inoperantes, excepto para un pequeño número de cazadores y recolectores seminómadas, aislados de cualquier contacto significativo con los principales centros de civilización modernos. En cambio el altiplano estaba bien articulado con las densas poblaciones y zonas de

cultura avanzada del Perú central y de la costa. De este modo, pese a sus limitaciones en términos de cultivos y de vida en general, los amplios trechos de sus tierras fértiles, su potencial como zona importante para el pastoreo y sus depósitos minerales hicieron de los altos bolivianos un centro lógico de asentamiento humano.

El altiplano boliviano, ubicado justo al norte del lago Titicaca, se extiende unos 800 km hacia el sur, con una altitud promedio de 3 900 msnm. Creado por una apertura de los Andes del sur hacia dos sierras montañosas distintas, unos nueve grados al sur del ecuador, el altiplano se alza desde un ancho de unos cuantos kilómetros, hasta cientos de kilómetros en su zona central. El altiplano es la meseta más grande y llana de los Andes, conformada por una gran extensión elíptica, con el enorme lago en su extremo superior, y también la sierra montañosa más grande del mundo. Dos terceras partes de los cerca de 50 000 kilómetros cuadrados que constituyen el altiplano caen dentro de las actuales fronteras de Bolivia.

Las sierras montañosas que definen al altiplano poseen rasgos muy diferentes. La rama oeste se conoce como Cordillera Occidental y es una sierra en extremo estrecha y bien definida, con una altura promedio de unos 4 900 msnm, cuya parte superior se eleva por encima de los 6 400 msnm. Contiene algunos valles ribereños o mesetas habitables, y forma una barrera escarpada que impide el fácil acceso al mar y al desierto de la costa de Atacama. Pese a que se formó por actividad volcánica y está muy sujeta a la erosión, existen relativamente pocos minerales que vale la pena explotar. En su ladera oriental, junto al altiplano, tiene suelos muy áridos y algunas grandes salinas, como la de Uyuni, superior en extensión al propio lago Titicaca. La Cordillera Occidental se yergue como áspera barrera que limita el acceso a la costa, aunque en sus orillas norte y sur sí permite el paso a las rutas más accesibles hacia el mar, lo que facilita la integración de Bolivia con la costa en la parte septentrional o suroccidental. Esta sierra occidental ofrece poco atractivo poblacional, ya sea dentro o cerca de sus fronteras, lo que la define como la zona de asentamiento más dispersa de la región.

La sierra montañosa oriental es muy diferente. Conocida indistintamente como Cordillera Real, Cordillera Central o Cordillera Oriental, es mucho más

ancha y menos regular que la Cordillera Occidental. La Cordillera Real contiene numerosas planicies y valles ribereños fértiles, en altitudes de más de 4 300 msnm, y descienden hasta unos cuantos cientos de metros por encima del nivel del mar. Gracias a sus numerosos valles, también ofrece mayor acceso a las faldas montañosas orientales (conocidas como la región de la montaña) y a las planicies de las tierras bajas.

Los valles y las planicies de la Cordillera Real son muy complejos, pero a grandes rasgos se caracterizan por su altitud y su extensión. Las planicies más altas, definidas como valles subpuna, en su mayor parte tienen un medio templado y buen abasto subterráneo de agua, pese a su clima relativamente seco y a estar ubicados, en promedio, a unos 2 400 msnm. Usualmente se trata de planicies largas y abiertas, de acceso relativamente fácil desde lo más alto del altiplano; los de mayor densidad poblacional son los valles de Cochabamba y Chuquisaca, en la parte occidental del Potosí, y la región de Tarija. Estos anchos valles de mediana altitud fueron importantes zonas de producción y asentamiento antes y después de la Conquista. Estos valles, ejemplificados mejor en el sistema Valle de Cochabamba, fueron los principales productores de maíz en el periodo precolombino, y de trigo después de la Conquista española. También fueron los principales productores de chicha, bebida alcohólica hecha con maíz. Dada la importancia de todos estos cultivos, los valles subpuna estuvieron en constante contacto con las poblaciones centrales del altiplano. Aquí también se desarrolló la producción ganadera después de la Conquista, mientras que el altiplano se volvió el centro de producción de ovejas, introducidas por los españoles.

En la parte inferior de los valles subpuna, justo al extremo del altiplano mismo, se encuentran las laderas inclinadas de los valles ribereños, conocidos como los yungas. Con una altitud diversa, que va de los 970 a los 2 500 msnm, estos valles se caracterizan por una alta humedad debida a los vientos amazónicos, lo que facilita un intenso cultivo de productos tropicales y semitropicales. Los más importantes de estos yungas son los cercanos a la ciudad de La Paz, en el altiplano, llamados Sud Yungas y Nor Yungas, así como las regiones de Larecaja, Muñecas e Inquisivi. Históricamente, estos

valles fueron el mayor centro de producción de maíz y de coca, dos productos fundamentales, de alta demanda en el altiplano pero imposibles de cultivarse ahí. Los yungas también fueron zonas de producción intensiva de cítricos, fruta y café, en el periodo posterior a la Conquista, lo que los convertía en el complemento perfecto de los centros del altiplano. Otra serie de valles semitropicales, ubicados en las provincias de Cochabamba y Santa Cruz, eran los más aislados. Capaces de producir los mismos cultivos que en los yungas; sin embargo, quedaron en gran medida sin asentamientos y permanecieron inaccesibles hasta antes del siglo XX.

Antes de llegar a los llanos de las tierras bajas amazónicas y del Chaco, la Cordillera Oriental se convierte en una serie de pequeñas colinas y montes conocidos como la región de la montaña. Al cruzarla se entra a los llanos abiertos al nivel del mar, que se dividen en tres zonas claramente distintas: al norte los llanos de Mojos, en ocasiones llamados llanos húmedos del norte o benianos. Por lo general estas sabanas tropicales se inundan pertinazmente durante la temporada de lluvias veraniega, de diciembre a abril. En el centro se encuentra el río Mamoré, que forma parte del sistema amazónico de cuencas, y al sur de los llanos de Mojos se extienden los altos del macizo chiquitano, nombrado así por la vieja provincia de Chiquitos, situada en un área que comparte muchas de las características del ambiente de los Mojos, pero que también es centro de importantes depósitos de hidrocarburos. Hacia el sur se encuentran los llanos secos del Chaco, extendiéndose del sur de Santa Cruz hacia las fronteras brasileña, argentina y paraguaya, y más allá de éstas. Estos llanos del Chaco, arenosos y secos, que forman la cuenca del río Pilcomayo, están cubiertos de bosques de matorrales dispersos y forman gran parte del territorio de la nación, aunque alojan sólo a una quinta parte de su población.

Debido a su inaccesibilidad y a las arduas variaciones temporales, estas tierras bajas quedaron inexploradas y sin explotarse hasta épocas recientes. En tanto que la ganadería y la producción de coca evolucionaron ahí en el periodo colonial, a lo largo de la orilla oriental de la montaña de las tierras bajas, en las áreas cercanas a las ciudades de Santa Cruz y La Paz, fue únicamente con el desarrollo de la producción comercial de caucho natural, a

finales del siglo XIX, que comenzó su explotación sistemática. Sólo la apertura del transporte carretero y ferrocarrilero en el siglo XX permitió, finalmente, el desarrollo de una producción agrícola comercial de azúcar, algodón, soya y coca, así como la explotación de los depósitos de petróleo y gas natural de la región. A su vez, la ganadería se centró en las regiones de los llanos nororientales de Mojos y del Beni. Incluso con todos estos desarrollos recientes, estas regiones de las tierras bajas sólo albergan a una tercera parte de la población del país.

A lo largo de la historia demográfica de Bolivia, el altiplano y sus valles orientales permanecieron como la zona de mayor actividad humana, con el altiplano al centro del sistema. Pero, pese a su centralidad y la densidad de su población, el altiplano no fue uniformemente hospitalario con los asentamientos humanos ubicados a lo largo de su extensión: la mitad occidental contenía pocos minerales, suelos infértiles en gran medida y un clima extraordinariamente seco; la mitad oriental, por el contrario, tenía tierras razonablemente fértiles, enormes depósitos minerales y un clima relativamente más húmedo y cálido debido a su cercanía con el lago Titicaca. Con un área de 5 630 km^2, el lago Titicaca ejerce una enorme influencia sobre el clima local y provee de una humedad y calor relativos, ausentes en el resto del altiplano. En consecuencia, una intensa agricultura y el pastoreo se volvieron ocupaciones esenciales de los pueblos alrededor del lago y proveyeron la base ecológica para la creación de un importante excedente de alimentos. Esto, a su vez, fue el incentivo para la creación de sistemas culturales más complejos. Los asentamientos en torno al lago se dieron en una serie de planicies abiertas definidas por las faldas de las montañas, conocidas como cuencas, que se extienden al sur del gran valle ribereño que se convertiría en la ciudad de La Paz, unos 90 kilómetros al sur del lago. Las cuencas en las playas del lago y la de Jesús de Machaca son las más valiosas en términos de suelos y humedad, y se unen por el río Desaguadero. Esto a su vez une a los dos lagos, el Titicaca al norte y el Poopó al sur, y también pasa por las dos cuencas sureñas: Oruro y Uyuni. La cuenca de Oruro está moderadamente poblada, en tanto que la de Uyuni —la zona más seca de toda Bolivia—, que es la mayor de las salinas, en gran parte está deshabitada.

En el altiplano se llevó a cabo la domesticación de los productos básicos de la civilización andina. La papa se domesticó en la región del lago Titicaca —suceso que tendría un profundo impacto en las poblaciones de Europa—, al igual que la quinua, así como una variedad de vegetales de raíz nutritiva. Congeladas y deshidratadas, estas raíces han sido el alimento fundamental de la dieta boliviana.

El altiplano también fue escenario de la domesticación de los camélidos americanos: la llama, la alpaca y la vicuña. Al ser bestias de carga, productoras de lana y fuentes de carne, de fertilizante y de calor, estos camélidos desempeñaron un papel trascendental en la ecología y la economía andinas. Desde las épocas más remotas se encontraba a estos animales en contacto cercano con las poblaciones humanas del altiplano, aunque fue durante los reinados aymaras cuando su domesticación y uso alcanzó el mayor desarrollo. Sus manadas eran tan importantes que los aymaras pre-incaicos destinaban un lugar, en todos sus espacios habitacionales, tanto para sus animales como para la gente.

El altiplano, con una excelente zona de pasturas naturales y artificiales, también fue el hogar de los borregos europeos después de la Conquista española. Mientras que por lo general son incompatibles con otro ganado de pastoreo, las ovejas se integraron con éxito a las poblaciones de camélidos americanos, y ambos son, en la actualidad, parte integral de la economía de pastoreo amerindia. Así, entre los grandes rebaños y la intensiva agricultura de raíces, las poblaciones indígenas del altiplano fueron capaces de producir suficientes alimentos, así como productos de lana para su propia supervivencia y remplazo, al igual que excedentes para intercambiar por pescado, fruta, condimentos, maíz y coca, que no podían producir en los altos.

La riqueza de sus depósitos, que se han explotado desde la época precolombina, marca a esta región como una de las grandes zonas mineras del mundo. La distribución de sus minerales guarda un cercano paralelismo con las áreas de agricultura primaria del altiplano. Así como las mejores tierras estaban en la parte oriental del altiplano, 80% de los vastos depósitos de minerales bolivianos se encuentran en la misma área. Concentradas en una

zona a la que se da el nombre general de “faja estannífera”, la mayor parte de los minerales bolivianos se encuentran en la Cordillera Real y en sus llanos y valles superiores, que van de la orilla noreste del lago Titicaca, por la cadena de la Cordillera Oriental, hasta la frontera argentina, al sur de Bolivia. Yendo de norte a sur, la faja mineral se divide en varias zonas vagamente definidas: del sur de Perú a cerca del nivel del Mururata se encuentra la sección geológica más antigua, que contiene todos los depósitos de oro, explotados en su mayoría mediante la minería de placer desde épocas precolombinas, al igual que el tungsteno y otros metales. Rumbo al sur de Mururata, hacia Oruro, se encuentran otros depósitos de tungsteno y los primeros depósitos importantes de estaño, aunque los principales distritos de estaño aparecen en la tercera zona, rumbo al sur, en la región que va de Oruro a la frontera sur, por la ruta de Potosí. Conocida como la “provincia polimetales” debido a su singular asociación de estaño con plata, esta región es el núcleo de los depósitos minerales de Bolivia y contiene no sólo estaño y plata en extraordinaria abundancia, sino también una serie de metales raros, muchos de ellos exclusivos de Bolivia, así como plomo, bismuto, zinc y antimonio. Los únicos depósitos metálicos mayores ubicados fuera de esta zona son de cobre en el altiplano oriental, y las grandes concentraciones de nitrato y cobre al otro lado de la Cordillera Occidental, en el desierto de Atacama. El valle de Cochabamba contenía una variedad de metales no ferrosos. En las faldas de las laderas orientales se encuentran grandes depósitos de gas natural y de petróleo, y el único mineral de hierro de toda la región. De este modo, los únicos minerales o hidrocarburos que Bolivia no tiene son: carbón, bauxita, cromo, platino y piedras preciosas. Este extraordinario legado mineral, que se explotó sólo de manera modesta en la época precolombina, sería la razón de la importancia de Bolivia en la economía mundial, luego que Europa descubrió la región. Más aún, incluso durante sus más modestos comienzos antes del siglo XVI, la metalurgia de las poblaciones alteñas fue un importante elemento de intercambio entre ellas y las altas civilizaciones de la costa peruana. Fue en la metalurgia y en la creación de una ecología alteña única, adaptada a las necesidades de sus habitantes, donde las primeras poblaciones bolivianas mostraron su mayor originalidad.

Dada la extraordinaria importancia de los minerales, los tubérculos y los artículos derivados de la producción camélida en la economía andina, el altiplano continuó como la zona principal de explotación de los pueblos de la Bolivia anterior a la Conquista, y por tanto estableció el patrón que predominaría hasta el momento actual, aunque la utilidad del ambiente alteño, pese a toda la creatividad de sus poblaciones, era limitada; por esta razón, sus poblaciones han interactuado constantemente con los pueblos del valle y de las tierras bajas, para obtener alimentos complementarios básicos que ellos no podían generar. Esta llamada integración ecológica vertical, que involucraba el intercambio de productos de zonas ecológicas sumamente distintas, ha sido un rasgo común de la vida en esta región desde el principio. A partir de las primeras épocas conocidas, se encontraba a colonos del altiplano en todos los valles del este, así como en zonas tan distantes como la costa del Pacífico, al oeste. Un intenso intercambio interregional se volvió el distintivo de todas las culturas avanzadas del altiplano. Mediante el comercio de tubérculos, carne y lana de sus grandes rebaños de llamas, alpacas y vicuñas, los pueblos de los altos obtenían coca, maíz, pescado, fruta y semillas de las tierras bajas, y mantenían una base de subsistencia diversa. A lo largo de siglos de expansión, cambio y, finalmente, de conquista europea, los pueblos de los altos mantuvieron esta integración ecológica vertical intacta, y pelearon contra todo intento por aislar el altiplano de sus fuentes regionales de comercio. Hasta el día de hoy la integración ecológica vertical es un tópico dominante para la organización social y económica de la Bolivia rural.

En esto, como en tantas otras cosas, el área que con el tiempo se volvería la nación boliviana tenía mucho en común con toda la región andina, de la que sólo conformaba el sector sureño. El altiplano central y del sur de lo que hoy constituye Perú, escenarios geográficos semejantes, crearon patrones de integración similares, en especial en la región inmediatamente al norte del lago Titicaca. Además, el total de la región andina compartiría una historia cultural común.

La llegada de los primeros habitantes a la zona andina data de cuando menos 12 000 años, aunque los restos de su presencia en el altiplano se han

preservado menos que aquellos de la costa del Pacífico andino. Pero las áreas culturales tanto del altiplano como de la costa, en el periodo previo a 2500 a.C., compartían, en gran medida, una subsistencia de cazadores y recolectores con asentamientos seminómadas. Mientras que en la costa los pobladores vivían de los recursos del mar, los pueblos del altiplano se valían de la cacería de animales salvajes para su subsistencia. Desde finales del último periodo glacial (*c.* 8000 a.C.) comenzó el lento desarrollo de la domesticación de plantas y animales. La agricultura y el pastoreo finalmente se volvieron las formas predominantes de subsistencia, sólo después de unos 6 000 años de experimentación. Para el 4000 a.C., el pastoreo de camélidos andinos se volvió una actividad fundamental en el altiplano; para el 3200 a.C. se podía encontrar alfarería en la región, y se ha recuperado tela de algodón hilado de algunos entierros de la costa que datan del año 2500 a.C.

Para esta época, los altos de Perú fueron escenario de una gran transformación de la agricultura de pueblos sedentarios. El asentamiento permanente aumentó la densidad poblacional, y una organización social más compleja, en términos de gobiernos multicomunitarios, se volvió la norma. Para los próximos mil años, tanto la costa como los altos experimentaron este ritmo creciente de vida agrícola instalada. Se formaron centros más verdaderamente urbanos; el establecimiento de centros ceremoniales religiosos marcó el principio de la existencia de especialistas que no producían alimento, quienes proveían servicios para los agricultores.

Aunque el proceso que motivó a los horticultores de los pueblos a sacrificar algo de su excedente para los grupos que no producían comida no se entiende por completo, el registro de los Andes sugiere que fueron principalmente motivaciones técnicas y religiosas las que condujeron a la formación de complejos gobiernos intercomunitarios. La existencia de centros ceremoniales no fortificados, aislados de los asentamientos agrícolas, y la creación de complejos sistemas de irrigación, a lo largo de varios valles y en torno a los lagos principales, parecen reforzar esta interpretación.

La siguiente fase importante de desarrollo andino incluyó el uso generalizado de los metales, con el desarrollo tecnológico respectivo como un indicador importante de la creación de Estados cada vez más grandes y

poblaciones más densas. El cobre data cuando menos del año 2000 a.C., y en los altos, piezas de cobre de la cultura Wankarani, de la región cercana a Oruro, datan de entre 1200 y 1000 a.C.

Alrededor del año 800 a.C. el desarrollo de la civilización Chavín, la más estudiada de las primeras culturas avanzadas del área, promovió cambios a lo largo de la región andina. Esta cultura, cuyo núcleo se encontraba en los altos centrales y valles costeros asociados, vio la primera difusión masiva de influencia de una cultura mayor, a lo largo de una zona muy extensa. Fue un periodo marcado por el amplio uso de textiles y oro, así como por el desarrollo de avanzadas técnicas de alfarería y urbanización. Se construyeron importantes centros ceremoniales a lo largo de la costa y de los altos, y casi todos los valles y mesetas contaban entonces con asentamientos humanos permanentes. En todos esos desarrollos, los altos sureños de Bolivia, pese a compartir muchas de las características que se encontraban en otros sitios, parecían concentrarse en los metales puros, como el oro y la plata, pero también en aleaciones refinadas. Aunque la cultura Chavín no llegó tan al sur como el lago Titicaca, una cultura contigua y posterior, conocida como Paracas, ejerció influencia sobre las áreas costera del sur y del altiplano, pero aún no se conoce hasta qué grado.

Alrededor del año 100 a.C., la cultura Chavín desapareció del área andina para ser remplazada por vigorosos desarrollos locales confinados a un valle o zona de drenaje dada. En la costa aparecieron las culturas Moche y Nazca. En los altos, la cultura Waru se desarrolló cerca de Cuzco, y apareció un centro importante en el pequeño poblado de Tiahuanaco, justo al sur del lago Titicaca. Estas culturas contemplaron la introducción y domesticación finales de todas las plantas y animales conocidos, así como el desarrollo total de la tecnología peruana. En los altos bolivianos se descubrió la aleación de cobre y estaño: el bronce, que se desarrolló en su totalidad en los altos del sur, pero no se adoptó de manera universal en el área andina para usarse en la guerra o en la agricultura y, por lo mismo, a diferencia de lo que sucedió en Eurasia, tuvo poco impacto tecnológico.

El crecimiento de un centro de cultura viable e importante en Tiahuanaco representó un suceso de relevancia en la historia boliviana. Ubicado unos 48

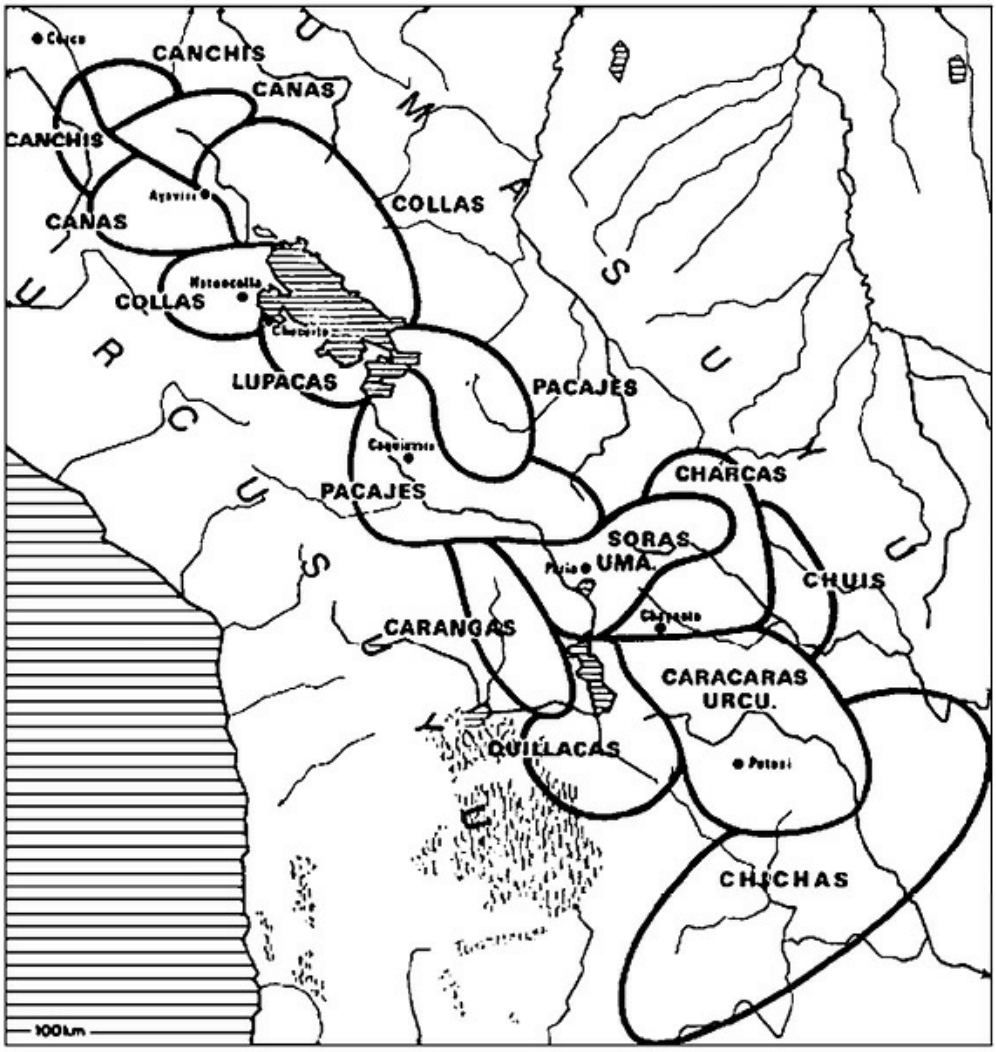
km al sur del Titicaca en el altiplano, a una altura de poco más o menos 4 000 msnm, Tiahuanaco fue un asentamiento religioso avanzado, con alfarería y objetos metálicos que datan de aproximadamente 100 a.D. Sin embargo, fue sólo después del 600 a.D. que su influencia comenzó a esparcirse más allá de su localidad. Su importancia en la historia andina se debió tanto a su ubicación, poco usual, como a su dominio en el interior de la región de los altos peruanos sureños desde alrededor del siglo VII hasta el XIII a.D. Debido a que sus característicos estilos y diseños artísticos influyeron sobre la elaboración de alfarería a lo largo de los altos y la mayor parte de las zonas costeras, al principio se pensó que el imperio de Tiahuanaco se estableció mediante la conquista. Pero todas las principales ciudades de Tiahuanaco descubiertas hasta la fecha han sido asentamientos no fortificados, con un estilo de arquitectura religioso. Algunos académicos han supuesto que la influencia de Tiahuanaco fue sólo de tipo religioso, y que los reinos seculares, tales como el de la cultura Waru (700-1100 a.D.), en la región de Ayacucho, fueron más importantes en cuanto a la difusión de su influencia. El continuo descubrimiento de nuevos centros religiosos tiahuanacos, con su característico zócalo o plataforma rectangular rodeada de bloques de arenisca y de basalto (llamados kalasasayas), ha sugerido una tercera interpretación: la de las colonias religiosas o comerciales de Tiahuanaco, distribuidas por las regiones de los altos, de los valles y costeras, que difundieron la influencia de la cultura tiahuanaca mediante el contacto directo.

En los altos, este periodo se asocia con una intensificación de la agricultura y una expansión importante del terraplén o terraza de montaña, islotes de cultivo en el lago Titicaca, campos elevados en valles de inundación de los altos y complejas obras de irrigación. Parece que la civilización de Tiahuanaco se asociaba con un aumento relevante del ritmo de la transformación económica y social del altiplano. Se ha sugerido que la ingeniería hidrológica de la civilización tiahuanaca era muy avanzada, incluso para los Andes, lo que puede explicar su rápida expansión posterior al 1000 a.D., y el clima, que se volvió progresivamente más seco después de 1200 a.D., tuvo un profundo impacto sobre su base agrícola, lo que explica su rápido declive.

Con el colapso de Tiahuanaco y la ruptura paralela del imperio Waru, surgieron en la zona andina, a lo largo de los siguientes tres siglos, una serie de Estados e imperios regionales. Entre los más destacados se encuentran el Chimo en la costa peruana norteña, con su gran centro urbano en Chan-Chan. En los altos en torno al lago Titicaca, los grupos más importantes fueron la federación Chanka, apenas al norte de Cuzco, y los reinos de los hablantes de aymara en las playas del lago Titicaca y en el altiplano sureño.

La evolución de los reinos aymaras marca el principio del periodo histórico de Bolivia, esto es, la etapa para la que ya existe un registro escrito (véase el mapa 1.3). Fueron los aymaras quienes dominaron los altos centrales de Bolivia desde finales del siglo XII y hasta la llegada de los españoles, en el XVI. A partir de las tradiciones orales registradas en las crónicas españolas y las mestizas, así como del registro arqueológico, queda claro que los reinos aymaras representaban una época importante respecto al periodo tiahuanaco previo. La concentración de poblados a la orilla del lago en comunidades abiertas, los rasgos en común de los estilos y la decoración de alfarería, así como la importancia de la agricultura en terraplén, ahora eran remplazados por poblados fortificados (o p*ucara*) en las cimas de los montes, a una distancia lejana del lago, por un desarrollo mucho más intensivo de la cultura de pastoreo de camélidos y por una religión mucho más local, representada por las *chulpas,* o casas ceremoniales, y por entierros locales en todas las comunidades.

Mapa 1.3. Reinos aymaras en el siglo XV



Los pueblos de habla aymara, muy guerreros y agresivos, parecen haber llevado al extremo la inclinación peruana a la organización dual. En tanto que actualmente se asume que hubo cuando menos siete "naciones" principales de hablantes de aymara, parece ser que cada nación se dividía en dos reinos separados. Así, los lupaca y los colla, por mencionar sólo a las naciones más grandes, tenían un gobierno *urcusuyu* y uno *umasuyu,* cada uno con su propio rey y cada uno con el control de diferentes territorios. La evidencia lingüística y geográfica sugiere que la división *urcusuyu* de cualquier nación se concentraba principalmente en los centros fortificados de las cimas de las

montañas, al oeste y suroeste del lago Titicaca, y sus colonias se agrupaban a lo largo de la costa del Pacífico, mientras que el *umasuyu* de cualquier nación se ubicaba en los altos orientales y sus colonias en los valles orientales asociados a éstos, además de en la región de la montaña.

Los reinos aymara abarcaban desde el sur de Cuzco hasta el altiplano norteño de la Bolivia actual. El núcleo de la región eran los asentamientos del altiplano, y la división dual de las naciones se daba de manera más o menos uniforme, a lo largo de un eje que intersectaba al lago Titicaca en dirección noroeste-sureste. Los Estados más poderosos eran los que estaban asentados a las orillas del lago, que puede considerarse la zona central de los pueblos aymaras. De entre ellos, los collas y los lupaca controlaban la mayor parte de la costa del Titicaca y, junto con los canas en el norte, se consideraban los más importantes de los reinos aymaras.

Al igual que la sociedad inca (la más conocida), los reinos aymaras prehispánicos también se organizaban en una compleja amalgama de estructuras corporativas y de clase. Existían los ayllus, o grupos de parentesco, y cada uno de éstos se dividía en una mitad superior *(hanansaya)* y una inferior *(urinsaya),* a la que pertenecía el total de la población. La nobleza se asociaba, en cualquier reino en particular, con los ayllus *hanansaya*, y los súbditos, con la parte *urinsaya*. Aunque la pertenencia al ayllu era trascendental para todos los indígenas, y su derecho común a la tierra sugiere una estructura de tipo comunal corporado, los aymaras también tenían jefes regionales o caciques, quienes poseían la tierra independientemente de los ayllus, y obtenían mano de obra gratuita de los integrantes de los ayllus sobre quienes gobernaban. A su vez, estos caciques tenían asistentes en el nivel del ayllu local conocidos como *jilakatas,* que parecen haber sido los líderes de la sociedad dual.

Así, entre los reyes, los nobles regionales y los ancianos locales, existía un grupo de individuos con acceso a la propiedad privada y con derecho a la tierra y a la mano de obra por herencia, independientemente de la estructura básica del ayllu. No se sabe si estos derechos, en última instancia, dependían del favor real, o si en efecto eran personales, lo que sugeriría una incipiente estructura de clases. Del mismo modo, existían algunos grupos de artesanos y

trabajadores especiales que pueden no haber pertenecido a ningún ayllu, sino dependiendo directamente de la nobleza. En tiempos de los incas, a éstos se les llamaba *yanaconas,* y parecen haber sido siervos o esclavos.

Además de las complejas estructuras sociopolíticas y económicas que existían en las regiones centrales del altiplano, tanto caciques como ayllus tenían también colonos, llamados *mitmaq,* que laboraban para ellos en diferentes zonas ecológicas. Estos colonos del altiplano eran el vínculo fundamental que ataba a la economía interregional y multiecológica, tan crucial para sostener a las poblaciones del núcleo del altiplano. Cada ayllu y cada nación y su nobleza tenían colonos que cultivaban los valles templados y semitropicales. A cambio de carne, papas, quinua y productos de lana de los altos, estos colonos ofrecían productos como pescado y sal, provenientes de las villas de la costa del Pacífico, además de maíz, coca y frutas de los valles subpuna y de los yungas. En estas regiones distantes, gran parte de los colonos coexistían con las poblaciones locales no aymaras. Así, muchos de los valles de la escarpa oriental resguardaban un complejo de instituciones, comunidades y propiedades que iban desde las extensiones privadas de los caciques y las colonias comunitarias de los ayllus del altiplano, hasta los ayllus nativos de grupos locales. De este modo, coexistían en estos valles y en las tierras bajas mano de obra esclava y libre, poblados dependientes, e incluso naciones independientes.

Este sistema de integración vertical de sistemas microecológicos (que se asemeja a un archipiélago), basado en la producción de distintos productos agrícolas y atado a una economía no mercantil mediante intrincados sistemas de parentesco, intercambio y obligaciones laborales, era fundamental para sostener una sociedad poderosa y económicamente vital en el altiplano. Tan amplios eran estos arreglos nucleados en colonias, que incluso algunas sociedades, totalmente desarrolladas para la extracción del oro y la plata, eran sostenidos por los pueblos del altiplano en Carabaya y otros valles orientales, haciendo de los aymaras los principales productores de oro de los Andes, así como los más desarrollados en el pastoreo. Tal era la riqueza de estos reinos que, pese a las conquistas inca y española, aún se les consideraba provincias inusualmente ricas durante los siglos XVI y XVII.

Pero los aymaras no estaban solos en el altiplano. Junto con ellos coexistían gran cantidad de pueblos hablantes de uru y puquina, conocidos generalmente como urus. Agrupados como los aymaras, en ayllus duales, a los urus se les negaba el acceso a tierras y rebaños; no tenían organizaciones políticas de amplia base, y trabajaban principalmente como pescadores o jornaleros para los aymaras. Es difícil juzgar si se trataba de pueblos sometidos y conquistados por los aymaras. El habla puquina de los urus representaba uno de los tres idiomas principales del altiplano en Perú previo a la Conquista, junto con el quechua y el aymara. Para la época de la Conquista española, los urus eran un pueblo pobre que vivía en pequeños grupos entre los reinos de los altos, aunque aún mantenían colonias dispersas a lo largo de la costa del Pacífico y en los valles orientales. Además, la deferencia cultural —si no es que política y económica— que los aymaras mostraban por los urus parecía implicar que éstos pudieron haber precedido a los aymaras, incluso haber sido lo que restaba de una civilización anterior y más avanzada. Algunos hasta han sostenido que se trataba del pueblo de Tiahuanaco. Sin menoscabo de cuál haya sido la situación, para la época de los españoles los urus, pese a ser aún numerosos, eran tan pobres que la mayoría escaparon a la carga impositiva española.

Guerreros, económicamente poderosos y con la capacidad de cubrir la mayor parte del altiplano y las regiones este y oeste del mismo, para finales del siglo XIV los aymaras fueron pueblo dominante en Bolivia y en una parte importante del sur de Perú. Pero dado el crecimiento poblacional y de riqueza a lo largo de los Andes para ese momento, era inevitable que una nueva organización imperial intentara una vez más establecerse en la región. Mientras que muchos Estados poderosos florecieron en la costa peruana, las culturas del altiplano se habían vuelto los centros vitales de los Estados expansionistas después de la época de Tiao. Para finales del siglo XV, los numerosos reinos aymaras se encontraron en competencia directa con el emergente Estado imperial de una nación de habla quechua, en la región de Cuzco, al norte del lago. Para las primeras décadas del siglo XV, los diversos Estados en competencia en el altiplano central se habían dividido en agrupaciones importantes, y los hablantes de quechua provenientes de Cuzco

surgieron como la más poderosa de las nuevas naciones. Para mediados de siglo, los expansionistas quechuas, que se conocieron como incas a partir del nombre de sus gobernantes, se habían diseminado hacia el altiplano norteño y penetraban lentamente hacia el sur, con dirección al distrito del lago Titicaca. En la década de 1460 pudieron ampliar su influencia sobre los reinos aymaras, incapaces de unirse contra la amenaza inca debido a animosidades tradicionales entre ellos. Dicha debilidad, pese al relativo poder militar de los aymaras, quienes sin duda eran los contendientes más fuertes ante la hegemonía inca en toda la región del altiplano, condujo a la pérdida gradual de independencia de los reinos aymaras para finales de la década.

La llegada de los incas en la segunda mitad del siglo XV sorprendentemente modificó poco la organización social, económica y política de los reinos aymaras. Al mantener a los gobernantes tradicionales y darse por satisfechos con el pago de tributos, los incas hicieron poco por modificar el tejido vital de los aymaras. Esta pudiente región se organizó como una provincia en sí misma, conocida como Kollasuyo (una de las cuatro del imperio). No obstante, la integración no fue pacífica, y en 1470 hubo una gran revuelta contra los incas en la zona de los reinos lacustres. El resultado fue que se conquistó a los reinos que seguían siendo independientes, y los mitmaqs, de habla quechua, se establecieron en colonias en todas sus áreas, en especial en el valle de Cochabamba. De hecho, esta revuelta y otras guerras en torno a ella determinarían la composición lingüística de Bolivia, desde el siglo XV hasta la actualidad.

Aunque los aymaras, los lupaca y los colla mantuvieron la mayor autonomía, finalmente quedaron integrados de manera muy estrecha al imperio inca, a través de caminos, bodegas, fortalezas, nuevos centros urbanos y colonos militares dispersados por los altos y los valles bolivianos. Como en los otros tres sectores del imperio inca, se exigió que Kollasuyo rindiera tributo, enviara sus objetos sagrados a Cuzco y permitiera que sus nobles jóvenes fueran educados por los gobernantes de aquella ciudad. El que los aymaras de Kollasuyo mantuvieran sus lenguas y estructuras sociales, económicas, e incluso políticas, autónomas hasta tal grado es testimonio de su riqueza y poder en épocas preincaicas, así como de su sentido de poderosa

identidad étnica. Incluso los conquistadores españoles, con su decidido apoyo a la “quechuanización”, no pudieron terminar con la cultura aymara.

Para la época en que los incas habían dominado a los reinos aymaras, a sus aliados, a los pequeños grupos de los valles subpuna y yungas, en el interior de la zona cultural del altiplano ya habían elaborado por completo los rasgos básicos de su organización imperial. No obstante, los principios de un sistema económico, social y político coherente aún se implantaban lentamente cuando, unos 80 años después, los españoles dieron fin al experimento organizativo inca. La temprana desaparición del Estado inca, justo cuando empezaba a madurar, ha dificultado en extremo el análisis de la naturaleza precisa de esta sociedad a finales del siglo XV y principios del XVI.

Tal como se refirió de manera oficial a los españoles, el Estado inca era una organización autoritaria y benevolente, fundamentada en los principios racionales de la igualdad y la justicia. Prohibió la propiedad privada, y distribuía bienes y servicios al imponer un impuesto de hasta dos terceras partes de los productos del campesinado andino. Los campesinos, a su vez, se organizaban jerárquicamente en grupos de diez unidades: decenas, centenas, etc., y por último, el imperio mismo se administraba dividido en cuatro regiones básicamente homogéneas, a manos de una burocracia estatal totalmente dependiente de los incas, y asociados, por la vía de agrupamientos, en clanes, con los gobernantes del Estado. Una religión de Estado que ponía énfasis en las virtudes cívicas y era totalmente sincrética con todas las religiones previas fue el instrumento que garantizó el consenso de las masas populares.

Aunque los gobernantes del imperio pudieron haber percibido a su sociedad en términos bastante coherentes y racionales, de hecho la rápida y reciente conquista de los pueblos producía una sociedad relativamente heterogénea. En efecto, la red de caminos estaba totalmente construida, y el sistema de bodegas, increíblemente grande, estaba ya en funciones, de modo que los incas podían guardar el excedente de cualquier área para utilizarse en todo el imperio en épocas de emergencia, así como sustentar a un artesanado no agrícola y un ejército profesional. Sin embargo, sí existieron importantes elementos de propiedad privada en este amplio sistema no mercantil. De este

modo, los nobles que se habían rendido pacíficamente ante los incas conservaron sus tierras y sus trabajadores, al igual que algunos distinguidos nobles incas pudieron obtener terrenos privados y el uso de yanaconas, o sirvientes del Estado, sin tierra. Asimismo, los Estados preexistentes mantuvieron muchas formas de gobierno preincaicas, pese a su incorporación a provincias más amplias del imperio inca. El retiro de objetos religiosos para llevarlos a Cuzco, y la forzosa quechuanización de las élites locales, no modificaron la devoción de las masas campesinas a las religiones locales, ni les llevó a abandonar sus lenguas. Más aún, como en el caso de los aymaras, los arreglos de los colonos del altiplano y los pueblos que dependían de éstos quedaron en gran medida intactos ante la conquista inca, quienes no retaron realmente la viabilidad de las viejas estructuras sociales y políticas, siempre y cuando no representaran una amenaza para su control.

Así pues, el imperio inca conservó un mosaico de estructuras políticas, de religiones y de lenguas, e incluso tuvo un importante elemento de propiedad privada dentro de sus fronteras. Pese a que no era totalmente congruente con sus ideas, el imperio inca llegó a ser una fuerza poderosa y cohesiva, así como quizá el Estado y estructura económica más sofisticados creados por los pueblos de la América previa al siglo XVI. También llevó a cabo algunos de los proyectos agrícolas y de ingeniería más sorprendentes de América. Desde Ecuador a las fronteras sureñas de Bolivia, se construyó un macizo de caminos que facilitaba el tránsito de hombres y bestias de todas partes del imperio hacia Cuzco. Se crearon miles de hectáreas de nuevas tierras agrícolas gracias a la compleja formación de terrazas en las inclinadas laderas andinas, y se construyeron inmensos complejos de bodegas para almacenar enormes cantidades de telas y de alimentos no perecederos, para la totalidad de la población. El imperio, de este modo, funcionaba como un importante distribuidor de bienes y servicios, de manera no mercantil, con lo que tal vez creó bienestar y riqueza en toda la población, que no ha tenido par desde entonces. Por último, su organización económica y social, en extremo coherente, proveyó de un inusual medio de justicia social y económica, como incluso los españoles reconocieron, ya que los incas tomaron grandes medidas para aliviar condiciones de trabajo onerosas mediante reclutamientos

de mano de obra cuidadosamente seleccionada, a corto plazo, y protegida en su totalidad por el Estado en términos de ofrecer mantenimiento y compensación a las familias de los trabajadores. Se ocupaba al campesinado en las "mitas" o trabajo forzoso en las minas, en proyectos de ingeniería, en los ejércitos, o en el servicio personal durante cortos periodos, y se les compensaba íntegra y efectivamente por ese trabajo.

Este método de organización inca era tan eficiente que la convirtió en una potencia militar a la que nadie podía oponerse. Podía movilizar numerosos ejércitos, alimentarlos y abastecerlos durante largos periodos, lo que los hacía inmunes a los ciclos agrícolas. Los incas podían desgastar a sus oponentes debido a sus grandes contingentes, su equipo y su persistencia. En el lapso de menos de cien años que duró el imperio, acabó con todos los que se le enfrentaron, sometiendo con facilidad a sociedades tanto costeras como del altiplano y, en general, a cualquier pueblo cuya base primaria fuera un campesinado estable. Pocos Estados podían resistirse a la *Pax incaica,* y muchas sociedades se unieron al poderoso nuevo imperio de manera voluntaria. Cuando llegaron los españoles, eran uno de los más grandes ejecutores de la organización humana que el mundo hubiera visto.

Pero también había límites para la expansión inca, definidos más por la organización social y económica que por la actividad militar. Pese al uso de pobladores y ejércitos, los incas fueron incapaces de someter a culturas que no se basaran principalmente en la agricultura. Esto fue especialmente evidente en la región de Kollasuyo, la zona que englobaba a Bolivia. Aquí los incas habían tenido éxito en la conquista de los aymaras, de sus dependientes urus y de poblaciones más pequeñas que convivían con los alteños, esto es, las culturas de los valles subpuna y los yungas. Aunque evidentemente hablaban lenguas distintas del puquina, el aymara y el quechua, estos pueblos del valle fueron fácilmente subsumidos en el Estado inca, y tanto en la época incaica como durante la quechuanización posterior a la Conquista, sus lenguas se perdieron y fueron sustituidas por el quechua. Sin duda el dominio del quechua sobre el aymara como lengua principal del total de la región boliviana tiene que ver tanto con la conversión de estos grupos lingüísticos

locales al quechua como con la anexión de colonos quechuas a estos territorios, antes dominados por los aymaras.

Fuera de esta región del altiplano se erguía una importante frontera humana en la zona de la montaña y en los llanos de las tierras bajas. En este lugar existía una elaborada combinación de cazadores y recolectores, agricultores, e incluso áreas de múltiples poblados que evitaban que los grupos del altiplano se expandieran hacia el este. Aunque los incas intentaron la conquista de esta región, no tuvieron éxito, pues los pueblos de estos territorios bloquearon la penetración cultural y la dominación del altiplano. Llamados genéricamente chiriguanos por los españoles en la era posterior a la Conquista, los pueblos de las tierras bajas incluían gran cantidad de grupos diversos que abarcaban desde cazadores y recolectores tipo sirionó, en un nivel primario de desarrollo, hasta los sofisticados habitantes de los llanos de Mojos. Estos últimos, probablemente el grupo más avanzado de la región, desaparecería para el momento de la Conquista española. Sin embargo, es evidente, por sus restos, que fueron importantes constructores de calzadas y que mantuvieron una agricultura de ciclo anual en los humedales de las tierras bajas del noreste. Así pues, los indígenas que vivían en la región de Mojos, constructores de amplias calzadas que se extendían a lo largo de cientos de kilómetros en algunos casos, resolvieron con éxito la crisis de las inundaciones anuales y mantuvieron poblaciones de muy alta densidad, así como estructuras gubernamentales complejas sobre esta tierra alta, construida artificialmente.

Esta frontera era tan poderosa que bloqueaba totalmente el acceso a las cuencas ribereñas tanto del Amazonas como del Pilcomayo, hacia el noreste y el suroeste. Incluso los españoles no pudieron asentarse en esta región de manera definitiva. De hecho, algunas tribus de las tierras bajas quedaron aisladas hasta el siglo XX y, en general, todavía hasta hace poco han preservado en gran medida y de manera sorprendente sus lenguas y culturas.

También al suroeste, otros grupos fronterizos de indígenas se opusieron, con éxito, al acceso de los incas a los llanos costeros chilenos. Estos grupos, llamados araucanos (o mapuches), aunque muy avanzados en lo material, tenían un gobierno de confederaciones intercomunitarias poco sólidas. Sin

embargo, mostraron ser un grupo militar eficaz. Pese a diversos intentos de penetración por parte de los incas, dichos grupos evitaron su entrada por las costas del suroeste. En este caso, no obstante, la frontera parece haber sido un poco más porosa que las tierras bajas orientales, ya que el comercio y el contacto fueron muy frecuentes entre ambas regiones.

Tan sólo hacia el sur, en las faldas andinas, donde ambas cordilleras se fusionan una vez más en lo que hoy es el noroeste argentino, hubo conquista y penetración sólida de los altos. Los colonos militares quechuas tuvieron éxito y entraron a este territorio; queda claro que se habrían asentado por completo en la región norteña de los llanos argentinos, de no haber sido por la temprana destrucción del Estado inca a causa de la Conquista española.

Mientras que el potencial de expansión no quedó bloqueado por completo, el imperio inca había encontrado sus límites naturales en el momento de la Conquista española, y estos límites, de manera muy interesante, demostrarían ser los límites de la mencionada conquista durante la mayor parte del periodo colonial. Las organizaciones de Estado, avanzadas y complejas en la zona andina, dependían, en última instancia, de la existencia de un campesinado estable a quien imponerle una carga fiscal. Donde el campesinado existía y sobrevivió, los incas y sus sucesores construirían poderosas organizaciones estatales basados en el excedente campesino. Con abundantes recursos en tierra, el insumo fuerza de trabajo fue siempre el elemento costoso en la sociedad americana, y la estabilidad y productividad de dicho factor era esencial para la existencia de las clases no productoras de alimentos.

De este modo, en la base de la cultura andina se encontraban los campesinos, organizados en grupos compactos de parentesco ficticio conocidos genéricamente como ayllus, que organizaban el trabajo y distribuían tierra entre sus integrantes. Aunque existían algunas clases fuera de la estructura ayllu, la abrumadora mayoría de la gente común, nobles y gobernantes, estaba incluida en ésta. A diferencia de las comunidades contemporáneas campesinas indígenas, o de las comunidades libres organizadas por los españoles y llamadas ayllus después de la Conquista, el ayllu precolombino era en esencia un grupo de parentesco, no definido por una comunidad residencial única. Los ayllus tenían miembros en cada una de

las diversas zonas ecológicas, y pese a conservar una zona residencial central, no se limitaban a un espacio. Aunque los derechos sobre la tierra residían en el ayllu en última instancia, para que este bien fuera otorgado a sus integrantes uno a uno, éstos podían tener tierra en un escenario regional muy disperso y en anchos tramos que iban de la costa a los altos, y hasta los valles orientales. Esta ubicación geográfica relativamente poco estructurada fue una respuesta inevitable ante las zonas ecológicas en extremo diferentes, habitadas por los pueblos andinos. Se trataba de un rasgo de gran contraste respecto al patrón de poblados arracimados de los campesinos mediterráneos, característica distintiva de la cultura española. También era algo muy distinto de la hermética comunidad colegiada descrita por los antropólogos, que surgiría como forma dominante de organización en el periodo posterior a la Conquista.

Para las primeras décadas del siglo XVI ya había surgido, en la parte sur de los altos andinos, una sociedad de desarrollo superior y una organización estatal densa y compleja, firmemente anclada a un sistema agrícola basado en la población. Se encontraron alrededor de tres millones de indígenas bajo el control inca (comparados con siete millones de españoles que vivían en España en ese momento); cerca de la tercera parte habitaban la provincia sureña de Kollasuyo. En este lugar, una multiplicidad de sociedades y de lenguas se agrupaban en un vasto sistema de intercambio no mercantil que incluía una transferencia constante de productos entre sistemas ecológicos asombrosamente diferentes. También era una de las zonas minerales más ricas del planeta, y una de las sociedades campesinas más densamente pobladas de esa época. Dado este potencial, era inevitable que la región de los Andes del sur se volviera uno de los centros más importantes de la colonización española en las Américas. A su vez, los altos bolivianos, alguna vez integrados al imperio de ultramar de Europa occidental, que se expandía, se volverían hacia una nueva fuente de alimentos y minerales que tendría un profundo impacto sobre la economía mundial.

2. LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD COLONIAL

Durante los siglos XV y XVI la península ibérica encabezó la expansión europea a escala global. Los portugueses iniciaron la dominación europea del mundo gracias a la conquista de las rutas comerciales oceánicas de África y Asia; y España, más específicamente el reino de Castilla dentro del Estado español, emprendió la conquista y colonización de extensos territorios del hemisferio occidental. América, a diferencia de África y Asia, era desconocida y no estaba integrada al mundo euroasiático antes del siglo XV. Con la conquista de América, España ocupó un espacio completamente nuevo para desarrollo y colonización, que a su vez dio a Europa una decidida ventaja en su carrera por lograr influencia mundial. Así, la conquista castellana de las tierras americanas, junto con la conquista portuguesa de las rutas marítimas internacionales, finalmente inclinaron la balanza del poder económico mundial a favor de Europa, y colaboraron a preparar el camino para su domino industrial, aún por venir. De este modo, la conquista de América de finales del siglo XV y principios del XVI fue crucial para modificar la relativa importancia de Europa en el ámbito mundial, así como para definir una nueva era histórica.

Mientras que los europeos pudieron inicialmente haber considerado a América como tierra vacía habitada por gente simple a explotar para beneficio europeo, en los hechos América también modificaría aquello que los científicos sociales contemporáneos llamaron el "mapa cognitivo" de los mismos europeos. América no cabía en la cosmovisión de la Europa cristiana de ese momento, ya que estaba muy lejos de la tradición cultural mediterránea y sus percepciones subculturales cristianas. La Biblia no

menciona a América, y sus indios jamás habían oído ni de Cristo, ni de religiones anteriores, oriundas del territorio continental euroasiático. Al principio los europeos ignoraron estos mundos en sus concepciones de la realidad histórica, pero a lo largo de los siguientes tres siglos la existencia de América comenzaría a desempeñar un papel en las creencias y verdades tradicionales de las normas culturales europeas. Además, los animales y las plantas americanos, que poco a poco se expandieron en regiones del Viejo Mundo, afectarían de manera profunda a las sociedades y economías de Europa, África y Asia.

La posesión de imperios en América definía el poder relativo que en la propia Europa tenían varios Estados-nación en contienda mutua. Los territorios del Nuevo Mundo otorgaban a cualquier Estado europeo un importante mercado, y requerían de una poderosa flota marina para hacerse sentir en las luchas intraeuropeas. El hecho de que Castilla entrara primero en la carrera por un imperio americano y poseyera la mayor parte de sus tierras, recursos y pueblos, otorgó al nuevo Estado español un mayor poder sobre sus contendientes europeos, que permaneció intacto hasta muy entrado el siglo XVII. Durante un lapso cercano al siglo y medio, España fue la potencia dominante en Europa, justo cuando la propia Europa establecía su hegemonía económica sobre el resto del mundo. Y fue América el factor decisivo.

El Estado español, que liberó los recursos europeos en América, era entonces el Estado más moderno y uno de los de más reciente formación en el continente europeo. Por esto, fue capaz de combinar una amplia gama de iniciativas privadas en la conquista y colonización de América, con una muy veloz integración de estos territorios, de reciente adquisición, en un imperio coherente, de control centralizado, administrado desde Europa. Del mismo modo que sus predecesores incas fueron conocidos por su capacidad administrativa y organizativa, la genialidad española residiría, en última instancia, en su capacidad de integrar el poderoso empuje europeo de la empresa privada, en el contexto de estructuras de gobierno formales. También fue la primera nación de la historia mundial en crear y mantener un imperio intercontinental a lo largo de cuatro siglos.

Así, la conquista de América significó tanto su integración al mercado mundial como su organización dentro de la estructura imperial más grande del mundo. Hasta el siglo XVIII ninguna potencia europea sería rival del imperio español. Y este imperio se extendía desde la Tierra del Fuego hasta el Estrecho de Puget, y desde Sicilia, al Este, hasta las Filipinas al Oeste. Pero pese a la gran importancia del imperio colonial americano para España, en cuanto a ser fuente de los recursos para el dominio de la política europea, no se trataba del único recurso del Estado español. Aun sin América, España entró al siglo XVI como una de las naciones más opulentas de Europa, con un vibrante comercio internacional de lana y un complejo conjunto de productos agrícolas mediterráneos clásicos, de exportación. También tenía un importante sector minero, así como una densa población activa en el comercio. Pudo movilizar enormes recursos internos que, junto con los que provenían de América, se utilizaron para crear el más poderoso ejército y armada del continente. Con esta fuerza invencible, España no sólo luchó contra el poder turco hasta llegar a una parálisis en el este del Mediterráneo, sino que también conquistó grandes partes del sur de Italia y de Sicilia, y mantuvo una importante área colonial en los Países Bajos. Intervino activamente en la política de los Estados alemanes, así como en las regiones francesas, e incluso participó en las luchas dinásticas inglesas.

De este modo, tanto en España como en el resto de Europa había numerosos espacios de superación para los integrantes de la sociedad española. España misma se expandió de manera impresionante: su burocracia se convirtió en la más grande de Europa, y su ejército y sectores comerciales se desarrollaron al mismo ritmo. De este modo, la distante y relativamente peligrosa América atraía sólo a los más atrevidos y a los más marginados de los grupos no campesinos de España. Fue el jornalero pobre y no el maestro artesano, los hijos bastardos de la aristocracia pobre y no el primogénito, y ni siquiera el segundo hijo de los grandes terratenientes en muy buenas posiciones, quienes se embarcaron a América, así como lo hicieron los sobrinos de menor importancia de las principales familias de comerciantes en Sevilla, y los abogados y notarios más pobres, que no tenían fondos para comprar una posición, hasta que obtuvieran el grado. Fueron, en resumen, los

grupos inferiores dentro de las clases con potencial movilidad ascendente quienes llegaron a América. A la nobleza superior e intermedia, no obstante, le estaba yendo lo suficientemente bien en el continente y en España como para tener que arriesgarse en el largo cruce del Atlántico, mientras que el vasto campesinado era demasiado pobre como para poder emprender la travesía.

Estos antecedentes permiten explicar la sorprendente naturaleza de la estructura social que crearon los españoles en su imperio americano. Para empezar, hubo una ausencia total de la clase campesina española, que en el Nuevo Mundo fue remplazada por los campesinos indígenas americanos. Además, sin instituciones o clases preexistentes con las cuales competir, y con la escasez de recursos humanos, todos aquellos que fueron a América experimentaron un ascenso de estatus extremadamente veloz en comparación con sus antiguas posiciones en la sociedad española. Para muchos de estos individuos, su éxito en América de hecho imposibilitaría su retorno a España, pues el mito, clásico en España como en el resto de Europa, de que uno podía hacer fortuna en América y volver para disfrutarlo, en los hechos no existía, y los americanos con éxito no podían encontrar de nuevo sitio en la sociedad española. Así, grandes conquistadores, como Pizarro y Cortés, aunque obtuvieron riquezas semejantes a las de los más acaudalados de España, encontraron que la nobleza española se negaba a incorporarlos a sus filas y que su fortuna no podía comprar un lugar en España equivalente al estatus que tenían en América, por lo que muchos de ellos volvían a América después de una breve visita a Europa. Lo mismo sucedía en todos los rangos de la sociedad, con casos como los de artesanos que jamás terminaron su aprendizaje en Europa y que rápidamente se volvieron poderosos y ricos en América, incapaces de transferir su nuevo estatus a Europa. Sólo aquellos que habían obtenido sus títulos antes de partir, o que tenían vínculos importantes previos a la migración, pudieron utilizar su riqueza obtenida en el Nuevo Mundo para alcanzar un mejor estatus en España. El abogado o notario antes pobre, ahora podía comprar un oneroso despacho profesional en España, y lo hizo con celeridad. Por otra parte, también se dieron casos como el del sobrino pobre que pronto se volvió el opulento comerciante americano que

mantuvo pobres a sus parientes cuando volvió a Europa; pero éstas fueron de las pocas excepciones a la regla.

Estos factores explican el establecimiento de una sociedad española o criolla permanente en América, prácticamente desde los primeros años. También fue una sociedad que de muchas maneras demostró ser mucho más cambiante que la sociedad de origen. Mientras que la primera generación de conquistadores mantenía su puesto aun cuando su riqueza y estatus cambiaran, su descendencia no conocía tales restricciones. Para la segunda generación, los títulos honoríficos de don y doña ya no se limitaban a la élite, sino que empezaban a ampliarse a todo español, fuera nacido en España o en América. La rígida estructura gremial española no debía ya establecerse en América, donde los oficios calificados se volvieron algo relativamente abierto para toda aquella persona que deseara ser parte de algún gremio.

Esta apertura no implica que la América criolla fuera una sociedad sin clases. De hecho los criollos operaron a toda velocidad para establecer líneas que delimitaran las clases, y rápidamente absorbieron los mejores recursos en una distribución desigual. Así, la estructura de clases tomó forma rápidamente, e incluso existió desde el momento mismo de la Conquista; los botines de guerra fueron divididos estrictamente según la inversión económica inicial de los soldados en la expedición de conquista, y según su rango relativo dentro del ejército conquistador. La nueva élite también utilizó tales mecanismos fuera del mercado, como concesiones de tierra, el parentesco y las alianzas matrimoniales, para consolidar las adquisiciones de tierra, recursos y capital, y cerrar la entrada a sus filas tanto como fuera posible. Pero la celosa Corona española jamás les permitió crear estructuras de clase tan rígidas como las que existían en España. El mayorazgo y la primogenitura difícilmente se usaron en América antes de los años finales del periodo colonial, de modo que la clase alta debía mantenerse a sí misma en el contexto de un sistema totalmente abierto de herencia fraccionable, en la que toda descendencia, de uno y otro sexo, participaba por igual. El que tuvieran éxito respecto a mantener las divisiones de clase resulta obvio cuando se examina la estructura de clases en cualquier lugar de América. No obstante,

estas sociedades tuvieron mucha más movilidad en su interior de lo que era aparente en la sociedad española metropolitana.

Del mismo modo que la élite española-americana tenía más dinamismo que su contraparte metropolitana, también tenía menor poder político. Se le negaba el control del gobierno local, y debía compartir su poder con una burocracia real, ajena a las influencias locales, en un nivel desconocido en Europa. El que la élite tuviera influencia sobre dicha burocracia era obvio, pero aun con toda su riqueza, no podía controlar o dominar el gobierno, como se hacía en Europa. No obstante, había un área en la que excedían a sus contrapartes europeas: en cuanto a los indígenas, cualquier español ejercía mayor poder y control del que grupos equivalentes tenían en relación con el campesinado en España. Las excusas de la Conquista y de las diferencias culturales-raciales otorgaron a los españoles que arribaban, sin menoscabo de su clase y bagaje, una posición de superioridad desconocida en Europa.

El establecimiento de la sociedad americana recibió influencia tanto del propio proceso y naturaleza de la Conquista como de los antecedentes sociales y de estructura política de la sociedad metropolitana. El imperio español-americano, en especial como se estableció en el mundo andino, fue, principal y fundamentalmente, una creación de la Conquista. Una minoría compuesta por gente blanca y sus esclavos negros habrían de dominar sobre una masa de indígenas americanos, inicialmente separados y completamente distintos. Sin importar cuán diferenciados estuvieran internamente, aún se consideraba a los indígenas una masa aislada y reprimida, menor en estatus que el más pobre y analfabeta de los conquistadores.

Al principio, las poblaciones andinas percibían a los españoles sólo como un grupo conquistador extranjero poderoso, que no se diferenciaba de manera significativa del conjunto conquistador inca. Por esta razón, y debido a la subyugación inca, relativamente reciente, y a la existencia de grupos antagónicos no quechuas, aún no asimilados dentro de sus fronteras, a los españoles al comienzo les fue sencillo derrocar al imperio inca. Como los españoles parecían prometer continuidad en cuanto a las estructuras de clase internas, el reconocimiento de las aristocracias tradicionales indígenas, así como de cualquier otro tipo de privilegio especial otorgado a un grupo que

daba su apoyo en el contexto de una guerra de conquista, muchos indígenas se aliaron a ellos. El patrón futuro de discriminación racial y opresión de clase no fue evidente durante la primera fase de la Conquista española, en la década de 1530.

Así, la Conquista española de Perú, como también se llamaba a la zona que hoy se divide en Bolivia y Perú, procedió en gran medida como en la conquista de México: las armas metálicas, la pólvora y los caballos permitieron que un par de cientos de españoles subyugaran ejércitos indígenas de miles de personas. A la vez, los españoles utilizaron con efectividad a los obstinados indígenas no quechuas, así como al producto de la guerra civil interna entre los hermanos incas Huáscar y Atahualpa, para sus propios fines. Al inicio convencieron al liderazgo inca de que eran sólo una fuerza mercenaria que se iría una vez que se saciara su apetito de oro y plata. Ante los Estados y tribus antes independientes, conquistados por los incas, se proclamaron libertadores, mientras que ante la parte derrotada en la famosa guerra civil inca, el frente de Huáscar, sostuvieron traer justicia y recompensa por sus pérdidas.

Utilizando con astucia todos estos recursos, los españoles aislaron eficazmente a Atahualpa, recientemente victorioso, y a sus ejércitos profesionales de Quito, del resto de la población de Ecuador, y obtuvieron muy importante información de inteligencia, abastos y aliados militares indígenas. Una vez que se dispersó a las tropas de Quito y murió Atahualpa, crearon sus propios títeres incas a partir de la facción de Huáscar, antes derrotada. Cuando estos líderes se rebelaron, obtuvieron el apoyo de sus propios sirvientes indígenas yanaconas, así como de fuerzas antiincas, que colaboraron con ellos para triunfar sobre la última gran rebelión inca. Tal asistencia indígena, combinada con su indiscutible superioridad militar, implicó que sólo en casos raros y especiales murieran muchos españoles durante alguna fiera y sangrienta pelea.

Los españoles sufrieron más bajas por batallas entre ellos que las que les infligieron los indígenas. Por último, sin importar cuánta esperanza pudieran inspirar las victorias indígenas locales, la arremetida de nuevas tropas españolas y los inmigrantes que llegaban cada día claramente implicaban que

la pérdida de un par de cientos de soldados de ninguna manera entorpecía la habilidad española para montar una guerra de conquista y colonización de un siglo de duración.

Fue tan sólo el progresivo endurecimiento del régimen español, con su cada vez más odiosa extracción de recursos excedentes de la élite y del campesinado indígena, lo que finalmente lanzó a varias fuerzas indígenas a formar un frente antipoblación blanca, moderadamente unificado. Esta alineación era inevitable dado el constante flujo de colonos hambrientos, concentrados en extraer todo lo posible de una población que ya había sido totalmente saqueada. Sin embargo, para ese entonces los españoles eran ya demasiado poderosos y los rebeldes indígenas demasiado débiles como para lanzar a los conquistadores de vuelta al mar. Las rebeliones encabezadas por los incas desde finales de la década 1530, y en adelante, estaban destinadas a la derrota total.

En el contexto de esta intrincada red de alianzas y rebeliones, los grupos del altiplano, al sur del lago Titicaca, finalmente entraron a la historia de la Conquista española de Perú. La gran rebelión del supuesto títere Manco Inca, en abril de 1537, implicó que varios grupos aymaras finalmente tuvieran que tomar partido. En tanto que inicialmente apoyaron a los españoles debido a su propia alianza anterior con la derrotada facción de Huáscar en la guerra civil de antes de la Conquista, la deserción del líder de dicha facción respecto de la causa española los forzó a reevaluar sus lealtades. Durante el sitio de Cuzco a manos de los incas rebeldes se envió a levas de milicia de muchas de las áreas de los altos, con los lupaqa como apoyo particularmente fuerte a la rebelión. Los collas, sin embargo, siguieron tercamente apoyando a los españoles, hecho que por último llevó a un ataque combinado inca-lupaqa contra ellos.

En defensa de los asediados collas, Francisco Pizarro condujo, en 1538, una enorme fuerza expedicionaria a Chiquitos y al río Desaguadero para destruir a los ejércitos rebeldes incas y lupaqas. El resultado final fue el acostumbrado: victoria total para los españoles. Atrapados en los llanos abiertos, los rebeldes fueron presa fácil de ataques de caballería en masa, y se les destruyó. En esta coyuntura, Pizarro decidió dejar a sus hermanos en la

zona para emprender una colonización total del altiplano y los valles bolivianos, mientras él volvía a Cuzco. Fue así que unos seis años después del principio de la Conquista, finalmente la región andina fue pacificada por los españoles desde el lago Titicaca hacia el sur.

La llegada de los españoles en 1532 para su conquista definitiva de Perú no se había sentido, al inicio, ni en el altiplano ni en los valles al sur del lago Titicaca. Región rica en campesinos, rebaños, lanas y cultivos indígenas tradicionales, al principio no tenían ni ejército, ni el oro y la plata disponibles de inmediato que tanto buscaban los españoles. Los centros urbanos de los reinos aymaras y de las colonias quechuas eran pequeños y tenían un desarrollo relativamente menor respecto al estándar de Cuzco. Además, la región había sido sumamente leal a la facción de Huáscar en la guerra civil inca y, por ello, al inicio dio la bienvenida a la intervención española por considerar el hecho como una victoria sobre sus enemigos. Debido a esta lealtad, ninguno de los ejércitos de Quito, que tanto preocupaban a los españoles en los primeros años, permaneció en el área; por eso tampoco fueron una preocupación militar para los españoles.

Por supuesto, habían pasado por la región varias expediciones antes de 1538. La primera fue dirigida por Diego de Almagro, el contendiente contra Pizarro por la titularidad de los territorios sureños, quien conoció la región por primera vez en 1535, con un gran contingente de tropas incas leales relacionadas con Huáscar, al mando del hermano de Manco Inca, Pullapa Inca, quien tenía vínculos cercanos con los reinos aymaras. La expedición cruzó rápidamente y en paz por la orilla occidental del altiplano, a lo largo del río Desaguadero, y luego al sur al lago Poopó a través de los Andes, y rumbo a Chile. Pero Almagro y sus seguidores concentraron su atención primero en Chile, y después en una larga y amarga guerra civil en contra de la familia Pizarro por el control de Cuzco, que finalmente quedó en manos de Francisco Pizarro (quien decapitó a Almagro a principios de 1538), para emprender el asentamiento definitivo en la región sur del lago Titicaca, que los españoles llamarían Charcas o Alto Perú.

A finales de 1538, los dos hermanos de Francisco Pizarro, Hernando y Gonzalo, entraron al altiplano sur y establecieron varios centros importantes.

El primero y más crucial fue el poblado de Chuquisaca (hoy Sucre) en un valle subpuna densamente poblado en la orilla sur del altiplano, y el segundo fue un pequeño campamento minero en Porco, al este de la ciudad, en los altos. Con el establecimiento de estas dos comunidades españolas, finalmente comenzó la colonización de la región de Charcas, unos cinco años después de la captura de los incas en Cajamarca. Con los españoles demasiado ocupados en establecer un control efectivo sobre el Bajo Perú y en luchar entre sí, como para prestar la debida atención a la región sur, ésta permaneció relativamente abandonada hasta 1545. Ese año los mineros de Porco descubrieron los filones de plata más ricos del continente en una zona cercana, que se llegaría a conocer como Potosí. De este modo, en el clímax de la última guerra civil peruano-española importante, en la que Gonzalo Pizarro intentó desafiar al virrey nombrado por la Corona, se descubrió en Potosí el Cerro Rico y empezó el auge minero. Tan pronto se derrotó a Gonzalo Pizarro en el Bajo Perú, las autoridades de Lima enviaron una nueva expedición a la región de Charcas; esta expedición, en 1548, aseguró el camino Chuquisaca-Potosí-Cuzco con la creación de la ciudad fundamental de La Paz, en el corazón de la región aymara. La Paz pronto se volvió un importante centro comercial y de transporte, así como un mercado agrícola sobresaliente.

Pero fue Chuquisaca el poblado que resultó ser la dinámica frontera de la nueva región de Charcas. Mientras que Potosí y La Paz prefirieron desarrollar sus regiones locales, Chuquisaca se volvió el escenario de una serie de grandes expediciones hacia las regiones del nororiente argentino, cerca de Tucumán. De hecho, a lo largo de las siguientes décadas Chuquisaca intentó hacer de Tucumán y de los poblados argentinos del norte una región satélite, aunque con el tiempo perdió el control administrativo a favor de Santiago de Chile; el Alto Perú, sin embargo, generó dependencia económica de la región norte de Argentina a raíz de su cercana participación en la economía minera alteña.

Mientras tanto, el empuje patrocinado por Pizarro de norte a sur se había enfrentado al contraempuje de otro grupo español, que provenía de las distantes regiones orientales de la zona de Río de la Plata. A mediados de las décadas de 1530, los españoles finalmente colonizaron el puerto ribereño de

Asunción, en el río Paraguay, y los empresarios locales, al decidir que podían obtener su riqueza futura de las tierras del interior occidental, procedieron a explorar de manera integral la región del Chaco. En 1537 un grupo paraguayo había cruzado el Chaco con éxito; y para principios de los años 1540 establecían puestos permanentes en la región de Chiquitos y Mojos, en las faldas de los Andes. Entrando en veloz oposición contra los empresarios de Lima y de Cuzco, se forzó finalmente a que los conquistadores paraguayos aceptaran las tierras bajas como frontera, y después de varias expediciones, colonizaron la región de Santa Cruz a finales de la década de 1550, estableciendo finalmente la colonia de Santa Cruz de la Sierra, con tropas paraguayas, en 1561.

Así, para el decenio de 1560 se habían establecido en su totalidad los límites exteriores de la frontera de Charcas; los paraguayos habían abierto una ruta a las tierras bajas y resguardado unos cuantos poblados estratégicos que protegían un delgado vinculo de comunicación con el este. Pero esta región fronteriza, repleta de indígenas hostiles y seminómadas, sin metales y con pocos agricultores campesinos ahí asentados, no fue algo que estimulara el asentamiento español. Los grupos indígenas chiriguanos, tobas, chacos y otros de las tierras bajas adaptaron rápidamente su forma de hacer la guerra al modo de los españoles; muchos se volvieron nómadas a caballo y lograron matar una buena cantidad de tropas españolas. Esta misma frontera india hostil, oriental y sudoriental a veces se extendía hacia el oeste, donde los indígenas seminómadas a menudo interrumpían los vitales vínculos de comunicación al sur, hacia la región de Tucumán, y de ahí, a los puertos atlánticos de Río de la Plata. La región de los llanos bajos del Gran Chaco era una frontera tan violenta que necesitaría la edificación de fuertes permanentes y la llegada de misioneros para sostenerla en contra de las tribus locales, e incluso para finales del periodo colonial aún permanecía independiente del control español directo.

Dentro del territorio colonizado de Charcas, la orientación principal era hacia el norte y hacia el sur. Así como el centro minero de Potosí se volvía una de las principales razones de la presencia española en la región de Charcas, el abasto de animales y equipo de dichas minas fue la razón de

existir de los poblados argentinos nororientales. Al mismo tiempo, Chuquisaca se convirtió en el centro administrativo de Potosí y en su centro de abasto agrícola más cercano. La Paz servía a Potosí como su ciudad principal de enlace con Arequipa, Cuzco y Lima, y desde ahí con España, y a la vez como un importante centro de aprovisionamiento de trabajadores y de bienes para las minas.

La región de Charcas era también rica en ese otro recurso extraordinario, tan limitado en América: la fuerza de trabajo indígena. Las regiones de Cuzco y de La Paz eran las áreas de mayor densidad poblacional indígena campesina de Perú, y los españoles estaban conscientes del potencial de este escaso recurso. Al dejar la tierra en manos de los campesinos indígenas, intentaron continuar con los patrones de dominación incaicos mediante un gobierno indirecto. De este modo se mantuvieron los ayllus y se confirmaron los derechos de la nobleza local —los caciques (o *kurakas* en quechua)—. En cambio, los bienes y servicios que antes se destinaban al gobierno inca y a la religión de Estado ahora se daban sólo a los españoles. Se dividió a las comunidades de campesinos indígenas en distritos, y éstos a su vez en encomiendas. El encomendero, a quien se otorgaba esta fuerza de trabajo, era un español de quien se requería que diera instrucción religiosa así como que cultivara de otras maneras a los indios para asimilarlos a las normas españolas, a cambio de lo cual se le otorgaba el derecho a la mano de obra y a los bienes que estos indígenas produjeran en el plano local. Tales concesiones, que eran la fuente de riqueza más grande que se podía tener en el Perú del siglo XVI, se otorgaban a un muy pequeño porcentaje de conquistadores españoles. De este modo, la concesión de encomiendas creó una nobleza local española en todo sentido, excepto en el nombre. En los hechos, los encomenderos se volvieron la autoridad gobernante en sus regiones, y disponían de una considerable fuerza de trabajo. Pese a ser un sistema altamente explotador, la encomienda se postuló, en lo fundamental, sobre la idea de la preservación de la sociedad y gobierno indígenas preexistentes.

Para 1650 había en Charcas unas 82 encomiendas, 21 de las cuales tenían más de mil indígenas cada una. Mientras que el total de encomenderos del

Alto Perú era pequeño, en comparación con los 292 de la región Arequipa-Cuzco en el mismo periodo, esta última sólo tenía 14 encomiendas con más de mil indígenas. Así, los encomenderos de Charcas, aunque eran muchos menos en cantidad, tendían a ser más ricos y poderosos, en promedio, que sus compatriotas del sur de Perú. La encomienda promedio de Cuzco-Arequipa era de alrededor de 400 indígenas, mientras que el promedio de la encomienda en el Alto Perú abarcaba el doble de esa cantidad. También, este grupo de encomenderos de élite del Alto Perú era relativamente nuevo, o cuando menos se había aliado con las facciones anti-Pizarro en las diversas guerras civiles, ya que, para la década de 1560, la abrumadora mayoría de éstos había recibido sus concesiones de los virreyes de Lima.

Pero probablemente ésta fue la cumbre de los encomenderos; ya para esta fecha más de la mitad eran concesionarios de segunda generación y la Corona había tomado más de 20 encomiendas a su nombre.

Aunque la reorganización de la vida rural de Charcas había seguido principios españoles muy bien establecidos que databan de Cortés y la conquista de México, la creación de una fuerza de trabajo minera efectiva era algo que no tenía antecedentes, y en Perú se desarrollaron una serie de instituciones totalmente nuevas en cuanto a explotar fuerza de trabajo indígena para las minas. Los españoles intentaron todo: esclavitud, trabajo asalariado, para al final establecer un sistema de corvea rotativo entre un alto número de poblados indígenas. Pero para estandarizar este sistema y resolver los problemas de gobernanza en el área rural fue necesario reorganizar por completo el derecho y las costumbres locales, y esto, en efecto, fue la tarea que quedó a cargo del virrey Francisco Toledo, quien visitó el Alto Perú en el periodo 1572-1576, a mediados de su virreinato.

Las reformas de Toledo marcaron un importante punto de quiebre en la organización social y económica del imperio español en la región del Alto Perú, ya que Toledo debía resolver problemas cruciales en el terreno de la organización económica y social, así como rural. Los españoles habían intentado preservar, de la población y el gobierno existentes, cuanto resultara factible para lograr los mayores beneficios con el menor costo. Pero las enfermedades que los europeos trajeron consigo diezmaron a los indígenas de

las tierras bajas y afectaron severamente a la población de las tierras altas (o altiplano). Para la década de 1570 era claro que todas las regiones de Perú habían experimentado severos descensos poblacionales desde la llegada de los españoles, y esta aniquilación continuaba. Así, la encomienda ya no era una institución tan provechosa financieramente como lo había sido.

En segundo lugar, la Corona había informado a Toledo que era hostil a la idea de crear una nobleza española colonial *in situ,* con base en las encomiendas, y buscó presionar para que la élite se olvidara por completo de esta institución, y permitiera que los pueblos indios volvieran a ser "propiedad" de la realeza. Pero incluso en esta situación Toledo se enfrentaba al problema de mantener a las poblaciones de los pueblos de cara a su constante sobrexplotación y declive demográfico; para él, la única solución era una reorganización de las bases social y económica de la vida andina, y con este fin decidió "reducir" a los indios en pueblos fijos, permanentes, e intentó convertir a los ayllus que quedaban en comunidades nucleadas. El modelo que utilizó era evidente para las comunidades agrícolas mediterráneas, pero en el altiplano las comunidades se componían de muchos ayllus, y todos tenían colonos en varias regiones ecológicas. La meta de Toledo era forzar a que estos ayllus alteños se separaran de sus colonias y se reagruparan en asentamientos permanentes más grandes, con tierras contiguas fijas, para poder manejarlos e imponerles la carga fiscal con mayor facilidad. Según esto, el modelo de la comunidad indígena proviene de la época de Toledo, aunque, pese a su rápida creación de numerosas "reducciones" o nuevos poblados, tardó cuando menos un siglo para que sus reformas se consolidaran. Cuán masiva fue la operación de esta campaña de reducciones puede verse en las cifras; en unos cinco distritos de la muestra, de los muchos que integraban el Alto Perú en este momento, 900 comunidades, que incluían a más de 129 000 indígenas, se redujeron a tan sólo 44 pueblos. Mientras que antes de esta "congregación" de indios, sus poblados tenían un promedio de 142 personas, la política de reducciones de Toledo creó poblados que tenían alrededor de 2 900 personas cada uno. Grandes cantidades de estas reducciones creadas por Toledo fueron abandonadas, y muchas de las comunidades de las tierras bajas y de los valles jamás se separaron por

completo de sus ayllus centrales de los altos, ya que los indios lucharon por preservar sus sistema interregional, ecológicamente diverso. No obstante, a grandes rasgos, este sistema con el tiempo fue dominante en los Andes.

En otras áreas, Toledo tuvo éxito de inmediato. Fracturó el poder de los encomenderos y limitó la mayor parte de las concesiones de encomienda en tres generaciones, recapturando con esto el control directo sobre las poblaciones indígenas para la Corona. Además, sistematizó el tributo que los indígenas debían pagar, ya fuera a la Corona o a los pocos encomenderos restantes. Por lo tanto, las comunidades indígenas propietarias de tierra debían pagar la mayor parte de sus impuestos en metálico, más que en bienes. Esa acción estandarizó la estructura fiscal indígena al hacer que la unidad impositiva fuera común para todos, cuyas variaciones se basarían, no en el cambio por el valor de mercado de los bienes recolectados por los recaudadores de impuestos, sino en algún principio acordado en torno a la capacidad de pago relativa de los indígenas. Se hacía que el monto del tributo correspondiera con la cantidad y calidad de la tierra que poseyeran.

Esta aparente racionalización de la estructura fiscal mostró ser, en última instancia, un arma relevante para forzar a los indígenas a integrarse a la economía española. Como sólo se podían obtener monedas al vender artículos en los mercados españoles, donde se intercambiaba dinero por bienes y servicios, los indígenas debían llevar a dicho mercado, ya fuera bienes que demandaban los españoles o su fuerza de trabajo, a cambio de un salario. Al final hicieron ambas cosas: se producía trigo y tela de producción especial, adecuada para el mercado urbano, y productos tradicionales, y se llevaban a los nuevos centros urbanos españoles para su venta. Del mismo modo, los indígenas libres de las comunidades vendían su fuerza de trabajo en los mercados españoles a cambio de efectivo, haciendo frente así a la demanda de agricultores, comerciantes y artesanos españoles de mano de obra temporal y para las cosechas. Aunque los mercados tradicionales para el intercambio de bienes indígenas seguían en auge en los Andes, en especial porque el imperativo ecológico de una oferta de cultivos mixtos continuaba, se forzó a una gran parte de la población indígena a entrar al mercado monetario creado por los españoles. De este modo, la necesidad de contar con

efectivo para pagar los impuestos reales fue un factor principal de la integración de los mercados duales en desarrollo en la región de Charcas.

Así como debía reorganizar la estructura rural de la sociedad alto-peruana, Toledo debía reordenar su economía minera de manera drástica. Desde 1545 hasta principios de 1560, Potosí había producido una cantidad cada vez mayor de plata, volviéndose con ello rápidamente la fuente más rica del mundo de este mineral. Pero este crecimiento se basaba en la extracción de depósitos superficiales que tenían muy altas concentraciones de mineral y que se refinaban con facilidad mediante procesos de fundición tradicionales precolombinos. Pero conforme los depósitos superficiales decayeron y se desarrolló la minería de galerías, la pureza del mineral disminuyó, los costos de la fundición se elevaron y la productividad cayó. Así, cuando Toledo llegó al altiplano en la década de 1570, la industria estaba en crisis total, con una producción en declive, y la Corona, desesperada por preservar este enorme recurso.

Toledo atacó el problema del Potosí desde varios flancos. En primer lugar, en 1572 introdujo el proceso de amalgamado, por el que el metal de plata se separaba de otros metales mediante la amalgamación con mercurio. Esto permitió que los mineros extrajeran de otros minerales un contenido de plata cada vez menor, cambio que llevó a la ruptura del control indígena sobre el refinado, y los más de 6 000 hornos indígenas tradicionales fueron remplazados por un par de cientos de grandes ingenios controlados por españoles y activados hidráulicamente. Para asegurar el abasto de mercurio que requerían los mineros de Potosí, Toledo también organizó la real mina de mercurio en Huancavelica, en el Bajo Perú, que a partir de entonces se volvió la abastecedora exclusiva de mercurio para las minas de los altos.

Para combatir el problema del control gubernamental sobre la industria, y el problema clásico del contrabando y la evasión, Toledo creó también la Real Casa de Moneda de Potosí, y exigió que toda la plata extraída y refinada en la ciudad se convirtiera en lingotes y barras. De la Casa de Moneda la Corona extraía su quinta parte de regalías sobre la producción, así como los impuestos por el acuñado. Además, como el mercurio era fundamental para la extracción de la plata, la Corona estableció un monopolio sobre éste que no

sólo le daba ganancias sobre un artículo de necesidad básica sino que le permitía determinar la producción real y protegerse contra la evasión fiscal. Con todas las compras de mercurio registradas por la Corona, los propietarios de las fundidoras, llamados azogueros, se veían en dificultades para extraer plata no acuñada y sin carga fiscal, ya que la combinación de mercurio y minerales se requería en una proporción fija. De este modo se conocía la producción potencial de plata de los azogueros.

Toledo también estableció el código básico de minería: ratificó la concesión real sobre la propiedad de todos los derechos al subsuelo, estableciendo el requisito del pago de una cuarta parte de la producción minera por el uso de las propiedades reales. Además, el registro de las concesiones y los derechos de uso de las galerías, así como otros asuntos técnicos, fueron todos codificados por Toledo. El establecimiento de una reglamentación legal era especialmente importante en Potosí debido a la naturaleza, en extremo compleja, de la propiedad de las minas. A diferencia de otras áreas mineras en el Nuevo Mundo, la concentración de vetas argentíferas en una enorme montaña de minerales en Potosí dio por resultado la construcción de multitud de minas, virtualmente una sobre otra. Ningún minero poseía más de un par de bocaminas que conducían a alguna de las incontables vetas de plata, y numerosos propietarios utilizaban diferentes galerías para trabajar, a menudo, el mismo filón. Para 1585 había unas 612 minas de diversos propietarios en la montaña Cerro Rico, donde cada uno representaba una galería distinta. Algunas reglas complicadas que determinaban la propiedad de las vetas eran esenciales para evitar los constantes conflictos armados.

Por último, lo más importante: Toledo resolvió el problema laboral de los mineros. La minería de galerías era una empresa en extremo cara para la que la mano de obra representaba el mayor costo del proceso en su conjunto. Construir y mantener una galería adecuada costaba tanto como construir una catedral. Además, las enormes cantidades de agua que se necesitaban para impulsar los molinos en el proceso de fundición requerirían, con el paso del tiempo, de la construcción de una compleja serie de diques y de unos 20 lagos artificiales cuyo costo total se estimó en la extraordinaria suma de más

de dos millones de pesos. Considerando los salarios que se pagaban por mano de obra libre en las minas en la década de 1570, era evidente que no había suficiente capital disponible para continuar con la masiva producción minera que la Corona deseaba mantener. Como ya estaba reorganizando a las comunidades rurales y estandarizando su estructura fiscal, Toledo avanzó un paso más y decidió utilizar un sistema de corvea precolombino llamado "mita", para extraer mano de obra forzada para las minas de Potosí.

Unos 16 distritos de Potosí al Cuzco, en la región de los altos, se destinaron como zonas de abasto de mita. Ahí se sometería a una séptima parte de los hombres adultos a un año de servicio en las minas, sin trabajar más de una ocasión cada seis años. Esto proveería de una mano de obra anual de alrededor de 13 500 hombres, que a su vez se dividían en tres grupos de más de 4 000 cada uno. Estos últimos trabajaban sobre una base rotativa de tres semanas de trabajo por tres semanas libres, lo que mantenía un abasto constante de fuerza de trabajo pero incluía periodos de descanso. Y aunque los mineros tenían la obligación de pagarle a los "mitayos" (como se les llamaba) un pequeño salario, ni siquiera era suficiente para su subsistencia. De hecho, las comunidades mitayo debían abastecer de alimento a sus trabajadores, así como mantener a las familias de los mitayos ausentes y pagar su transporte a las minas. Los propios trabajadores debían pagar por la mayor parte de la comida y la coca consumida en las minas. De este modo, de un solo brochazo, entre la mitad y dos terceras partes de la fuerza de trabajo minera era provista a los propietarios de minas por la Corona a un costo en extremo bajo, lo que estimuló la producción en grande. El sistema de la mita se usó sólo para la extracción de mercurio en la mina Huancavelica; la Corona jamás aplicó tal sistema de reclutamiento forzado de mano de obra en ningún otro sitio. En México las minas se trabajaron con mano de obra libre, y aun cuando las minas de plata de Oruro, al norte de Potosí, entraron en funcionamiento un siglo más tarde, sólo se permitió que los propietarios utilizaran mano de obra libre, asalariada. Incluso en Potosí, la mayor parte de los mineros eran trabajadores asalariados libres; pero no cabe duda de que la mita y el proceso de amalgamiento del mercurio le dieron otro siglo de explotación productiva. Con las reformas de Toledo, la producción una vez

más se disparó para finales de la década de 1570, y la producción de plata alcanzó nuevos niveles extraordinarios entre 1570 y 1650.

Habiendo resuelto la problemática de la organización rural y la reorganización industrial minera, Toledo se dedicó a los problemas de la colonización española en la región. Mientras que las fronteras del Alto Perú ahora estaban bien definidas, había muchas regiones interiores que aún debían explotarse completamente, por lo que Toledo patrocinó una nueva ola de asentamientos españoles. La más importante de entre todas estas nuevas poblaciones que Toledo promovió fue la ciudad de Cochabamba, establecida en 1571. Situada en el núcleo de una ancha serie de valles subpuna, Cochabamba también se volvió la ciudad central para el control de los indígenas quechuas de los valles, y como región principal de producción de trigo y de maíz del Alto Perú, quedaría íntimamente vinculada al mercado potosino a lo largo del siguiente siglo de crecimiento económico. Toledo integró también mejor la región andina del sur, al establecer la ciudad de Tarija en 1574. Como Cochabamba, se situaba en anchos valles subpuna, densamente poblados por campesinos indígenas. Por último, para proteger la frontera oriental contra los chiriguanos, Toledo alentó el establecimiento del pueblo de Tomina, en 1575.

Con la última colonización de las fronteras y la creación de pueblos en el interior, el crecimiento de la industria minera argentífera y la integración del mercado agrícola indígena anterior con el nuevo mercado español, el Alto Perú se volvió uno de los centros más opulentos del nuevo imperio español en América. Sus densas poblaciones permanentes de indígenas ofrecían una fuerza de trabajo en apariencia interminable, a la vez que se reconoció a sus minas, de inmediato, como fuente principal de plata en las Américas, si no es que en el mundo entero, en ese momento. Así, la Corona se vio forzada a establecer un gobierno viable y semiautónomo para controlar el destino de esta región y garantizar su fidelidad al imperio.

En tanto Lima y Cuzco siempre desearon dominar las tierras altas del sur, de hecho, todas las rebeliones que sucedieron en el periodo de guerras civiles españolas en Perú mostraban que el Alto Perú podía operar con facilidad como un elemento independiente bastante peligroso. Por eso las autoridades

de Lima aceptaron, con renuencia, que se debía establecer un gobierno separado y poderoso, bajo la autoridad del virrey en última instancia, en la zona sur del lago Titicaca. Esta decisión llevó en 1558 a la creación de una Audiencia independiente, o corte real, ubicada en la ciudad de Chuquisaca. La Audiencia de Charcas sería una de las pocas erigidas en el Nuevo Mundo que tendría tanto autoridad judicial como poder ejecutivo al mismo tiempo. El presidente de la Audiencia, el mismo juez, se convirtió, de este modo, en el principal funcionario administrativo y ejecutivo de la región.

Para controlar a la minoría de la población occidental, en gran medida urbanizada, la Audiencia construyó un sistema de gobierno muy semejante al que existía en España antes de la Conquista: se crearon gobiernos municipales con base en el voto libre de sus ciudadanos (o "vecinos"); estos gobiernos tuvieron amplios poderes. Ya que sus fronteras abarcaban un amplio entorno rural, estuvieron a cargo, en primer lugar, de los títulos de propiedad de la tierra durante el primer momento, controlaron los mercados locales y administraron la justicia local y la vigilancia. En cada poblado importante también había funcionarios reales, que iban desde un oficial ejecutivo, conocido como corregidor (había unos cuatro corregimientos españoles a principios del siglo XVII), hasta una serie de funcionarios de las finanzas reales cuya tarea era cobrar impuestos sobre el comercio y la producción. Para los estándares de España en aquel momento, estos gobiernos locales eran bastante representativos de los intereses y necesidades de la élite local, y respondían a ésta.

Más de 90% de la población vivía en las áreas rurales y todos, excepto un 10%, eran campesinos indígenas monolingües. Para ellos los españoles diseñaron un complejo sistema de gobierno indirecto. En sus reformas, Toledo había garantizado otorgar autonomía local a los nuevos pueblos "congregados" o "reducidos", y un complejo gobierno de ancianos de la comunidad se comenzó a desarrollar en el plano local. Elegidas formalmente por los "originarios", estas administraciones locales incluían representantes de todos los ayllus locales que conformaban la comunidad y tenían a su cargo las divisiones y distribuciones locales de tierra, la justicia local y la recolección de impuestos, a menudo asociados con los caciques o nobles

indígenas del lugar. Este mismo gobierno también sostenía a la Iglesia comunitaria local y patrocinaba las festividades comunitarias del santo patrono. Los gobiernos comunitarios, aunque supuestamente se elegían a la usanza española, muy posiblemente daban continuidad a prácticas previas a la Conquista al elegir a los ancianos más experimentados y respetados para representarlos. Tales personas solían ser en extremo conservadoras, por ser los miembros más viejos y responsables de la comunidad; los funcionarios reales los responsabilizaron de todo, desde mantener la paz hasta la función crucial de recolectar los impuestos y entregar la mita. Siempre y cuando las exacciones a la comunidad se consideraran razonables por la propia comunidad, tal gobierno de ancianos principales (o *jilakata*) mostró ser un baluarte de estabilidad conservadora. Pero una vez que tales líderes se convencían de que las exacciones de sus excedentes traspasaban los límites de lo aceptable, ellos mismos eran el enemigo más peligroso, ya que eran capaces de convocar a la comunidad entera. Las incontables rebeliones indígenas del periodo posterior a Toledo, que se prolongaron hasta muy entrada la mitad del siglo XX, jamás fueron asunto individual desorganizado, sino siempre movimientos de comunidades unidas, encabezadas por sus principales. Esto explica el fenómeno de las rebeliones, a menudo extraño, confinadas a algunas comunidades locales claramente definidas, sin afectar a sus vecinos.

Además, con el tiempo estos gobiernos comunitarios comenzaron a fungir no sólo como institución de gobierno y liderazgo, sino también como medio de redistribución interna de recursos en la comunidad. De cara a un ambiente hostil y amenazador, en términos de explotación tanto ecológica como económica, las comunidades no podían darse el lujo de permitir una seria diferenciación interna entre sus participantes originales. Por lo tanto, se impuso un elaborado sistema de "empobrecimiento ritual" en muchas de estas comunidades, por el que las distinciones de riqueza se redujeron considerablemente mediante la forzosa dispersión de los ahorros de sus miembros más exitosos o afortunados.

Sólo se elegía a campesinos pudientes para ser funcionarios en la jerarquía civil y religiosa que conformaba el gobierno comunitario local, y se les pedía

que gastaran considerables sumas y utilizaran gran parte de su tiempo al frente de sus cargos a lo largo del año. En especial en la parte religiosa de sus deberes, los llamados "cargos" (u obligaciones), los líderes comunitarios debían hacer grandes desembolsos de sus ahorros personales para patrocinar festividades religiosas locales. A cambio del gasto de tiempo, comida, bebida y dinero, los ancianos recibían como recompensa el honor y el poder local. Pero tales gastos por lo general reducían los ahorros de toda su vida y por tanto tendían, a lo largo de todo el proceso ritual, a reducir sus ingresos hasta llegar al nivel general de la comunidad. El sistema garantizaba que ningún miembro originario de la comunidad, con acceso a la tierra, dominara a los demás y acumulara una ventaja tal que pudiera amenazar la naturaleza comunal de la propiedad, así como la integridad de la comunidad. La norma idealizada era, así, ser funcionario civil-religioso y seguir el "empobrecimiento ritual", pero ésta no era operativa en todo lugar y momento, pues dicho sistema tampoco evitó, como veremos, el surgimiento de grupos de indígenas sin tierra en las comunidades. Pero para quienes sí poseían tierras, cuando funcionaba de manera eficaz, colaboraba para evitar que la operación de los mecanismos mercantiles normales destruyera la unidad comunitaria.

Durante la mayor parte del periodo colonial, también existió en zonas rurales un grupo de nobles indígenas locales conocidos como caciques o *kurakas,* que desempeñaron en gran medida el mismo papel que tuvieron con los incas. Estos nobles indígenas por lo general estaban a cargo de varios poblados y podían recurrir a sus estancias privadas dentro de varias comunidades, así como a sus derechos a la mano de obra comunitaria y a una serie de diversos recursos locales. A cambio, los caciques debían proteger la religión y las costumbres locales de los integrantes de la comunidad, representarlos de manera formal ante las autoridades españolas, y actuar amortiguando las relaciones entre el campesinado local y sus *jilakatas*, y las autoridades españolas. Ocupaban una posición extraordinariamente difícil, porque el *kuraka* no sólo era propietario de tierras y explotador de mano de obra, sino que él mismo le debía a las autoridades españolas la garantía de cumplimiento con las obligaciones fiscales y de mita. Este cacique sin duda

descansaba en los *jilakatas* para llevar a cabo estas tareas en las comunidades locales, pero él, sus tierras y bienes quedaban vulnerables, en última instancia, si no se colectaban los impuestos o no se cumplía con la mita. Por esta misión, los españoles reconocían sus linajes nobles y se les honraba con el título de don y doña, así como se les daba otra serie de privilegios que claramente los distinguían de los campesinos indígenas. Pero a lo largo de tres siglos de régimen colonial español, los nobles indígenas se desgastaron lentamente debido a las exacciones hispanas, y muchos quedaron reducidos al estatus de campesinos, los que permanecieron en el campo, o fueron absorbidos por las clases media o alta, los que escaparon a las ciudades. Aunque los nobles indígenas sobrevivieron por mucho más tiempo en los Andes que en cualquier otro sitio de América, finalmente se eliminó dicha institución como fuerza autónoma y efectiva durante la gran rebelión india de Túpac Amaru en 1780, en la que los caciques tuvieron un papel clave como rebeldes, pero también como líderes.

Sin menoscabo de cuán indirectos fueran sus principios de gobierno, los españoles finalmente controlaban el sistema. Debido a esto dividieron todas las zonas rurales, así como las urbanas, en corregimientos controlados por funcionarios reales llamados "corregidores de indios". Estos funcionarios mal pagados estaban a cargo de la recaudación de impuestos y de la mano de obra en el área municipal, y el pago por sus servicios podía forzar a que los indígenas a su cargo compraran bienes que importaban para las áreas rurales. La venta forzosa de productos españoles a las comunidades indígenas fue una enorme fuente de riqueza y corrupción para estos funcionarios y los hizo objeto de constante odio entre las poblaciones indígenas locales.

Por último, para garantizar lealtad al Estado tanto entre los españoles como entre los indios, en ese tiempo paganos, la Corona se vio obligada a patrocinar el establecimiento de la religión católica en la región del Alto Perú. Con los primeros colonos españoles, en 1538, el clero secular arribó para atender las necesidades de los conquistadores y comenzar la conversión de los indígenas. A estos seculares pronto se les unieron los misioneros regulares de todas las órdenes importantes que había en América: dominica, franciscana, de San Agustín de la Merced y, después de mediados del siglo,

de la Compañía de Jesús. La dirección para toda esta actividad provino de Cuzco y, en última instancia, de Lima. Pero este sistema se modificó en 1552 con el nombramiento de la primera diócesis de la región, llamada Diócesis de La Plata, que se estableció en la ciudad de Chuquisaca, donde una década más tarde también se ubicó la Audiencia Real. El establecimiento de una autoridad eclesiástica dominante fue crucial en la formación de un centro independiente para el Alto Perú.

Entre tanto, toda la Iglesia peruana se preocupaba por la evangelización, y en 1561 empezó una serie de concilios eclesiásticos de todo Perú, cuyos resultados debían ofrecer directrices para el clero regular y el secular en el proceso de evangelización. El primer concilio, de 1561, ordenó que los catecismos se tradujeron al quechua, en tanto que el tercero, de 1582-1583, ordenó que también se tradujeran al aymara. El resultado de esto fue la publicación de la primera obra en lengua aymara en 1584 en Lima. Para las primeras décadas del siglo XVII los jesuitas Ludovico Bertonio y Diego de Torres Rubio publicaron gramáticas y diccionarios completos del aymara. Esto sucedió casi una generación después de la publicación de catecismos, gramáticas y diccionarios quechuas, trabajo emprendido también por los diversos curas misioneros. Dado el predominio del quechua, incluso en Charcas, se comprende este principio tardío para el aymara. Pero esto significó que el quechua se volviera una lengua franca más extensa, impulsada como lo fue por los misioneros, incluso en las zonas tradicionales de los altos y valles circundantes. Esta primera preocupación del Bajo Perú por la evangelización quechua ayuda a explicar la desaparición de todas las lenguas no aymaras o no quechuas de los valles subpuna después de la Conquista, para ser sustituidas, la mayoría de las veces, por el quechua.

En otros aspectos, la Iglesia no tardó en incluir a las poblaciones aymaras. Ya para 1582, previo a la conquista del lago Titicaca, la Diócesis de La Plata había concesionado a los caciques de Copacabana el derecho a establecer una hermandad en honor de la virgen en este centro religioso tradicional aymara. El santuario que se construyó aquí para la virgen de Copacabana, junto con el Santuario de la Cruz, construido alrededor de la misma época en Carabuco, se volvieron los símbolos sincréticos fundamentales del proceso de

evangelización. La virgen de Copacabana se volvió el símbolo religioso central, incuestionado, de la región. Esta creación de las formas exteriores del cristianismo no significa que la religión previa al contacto desapareció, ni que el clero tuvo éxito universal en su evangelización de los indígenas. La existencia de encomiendas privadas en la mayoría de las zonas hasta finales del siglo XVI evitaba el acceso directo del clero a los indios, e incluso con la división de Charcas en provincias efectivas de las órdenes misioneras, había mucho menos clero del que se requería. Cada reducción y viejo asentamiento ahora tenía iglesia, pero la mayor parte de los indígenas veían a un sacerdote sólo en raras ocasiones. Así, las creencias tradicionales, en especial en cuanto a la familia y el trabajo, se preservaron en gran medida, y también se protegieron sistemáticamente por los *jilakatas* y caciques locales. El cristianismo se hizo sentir de manera más efectiva en las esferas superiores de la religión de Estado, y en el orden cosmológico más amplio. La mejor evidencia de este cambio se encuentra en el progresivo declive de las revueltas anticristianas a lo largo del siglo, y su remplazo, para finales del siglo XVI, por revueltas infundidas de simbolismo cristiano mesiánico que eran, a la vez, tanto fuertemente católicas como totalmente antiespañolas. Ya no se invocaba a los *huacas* locales, objetos religiosos comunitarios (por lo general piedras), para apoyar las luchas contra los odiados españoles, sino que se concitaba a la morena virgen de Copacabana para que guiara a los aymaras y los quechuas contra los opresores blancos.

Que las creencias locales cambiaron poco también queda claro en las "visitas" diocesanas pastorales de finales del siglo XVI y principios del XVII, así como en las investigaciones inquisitoriales, que demuestran que en la curación, en las actividades asociadas con el cultivo y la cosecha, y en todos aquellos eventos asociados con el refuerzo de los lazos familiares, de parentesco y del ayllu, la práctica y las creencias religiosas previas al contacto predominaban, practicadas a menudo por los sacristanes de la Iglesia católica local. Mientras que el alto clero, más celoso y consistente, intentaba destruir dichas creencias, su debilidad numérica y la preocupación por preservar el control indirecto en esencia eran garantía de continuidad de la

creencia local, siempre y cuando no retara la legitimidad social y estatal del cristianismo.

La Iglesia formal, tanto como el gobierno real, respondieron a los cambios en la economía y sociedad regionales con la organización de nuevas diócesis y parroquias. En reconocimiento del crecimiento del distrito de La Paz como centro de la civilización aymara de los altos, la Corona y el papado crearon una nueva diócesis en La Paz en 1605, mientras que la zona fronteriza entera de las tierras bajas se reconoció como una zona independiente, con el establecimiento de una diócesis en Santa Cruz el mismo año. Para los misioneros, el trabajo con los campesinos aymaras y quechuas pronto perdió algo de su atractivo romántico, de modo que las diversas misiones de la zona baja oriental de Mojos, cerca de Santa Cruz, y al sur, hacia el Gran Chaco, atrajeron una vigorosa actividad misionera, en especial durante el siglo XVII. La elevación de Santa Cruz a diócesis impulsó este trabajo. Para completar la organización colonial, la Diócesis de Chuquisaca se convirtió en arquidiócesis cuatro años después, y el arzobispo de dicha ciudad fue nombrado primado de la Iglesia de Charcas. La preponderancia del centro administrativo y religioso de Chuquisaca finalmente se coronó con el establecimiento de una universidad en esa ciudad, en 1624. De este modo, ahora Charcas podía generar su propio clero en todos los grados avanzados, y para 1681 este centro esencialmente teológico también ofrecía títulos en derecho, volviéndose la primera institución legal para toda la zona del Río de La Plata y cono sur, hasta finales del periodo colonial.

Así, con sus burocracias de Estado e Iglesia de Estado, los españoles rápidamente consolidaron un régimen efectivo en las áreas campesinas colonizadas del Alto Perú. Se ubicaron estratégicamente unas seis grandes ciudades españolas (La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija) para controlar vastas secciones y distintas zonas ecológicas y económicas. Se establecieron poblados fronterizos seguros, junto con una misión fronteriza efectiva en la tierra baja oriental, para evitar que los indios semi-nómadas entraran a las áreas colonizadas, y por último se introdujo un complejo sistema de gobierno indirecto para controlar a las poblaciones campesinas indígenas. Pero todos estos planes veían a Charcas, o Alto Perú,

como un sistema social económico y político esencialmente dual. Debía haber una élite blanca occidentalizada, de habla española, más o menos dividida en clases correspondientes a la idea peninsular, con base en el nacimiento y el dinero, junto a la cual coexistiría una masa campesina considerable, autogobernada, pero totalmente explotable, diferenciada también en una clase de campesinos y nobles, pero sin interactuar en otros sentidos con el mundo de sus conquistadores. De hecho, el proceso de conquista y la naturaleza misma de los conquistadores erosionaría, lentamente, este modelo relativamente simple, para crear una compleja amalgama de nuevas clases, castas y grupos, tanto dentro del mundo indígena rural como en los centros urbanos dominados por españoles.

Para empezar, los conquistadores trajeron consigo un nuevo conjunto de enfermedades europeas, desconocidas para los indígenas de los altos. Un sistema de explotación basado en alrededor de un millón de campesinos pronto se encontraría oprimiendo tan sólo a la mitad de dicha cifra, con la misma carga impositiva, para fines del siglo. Después de la Conquista, cada generación de indígenas sufrió múltiples epidemias de enfermedades endémicas europeas que se presentaban más o menos en ciclos de 20 años, epidemias que no terminaron sino hasta muy entrado el siglo XVII. Además, los 10 000 españoles que llegaron a la región de Charcas eran predominantemente hombres, por ello libres de las estrechas ataduras familiares europeas. También llevaron consigo una cantidad casi igual de esclavos negros. El resultado fue la creación de un agrupamiento racial de mulatos y mestizos completamente nuevo (conocidos como cholos en los Andes). De este modo, la pérdida de población indígena fue remplazada, hasta cierto punto, por un grupo intermedio de razas mixtas que involucraba el linaje de indígenas y blancos y, en menor grado, de africanos.

El orden social rígido e inmutable que proyectó la Corona tampoco fue el que creó la Conquista. Del mismo modo que la composición racial de la población se modificaba lentamente, también lo hacía su estructura social. La base de todo el orden económico y social era la cabeza de familia indígena, de entre 18 y 50 años de edad, originario de ayllu, con acceso directo a la tenencia de la tierra. Este indio originario era el productor primario de la

economía de Charcas. Pagaba el tributo básico, que era el equivalente real de la obligación tributaria de la encomienda, ahora recolectada directamente por la Corona, y era el único sujeto al impuesto laboral representado por la mita. Además, los originarios también fueron los productores principales de sus propios caciques, quienes siguieron recolectando sus tributos, así como los correspondientes a la Iglesia local. Dadas la base territorial y el abasto de mano de obra que los españoles heredaron de los incas, las exacciones sobre los originarios no resultaban excesivas y las grandes cantidades de originarios que al principio existían en cada comunidad podían encarar esta carga fiscal con facilidad.

Pero el colapso demográfico en la población indígena ocasionó que se redujera el grupo de los originarios sin que disminuyera, de manera proporcional, la extracción de su producto excedente. La presión sobre los originarios siguió aumentando a lo largo de los dos siglos de declive demográfico. El resultado de esto fue tanto el abandono masivo de las comunidades como el enorme retiro de indígenas del estatus de originarios. Dado el abandono de unas comunidades y la política de fundación de otras con el régimen de Toledo y sus sucesores, rápidamente se desarrolló una población campesina indígena flotante. Al llegar como migrantes a las viejas comunidades, o como recién llegados a las nuevas, estos "forasteros" —a veces también llamados "agregados"— recibieron menos derechos de tierra o no recibieron tierra, y tan sólo permanecieron como jornaleros en los terrenos de los originarios. Al cambiar de estatus y haber perdido sus tierras, también terminaron con todas sus obligaciones fiscales y de la mita. Hasta principios del siglo XVIII, los forasteros no tuvieron que pagar el impuesto tributario.

Las mismas presiones demográficas y económicas que crearon a los forasteros crearon también un grupo de indígenas totalmente nuevo, que no pertenecía a comunidades libres pero que vivía en propiedades de los españoles. Conforme bajó el valor de las encomiendas y la Corona forzó su revocación, los españoles pudientes encontraron fuentes alternativas de ingreso en la producción agrícola directa. Con el declive de las poblaciones indígenas y la constante reorganización de comunidades, grandes terrenos de las zonas tradicionales quedaron disponibles para explotación privada. Estas

tierras fueron rápidamente absorbidas por los españoles con mayores recursos, lo que dio lugar a una nueva clase social, los “hacendados”.

Los españoles que inicialmente obtuvieron fuerza de trabajo entre la población flotante de sirvientes indígenas, conocidos como “yanaconas”, pronto encontraron que los exoriginarios estaban más que dispuestos a trabajar en las propiedades de los españoles, a cambio de usufructuar la tierra. Además, los españoles no intentaron destruir la estructura de los ayllus, que funcionaba tanto en las comunidades como en las haciendas. Aunque el término yanaconas provenía del periodo inca e inicialmente se refería a los trabajadores que no tenían conexiones con ayllus, ni tierra, asignados a la nobleza o a otros funcionarios por los incas como sirvientes o casi esclavos, para fines del siglo XVI el término llegó a significar, simplemente, trabajador sin tierra. Los primeros conquistadores pudieron haber utilizado a algunos yanaconas preincaicos, pero esta nueva clase de yanaconas provenía principalmente de la fuerza de trabajo liberada por la ruptura de las comunidades más tradicionales.

Aunque las haciendas se desarrollaron a partir de la segunda mitad del siglo XVI, pronto alcanzaron el límite, una vez que las comunidades libres se estabilizaron en la segunda mitad del XVII. La consecuencia fue la terminación de la primera época de expansión de las haciendas. Para ese entonces las haciendas se encontraban a lo largo de los altos y de los valles subpuna principales, pero sólo absorbían alrededor de una tercera parte de la fuerza de trabajo indígena del total de la región de Charcas. Las comunidades libres continuaron como la forma dominante de organización social y de propiedad de la tierra en las áreas rurales, ocupando a dos terceras partes del campesinado indígena. Pero a diferencia de los homogéneos ayllus del periodo previo a la Conquista, las comunidades de indígenas libres del siglo XVII contenían dos clases diferenciadas: los originales, integrantes con tierras y sus familias, y los forasteros, de llegada tardía, que tenían, si acaso, algún derecho a la tierra y a quienes se obligaba a dar servicios de mano de obra gratuita a los originarios, a cambio de la posibilidad de usufructuar algunos terrenos. Entonces las comunidades aún eran entidades corporativas controladas por sus integrantes que a su vez tenían, en última instancia,

títulos sobre la tierra para todos, pero ahora eran también recipiente de ciudadanos de segunda, que en los hechos correspondían a una minoría significativa en la mayor parte de las comunidades libres. Estas diversas categorías no eran fijas ni inalterables. Muchos originarios se desistieron de su derecho a la tierra a lo largo de sus vidas, y se volvieron yanaconas en las propiedades de los españoles o forasteros en otras comunidades. Igualmente, los yanaconas se transformaban con relativa facilidad en forasteros. Sólo la entrada al estatus de originario era difícil, y el matrimonio parecía ser la única posibilidad para quienes no habían nacido con dicho estatus.

Estos cambios y movimientos en las áreas rurales se acompañaban también de una gran migración interregional y rural-urbana. A los indígenas originarios que daban mita en Potosí a menudo les parecía difícil o poco atractivo regresar a sus comunidades de origen, y muchos se volvieron asalariados libres o *minganos* en la región minera. Muchos originarios también decidieron renunciar a la vida rural, por lo que se mudaron a poblados españoles. Estos poblados, de varios miles de personas, pronto se comenzaron a llenar de indígenas que tomaron trabajos urbanos, y se volvieron parte fundamental entre la clase obrera urbana. Al hablar tanto su lengua nativa como español, estos nuevos indígenas urbanos a menudo dejaban de usar su vestimenta tradicional y comenzaban a vestirse adoptando el estilo español, y a consumir alimentos españoles, como el pan.

Se volvieron cholos, o mestizos urbanos, pese a ser de estirpe puramente indígena. De este modo, las designaciones indígena, cholo y blanco perdieron rápidamente su importancia biológica para quedar sólo como términos culturales o de "casta social", determinada por externalidades tales como el habla, el vestido y el consumo alimenticio. La élite española mestiza tampoco era inmune a estos cambios, ya que el concubinato y la ilegitimidad se volvieron la norma, y los hijos bastardos de bagaje multirracial entraban a la clase de élite, junto con caciques hispanizados, que ahora eran parte de las clases terratenientes locales.

El ritmo del cambio social en Bolivia tuvo la influencia de factores negativos, como el descenso demográfico y la explotación mediante la mita. Pero el tremendo crecimiento económico que afectó al total de la región a

partir de las reformas de Toledo también tuvo consecuencias. El primer auge minero de las décadas 1540 y 1550 había sido espectacular, pero palidecía en comparación con el aumento masivo de exportaciones de plata durante el gran auge del periodo 1570-1650. Durante este periodo, tan sólo el Potosí produjo más de la mitad de la plata del Nuevo Mundo. El efecto que tuvo el Potosí en Europa y en su comercio con Asia fue impactante. Para Europa, la plata de Potosí ocasionó la tendencia, a largo plazo, hacia un incremento de precios. También en su comercio con Asia, Europa finalmente pudo aumentar en mucho sus importaciones, gracias a la posibilidad de compensar la constante balanza comercial negativa con el pago con plata potosina.

Para Charcas, el crecimiento de Potosí a finales del siglo XVI fue incluso más traumático de lo que fue para Europa. La ubicación de Potosí en el centro de la región del Alto Perú, en una zona agrícola y de pastoreo árida y pobre, significó que debía importarse todo lo que se utilizaba en la minería, desde comida y herramientas, hasta animales y fuerza de trabajo. Estando tan distantes del mar, también fue necesario desarrollar un complejo sistema de comunicaciones, tanto para el abasto de importaciones provenientes de Europa como para la exportación de plata refinada.

De este modo, los vínculos entre este sector de exportación y los mercados regional e internacional eran amplios. El crecimiento del poblado de Potosí y su industria platera se sentiría desde el norte de Argentina hasta el sur de Perú, conforme una extensa zona de abasto se integraba al mercado de Potosí. Asimismo, los comerciantes, negociantes y transportistas de Lima, Arequipa, Cuzco y La Paz llegarían a ejercer un papel vital en las ligas entre las minas del Potosí y su élite satélite de Chuquisaca con el mundo exterior.

El desarrollo de Potosí, de ser un asentamiento de unos cientos de españoles y sus trabajadores indígenas, a una población calculada en entre 100 000 y 150 000 personas para principios del siglo XVII, tuvo un profundo impacto en el crecimiento y colonización de otras regiones alteñas. Cochabamba y sus valles asociados se volvieron los principales productores de maíz y trigo para los mercados de Potosí, y el crecimiento de las haciendas en estas zonas fue tan veloz y poderoso que las comunidades libres cayeron tempranamente en posición minoritaria dentro de la región. Más aún, la

demanda de mano de obra y la muy pronta ruptura de ayllus y comunidades implicaron que el valle de Cochabamba se convirtiera en la zona indígena más chola y bilingüe de todo el Alto Perú. En tanto que el quechua siguió siendo la lengua predominante del valle, la lengua y cultura españolas se difundieron rápidamente. Muchos de los agricultores se volvieron bilingües y desistieron de la mayor parte de su cultura tradicional indígena, para adoptar una nueva norma cultural mestiza que surgió entre los dos viejos grupos de conquistadores y conquistados.

En el otro extremo, el crecimiento de la minería en Potosí llevó a la expansión de la cultura aymara en los valles orientales conocidos como yungas, mediante el desarrollo de nuevas áreas de producción de coca. Mientras que masticar hoja de coca había sido parte importante en la dieta de la nobleza indígena antes de la Conquista, esto es, había sido domesticada desde mucho antes de la llegada de los españoles, su uso pasaría ahora por una gran transformación. Con la destrucción del aparato estatal inca, el masticado de coca después de la Conquista se extendió a todas las clases sociales, y los españoles rápidamente encontraron que su consumo era de absoluta necesidad para los mineros que laboraban a gran altitud. De este modo, la demanda y la producción de coca aumentaron en exceso después de la Conquista, y los centros tradicionales de alrededor de Cuzco ya no se daban abasto para hacer frente a la demanda, en especial en el Alto Perú. Cuando la coca se cultivaba en los yungas, cerca de La Paz, incluso en la región del Chapare, cerca de Cochabamba, desde la época previa a la Conquista, su producción había sido muy limitada en comparación con la de Cuzco. Ahora, sin embargo, la demanda era superior a la oferta, y los yungas, sobre todo, se volvieron el centro primario del cultivo de coca del Alto Perú; pronto desplazó a la variedad cuzqueña de los mercados del centro minero. El aumento en la producción de los yungas, que sería constante a lo largo del periodo colonial, implicó que los indios nómadas de estos valles fueran remplazados por colonos campesinos aymaras de los altos; este proceso de asentamiento continuó de manera ininterrumpida desde principios del siglo XVII hasta el XIX. La colonización de los yungas incluso comprendió algunos esclavos africanos, quienes pronto se adaptaron a la cultura dominante y se

volvieron hablantes de aymara para finales del periodo. Así, de ser zonas con apenas unos cuantos habitantes aymaras, los yungas se volvieron un baluarte de cultura totalmente aymara, incluso al grado de tener una subcultura aymara negra.

Potosí fue también vital para el desarrollo de la región de Tucumán, ya que los ranchos y granjas del noreste de Argentina se volvieron los proveedores fundamentales de mulas, vino y azúcar para el mercado potosino. Entre Tucumán y Potosí, la región de Tarija se volvió una zona principal de abasto de granos, mientras que la subregión del valle de Cinti fue testigo del desarrollo de la agricultura de irrigación, en gran parte propiedad de mineros potosinos, que se volvió la fuente de vinos locales. Al norte de Potosí, el altiplano se volvió la principal fuente de mano de obra, de alimentos tradicionales para el consumo de los mineros, y de los grandes rebaños de llamas, necesarios para transportar la plata hacia la costa. Más allá del lago Titicaca, las minas de Huancavelica se volvieron proveedoras exclusivas del vital mercurio para Potosí; la demanda de fuerza de trabajo por mita también era cubierta por esta región. Productos como frutas tropicales, vinos y otros bienes alimenticios llegaban a Potosí tanto de los valles del altiplano como de los llanos de la costa. Este enorme comercio y transporte de bienes y servicios recibía financiamiento de los comerciantes, tanto de Potosí como de Lima. De hecho, estos últimos parecen haber sido la fuente principal del capital que financiaba el transporte de la mayor parte de la mercancía del norte hacia Potosí, y ejercía el control exclusivo de todo el comercio internacional de Potosí hasta muy entrado el siglo XVIII.

El auge y expansión de Potosí de finales del siglo XVI también tuvo un impacto sobre el asentamiento y desarrollo posterior de las regiones interiores de Charcas. La búsqueda de depósitos minerales fue intensa, e incluso las comunidades más pobres del altiplano tuvieron alguna actividad minera. Se cribaba oro en la región de Sorata, en los valles al noreste de la cordillera, y comunidades como Berenguela, justo al sur del lago Titicaca, se siguieron desarrollando como centros mineros, pequeños pero importantes. Fue a partir de estos mineros en pequeña escala del altiplano que provino la iniciativa de asentarse en la región indígena Uru, al norte del lago Poopó. La región

completa del corregimiento de Paria, como se le llamó entonces, estaba repleta de pequeñas minas, pero en 1695 se descubrió la más grande del área cerca del sitio donde más tarde estaría la ciudad de Oruro. La mina llevó el nombre de San Miguel, y pronto produjo importantes cantidades de mineral de plata de alto valor.

El resultado de este descubrimiento fue que se generara una nueva fiebre de la plata entre los mineros del altiplano en todos los pequeños centros mineros cercanos. Los mineros de la región de Pacajes proveyeron capital y ofrecieron su experiencia para hacer que estas nuevas minas operaran, y para la primera década del nuevo siglo el campamento minero contaba con unos 3 000 trabajadores indígenas y 400 residentes españoles.

Sin provisión real de fuerza de trabajo por mita, los mineros de Oruro, al igual que los de otras partes de estas regiones norteñas debían depender del trabajo asalariado libre. Comenzaron ofreciendo salarios de cinco reales por jornada para mineros básicos y salarios mucho más altos, de más de un peso al día, para trabajadores calificados. Tales salarios fueron eficaces para atraer con rapidez gran cantidad de mano de obra indígena libre hacia las minas, pero al mismo tiempo mantuvieron altos los costos de la minería de Oruro, de modo que la producción se desarrolló con lentitud. En 1605, los mineros locales sintieron que el asentamiento se había vuelto lo suficientemente importante como para lograr un estatus oficial, y después de mucho negociar, a finales de 1606, se estableció el poblado de Oruro de manera formal. A partir de entonces y hasta la década de 1680, el poblado creció a ritmo acelerado. Para 1607 había 39 000 habitantes, de los cuales 6 000 eran mineros indígenas, y para la década 1670 el pueblo alcanzó su tamaño máximo, con unas 80 000 personas.

Pese a este rápido crecimiento Oruro jamás fue rival para el poder de Potosí, ya que su producción no llegó más que a una cuarta parte de la de este último, incluso en su mejor momento. No obstante, el poblado y sus minas se volvieron muy relevantes. Oruro fue un punto de tránsito crucial en la ruta Lima-Arequipa-La Paz-Potosí, por un lado, y el principal puerto de entrada al altiplano del vital transporte de mercurio, por el otro. Como la ruta más barata para el tránsito del mercurio producido en Huancavelica hacia Potosí

era por mar, desde Lima hasta el puerto costero del Pacífico de Arica, y de ahí por mula a los altos, Oruro resultó ser la ciudad del altiplano más cercana al puerto de Arica. Así Oruro pudo garantizar su abasto de mercurio en condiciones más favorables que Potosí, y lograr un importante ingreso a partir de su provisión y financiamiento.

Tan importante como su ubicación fue el desarrollo crucial de Oruro como el centro minero de mano de obra libre más grande de todo Charcas. Mientras duraron sus filones minerales más ricos, hasta finales del siglo XVII, sus minas se volvieron un imán para los trabajadores indígenas libres de toda la región, pues mantuvieron los salarios altos ante la amarga queja incluso de los mineros de Potosí. Esta combinación de factores llevó al establecimiento de una colonia más permanente, de modo que la ciudad rápidamente dio pie a una vivaz y próspera población chola. También mostró ser una de las ciudades más abiertas y violentas de la zona de Charcas, en la que los mestizos alcanzaron incluso niveles superiores de poder. Oruro llegó a conocerse como un sitio relativamente revoltoso, con gusto por la independencia política, que se traduciría, en el siglo XVIII, en importantes revueltas antirrealistas.

En términos de su impacto regional, Oruro tendió a reforzar los patrones mercantiles desarrollados por Potosí; también se vio forzado a depender de la producción de azogue del Bajo Perú, y generó la mayor parte de su fuerza de trabajo mediante los indígenas aymaras del altiplano. En Potosí la mayoría de sus alimentos provenía de los valles orientales; sin embargo, Oruro dependía más del sistema cercano del valle de Cochabamba, que se volvió el productor más importante de alimentos semitropicales y templados. Oruro replicaba gran parte del impacto del mercado de Potosí, porque también se situaba en una zona esencialmente pobre e infértil, forzada por esto a importar prácticamente todas sus provisiones elementales.

Con el establecimiento permanente de Oruro, el periodo básico de colonización española del altiplano y de los valles orientales principales llegó a su fin. Aunque el próximo siglo vería el crecimiento y la expansión de la frontera misionera de las tierras bajas orientales, para principios del siglo XVII el área nuclear de Charcas ya estaba completamente definida. Desde entonces

y hasta finales del siglo XVII hubo un crecimiento constante de las poblaciones española y chola, acompañado de un descenso lento, pero evidente, de las poblaciones indígenas.

Este periodo inicial de extraordinaria expansión urbana y de riqueza inusual, que duró hasta finales del siglo XVII, trajo consigo un importante auge cultural y artístico. Las riquezas derramadas en las ciudades del reino, como Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz, llevaron a la construcción masiva de iglesias y catedrales, con el consiguiente apogeo de las artes plásticas.

Durante el primer siglo de la Conquista los españoles trajeron sus ideas artísticas y a sus artistas. Los artesanos, artistas y arquitectos españoles, italianos y flamencos predominaron en el siglo XVI; muchos eran sacerdotes. Las iglesias expresaban las ideas artísticas más avanzadas de la vida colonial, ya que los europeos gastaban de manera más conspicua la gran riqueza que extraían de las minas y de los indígenas en la construcción y adornos de sus templos. Tardaba décadas construir y adornar una iglesia de tamaño promedio, que a menudo constituía la construcción más costosa de una región entera. Una iglesia o monasterio urbano grande podía absorber cientos de miles de pesos equivalentes al total de los ingresos reales de una ciudad.

Antes de 1600 las principales construcciones eclesiásticas y actividades artísticas se concentraron en la ciudad de Chuquisaca, capital administrativa y religiosa de la región. En este primer periodo las influencias predominantes fueron europeas, ya que se trajo a artistas maduros, directamente de Europa, para emprender la construcción, la pintura y la escultura que deseaban los colonizadores. Los clérigos —que migraban por la necesidad de sus diversas órdenes— eran los artistas más accesibles y poco costosos con que se contaba, aunque al finalizar el primer siglo comenzaron a llegar artesanos no clérigos en cantidades cada vez mayores. Mientras se enseñaba a los indígenas los rudimentos de todas las artes plásticas porque conformaban la clase trabajadora en todas partes, fueron europeos los que proveyeron los modelos, ideas y técnicas iniciales. Dado el hecho de que España misma fue un centro artístico mundial importante durante la mayor parte del siglo XVI y gran parte del XVII, era evidente que lo último de los estilos europeos, filtrado por la mirada española, predominaría en las colonias.

Durante la primera parte del siglo XVI, las normas arquitectónicas se determinaban por temas e ideas renacentistas tradicionales, en tanto que durante las últimas dos décadas hubo un incremento de las influencias mudéjar ibéricas. En las artes plásticas, las influencias eran más variadas; los estilos italiano y flamenco de la época tuvieron gran impacto sobre los artistas migrantes, y dada la riqueza del Alto Perú, las ciudades del altiplano pudieron abrevar de los artistas más avanzados que llegaron a América, y pronto las iglesias de Chuquisaca eran decoradas por los mismos artistas que encabezaban el desarrollo artístico de Lima, e incluso de Sevilla. El más sobresaliente de estos primeros artistas que trabajaron en Alto Perú fue el jesuita italiano Bernardo Bitti, uno de los pintores más originales que trabajara en América en el siglo XVI. Como era típico de tales hombres, Bitti se había formado en Europa, con gran influencia de Miguel Ángel, y recorrería los principales centros de población de ambos Perúes, desde su llegada en la década de 1570, hasta su muerte en el primer decenio del nuevo siglo.

Para las últimas dos décadas del siglo XVI, el surgimiento de los primeros artesanos indígenas y cholos retaba el dominio de los artesanos europeos y blancos. La escultura fue su primer campo de batalla. Como desde el principio había talladores de madera y piedra indígenas, fueron estos obreros y artesanos quienes emprendieron las construcciones eclesiásticas básicas dirigidos por europeos, y era natural que tuvieran un primer impacto en la cultura. El más importante de estos primeros artistas indígenas fue el escultor Tito Yupanqui, de Copacabana. Capacitado por europeos en las ciudades del Alto Perú, Yupanqui era famoso por su estilo original, y por la importante escultura que hizo de una virgen para su ciudad natal, Copacabana, que se volvió figura de culto para toda la región. Yupanqui, aunque comenzó por esculpir motivos europeos, pronto desarrolló un estilo propio y creó varias piezas novedosas e importantes para las iglesias locales.

Para principios del siglo XVII hubo un giro sutil, pero importante, en las influencias y orígenes de artistas y artesanos de la región. Luego del increíble crecimiento en el número de construcciones religiosas y civiles que se habían erigido, se desarrollaron importantes talleres de maestros europeos y

aprendices indígenas. Ya que la total construcción y decoración de alguna iglesia podía tomar décadas, sucedía que los maestros artesanos comenzaban un proyecto y continuaban con otras iglesias o edificios, por lo que dejaban a sus aprendices indígenas para terminar sus diseños, o bien morían y sólo los podía remplazar su aprendiz indígena. Así, para el siglo XVII, con un nuevo estilo "criollo" (o nativo americano) representado por artistas indígenas y cholos, comenzarían a surgir artesanos en la región.

Al tiempo que la arquitectura y las artes plásticas pasaban por un periodo de vital crecimiento durante el siglo XVI y principios del XVII, el primer siglo de régimen español no fue un periodo particularmente fértil para las tareas intelectuales no artísticas. Charcas era aún, en muchos sentidos, una frontera minera áspera, dominada por una mentalidad de nuevos ricos. Así, sus expresiones de "alta cultura" intelectual quedaron en manos de sacerdotes y funcionarios de gobierno, quienes, a su vez, tenían el principal encargo de la conversión y gobierno de la población india. Dado lo limitado del mercado intelectual, Alto Perú no obtuvo una imprenta sino hasta finales del periodo colonial, y sus pocos autores debían mandar sus obras a Lima o a Europa para su publicación.

Más allá de las gramáticas y diccionarios de aymara y quechua, la obra más importante producida por un escritor de Charcas en el siglo XVI fue sin duda el tratado *Gobierno del Perú,* escrito por el oidor (o juez real) de la Audiencia de Charcas Juan de Matienzo, en 1567. La obra de Matienzo, un análisis profundo de las condiciones locales de los indios y los patrones de gobierno, fue de fundamental importancia para dar forma a las reformas de Toledo. Aparte de Matienzo, hubo pocos escritores de Charcas, quizá ninguno, comparable con el grupo contemporáneo de etnógrafos y cronistas de Cuzco y de Lima. Los alto-peruanos produjeron pocas obras de importancia sobre el desarrollo precolombino, en comparación con la extraordinaria productividad de los escritores del Bajo Perú, de antecedentes tanto españoles como indígenas.

Más bien los escritores españoles del Alto Perú se concentraron, a finales del siglo XVI y principios del XVII, en la escritura de su propia historia posterior a la Conquista. Los misioneros se enfocaron a escribir las historias

de sus respectivas provincias o de los santuarios locales. Las diversas obras sobre Copacabana fueron las más importantes. Por último, se comenzó la primera de una famosa serie de crónicas sobre la historia de Potosí; el más importante de estos primeros escritores e historiadores fue Luis Capoche, hacia 1585.

Durante el primer siglo y medio de conquista española, la intensa preocupación por el presente y por el futuro desarrollo de la región marcó con intensidad a los escritores del Alto Perú. También fue un periodo en el que se llevó a cabo una acelerada colonización en respuesta al elevado nivel de producción de plata. Pero la crisis en esta producción, que comenzó a sentirse a mediados del siglo XVII, tuvo un efecto adverso sobre las oportunidades económicas, sociales y políticas de los inmigrantes recién llegados. Este escenario de menores oportunidades y creciente estratificación ayuda a explicar la serie de conflictos urbanos entre españoles, más conocidos como "guerras civiles", del siglo XVII.

El más importante de estos nuevos conflictos urbanos sucedió en el corazón mismo del sector de exportación: la ciudad de Potosí. El temprano siglo XVII sería un periodo de conflictos particularmente agudos entre mineros y comerciantes españoles por el control de la industria minera, disputas que finalmente llevaron a una guerra sin cuartel entre las diversas facciones. El más notable de estos conflictos involucró una prolongada serie de confrontaciones violentas entre vascos y los otros españoles, conocidos genéricamente como vicuñas debido al tipo de ropa que vestían, por el control del gobierno urbano de Potosí. Esta llamada guerra civil entre vascongados y vicuñas sucedió entre 1622 y 1625; esencialmente se trató de un intento de los no vascos por retirar a este grupo, bien atrincherado, del control tanto de las minas como del cabildo. Pese a la gran cantidad de revueltas, el número total de muertos fue relativamente pequeño, y el resultado fue que los mineros vascos tradicionales mantuvieron el poder.

Pero la creciente tensión entre los españoles urbanos, que implicaba luchas de poder semejantes en muchos de los otros centros urbanos, era otra indicación de lo grave de la larga caída económica que se comenzaba a sentir durante las décadas medias del siglo. Los recursos disponibles ya se

empezaban a extinguir, lo que hacía que el control absoluto de grupos clave sobre estos recursos significara la eliminación de oportunidades para los europeos recién llegados, pero sin conexiones, que deseaban hacer riqueza. Al haber fallado el intento por desplazar a las élites atrincheradas del control de las minas y de los indígenas, los españoles recién llegados o los más pobres migrarían del Alto Perú a lo largo del siguiente siglo, y una caída a largo plazo comenzaría en todos los centros urbanos mayores. De este modo, el final del primer siglo de expansión económica llegaría tras un periodo de depresión de un siglo de duración, que tendría efectos profundos y prolongados en los sectores tanto urbano como rural de la sociedad y la economía bolivianas.

3. SOCIEDAD COLONIAL TARDÍA: CRISIS Y CRECIMIENTO

Con el auge de la producción argentífera a mediados del siglo XVII tanto en Oruro como en Potosí, y su subsecuente descenso conforme avanzaba el siglo, comenzó a llevarse a cabo un cambio fundamental en la organización social y el espacio económico en el Alto Perú, la región americana mayormente afectada por la llamada crisis del siglo XVII. El impacto más inmediato del precipitado descenso en la producción de plata a lo largo de los siguientes cien años se tradujo en una caída constante de población en la mayoría de los centros urbanos de la región. Esto, a su vez, llevaría a un gran recorte en la economía regional, que afectaría a instituciones como la hacienda y la comunidad libre. En términos imperiales, la importancia del Alto Perú se empezó a desvanecer. Para finales del siglo México superó el total de la producción minera andina, y se volvió también la fuente principal de ingresos por impuestos para España. Para el último cuarto del siglo XVII, Perú y la región de Charcas habían dejado de exportar sus excedentes a la metrópoli, y ya no eran el centro del imperio español en el Nuevo Mundo.

El drástico debilitamiento de las ciudades fue la primera respuesta ante la depresión de la minería de plata. Tanto el número de mineros como de pobladores urbanos disminuyó agudamente durante el siglo que va de 1650 a 1750. La cantidad anual de mitayos que iban a las minas descendió de unos 13 500 indígenas —en grupos de 4 500 durante tres periodos diferentes— que trabajaban cada año en Potosí durante los años 1570 a unos 2 000 durante cualquier momento para el decenio de 1690. La disminución de mitayos era consecuencia tanto de la caída en el suministro de originarios en las 16 provincias obligadas —ya sea por muertes o porque cambiaron a un estatus

de forasteros o de yanaconas— como de una reducción de la demanda minera. La reducción del mercado laboral también afectó gravemente a los mineros que eran indígenas libres, muchos de los cuales regresaron al campo. Pero el mayor impacto de la depresión en la producción platera se dio entre los blancos. Cuando menos 100 000 blancos de habla española emigraron de los centros mineros en busca de fortuna a zonas más dinámicas. En esta depresión de cien años, tanto Oruro como Potosí perdieron más de la mitad de sus pobladores el resultado fue que Potosí quedó con alrededor de 30 000 personas y Oruro con unas 20 000 para mediados del siglo XVIII. De hecho cada una de estas ciudades o perdió su población o se estancó durante este periodo de depresión.

La contracción de la población y de la producción de plata llevó asimismo a una reducción de los extensos mercados aledaños que daban servicio a los centros mineros. Esto queda ilustrado en la suerte que corrió la importante región de Cochabamba, fuente de alimento. Al disminuir la demanda de granos de Potosí, se encontró que la región en torno a Chuquisaca era suficientemente productiva como para abastecer la mayor parte de las necesidades de la minería, de modo que los productos cochabambinos, más costosos, se hicieron menos competitivos. De este modo, aunque Cochabamba exportaba menos de sus valles, se convirtió en una economía de subsistencia al exportar su excedente de trigo y maíz al altiplano, sólo cuando éstos sufrían graves crisis locales. A su vez, el final de la exportación implicó la disminución del poder de los hacendados de Cochabamba y la conversión de sus grandes propiedades en pequeñas parcelas para ser rentadas. Como la mayor parte de las comunidades libres indígenas ya había sido remplazada por jornaleros sin tierra en las propiedades de los españoles, estas divisiones de tierra llevaron al surgimiento de todo un nuevo grupo de pequeños productores cholos que trabajaban en propiedades rentadas. Así, Cochabamba se transformó en el principal centro de producción agrícola a pequeña escala, no comunitaria, en propiedad vitalicia, así como en la región agrícola minifundista más significativa del Alto Perú. Los españoles y cholos locales también modificaron su quehacer, orientándolo a la especialización en la

producción textil, y el valle central se volvió un importante productor de telas populares (géneros tocuyo).

Conforme la producción se redujo en respuesta a la disminución de los mercados urbano y minero, las haciendas que producían para estos mercados también padecieron. La depresión general en la mayor parte de las regiones llevó a un declive en la creación y expansión de la hacienda para finales del siglo XVII, a diferencia del febril crecimiento de tales unidades en la primera mitad del siglo. Aunque la Corona llevó a cabo periódicamente grandes ventas ("composición de tierra") de tierras baldías a principios del siglo XVII, estas ventas se volvieron menos frecuentes conforme avanzaba el siglo. Para 1700 la frontera se había estabilizado entre las tierras de ayllus indígenas y las de las haciendas españolas, en especial debido a que la población indígena se consolidaba dentro de sus nuevas "reducciones" post-Toledo.

Esta consolidación de comunidades indígenas se reforzó gracias a la expansión de la población, ya que el periodo de la gran depresión colonial de la plata en el Alto Perú correspondió al periodo de renovado impulso de la población indígena. Fue sólo a finales del siglo XVII y principios del XVIII, medio siglo después de que un cambio semejante tuviera lugar en Mesoamérica, cuando las poblaciones indígenas nativas de la región fueron capaces, finalmente, de sobrevivir a las enfermedades europeas endémicas, con un nivel de mortalidad muy escaso, distinto del de sus conquistadores europeos. Este cambio no se llevó a cabo sino hasta las últimas décadas del siglo XVII, pero una vez que comenzó, se desarrolló una tendencia de largo aliento hacia el crecimiento a lo largo del siglo XVIII y hasta muy entrado el XIX, cuando las epidemias una vez más serían un importante elemento de control de la expansión poblacional, pues para entonces ya había nuevas enfermedades, como el cólera, que afectaban a todas las clases sociales y a todos los grupos étnicos. Hasta entonces, no obstante, el crecimiento poblacional de las áreas rurales fue impresionante, y dicho aumento incitó un fortalecimiento del sistema de comunidad libre.

De este modo, la combinación del descenso en la presión sobre sus tierras y un aumento poblacional creó un importante periodo de crecimiento entre las comunidades libres al momento del declive minero y urbano. Las

obligaciones del trabajo por mita también se redujeron, ya que la minería mermó y esta obligación se dispersaba ahora entre el mayor crecimiento de la población. Las listas del tributo se ajustaron lentamente al creciente número de indígenas, lo que en cierta medida disminuyó la carga de este impuesto. También había más mano de obra en el campo y las comunidades comenzaron a ocupar a trabajadores inmigrantes, los que recibían derechos mínimos sobre la tierra a cambio de su fuerza de trabajo, para beneficio de los originarios de estas comunidades. Desde finales del siglo XVII y hasta muy entrado el XIX, las comunidades tendieron a crecer gracias a la expansión de esta nueva población inmigrante forastera o agregada. En un censo colonial parcial de 1646, estos nuevos migrantes a las comunidades promediaban cerca de una cuarta parte del total de la población de los ayllus, y según el censo tributario de 1786, representaban sólo un poco más del total de la población de las comunidades en la provincia de La Paz, que a su vez albergaba a la mitad de la población campesina indígena de la región. Esta estratificación interna dentro de las comunidades indígenas les permitió acumular excedentes e incluso promover la construcción de iglesias en sus regiones. De hecho, del siglo XVII tardío a principios del XVIII hubo un periodo de gran florecimiento artístico para los artesanos indígenas que trabajaron en las iglesias del altiplano. Tanto comunidades como caciques promovieron estas construcciones, y estos últimos financiaron a los artesanos cholos e indígenas para que construyeran y ornamentaran esas iglesias. Aunque la Corona controlaba los fondos comunales y a menudo forzaba a que estas comunidades dieran hipotecas a los hacendados españoles, con la disminución en el ritmo de expansión de las haciendas la necesidad de tales fondos declinó, y la presión sobre las "cajas de comunidad" también bajó, permitiéndoles mantener una mayor proporción de su ingreso.

La crisis minera de finales del siglo XVII también llevó a un cambio relativo en la importancia de algunos distritos del Alto Perú. La ciudad de La Paz, a diferencia de Oruro, Potosí y Chuquisaca, pareció sólo haberse estancado durante un breve periodo a finales del siglo XVII, para luego seguir creciendo, de modo que para mediados del siglo XVIII surgió como la ciudad más poblada de toda la región, con 40 000 habitantes. El crecimiento de La Paz en

un momento de relativa escasez en otros sitios puede atribuirse, en gran medida, al crecimiento de los mercados y a la producción indígena local. Con su entorno de unos 150 000 a 200 000 campesinos indígenas —cerca de la mitad de la población indígena de la región—, La Paz prosperó como un centro mercantil y administrativo relevante tanto para el altiplano, de mayor densidad poblacional, como para los florecientes valles orientales de los yungas, que ahora eran importantes productores de coca. En estos valles se encontraban las comunidades indígenas más ricas, así como españoles de reciente arribo, quienes comenzaron a terraplenar tierras antes vacías y a plantar arbustos de la muy anhelada coca.

Los ingresos de la aristocracia española local de la provincia provenían, fundamentalmente, del comercio regional y de la producción agrícola. Se habían vuelto una importante élite terrateniente después de la venta de tierra que hiciera la Corona en la región, especialmente en la década de 1640, y que adquirieron gran cantidad de comerciantes de habla hispana y de adineradas personas locales. Para el último cuarto del siglo XVII esta élite ya estaba conformada, principalmente, por personas nacidas en el Alto Perú. Para entonces, la mitad de los miembros ricos de la comunidad había nacido en la ciudad de La Paz, y sólo 20% provenía de España; el resto venía de otras regiones americanas o de otras partes de Europa. Como era de esperarse, dada la carencia de mujeres españolas durante la mayor parte de su historia, más mujeres que hombres nobles eran de origen americano, y ya había una gran mezcla de mestizos entre su población. La extraordinaria incidencia de nacimientos ilegítimos entre mujeres de abolengo resultaba un dato aún más sorprendente, a propósito de la naturaleza más abierta de esta élite comparada con la de la España metropolitana, e incluso con la de otros centros más avanzados en América. En la parroquia de San Agustín, de alto linaje español, más de la mitad de los nacimientos se asentaron en la lista de ilegítimos durante el periodo 1661-1680, tasa extraordinariamente alta incluso para los estándares hispanoamericanos.

Por la expansión de sus mercados locales, un aumento en el consumo indígena y el hecho de tener la población rural más grande de la región, La Paz también se volvió un centro de producción de coca siempre en expansión.

Un cultivo antes exclusivo de la élite precolombina, la coca se había vuelto un producto de consumo básico entre los mineros y entre todos los trabajadores ubicados en grandes altitudes. Desde los primeros tiempos se le había cultivado en los valles tropicales de los yungas, al oriente de la ciudad de La Paz; las comunidades de habla aymara habían terraplenado estos valles escarpados para su labor. Ahora eran objeto de explotación también por personajes adinerados de habla hispana, como don Tadeo Diez de Medina, vecino nativo de La Paz, quien entre 1750 y 1790 surgió como el principal hacendado de la Audiencia de Charcas. Con una riqueza basada en la actividad comercial durante la primera mitad del siglo, empezó a adquirir propiedades rurales sólo a partir de su primer matrimonio, en 1752. Luego de esta unión y de compras continuas, invirtió grandes cantidades de su capital comercial en la elaboración de terraplenes y en la plantación de nuevos cultivos de coca. Al igual que lo hicieran las comunidades indígenas antes que él, también compró enormes propiedades en el altiplano y en otras regiones de los valles, de modo que creó un sistema de producción multiecológico en el que a menudo intercambiaba hojas de coca de sus propiedades en los yungas por queso, lana, carne y otros productos de los ranchos del altiplano. Pese a ser un comerciante muy acaudalado, no participó en la minería, actividad en extremo especializada.

Quizá el más extraordinario empresario dedicado a la minería, comercialización de mineral y fundición del mismo de este periodo fue Antonio López de Quiroga, quien llegó de Galicia a Potosí en 1648 y murió ahí mismo en 1699. Para las primeras décadas del siglo XVII, la industria minera de Potosí ya había madurado por completo. Había unos 72 ingenios hidráulicos, además de unos 30 diques y complejos canales que llevaban agua a estas refinerías. Pese al descenso en la población indígena, siempre había un abasto disponible de mineros asalariados *(mingas),* si no es que de mitayos. El verdadero problema era la calidad del mineral, que decaía de manera progresiva. Se intentaron hacer nuevas exploraciones y se llevaron a cabo numerosos experimentos para alcanzar las vetas, siempre más profundas, pero casi todas las viejas minas tuvieron problemas de inundación y altos costos de extracción. Los magros ingresos respecto al capital invertido

en la minería y la fundición ayudan a explicar las violentas confrontaciones entre la élite urbana —de las que ya se habló—, que sucedieron en la ciudad de Potosí, y comerciantes, fundidores y propietarios de minas, vascos y no vascos, que sólo pudieron resolverse por la intervención del gobierno real en 1625, a favor de los vascos. Pero la causa fundamental de este conflicto permaneció, y continuó el descenso de las ganancias provenientes de la minería. La originalidad de López de Quiroga en esta nueva era, más difícil, consistió en invertir enormes cantidades de dinero para revivir la minería, al escarbar algunas galerías bajo las venas principales del Cerro Rico, y así drenar las viejas minas y tener acceso a nuevas vetas de plata. López de Quiroga provenía de altos círculos españoles y aprendió la minería como mercader de plata. El extraordinario éxito que tuvo en esta tarea lo volvió no sólo muy adinerado, sino que también le otorgó un profundo conocimiento de la industria. Para finales del decenio de 1670 rentaba minas y era propietario de dos ingenios de refinación gracias a préstamos que los dueños originales no pudieron cubrir. Estas inversiones eran aún relativamente modestas, y su actividad primaria era la compra de plata no acuñada, y otorgar préstamos a mineros y fundidores. Para finales de la década de 1660 trabajaba 12 minas, pero comenzó a agruparlas en unidades mayores al construir grandes galerías que utilizaba para atravesar varias vetas y minas más pequeñas. La genialidad de López de Quiroga fue abrir fuentes de mineral viejas y abandonadas, y al término de la década ya era el fundidor más importante de la región, y tenía los fondos para construir socavones mucho más costosos, que eran grandes galerías horizontales construidas bajo el manto freático que pasaba por muchas de estas minas viejas y abandonadas que, cuando eran drenadas, permitían su explotación. Cada uno de los socavones que abrió en diferentes centros mineros se creó mediante una explosión de pólvora; fue la primera vez que se usó esta técnica minera en América. Tomó media docena de años construirlos, y cada uno costó más de varios cientos de miles de pesos. Los cinco socavones que construyó en Cerro Rico en 1689 tenían más de 2 400 metros de longitud. Sus esfuerzos y los de otros mineros por reactivar viejas minas llevaron a una estabilización temporal de la producción durante el último cuarto de siglo: de 1660 a 1690, pero pronto incluso estos esfuerzos

tuvieron poca utilidad. Luego de su muerte, la industria minera se fragmentó aún más, y ningún minero por sí mismo volvió a desempeñar un papel dominante en esta actividad, hasta el siglo XIX.

En 1689 López de Quiroga patrocinó a su sobrino en una de las últimas expediciones militares para conquistar las tierras bajas del Alto Amazonas, en este caso la región nororiental de Mojos. El resultado fue un fracaso total, pues el siglo XVII y los primeros años del XVIII ya no eran épocas de expansión de la frontera civil. De hecho, la llegada de jesuitas, franciscanos y otros misioneros durante la segunda mitad del siglo XVII llevaría, por último, al asentamiento parcial de indígenas "incivilizados" en esta zona fronteriza gracias a la famosa frontera misionera. En 1587 los jesuitas establecieron una residencia en Santa Cruz, y comenzaron a aprender guaraní, chané y otras lenguas nativas de la región. Para 1590, se aventuraron al interior de las regiones norteñas, pero no obtuvieron la autorización para establecer misiones sino hasta los últimos 25 años del siglo XVII. Los jesuitas finalmente establecieron unas 25 misiones entre los años 1682 y 1744, donde se apostaron unos 30 000 indígenas en la región del río del Alto Mamoré y zonas circundantes. En 1701 publicaron la primera gramática de la lengua arawak, de esa región. Ni las enfermedades europeas, ni la inquietud entre los indígenas, y ni siquiera las revueltas, destruyeron la cultura misionera que sobrevivió incluso a la expulsión de los jesuitas en 1767. La explotación de la corteza de la chinchona para quinina y la extracción de caucho en el siglo XIX fueron el suceso final que debastaría a estas viejas misiones. Se estableció otra república tipo misión jesuita hacia el sur de Mojos, en la provincia de Chiquitos, donde se erigieron unas diez misiones indígenas entre 1691 y 1760. Estos asentamientos, con sus unidades de producción agrícola y rebaños, con el tiempo albergaron a unos 20 000 indígenas. Ahí construyeron unas magníficas misiones e iglesias que sobreviven hasta la fecha. En este lugar, así como en Mojos, los jesuitas debieron pelear contra incursiones de soldados portugueses en busca de esclavos indígenas y, como en Paraguay, tuvieron que armarse para defender sus poblados. Un tercer centro de actividad misionera fue desarrollado en la ciudad sureña de Tarija, donde los jesuitas enviaron expediciones para cristianizar a los chiriguanos, tobas,

macobies y a otros indios de esta región del Gran Chaco. Aunque otros grupos misioneros sustituyeron a los jesuitas cuando la Corona los expulsó de América, la poderosa frontera de misiones entró en declive después de 1760.

Aunque la frontera de las tierras bajas orientales vio gran actividad a finales del siglo XVII y principios del XVIII, en el resto de la colonia la larga depresión económica había traído consigo cambios estructurales a largo plazo que no se modificaron antes de finalizar el siglo XIX. Aunque la producción y las exportaciones de plata comenzarían un ascenso a largo plazo en la década de 1750, que desarrollaría una próspera industria, el máximo de producción de este periodo no alcanzó más de 50% de lo que había sido en los últimos años del siglo XVI. Por esta razón, el auge argentífero de la colonia tardía fue incapaz de renovar las poblaciones urbanas. Las poblaciones alto-peruanas de europeos y su fuerza de trabajo mestiza e indígena urbana jamás renacieron. La producción aumentó, pero lo hizo sobre la base de poblaciones urbanas relativamente estancadas, al menos en los centros mineros principales. Esto significaría que el desarrollo de la industria minera de finales del siglo XVIII, en tanto fue importante para revitalizar los vínculos económicos regionales de los productores locales, no logró recapturar por completo el enorme mercado panandino que existió antes de la crisis. Así, en todo lugar, los vínculos entre los mercados locales y los centros mineros o se redujeron mucho en importancia o desapreciaron por completo.

Mientras que el siglo XVIII mostraría ser un periodo relativamente productivo para Charcas colonial, además de un momento de gran desarrollo de la vida artística e intelectual, el crecimiento de los sectores urbanos y las economías regionales fue muy modesto, en comparación con las glorias del siglo XV y principios del XVI. Además, para el total de la producción americana, Potosí era ahora, sin duda, una fuente secundaría de producción de plata. La constante expansión mexicana desde el siglo XVII hasta concluir el periodo colonial garantizó que el Alto Perú quedara como un productor relativamente menor, aun a pesar del renacimiento de finales del XVIII. Aunque Potosí y Oruro, aun con su producción reducida, eran todavía fuentes relevantes de plata para el mercado mundial, ya no eran el centro dominante, ni siquiera para los Andes, ya que la producción de plata también se

desarrolló en el virreinato peruano. A diferencia del virreinato mexicano, donde la Corona pudo exportar grandes cantidades de lingotes a España cada año, las colonias peruanas generaban impuestos sólo para pagar a la burocracia real de la región austral de América del Sur. El auge del siglo XVIII para el Alto Perú fue, de este modo, un asunto relativamente frágil y limitado, que no sobreviviría a una serie de problemas estructurales, mercantiles y políticos que surgieron a principios del siglo XIX. Sin embargo, limitada como fue, la minería del Alto Perú aún representaba la industria más importante de la región. Por esto, durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló una importante lucha de poder por el control de la Audiencia de Charcas, que enfrentó a la vieja riqueza mercantil de Lima y Cuzco contra el emergente poder de los nuevos grupos de mercaderes de Buenos Aires.

Comenzando en los últimos años del siglo XVI, la ubicación final de la ciudad porteña de Buenos Aires se había establecido y se había empezado a desarrollar una pequeña pero próspera economía regional, sobre la base del comercio local y el trabajo de pastoreo. Pero este crecimiento fue muy limitado, ya que Buenos Aires y sus zonas aledañas fueron incapaces de utilizar sus recursos primarios, su puerto marino y rápidas conexiones con Europa para promover su crecimiento antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque sin duda el contrabando prosperó en Buenos Aires, no fue sino hasta que la Corona española modificó oficialmente su política respecto al comercio imperial abierto que el verdadero crecimiento tuvo lugar. Una vez que se permitió el comercio de manera oficial, por un lado entre Buenos Aires y Europa, y por el otro entre Buenos Aires y el interior, el crecimiento de la región fue extraordinario. Ya para finales del siglo XVII la Corona mostraba interés en este potencial de crecimiento, al forzar a Potosí a mandar un subsidio anual a Buenos Aires para ayudar a sufragar los costos administrativos locales y sostener sus conflictos de larga data contra las incursiones portuguesas al estuario de Río de La Plata desde su colonia brasileña.

Más tarde, en 1776, la Corona solucionó el creciente conflicto entre Buenos Aires y Lima por el control del comercio hacia Potosí, a favor de la primera. Se colocó al Alto Perú y al gobierno de la Audiencia bajo el control

directo de Buenos Aires, que ahora se había convertido en un virreinato independiente. Este control se reforzó en 1778, cuando se retiraron la mayor parte de las restricciones al comercio para el virreinato de Buenos Aires. Estas decisiones políticas fueron cruciales para cambiar la preponderancia del comercio potosino del norte hacia el sur: antes la ruta austral había involucrado sólo importaciones de mulas y alimentos desde los poblados argentinos septentrionales, y de yerba mate de Paraguay; ahora Potosí modificaba con lentitud su sistema de exportación completo hacia el sur, y abría una importante ruta de exportación que recorrería todos sus poblados satélites tradicionales del norte de Argentina, en el distrito de Tucumán, hacia el mar, en Buenos Aires.

La reorganización del espacio económico del Alto Perú y sus conexiones con el mundo exterior implicaron el declive de Lima. Los mercaderes limeños ya no tenían el monopolio del comercio de Charcas con Europa, ni era ya su fuente principal de capital. Esta disminución del dominio comercial, ahora confinado a su zona minera, conllevó una decadencia a largo plazo del poder económico de Lima, decadencia que a su vez permitió el crecimiento de centros regionales de poder económico alternativos. El más poderoso de los nuevos centros fue, por supuesto, Buenos Aires, aunque la capitanía de Chile, relativamente marginal, también encontraría el potencial para crecer, desarrollándose velozmente a costa del anterior monopolio de Lima. Así, la reorganización de los vínculos comerciales del Alto Perú con Europa, en los hechos, reflejaría cambios a largo plazo en el poder económico y político relativo de diferentes regiones sudamericanas, a la vez que ayudaría a patrocinar estas tendencias a tal grado que el poder mismo de Perú, y en menor grado el del Alto Perú, ahora se reduciría en gran medida, para ser sustituido por el de áreas nuevas y más dinámicas, como Chile y, sobre todo, el Río de La Plata.

Todas estas tendencias, por supuesto, continuarían mucho después del siglo XVIII y tendrían importantes consecuencias para la posición y poder relativos de los regímenes poscoloniales. Para las primeras décadas del siglo XVIII, tales cambios a largo plazo apenas comenzaban. Además la Corona, al crear el nuevo virreinato, esperaba en los hechos estimular aún más la economía de

exportación del Alto Perú; de este modo, la Audiencia de Charcas pronto estuvo a cargo de un grupo de administradores en extremo capaces, con antecedentes inusualmente amplios, cuyos esfuerzos se dirigían, en principio, hacia el reavivamiento de la industria minera de plata de Oruro y Potosí, por cualquier medio posible. Como sería evidente por los desarrollos posteriores, quedaba muy claro que las vetas argentíferas aún eran abundantes en las minas alto-peruanas. Pero ahora se encontrarían en niveles mucho más profundos, a menudo bajo el nivel freático, así como mezcladas con otros metales, y de menor calidad por unidad de mineral crudo de lo que se había encontrado en el periodo anterior. El colapso de la producción de plata tuvo más que ver con la desaparición de depósitos más ricos, y de mejor acceso, cercanos a la superficie, que con el agotamiento de los depósitos minerales.

Para llegar a este nuevo nivel del mineral de plata se debieron hacer grandes inversiones de capital, y la industria minera local del Alto Perú fue incapaz de generar tales montos. Por lo tanto, fue esencial que la Corona proveyera el apoyo financiero necesario para abrir una minería de socavones más profundos. La Corona finalmente reconoció esta necesidad en el siglo XVIII. En 1736 estuvo de acuerdo en disminuir su parte fiscal de 20 a 10% de la producción total, decisión tomada en México mucho antes. Enseguida colaboró con la creación de un banco de compras de minerales en 1779, el Banco de San Carlos, establecido originalmente por los azogueros como institución de crédito a finales de la década de 1740, y que para 1752 se había convertido en una institución semigubernamental, también para la compra de minerales. La compra directa del banco de la plata refinada eliminó a los "rescatadores" (comerciantes privados de plata), lo que garantizó altos precios a fundidores y mineros y, aún más importante, ofreció crédito para la compra de abastos para la minería. En resumen, puso orden en el caos del mercado local de capital. Cuando el banco entró en una crisis severa en el decenio de 1770, se había vuelto una institución tan importante que la Corona se vio forzada a apoyar sus funciones de manera directa. Por último, la Corona no sólo reorganizó el comercio del azogue después del colapso de la producción de Huancavelica en la década de 1770, y trajo importantes cargas de mercurio de Almadén, en España, por el puerto de Buenos Aires, sino que

también subsidió su precio. En 1784 se redujo el precio del mercurio para los mineros locales en casi una quinta parte.

Mientras la población de Potosí siguió en descenso, pasando de un cálculo de 70 000 personas en la década de 1750 a unas 50 000 en la de 1780, la producción comenzó a revitalizarse lentamente después de 1730, en especial a partir de la ayuda sistemática otorgada por la Corona. Después de cierto debate, la mita, ahora en extremo reducida a unos 2 500 mitayos al año, se mantuvo y fortaleció, y aún ofrecía una base crucial de mano de obra para los mineros. Esto se debía a que, pese a su gran descenso en cantidad para finales del siglo XVIII, los mitayos aún representaban cerca de la mitad de los mineros de socavón bajo tierra y, por tanto, la crucial diferencia entre ganancias y pérdidas en las minas de Potosí.

Apoyados por concesiones reales y por la mita, los mineros del Alto Perú pudieron fomentar un crecimiento estable en la producción minera al finalizar el siglo XVIII. Esto tuvo un paralelo en el crecimiento del sector agrícola de la economía, y un aumento general de la población rural. Aunque este vibrante sector agrícola se limitaba a los mercados regional y andino, su actividad tenía el suficiente dinamismo como para proveer a la Corona de un creciente ingreso en forma de impuestos de venta y un impuesto indígena per cápita. Esta carga tributaria se había vuelto la segunda fuente principal de ingreso real en el distrito de la Audiencia de Charcas, a finales del siglo XVIII.

El papel ampliado del ingreso por tributos se debía, en esencia, a tres fenómenos separados que se sucedieron en el siglo XVIII. El primero, y obviamente el más importante, fue la tendencia a largo plazo hacia un crecimiento definitivo entre la población rural que comenzó a finales del siglo XVII; el segundo fue la reducción de la explotación de las poblaciones rurales, consecuencia de la crisis en la minería, que había permitido que las comunidades libres rescataran sus recursos y desarrollaran más su producción local; por último, el impuesto tributario se extendía a todos los hombres indígenas, sin menoscabo de su estatus respecto al acceso a la tierra, lo que a su vez alteró profundamente las cargas y la amplitud del sistema fiscal completo.

Ya que gran parte de la producción agrícola que los indígenas intercambiaban entre sí, o producían para los mercados regionales locales, estaba libre de fiscalización, se forzó a la Corona a depender de su impuesto tributario como mecanismo primario tanto para forzar a que los indígenas acudieran a los mercados españoles como para proveer a la Corona de un ingreso directo. Pero dadas las normas fiscales, la Corona imponía la carga exclusivamente a los integrantes originarios de las comunidades y, pese al crecimiento general de las poblaciones indígenas rurales, la cifra de originarios o permanecía sin cambios o disminuía. Este no crecimiento de los originarios a la par de todos los otros grupos indígenas se relacionaba, de manera obvia, con el hecho de que las obligaciones fiscales y de la mita hacían que el estatus de originario fuera mucho menos provechoso para toda la gente, con excepción de los muy pocos campesinos acaudalados. Incluso la Corona reconocía que estaba destruyendo a la clase legal de originarios en detrimento propio, y en 1734, finalmente, aceptó el consejo de los funcionarios reales locales y amplió el impuesto per cápita, para incluir a todos los indígenas.

Al mantener el reconocimiento de las distinciones locales, la Corona ahora pedía un impuesto fijo de cinco pesos anuales para todos los forasteros que vivieran en las comunidades y para los yanaconas que vivieran en las propiedades de los españoles. Mientras que se exigía que los primeros pagaran sus propios impuestos, los terratenientes españoles pagaban el impuesto tributario de los segundos, que era otro medio para alentar a que la mano de obra rural migrara a las haciendas. En ambos casos, no obstante, la nueva extensión del impuesto tributario para todos los indígenas rurales aumentó el ingreso real por tributos, para pasar de la mitad a dos terceras partes en los años siguientes, y también estabilizó a la clase de los originarios, ya que las ventajas de cambiar de estatus ya no eran tantas como habían sido en el periodo previo a 1734.

Con la carga fiscal distribuida de manera más pareja, y con los impuestos relativamente fijos, la creciente población del área rural pudo manejar mejor la extracción estatal y privada de su excedente, y sobrevivir y prosperar hasta cierto punto. De manera semejante, a la vez que la Corona mantuvo la mita

como institución vital para la prosperidad de la región minera de plata, no aumentó la cantidad de mitayos al someter a forasteros o yanaconas a esta obligación; de este modo, el peso regional de la mita quedó muy disminuido de esta carga durante los siglos XVI y XVII.

Las haciendas también asediaban menos a los indígenas comunitarios. Aunque el renacimiento minero había aumentado la demanda sobre los mercados urbanos locales, ésta se atendía al hacer participar a las haciendas de producción marginal, o reanimando la producción en las mejores propiedades. Esto trajo muy poca amplitud al sistema de hacienda, que pareció permanecer relativamente estable a lo largo del siglo XVIII. De esta manera, la creciente población indígena no tuvo la necesidad de enfrentar los problemas de una enorme intrusión de las haciendas.

Sin embargo, el relativo relajamiento de la explotación de la creciente población campesina indígena rural no evitó que dicha población continuara en amarga oposición a sus gobernantes. Las exacciones sin fin de los corregidores locales y su forzosa venta de bienes a las poblaciones indígenas (agrupadas en los llamados repartimientos) era algo que resentían en particular. Aunque las mulas y otros bienes que compraban los indígenas resultaban útiles para su trabajo, reaccionaban con acritud ante la naturaleza forzosa de estas ventas y los brutales métodos de cobro. Además, sin menoscabo de los aspectos positivos que tuviera el sistema de crédito para los trabajadores más pobres de la sociedad, los corregidores locales, desesperados por lograr ingresos, abusaban del sistema, se sabía, de cualquier manera posible. Los indígenas también resintieron las demandas impuestas por las obligaciones de corvea local, que a menudo servían a intereses españoles privados más que al Estado. Además, los caciques locales frecuentemente recibían embates sobre sus propios privilegios y eran explotados por los españoles, así como forzados hasta el cansancio a defender su posición de liderazgo, que se erosionaba cada vez más. Por último, la Iglesia más letrada y culta del siglo XVIII se oponía a las actividades no cristianas tanto como lo habían hecho los ideólogos eclesiásticos del siglo anterior, y había un ataque infinito a los sistemas oriundos de creencias religiosas, que obligaba a los indígenas a defenderse constantemente.

Estos factores ayudan a explicar la tremenda rebelión india del Alto Perú y Cuzco en 1780, en la cumbre de la expansión y renacimiento económico y social del siglo XVIII. Tales levantamientos en las zonas rurales, o los levantamientos criollos y mestizos en las ciudades, como el representado por la Gran Rebelión de 1780-1782, no eran nuevos en el Alto Perú o en el imperio español. Estas revueltas de las comunidades locales, o incluso provinciales, sucedieron con regularidad en el Alto Perú a lo largo del periodo colonial, y se daban por lo general en respuesta a asuntos locales inmediatos, aunque se llevaron a cabo más a menudo dentro de las comunidades libres debido al abusivo cobro de impuestos por parte de algún corregidor local, que superaba las normas de explotación usuales debido a conflictos por tierra con población no indígena o, de manera mucho más importante, a la interferencia española en la designación de los caciques locales. En las áreas urbanas tales rebeliones también fueron comunes, e iban desde revueltas por subsistencia en momentos de crisis y acaparamiento de alimentos hasta protestas contra impuestos locales o funcionarios reales. Tales movimientos o conspiraciones se llevaron a cabo en Oruro y en Cochabamba en la década de 1730.

Pero todas estas revueltas endémicas por lo general eran de corta duración y meramente locales; buscaban tan sólo alivio temporal respecto a impuestos, o la eliminación de funcionarios corruptos. “Larga vida al rey y muerte a los malos gobernantes” era el llamado tradicional enarbolado por estas revueltas. Tales movimientos eran parte esencial del gobierno local, y todos los reconocían como una salida más o menos normal a las protestas localizadas, lo que no implicaba que su sofocamiento no pudiera ser muy violento y con numerosas muertes. Era evidente que, a diferencia de situaciones semejantes en Europa, tales revueltas de cara a la opresión general de masas indígenas provocaban respuestas más violentas de parte de las autoridades de lo que habrían sido en otras circunstancias. Pero el patrón de tales movimientos era muy conocido, de modo que el gobierno jamás sintió su poder como una amenaza importante.

En este sentido, la Gran Rebelión de Túpac Amaru de 1780-1782 representó, de hecho, una divergencia profunda y fundamental de la norma.

Fue masiva en cuanto a su nivel de participación y amplitud, quizá englobando más de 100 000 rebeldes en todas sus actividades, pues incorporó acciones relativamente bien coordinadas desde los altos del sur de Perú, en la zona de Cuzco, a lo largo de todo el Alto Perú, hasta el norte de Argentina. Fue una revuelta multiclasista, de castas múltiples, y en extremo bien conducida, cuya finalidad era el establecimiento de una región autónoma controlada por las clases locales, con la exclusión de todos los españoles. Se trataba, en resumen, de un movimiento independentista. Aunque el liderazgo provenía de un elemento disidente de entre los caciques de la región del Cuzco, hubo una participación muy importante de líderes indígenas de la Audiencia de Charcas, y gran parte de las batallas cruciales se pelearon en su territorio. Los dos líderes rebeldes más relevantes fueron los aymaras Tomás Katari, cacique del pueblo de San Pedro de Macha, en la provincia de Chayanta (Potosí), y Julián Apaza, poblador común, quien tomó el nombre de Túpac Katari cuando surgió como el principal líder militar en la región de La Paz.

El caso de Tomás Katari es verdaderamente extraordinario. Destituido de su posición tradicional de cacique por el corregidor español local en 1777, Katari, que no sabía leer ni escribir, ni era bilingüe, utilizó a lo largo de los siguientes cuatro años todo instrumento legal a su disposición para retomar su puesto. Katari peleó su caso en cada nivel de gobierno: desde elaborar peticiones formales ante la corte real local hasta viajar a Buenos Aires para hablar con el virrey. Por lo general, ganó en cada instancia, pero los funcionarios locales corruptos rechazaron en repetidas ocasiones los decretos formales que lo reasignaban a su posición, y no sólo lo encarcelaron varias veces, sino que, temerosos del poderoso apoyo que tenía, también asesinaron a su principal aliado, Isidro Acho, otro cacique, y luego ordenaron en secreto que fuera asesinado en medio de la gran rebelión de enero de 1781. Es evidente que mientras luchaba por su caso legalmente, Katari también estaba organizando poderosas fuerzas de oposición al régimen español, y comenzaba a establecer contactos formales con el movimiento de Túpac Amaru. A su muerte, sus dos hermanos encabezaron una gigantesca rebelión indígena que sitió a la ciudad de La Plata.

Julián Apaza, o Túpac Katari, resultó más peligroso para los españoles. Sin exigir el tradicional pacto de lealtad de sus seguidores indios, surgió como uno de los principales líderes militares durante la Gran Rebelión, y gracias sólo a su capacidad personal, fue capaz de organizar y dirigir un poderoso ejército indígena de 40 000 personas. Era sólo un forastero de la región de Sicasica, comerciante itinerante de coca y textiles, y tenía apenas 30 años de edad cuando sobresalió en medio de la rebelión de 1781. Poco se conoce de sus antecedentes, aunque se sabe que estaba casado con Bartola Sisa, quien fuera una de sus comandantes en la guerra y quien aparentemente tampoco hablaba español ni estaba alfabetizada. Apaza demostró ser un líder militar capaz y generó intensas lealtades entre sus seguidores.

La rebelión se fue preparando mucho antes de noviembre de 1780, momento oficial de su irrupción. Las preparaciones consistieron en el contacto que su competente jefe, José Gabriel Túpac Amaru, tuvo con muchos de los principales caciques de Charcas y del sur de Perú, así como con Julián Apaza y otros líderes rebeldes en potencia. Descendiente directo de los incas y cacique principal del arzobispado de Cuzco, Túpac Amaru fue un noble indígena, educado e ilustrado. Dada la legitimidad de su bagaje y su propio intelecto indiscutible, fue capaz de convencer a un importante grupo de *kurakas* quechuas y a unos cuantos nobles aymaras de que se debía destruir al régimen español.

En su desarrollo la rebelión tuvo, en lo esencial, dos grandes fases. La primera fue la propia rebelión dirigida por el mismo Túpac Amaru, quien tomó la mayor parte de la provincia de Cuzco y sitió su ciudad capital de noviembre de 1780 a marzo de 1781. Los españoles de la zona terminaron con el sitio de Cuzco, en el que tomaron parte grandes tropas en ambos bandos, y Túpac Amaru y su séquito inmediato fueron capturados en la última fecha.

Pero la ejecución de su líder no impidió que la masiva revuelta continuara, ni que los líderes locales disidentes se unieran a la rebelión. La segunda fase comenzó justo cuando la actividad de Cuzco fue aplastada, y se desarrolló, en gran medida, en el Alto Perú. Primero se dio la rebelión de Chayanca, que comenzó en enero de 1781 con el asesinato de Tomás Katari, encabezada por

los hermanos del cacique muerto. Después, en marzo, Andrés, el sobrino de Túpac Amaru, conquistó la provincia entera de Larecaja, a lo largo de la playa oriental del lago Titicaca, en la región de La Paz, y luego de un sitio de tres meses, tomó la capital provincial de Sorata en agosto de 1781, dando muerte a todos los españoles. Más tarde marchó sobre la capital regional de La Paz y se unió a Túpac Katari en un sitio formal de la ciudad, que duró unos seis meses, en dos fases, de marzo a octubre de 1781. Aunque la ciudad jamás cayó, aproximadamente la mitad de la población urbana perdió la vida en las batallas. Los ejércitos de relevo finalmente lograron romper el sitio y capturar a Túpac Katari en noviembre.

Mientras tanto, en febrero de 1781 una revuelta urbana criolla, encabezada por Jacinto Rodríguez, comenzó en Oruro. Los rebeldes, aliados cercanos de Túpac Amaru, le arrebataron la ciudad a los peninsulares. Éste fue el apoyo mestizo y criollo más poderoso que los caciques indígenas recibieran, y Oruro fue la ciudad española más grande jamás tomada por los rebeldes. Aunque Rodríguez operó cercano a los caciques locales, la alianza entre indígenas, mestizos y blancos nacidos en América o criollos no era fácil, ya que las diferencias de clase se sentían de inmediato. Aquí, como en cualquier lugar, las fuerzas reales terminaron por apoderarse del poblado y ejecutar a los rebeldes. El grupo que se unió a la rebelión al final fue el de los artesanos mestizos del poblado sureño de Tupiza, quienes mataron al corregidor del lugar en marzo de 1781. Pero también fue rápidamente controlado este movimiento y su impacto, restringido.

Sin embargo, la derrota de los rebeldes no representó una guerra de castas. De hecho, la mayoría de los caciques aymaras, así como una cantidad importante de quechuas nobles, se opusieron a los rebeldes y lucharon enconadamente contra ellos, utilizando a sus propios seguidores indígenas y a tropa española aliada. Una gran cantidad de casas de nobles indígenas fueron destruidas por los rebeldes en estas batallas entre castas. La mayoría de los caciques aymaras de la ribera sureña del lago Titicaca se unieron a la causa real y muchos murieron al oponerse a los ejércitos de Túpac Amaru. Tal fue el caso de Agustín Siñani, cacique de Sorata, quien en la década 1760 mandó realizar extraordinarias pinturas de sí mismo y de su noble clan en la iglesia

de Carabuco, al borde del lago, entre ellas una que forma parte de las obras clásicas del estilo mestizo de arte del siglo XVIII; murió defendiendo a Sorata contra las huestes de Andrés Amaru. Otro fue Dionisio Mamani, cacique de Chulumani, en los valles bajos de los yungas, productores de coca. Organizó a sus vasallos indios en ejércitos para pelear contra los rebeldes; luchó en diversas batallas, hasta que se vio obligado a huir a Cochabamba; finalmente murió en su propia comunidad durante una feroz pelea contra los rebeldes, quienes destruyeron su hogar y sus plantaciones. Uno más fue Manuel Antonio Chuiquimia, de la comunidad lacustre de Copacabana, quien, como Mamani, también se unió al ejército español de Sebastián de Segurola. Fue conocido como un líder particularmente represivo en su papel oficial de juez pacificador. Aunque algunos de los *jilakatas* y otros principales de sus comunidades se unieron a los rebeldes, la nobleza aymara como clase tendió a permanecer leal, en especial debido a que el líder máximo de las tropas rebeldes aymaras era un hombre común, y no parte de su clase.

Para finales de 1781 se habían aplastado las rebeliones en la mayor parte de las áreas rurales, y todas las ciudades capturadas estaban otra vez en manos españolas. Se ejecutó a los líderes rebeldes de la usual manera brutal, y hubo una confiscación masiva de propiedades. Se retiró de sus cargos a todos los caciques rebeldes, y una gran cantidad de caciques leales había muerto peleando; y aunque la Corona reconoció los títulos de los leales que sobrevivieron a la rebelión, la destrucción fue tan enorme que, a partir de entonces, la mayor parte de las comunidades libres de las zonas centrales de la rebelión quedaron bajo el control de los españoles, quienes ahora tomaron el título de caciques. Al mismo tiempo, los ancianos de la comunidad, los *jilakatas,* tomaron, desde entonces, algunas de las funciones que antes tenía la vieja clase nobiliaria. Estos sucesos señalan la extinción efectiva de los caciques en el sur de Perú y en el Alto Perú, lo último de la gran nobleza indígena que había sobrevivido a la Conquista española. Después de la rebelión de 1780-1782, la clase noble indígena dejó de ser un factor preponderante en la vida social, económica y política de la región.

Pese a su gigantesco impacto de amplio alcance y a su movilización extraordinariamente extensa, la rebelión de Túpac Amaru pronto fue un

recuerdo distante para las poblaciones del Alto Perú. También fue el último intento por llevar justicia social e independencia a la región antes del siglo XIX. Las rebeliones posteriores y el logro final de la independencia provendrían, por último, de los criollos, y sería un tema claramente de la clase alta, así como, en gran medida, no indígena. La rebelión de Túpac Amaru, pese a su importancia real y simbólica, tuvo un impacto poco duradero en el Alto Perú.

La destrucción de vidas humanas y de propiedades durante la rebelión había sido enorme, en especial alrededor de La Paz y en la región del lago Titicaca. Pero el crecimiento económico y demográfico general —muy pronunciado en esa década— permitió que se reconstruyera la mayor parte de las haciendas a fines de la década de 1780. Así, en los años inmediatos a la revuelta, que algunos documentos locales describieron como de monumental pérdida de implementos agrícolas, animales y trabajadores en haciendas abandonadas, casi todas estas haciendas operaban normalmente y habían recuperado el mismo nivel de riqueza de antes de la asonada. Las pérdidas de población también se recuperaron pronto, y para la década de 1790 la mayor parte del territorio, antes rebelde, tenía densidades poblacionales iguales a las del periodo previo a la rebelión.

Para la década de 1790, la población rural más numerosa —de más de 200 000 personas— y la ciudad más grande del Alto Perú, con más de 40 000 residentes, se encontraban en la provincia de La Paz, que ahora poseía la mitad de la población total de la colonia. Los ricos valles y montañas de esta provincia dominante incluían unas 1 100 haciendas en las que laboraban 83 000 peones o yanaconas, y era propiedad de 719 hacendados, la mayoría terratenientes que vivían en la capital provincial. Alrededor de 39% de los hacendados poseían más de una hacienda y, como el mercader don Tadeo Diez de Medina, tenían sus propiedades a lo largo de varias zonas ecológicas, lo que complementaba su producción de bienes agrícolas. Unas dos terceras partes de estos hacendados eran hombres, y el resto mujeres e instituciones eclesiásticas, en cantidades similares. En este aspecto, la Iglesia alto-peruana, que tenía unos 40 monasterios y un total de 2 400 clérigos para los últimos años el siglo XVIII, conformaba una institución acomodada, pero no

terrateniente importante. Proveía la mayor parte de los fondos hipotecarios (o censos) disponibles para la compra y expansión de haciendas; pero, a diferencia de otras Iglesias coloniales, siempre fue propietaria menor de extensiones rurales. Esta posición relativamente débil de la Iglesia sería en extremo importante en el siglo XIX, cuando Bolivia tuvo pocas dificultades para controlar su actividad, sus tierras e ingresos, a diferencia de las amargas luchas que se llevaron a cabo en la mayoría de los otros países de América Latina.

Pese a la expansión de la hacienda en el departamento de La Paz, a fines del siglo XVIII, los grupos dominantes de las zonas rurales, en términos de propiedad de la tierra y población, fueron aún comunidades indígenas. Había alrededor de 491 grupos terratenientes corporativos en La Paz, que abarcaban mucho más de 200 000 indígenas. Tales comunidades incluso poseían 22 haciendas con más de 1 800 yanaconas. De los indígenas que vivían en estas comunidades, sólo poco más de la mitad eran originarios y el resto eran inmigrantes posteriores con derechos limitados sobre la tierra, aunque este último grupo seguiría creciendo a mayor velocidad que el grupo de los originarios y sería dominante en los ayllus para el siguiente siglo. Estos campesinos indígenas con tierra, que otorgaban la mayor proporción del ingreso real mediante su impuesto tributario, se volverían la fuente singular más importante de entradas gubernamentales en la nueva república, una vez más, sobre la base de sus impuestos.

La rápida recuperación en el Alto Perú de los efectos de la rebelión de Túpac Amaru tuvo mucho que ver con el exitoso impacto de las reformas borbónicas sobre la economía, originadas en España a mediados del siglo XVIII. Las reformas en la economía minera pronto trajeron una renovada prosperidad a la producción de Oruro y de Potosí, y una reforma general de la estructura comercial llevó a una saludable rivalidad entre Lima y Buenos Aires, por el comercio de la Audiencia de Charcas. Esto a su vez abrió un segundo conjunto de redes económicas y sistemas comerciales, que aumentaron el ritmo general de la actividad comercial y mercantil en el altiplano y valles orientales asociados. Por último, para llevar algún orden a su estructura política, y con ello alinear la administración con las políticas

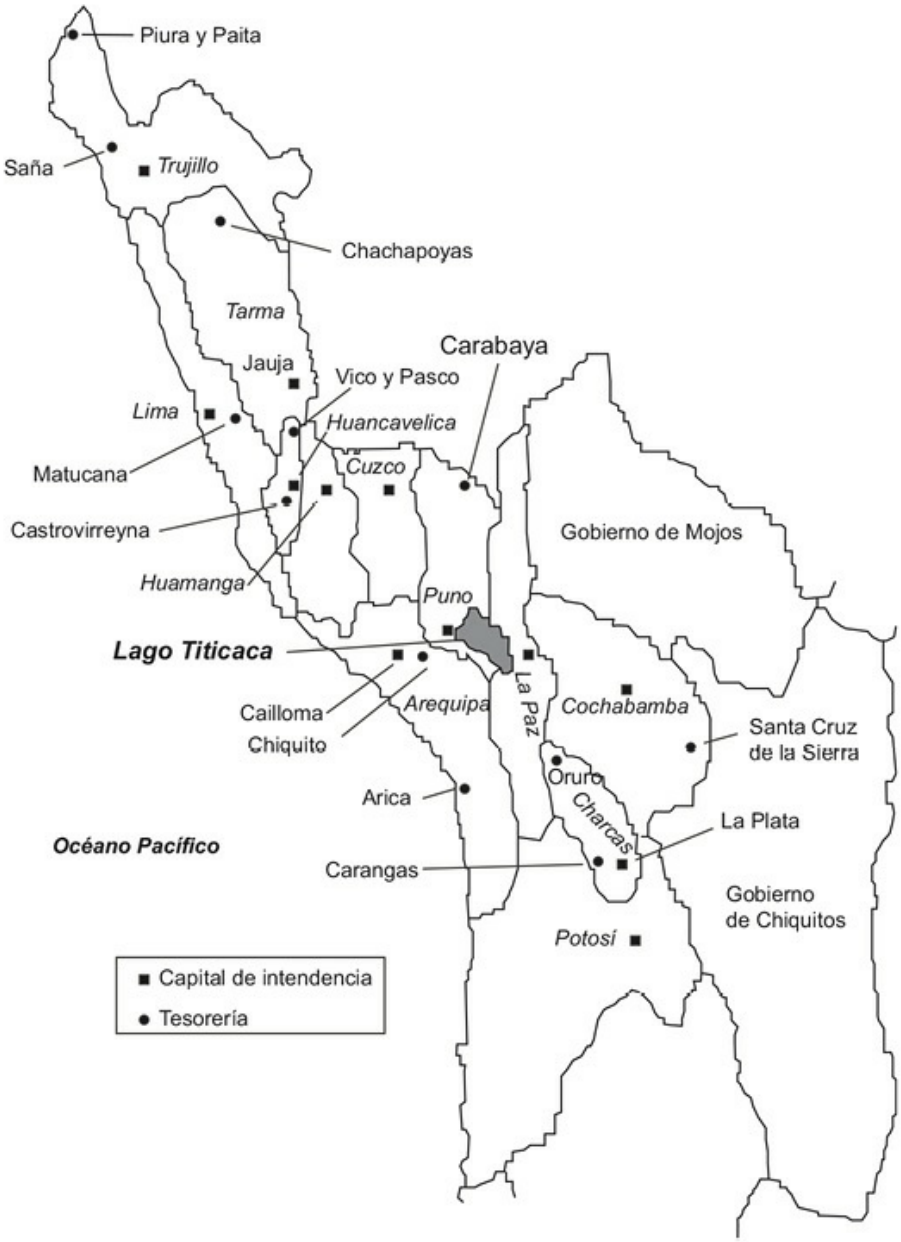
más avanzadas de un comercio más libre y competencia abierta, la Corona llevó a cabo una gran reorganización administrativa.

Lo más importante de esta nueva estructura gubernamental fue la creación de un nuevo administrador local conocido como intendente. Siguiendo el modelo de dicha institución, que tuvo tanto éxito en Francia, los intendentes coloniales americanos desbancaron a los viejos corregidores y crearon jurisdicciones que ahora abarcaban territorios tanto españoles como indígenas, con una administración regional. En 1784 se establecieron cuatro intendencias en el Alto Perú (o Charcas) que cubrían las regiones de La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. Estos nuevos funcionarios recibían salarios muy altos y no tenían, por tanto, necesidad alguna de participar en el comercio local como lo habían hecho los viejos corregidores para poder obtener financiamiento. También se les seleccionaba con cuidado de entre administradores experimentados a lo largo del imperio, y se consideraba que su función primaria era promover el crecimiento económico y social de la región.

Este cuidadoso sistema de selección y los altos salarios entregados a los nuevos funcionarios dieron como resultado la creación de un cuerpo extraordinario de administradores ilustrados y sofisticados que gobernaron el Alto Perú durante las últimas dos décadas del siglo XVIII. Figuras como Francisco Viedma en Cochabamba y Juan del Pino Manrique en Potosí fueron sobresalientes entre estos nuevos funcionarios. Preocupados por reanimar el comercio, experimentar en la agricultura, promover el bienestar general y aumentar los ingresos reales, estos hombres dejaron tras de sí memorias maravillosamente detalladas de la vida y época de los pueblos a los que gobernaron. También parecen haber examinado las principales problemáticas relacionadas con temas de naturaleza social y económica en sus áreas, y ofrecieron minuciosos debates sobre estrategias alternativas. A estos intendentes se debe añadir el itinerante oidor extraordinario de la Audiencia de Charcas, Pedro Cañete, personaje inusual. Jurista, historiador e investigador administrativo, Cañete examinó y legisló la industria minera, al igual que la estructura fiscal gubernamental, el tema de la mita, e incluso la relación entre la Corona y la Iglesia. A menudo entraba en amargas disputas

con los intendentes, cuyos resultados proveyeron de memorias más detalladas del estado que guardaba la sociedad. Viedma, Pino Manrique, Cañete y los otros intendentes representaban bien el pensamiento ilustrado del siglo XVIII, y llevaron al Alto Perú tanto a una nueva estructura administrativa como a un nuevo sentido de liderazgo y potencial desarrollo (véase el mapa 3.1).

Mapa 3.1. Virreinato de Perú y Audiencia de Charcas. Divisiones políticas y fiscales en los Andes, siglo XVIII



También hubo un resurgimiento de la educación superior en la Audiencia durante la última cuarta parte del siglo. Como consecuencia de las reformas

sobre la enseñanza del derecho en España en la década de 1760, y de la expulsión de los jesuitas por su impacto negativo sobre el sistema educativo de la región, la Audiencia logró la aprobación de la Corona en 1776 para establecer un moderno centro de capacitación para nuevos abogados en la ciudad capital de Chuquisaca. La Academia Carolina fue el primero de tales centros establecidos a lo largo del imperio, y capacitó a 362 abogados hasta 1808 impartiendo la educación de derecho civil más rigurosa y moderna de entonces. Aunque la mayoría de sus estudiantes —que eran aristócratas— provenían de la Audiencia, un importante grupo llegó también de Perú, Chile y de la región de Río de La Plata. Dada la historia posterior de la región, tampoco resultaba sorprendente que hubiera provisto de una importante porción del liderazgo republicano revolucionario de principios del siglo XIX.

Esta nueva preocupación gubernamental, tanto respecto a la administración colonial como a la economía, llevó a un incremento de las actividades mercantiles y comerciales. Francisco Viedma, de Cochabamba, por ejemplo, consumió gran cantidad de energía en la promoción del crecimiento regional, y pareció haber desempeñado un importante papel en la ruptura del patrón de estancamiento que Cochabamba había padecido desde la crisis del siglo XVII. Para finales de siglo, Cochabamba se volvió lugar importante de manufactura peruana de textiles (tocuyo), y se integraba una vez más a los mercados regionales más grandes. En cuanto a la industria minera, la intervención constante de la Corona en asuntos locales produjo un subsidio siempre mayor de la minería privada, que incluía desde la garantía de abasto de azogue hasta el apoyo al banco de compra del mineral, que se convirtió en una institución real, formal, en la década de 1770. Toda esta actividad, a la par del boyante comercio a lo largo del imperio español-americano, produjo un gran crecimiento del comercio y la población en la región, si no es que un renacimiento completo de la minería argentífera de la época previa.

Así, la rebelión de Túpac Amaru se absorbió con relativa facilidad debido a la economía del Alto Perú, y en el lapso de tres a cuatro años el ingreso a la tesorería era igual al que hubo en el momento anterior al conflicto, y la mayor parte del sistema de haciendas rurales que se había destruido se reconstruyó por completo. Pero sin importar cuáles hubieran sido los efectos a largo plazo

del subsidio gubernamental, de un comercio más libre y del crecimiento económico general, no todas las clases o grupos se beneficiaron del mismo modo. Así, pese a todas las reformas y al cambio de nombre de las instituciones, la Corona mantuvo el opresivo sistema de corregidores de indios locales (llamados ahora subintendentes) en las zonas indígenas; estos hombres aún explotaban de manera activa a sus súbditos indígenas mediante el proceso usual de ventas forzosas, de intervención en la elección de funcionarios y selección de caciques, así como de intimidación periódica a funcionarios comunitarios. Además, la creciente precisión del censo gubernamental, establecido sobre bases modernas en 1786, implicó el creciente impacto de una recolección fiscal más eficaz sobre los hombres cabeza de familia indígenas, así como un registro más eficiente de los trabajadores por mita. Aunque el crecimiento general suavizaba en cierta medida el impacto de la vieja estructura fiscal, la administración gubernamental más eficiente canceló estos beneficios al recolectar los ingresos de manera más sistemática, al tiempo que no tocaba los viejos mecanismos de explotación.

Los patrones de censo y crecimiento renovados, evidentes en el Alto Perú de los siglos XVII y XVIII, tendrían influencia también sobre los patrones de la actividad artística. Mientras que las primeras construcciones urbanas y decoración artística masiva se habían llevado a cabo en la ciudad de Chuquisaca desde su fundación hasta alrededor de 1650, durante la segunda mitad del siglo la ciudad de La Paz y sus zonas aledañas se volvieron la nueva zona de construcción eclesiástica, con Potosí siguiéndole de cerca. El principio tardío de esta última ciudad se debió al compromiso inicial de la élite local con una construcción más prosaica en Potosí, y con una inversión arquitectónica más refinada en la cercana ciudad de Chuquisaca. No obstante, para la segunda mitad del siglo, justo cuando su producción pasaba por un declive a largo plazo, Potosí finalmente llegó a desarrollar un centro urbano de cierta distinción.

Este nuevo periodo de expresión artística no sólo sucedió en un nuevo medio geográfico, sino que también reflejó ciertos cambios fundamentales en cuanto a estilo y organización. Respecto al estilo, el periodo que va de

alrededor de 1650 a 1700 tuvo el dominio de temas barrocos en el Alto Perú, que entonces estaban muy en boga en la propia España, aunque era más probable que los artistas que desarrollaron este estilo hayan nacido en la localidad, incluso si eran blancos. La gran era de inmigración de artistas desde centros europeos llegaba a su fin, pues ya existían suficientes talleres y expertos para satisfacer las necesidades locales. Sólo ocasionalmente algún cura europeo ofrecía las últimas noticias en cuanto a estilo y sus modificaciones. Más aún, entre los artistas nacidos en América surgían indígenas y cholos pintores, campo que, como el diseño arquitectónico, había sido una ocupación estrictamente controlada por europeos hasta ese momento.

En el campo de la pintura, hubo una actividad tan intensa durante los siglos XVII y XVIII, que se pueden distinguir distintas "escuelas". Primero estaba la abundante escuela "popular", de artistas indígenas y mestizos, cuyas pinturas por lo general no llevaban firma y carecían de perspectiva. Este grupo anónimo de artistas se componía a menudo de escultores y albañiles, así como de pintores de tiempo parcial. Estos artistas populares dejaron obras sin concluir en todos los sitios del Alto Perú, incluidas las mejores catedrales. Para el siglo XVIII comenzaron a fusionarse con una de las escuelas formales, la de los collas de La Paz y de la región del lago Titicaca. Las otras dos escuelas formales, cuyos artistas firmaban su obra y utilizaban perspectivas estándar, eran las de Chuquisaca, donde los estilos manieristas provenientes de la obra de Bitti eran la norma, y Potosí, donde la tendencia era poner énfasis en los intereses españoles. En tanto que los aproximadamente 50 artistas que firmaban sus pinturas parecían definirse como una clase y grupo diferente, la creciente sofisticación de los artistas populares y la progresiva influencia de los estilos mestizos sobre la élite más profesional llevó, a finales del siglo XVIII, a una fusión virtual de los estilos popular, colla y el importante estilo de Cuzco, en un "estilo mestizo" o criollo del Alto Perú, muy distintivo.

Mientras que la escuela de Chuquisaca había florecido durante el primer siglo de asentamiento español, las escuelas potosina y colla predominarían desde 1650 hasta finales del periodo colonial, aunque la de Potosí fue más

influyente y poderosa de 1650 a 1750. Justo cuando la crisis económica se manifestó de la peor manera en la ciudad, Potosí comenzó la construcción en grande de iglesias y edificios públicos, al tiempo que apoyó a la escuela de pintura colonial más prominente. El más sobresaliente de los pintores potosinos, y el más excelso del periodo colonial, fue Melchor Pérez de Holguín, nacido en Cochabamba al iniciar la década de 1660, aunque comenzó su carrera en Potosí a principios de la de 1690. Desde la última década del siglo y hasta muy entrada la de 1720, Holguín fue el pintor dominante en Potosí, y diseminó su arte en todas las iglesias regulares y seculares, así como en inmuebles privados, para personas no religiosas. Pintor barroco clásico, de extraordinaria habilidad, tuvo una enorme producción y un estilo propio que pronto influyó en muchos de los artistas importantes.

En cuanto a la escuela pictórica colla, que también floreció a partir de 1650, su centro primario no iba a encontrarse en una de las capitales provinciales, como en los casos de Chuquisaca y Potosí, sino en una zona rural campesina tradicional, de manera más particular en el área circundante al lago Titicaca. Esta región fue uno de los centros primarios de actividad agrícola del Alto Perú, así como el núcleo del asentamiento aymara. El hecho de que las iglesias de mayores logros artísticos se construyeran en estos pequeños poblados campesinos, en particular en aquellos que conformaban las provincias de Chucuito (temporalmente parte del Alto Perú), Pacajes y Omasuyos, parecería implicar la existencia de una riqueza desconocida para el Alto Perú rural, principalmente indio, en este momento de crisis generalizada en la industria minera de exportación. La existencia de esta riqueza sugiere el relativo descenso en el nivel de explotación de las comunidades libres tradicionales de esta zona; los indígenas de esta área fueron capaces de mantener sus ahorros, que ahora quedaban disponibles para ser invertidos en un relevante programa de construcción y de actividad artística —casi toda relacionada con las tareas eclesiásticas—. El que muchos de los artistas de la escuela colla fueran indígenas y mestizos también implica una creciente especialización de la mano de obra en esta área, lo que apoya la

idea de una economía rural relativamente próspera, que permitiría el desarrollo de tales artistas a tiempo completo.

Para la segunda mitad del siglo XVIII, el patrón de actividad artística y arquitectónica una vez más dio un giro, ya que el estilo mestizo de arte generalizado llegó a dominar la mayor parte del trabajo pictórico de la región, con las escuelas colla y popular, en esencia fusionadas, y las otras dos escuelas perdiendo importancia. Además, también en arquitectura el estilo barroco terminó en gran medida hacia la mitad del siglo, para ser remplazado, como en España, por un movimiento neoclásico. La construcción de estas iglesias de nuevo estilo predominó en Cochabamba y Chuquisaca, que una vez más se volvieron centros primordiales de esta actividad durante los últimos días de la Audiencia. Las catedrales de La Paz y Potosí se construyeron también en este estilo.

Aunque la pintura y la arquitectura fueron de cierto modo domesticadas por el movimiento neoclásico, la escultura en madera y piedra, así como el trabajo en plata, mantuvieron el extraordinario vigor del estilo llamado mestizo-barroco hasta finales del periodo colonial, con los artesanos indígenas y mestizos como actores dominantes en estas habilidades hacia el siglo XVIII. Los temas barrocos permanecieron en este estilo mestizo, sirenas míticas, máscaras grotescas y monstruos, junto con tradiciones cristianas prerrenacentistas, pero ahora se añadieron motivos de fauna y flora americanas, así como temas y figuras precolombinos.

Mientras que las artes florecieron en el Alto Perú desde el principio, y alcanzaron una calidad extraordinaria en todas las áreas, el campo de las letras quedó muy por debajo, incluso para los estándares latinoamericanos. Hubo alguna producción musical eclesiástica menor, pero la mayor parte no sobrevivió. Hubo además algo de teatro, incluida una vena religiosa e histórica vigorosa, escrita en quechua y en aymara por clérigos españoles que deseaban difundir la fe en los indios; pero hubo poca obra poética seria y ninguna obra dramática notable que haya sobrevivido. Incluso en cuanto a trabajos históricos y filosóficos, el Alto Perú fue un área relativamente atrasada comparada tan sólo con Cuzco, sin mencionar el resto de América, hasta muy entrado el siglo XVIII. Y en las ciencias, la única obra importante

fue la obra clásica del párroco Alonso Barba, *Arte de los metales,* escrita en 1640, la más importante elaborada en América en el siglo XVIII.

Pero este relativo atraso en cuanto a las letras cambió en cierta medida en el siglo XVIII, cuando la región pareció tener mayor participación en las tendencias importantes en cuanto a ideas y desarrollo, experimentadas por el resto de las colonias españolas en América. Varios historiadores importantes aparecieron en este momento; de ellos, el más destacado fue Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, cuya *Historia de la Villa Imperial de Potosí,* escrita en 1724, fue su obra más importante; y Pedro Cañete, cuyo trabajo sobre Potosí en la segunda mitad del siglo fue en extremo significativo. También apareció un grupo de famosos estadistas, quienes brindaron algunos estudios reveladores sobre el funcionamiento de la sociedad colonial. Cañete fue el más prominente, junto con otros escritores ilustrados, como los intendentes Francisco Viedma y Juan del Pino Manrique, y el protector de los indios Victorián de Villava. Por último, científico nacido en Alemania, Tadeo Haenke ocupó la mayor parte de su vida adulta en la región, registrando su flora y fauna a finales del siglo.

La vida universitaria en Chuquisaca, en especial después de la fundación de la Academia Carolina, también parece haber sido muy dinámica hacia finales del siglo XVIII. Los primeros líderes, memorialistas y redactores de panfletos del movimiento independentista decimonónico, incluyeron al extraordinario Bernardo Monteagudo, quien participó prácticamente en cada uno de los principales eventos republicanos de las guerras de independencia de la región y fue, en diversos momentos, consejero cercano o lugarteniente de Moreno, O'Higgins, San Martín y Bolívar. Uno de los padres fundadores de Argentina, Mariano Moreno, y Jaime Zudánez fueron educados ahí. Pero en conjunto, la producción literaria y política del periodo colonial tardío en Charcas fue muy limitada. Ni la academia ni ningún personaje en lo particular parecen haber creado un cuerpo literario significativo en ninguna de las disciplinas humanísticas y científicas. Dada la relativa riqueza del Alto Perú y la larga tradición e importancia regional de su centro universitario en Chuquisaca, esta carencia de producción sustancial es difícil de explicar. Algunos factores que sin duda deben haber influido sobre esta carencia

fueron la muy baja tasa de alfabetización y la cantidad muy limitada de hablantes de español en la población total, lo que a su vez retrasó la introducción de la imprenta hasta los últimos años del siglo XVIII. Queda claro que el español siguió siendo una lengua minoritaria a lo largo del periodo colonial y hasta muy entrados los dos siglos siguientes. Pero en las artes, la única expresión en la que la lengua resultaba de poca importancia, los alto-peruanos florecieron con extraordinaria creatividad y producción, marcando al periodo colonial del Alto Perú como una de las grandes eras artísticas de la historia mundial. El hecho de que este arte fuera creado básicamente por indígenas y mestizos, y algunos europeos, también sugiere que se trataba de la única forma de expresión creativa intelectual y cultural completamente abierta a toda la gente de la sociedad colonial y, por lo tanto, la manera en que la creatividad era posible sin temor a la opresión racial o al control de clase.

Pese al importante crecimiento de la economía colonial en el periodo posterior a 1750, que permitió la continuación de un periodo muy activo de nuevas construcciones eclesiásticas y públicas a lo largo de las ciudades del altiplano, la economía del Alto Perú aún se mostraría muy afectada por la larga crisis del siglo XVII. Se vería, de hecho, en extremo vulnerable ante los cambios a corto plazo de las condiciones del mercado internacional, lo que a su vez mostraba que la economía minera tenía relativamente poca capacidad residual para hacer frente a las crisis comerciales temporales, o a un debilitamiento del apoyo gubernamental.

Esta vulnerabilidad quedó evidenciada durante las primeras décadas del nuevo siglo. Para finales de la de 1790, el abasto de mercurio para Potosí ya no provenía de las agotadas minas de Huancavelica, sino que se transportaba directamente de las reales minas de Almadén, en España. Los principios del gran conflicto internacional conocido como guerras napoleónicas pronto llevarían a una participación española directa y a una amarga disputa con Inglaterra en 1796, que llevó a una guerra declarada entre ambos países y a la efectiva interrupción de las rutas marítimas españolas hacia América. Para el Alto Perú esto implicó el final de las entregas de mercurio y, por lo tanto, la caída de la fundición local. De manera más importante, el súbito colapso de

las rutas internacionales comerciales creó una depresión temporal, pero severa, en los mercados en general, con la consecuente estrechez crediticia para las colonias. Esto, a su vez, dejó rápidamente a los mineros con poco capital para mantener sus costosas empresas y, en consecuencia, se dio un rápido descenso en su producción.

Para los primeros años del nuevo siglo hubo una crisis general del sector minero, con el desplome de su producción. Entonces, con este sector exportador severamente disminuido, el Alto Perú recibió el golpe de una importante serie de malas cosechas y epidemias entre 1803 y 1805, cuyo impacto sobre las poblaciones rurales y los mercados regionales fue profundo. Así, para el momento de la invasión francesa a España en 1808, le economía alto-peruana estaba en estado general de depresión, y la población sufría de pérdida temporal, pero severa, de vitalidad. Estas condiciones crearon una atmósfera en extremo tensa en las áreas rurales, e incluso más en los empequeñecidos centros urbanos.

4. REVOLUCIÓN Y CREACIÓN DE UN ESTADO-NACIÓN, 1809-1841

El siglo XIX empezó en el Alto Perú con una severa depresión de largo plazo que tuvo un profundo efecto sobre sus poblaciones urbanas y su economía de exportación minera. Este declive y las graves crisis agrícolas sufridas en el campo fueron bagaje crucial de la respuesta de la región ante el colapso del gobierno imperial en Madrid. A finales de 1806 y a lo largo de todo 1807, los ejércitos napoleónicos invadieron España lentamente, para finalmente forzar la abdicación de la monarquía borbónica. En mayo de 1808 el populacho madrileño se insurreccionó contra el nuevo gobierno de España, controlado por Francia, y los rebeldes establecieron una estructura formal de resistencia que se autoproclamó el gobierno legítimo de los borbones. Conocida como Junta Central, y ejerciendo control sobre el sur de España, el régimen rebelde reclamó legitimidad, pese a la abdicación de Fernando VII, y exigió lealtad de los virreinatos coloniales. Tal situación de gobierno dividido había sucedido una vez antes durante la historia imperial, muy al comienzo del siglo XVIII, cuando borbones y habsburgos contendieron por el control de España en una lucha larga y amarga en territorio español. Pero en aquel momento las colonias fueron pasivas y permitieron que todas las decisiones fundamentales sobre la suerte de España y el imperio se tomaran desde Europa.

Sin embargo, en 1808 el mundo había cambiado. Los dos movimientos de independencia de las excolonias, Haití y los Estados Unidos, tuvieron un profundo impacto y transformaron el pensamiento colonial americano. Además, los Estados Unidos e Inglaterra, ambas potencias importantes, ahora ofrecían apoyo financiero para los impetuosos movimientos rebeldes, así

como sitios de refugio. Pero lo más importante era que Europa misma ya no poseía la misma estructura monárquica estable que había existido durante la guerra de sucesión española de principios del siglo XVIII. En 1789 la Revolución francesa había desencadenado una nueva ideología y un movimiento tan inquietante que afectaba a cada una de las monarquías del continente para hacer, de pronto, que los gobiernos republicanos fueran una alternativa viable.

Las colonias americanas de España estaban al tanto de todos estos eventos, tal como mostraban los diversos pequeños planes y revueltas a lo largo del hemisferio. La ideología de las llamadas revoluciones atlánticas se diseminó por las Américas en el decenio de 1790 y a lo largo de la primera década del nuevo siglo. Pero la estabilidad del imperio español-americano era tal, que la burocracia real tuvo pocas dificultades para sofocar estos movimientos. En esta actividad la burocracia recibió el apoyo de grupos blancos y mestizos, debido a sus temores de que sucedieran revoluciones sociales destructivas si a los indígenas se les permitía participar en los debates políticos de los blancos. En este sentido, la experiencia haitiana era una advertencia, no sólo para las sociedades esclavistas de América, sino también para aquellas que vivían a expensas de una masa campesina indígena explotada.

Pero la repentina alteración del gobierno metropolitano y el surgimiento de autoridades centrales en conflicto crearon enormes problemas para las élites locales. Cada uno de los gobiernos coloniales americanos debió tomar decisiones cruciales respecto a quién podría garantizar de mejor modo su propia legitimidad y estabilidad. Existía la nueva monarquía de José Napoleón en Madrid, el gobierno de la Junta española que regía en nombre de Fernando VII, el rey abdicado, y la hermana de Fernando, Carlota, quien llegó a Brasil en 1808 como esposa del monarca portugués y quien intentó, asimismo, reclamar la lealtad del imperio americano. Por último, con España en desorden y bajo el control francés, y con sus aliados europeos sucumbiendo rápidamente ante los ejércitos de Napoleón, los ingleses conformaron sus esfuerzos en su tradicional interés de expansión imperial más allá de Europa. Comenzaron otorgando un sólido apoyo a los

revolucionarios en potencia, e incluso planearon una invasión formal a la América española.

La llegada de perturbadoras noticias desde España pronto propagaron una sensación de crisis e indecisión a lo largo de las Américas, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1808. Los funcionarios reales de cada lugar se vieron forzados a tomar una serie de desagradables decisiones; también debieron resolver quién se encargaría de llevarlas a cabo. En la mayoría de los casos las audiencias, los gobernadores y los obispos decidieron mantener el *statu quo,* que definieron como guardar una actitud de espera para ver qué pasaba, en especial el gobierno de la Junta, que lentamente se retraía hacia la península de Cádiz. Algunos convocaron a reuniones ciudadanas expresadas en "cabildos abiertos", para sondear la opinión de la élite local respecto a qué acciones debían seguirse. Y pocos decidieron apoyar de manera activa las pretensiones de los franceses, o de Carlota. Pero estas medidas retardatarias agradaban a pocos, y en ningún lugar las élites criollas nacidas en España se mostraban satisfechas con cualquier solución específica. Este medio era ideal para emprender luchas de poder locales, y para iniciar conflictos entre gobernadores en lo individual y en sus audiencias u obispados locales, así como entre estos funcionarios reales y los consejos municipales locales.

Tales antecedentes explican muchos de los sucesos que tuvieron lugar en el Alto Perú en 1808 y 1809. La región fue la primera de la América española en verse gravemente afectada por los conflictos que sucedían en la escena imperial e internacional, así como la primera que podría desarrollar un movimiento independentista. En parte debido a su aislamiento respecto al mar, o porque aún era una zona independiente de poder económico, entre dos virreinatos conflictivos, el de Lima y el de Buenos Aires, y en parte debido a su autonomía tradicional, se permitió que la disputa entre grupos se extendiera durante un prolongado tiempo antes de ser sofocada.

Las primeras reyertas comenzaron con la llegada de las noticias de la crisis española, que alcanzaron al Alto Perú en septiembre de 1808. De inmediato el arzobispo y el presidente de la Audiencia exigieron afiliarse a la Junta Central, mientras que los jueces de la Audiencia se rehusaron a reconocer la autoridad de la Junta. Las tensiones aumentaron rápidamente, y a finales de

mayo los jueces independientes capturaron al presidente de la Audiencia, por temer su propia aprehensión. Aunque el intendente de Potosí, Francisco Paula Sanz, se opuso al movimiento, no se resistió de inmediato, de modo que los jueces semirrebeldes procedieron a enviar emisarios en busca del apoyo de las otras ciudades. Pese a las tensiones y a un poco de acción de las turbas, todo el tema hasta ese momento se limitaba a la burocracia, y era una problemática casi exclusivamente de los españoles peninsulares.

Éste no fue el caso, sin embargo, de la revuelta popular que tuvo lugar en la ciudad de La Paz el 16 de julio, también de 1809. La inquietud popular entre los vecinos de la ciudad, muchos de ellos revolucionarios convencidos, llevó a la exigencia de que se convocara a un cabildo abierto para tomar decisiones fundamentales respecto a cuál régimen apoyar. El hecho de que la élite local demandara su derecho a tomar sus propias decisiones sobre estos sucesos, de manera independiente de lo que la burocracia de la Audiencia Central hubiera decidido en Chuquisaca, reflejaba el creciente poder de La Paz misma. Era entonces la ciudad más grande del Alto Perú y comenzaba a resentir el dominio del sur, de modo que los conflictos, tanto en España como en Chuquisaca, ofrecían una excelente oportunidad para que la élite del lugar impulsara su propia versión de independencia.

Bajo el liderazgo de un vecino de nombre Pedro Domingo Murillo, la élite criolla de La Paz tomó al gobierno local y al obispo y se declaró en "Junta Tuitiva". Inmediatamente manifestaron su oposición al régimen de la Junta en España y proclamaron un gobierno americano independiente a nombre de Fernando VII —un ardid clásico utilizado por todos los líderes rebeldes americanos posteriores para legitimar sus movimientos de independencia.

Se trató de una declaración de independencia emitida por una colonia americana de España, que iniciaría el largo periodo de guerras de independencia en América, de 1809 a 1825. Pero sólo se trató de una revuelta a corto plazo; el "grito" de independencia de los líderes rebeldes criollos de La Paz no encontró eco inmediato entre los indígenas, ni una respuesta positiva de las élites criollas urbanas. Al recibir las nuevas noticias sobre la revuelta, el virrey de Lima ordenó represalias inmediatas, y envió al presidente Goyeneche, de la Audiencia de Cuzco, a La Paz, con 5 000

soldados para aplacar el movimiento. Murillo, por su parte, sólo pudo organizar un ejército de unos mil hombres mal armados, pero en este punto, les preocupaba más la dirección que seguía la nueva Junta de Gobierno, e intentaron negociar con Goyeneche. La consecuencia fue que las tropas reales capturaron a Murillo y a la mayor parte de los elementos más radicales del régimen, en tanto que la rebelión continuó. A la llegada de las tropas de Cuzco, el ejército rebelde huyó a los yungas, donde tuvo lugar una importante batalla en Irupana, en noviembre de 1809. Se derrotó al ejército rebelde y se capturó a todos los líderes del movimiento. Se les juzgó de inmediato, y en enero de 1810 se ejecutó a Murillo y a ocho de sus compañeros conspiradores, al tiempo que se exilió a más de cien personas.

Al mismo tiempo, el virrey de Buenos Aires designó a un nuevo presidente del Alto Perú, Marshal Nieto, quien también llegó con tropas desde Buenos Aires más o menos al tiempo que el ejército de Cuzco llegaba al norte, y a principios de diciembre tomó Chuquisaca. Nieto arrestó a los jueces rebeldes de la Audiencia de inmediato. Con esta acción y con la ejecución de los rebeldes de La Paz, el movimiento de independencia del Alto Perú terminó formalmente y se aplastó el primer intento de independencia en América.

La oposición general no terminó en Charcas, ni destruyó esta represión el entusiasmo criollo por la independencia. En efecto, se derrotó de manera efectiva a la generación del liderazgo urbano de 1809, pero surgió un grupo de líderes guerrilleros que se establecieron en seis importantes zonas rurales, en pequeñas “republiquetas” controladas por rebeldes. Mientras que las ciudades permanecieron en manos realistas, las guerrillas controlaban una importante parte del campo y fueron aliadas efectivas de varias invasiones republicanas que provendrían del exterior. De 1809 a 1816, estas fuerzas improvisadas obtendrían apoyo de todas las clases sociales en Bolivia, incluidas las masas campesinas indígenas.

Pese al surgimiento de un movimiento guerrillero rural, y a la diseminación de la revolución hacia las clases bajas, la iniciativa de independencia se había salido de las manos de los alto-peruanos. De manera paradójica, después de haber sido la primera región que formalmente declarara su independencia, el Alto Perú fue la última región de América del Sur en obtenerla. Además,

ahora era campo de batalla de fuerzas más poderosas, tanto del norte como del sur, y perdió su iniciativa en todos los eventos subsecuentes, que tuvieron líderes y ejércitos más allá de sus fronteras.

De este modo, la historia de la independencia alto-peruana quedó determinada por eventos que sucedían a miles de kilómetros de las ciudades del altiplano. El más importante de estos eventos fue el establecimiento exitoso de un gobierno independiente en la capital virreinal de Buenos Aires. El liderazgo criollo de Buenos Aires, después de haber aplastado a un ejército invasor británico en la región del Río de La Plata en 1806, pronto se encontró debatiéndole el poder a su virrey, para por último llevar a cabo una rebelión a gran escala en mayo de 1810. El eufórico régimen bonaerense pronto sintió la necesidad de expandir su poder a lo largo del viejo territorio del virreinato, y consideró que el Alto Perú era una zona suprema para su liberación. Por su parte, los liberales y guerrilleros del Alto Perú consideraron que los acontecimientos de Buenos Aires eran una extraordinaria oportunidad para restablecer un régimen independiente local.

La respuesta inicial de los realistas, conducidos por Paula Sanz en Potosí y por Nieto como presidente de la Audiencia, fue romper vínculos formales con el viejo virreinato y regresar el Alto Perú a la jurisdicción del virreinato de Lima. Pero esta acción no pudo evitar el contagio de la revolución. En septiembre de 1810 Cochabamba se levantó en armas en apoyo al régimen de Buenos Aires, y al mes siguiente, un ejercito argentino, al mando de Castelli, había llegado a la región. Al recibir un imponente apoyo popular, el ejército argentino pudo fácilmente tomar ciudad tras ciudad, y recibir una entusiasta bienvenida en todas ellas. Para noviembre se tomó Potosí, y Castelli, luego de capturar a Paula Sanz y a Nieto, los ejecutó. Entre tanto, se forzó al presidente de Cuzco, Goyeneche, a retirarse, y pronto Oruro y Santa Cruz se rebelaron contra sus ejércitos y unieron fuerzas con Castelli, cuando éste derrotaba a un ejército realista. Para abril de 1811, Castelli y su ejército argentino habían sido bienvenidos en Oruro y en La Paz, y la región del Alto Perú fue una vez más zona libre e independiente.

Pero Castelli resultó ser un pésimo administrador y un general incompetente, y el apoyo popular a su régimen comenzó a disiparse. Fue

evidente que los argentinos no tenían interés en permitir que se instaurara una república independiente, ni en promover los intereses alto-peruanos a expensas de las necesidades de Río de La Plata. Así, la derrota de los ejércitos de Castelli en Guaqui, en el lago Titicaca, en junio de 1811, se volvió una derrota a gran escala que llevó a una considerable sangría urbana y a ataques civiles que emprendieron los alto-peruanos contra las devastadoras fuerzas argentinas en retirada.

La derrota de los argentinos y la recaptura del Alto Perú a manos de los realistas cuzqueños, a las órdenes de Goyeneche, no pusieron fin a la rebelión en el Alto Perú. En noviembre, Cochabamba se volvió a rebelar contra la Corona e intentó invadir el altiplano. Goyeneche aplastó la rebelión hasta mayo de 1812, esta vez luego de una sangrienta masacre en ambos bandos. Además, los desesperados realistas ahora buscaban el apoyo de los indígenas, y cada vez más caciques se anexaban a uno u otro grupo. A su vez, los indígenas comenzaron a adquirir armamento de todos los bandos, lo que dio como resultado que el nivel de violencia y el conflicto social escalaran de manera considerable para fines de 1811 y principios de 1812. Una vez alcanzado este nivel de movilización, las fuerzas desatadas por el movimiento de independencia fueron difíciles de contener, así que el nivel de destrucción física y dislocación social creció enormemente.

Con el Alto Perú ahora bajo el control de los realistas, Goyeneche decidió impulsar la contienda hacia el norte de Argentina e intentar la recuperación de la región del Río de La Plata, pero en febrero de 1813, durante la Batalla de Salta, Manuel Belgrano condujo con éxito un ejército norargentino contra los realistas. De este modo comenzó la invasión del Alto Perú por un segundo ejército argentino, que tuvo tan poco éxito como el anterior. Aunque Belgrano tomó Potosí de manera temporal a mediados del año, para los últimos meses de 1813 las fuerzas realistas, al mando de Joaquín de la Pezuela, habían derrotado a los argentinos y vuelto a tomar el Alto Perú.

Con la derrota de este segundo ejército y la subsecuente invasión del norte de Argentina a manos de Pezuela, los líderes de Río de La Plata se convencieron de que el Alto Perú no debía ser su principal objetivo, y con el tiempo apoyaron la decisión de San Martín de concentrarse en un ataque

lateral a Chile como la mejor manera de atacar el centro de poder realista en Lima. Esto no significó que el Alto Perú fuera una zona tranquila, ya que entonces se dieron ahí una serie de pequeñas revueltas y levantamientos indios, incluida una indígena antirrealista a mediados de 1814, que llevó a la conquista y saqueo de La Paz a manos de indígenas de la región de Cuzco. Entre tanto, la amenaza potencial de un Alto Perú realista preocupó a los republicanos argentinos, de modo que se organizó un pequeño tercer ejército argentino que fue enviado al Alto Perú en enero de 1815.

Una vez más los argentinos invasores encontraron apoyo en los republicanos del interior. Los rebeldes alto-peruanos le arrebataron Potosí y Chuquisaca a los realistas en abril, y para mayo los argentinos una vez más controlaban estos poblados. Pero los argentinos no pudieron tomar Oruro ni Cochabamba, de modo que en noviembre de 1815 sufrieron la peor derrota de la guerra, en la que sus fuerzas fueron destruidas por completo. Durante el Año Nuevo la iniciativa cambió a los realistas y Pezuela llevó a cabo un ataque masivo contra las fuerzas rebeldes del Alto Perú. Se trató de una ostentosa victoria de los realistas. Mientras se estima que unos 102 caudillos patriotas operaban en las áreas rurales entre 1810 y 1816, después de ese momento sólo quedaron unos nueve. Se ejecutó a líderes rebeldes de la fama de Manuel Padilla e Ignacio Warnes, e incluso se tomó preso temporalmente al intrépido Miguel Lanza. A otros, como Juana Azurduy de Padilla y Juan Antonio Álvarez de Arenales, se les forzó a ocultarse. De las zonas antes importantes controladas por los rebeldes sólo sobrevivió la republiqueta de Ayopaya (en la frontera de la cordillera Cochabamba-Oruro-La Paz), que fue aislada y neutralizada por completo.

Así, para 1816 todos los esfuerzos, tanto externos como internos, por alcanzar la independencia habían llegado a un fin desastroso. A partir de ahí se aislaría al Alto Perú de los principales eventos de las grandes luchas por conseguir una liberación continental, mientras que el logro final de su independencia provendría de la misma élite que había apoyado las actividades realistas a lo largo del periodo. Para 1818 se había saqueado a muchas de las ciudades del Alto Perú varias veces, y cada ejército argentino en retirada había vaciado la Casa de Moneda real en Potosí. Aquello que no

se destruyó con los conflictos urbanos se acabó en las rebeliones rurales. Fueron arrasadas las haciendas, se destruyeron las minas aisladas, en fin, se dejó en ruinas la economía de la región. Además, el hecho de que ambos bandos hubieran armado a fuerzas indígenas interrumpió temporalmente el control criollo del campo y creó violentas tensiones sociales, así como temores urbanos que llevaron a una mayor incertidumbre y desorden económicos.

Aunque 1816 señaló el nadir de las guerras de independencia en toda América del Sur, se estaba produciendo un cambio. Ese año Bolívar restableció su movimiento revolucionario en Venezuela de manera exitosa, mientras que los argentinos se sintieron suficientemente fuertes para proclamar su independencia total de España. Con unos pocos representantes del Alto Perú, las fuerzas republicanas se reunieron en Tucumán, y en julio de aquel año declararon nación independiente a las Provincias Unidas del Río de La Plata. Para 1817 la contraofensiva contra el poder realista había comenzado, y San Martín cruzó los Andes hacia Chile, donde liberó a la colonia en la Batalla de Maipú, en abril de 1818.

A principios de 1817 los argentinos incluso enviaron una fuerza expedicionaria al Alto Perú; fue su cuarta y última invasión de este tipo, pero este ejército permaneció en las ciudades sureñas, por lo que tuvo poca influencia sobre la mayor parte de la región. Su único éxito notable fue la captura de un joven funcionario realista, nativo de La Paz, de nombre Andrés de Santa Cruz, a quien se envió de vuelta a Argentina. Aunque Santa Cruz escapó pronto y se reunió con los ejércitos realistas en Lima, sus experiencias entre los argentinos y sus frustraciones respecto a las vacilantes políticas de la Corona lo llevaron a unir fuerzas con los rebeldes. En enero de 1821 ofreció sus servicios al general San Martín y a su ejército invasor chileno-argentino. Así que después de un notable desempeño en las batallas peruanas, San Martín envió a Santa Cruz con una fuerza expedicionaria a ayudar a las tropas colombianas al mando de Sucre, quien estaba en ese momento sosteniendo una acalorada batalla contra los realistas en la Audiencia de la zona de Quito. La consecuencia fue que, a partir de ahí, Santa Cruz y sus tropas se aliaron por completo con Sucre y dejaron de ser leales a San Martín.

Toda esta actividad rebelde en Perú y en Ecuador se lanzó como inicio de una nueva invasión del Alto Perú por fuerzas republicanas. Ni las fuerzas de San Martín ni las de Bolívar consideraban ya a la región de Charcas como la principal avenida para la toma de Lima, ni se le consideraba, después de tantos años de guerra, un centro financiero de envergadura, cuya captura llevara a riquezas extraordinarias para la causa rebelde. En 1820 San Martín había desembarcado tropas en el sur de Perú, y para 1823 Sucre, en alianza con Santa Cruz, llegó a la región norte de Perú. En este punto Santa Cruz pudo convencer a los líderes rebeldes de que un ejército de conquista importante podría tomar el Alto Perú. Después de una veloz marcha desde la costa, Santa Cruz encabezó una invasión triunfante y en agosto capturó su nativa ciudad de La Paz. Las fuerzas realistas enviadas para oponérsele fueron derrotadas en la Batalla de Zepita, y también pudo tomar Oruro; entre tanto, los rebeldes tomaron Cochabamba, a las órdenes del general Lanza. Parecía que la liberación del control realista finalmente estaba cerca. Pero los sucesos del Bajo Perú expusieron las líneas de comunicación de Santa Cruz, y la existencia de poderosos ejércitos realistas en Charcas central también representaba una amenaza demasiado grande. De este modo, a pocos meses de su llegada, se forzó a Santa Cruz a evacuar La Paz, mientras los ejércitos realistas restablecían su control total de la región.

El retiro de los republicanos y la derrota de Lanza dejaron a los realistas con el control indiscutido del Alto Perú hasta enero de 1825. Pero el Alto Perú, como baluarte realista, demostraría ser un sitio en efecto bastante extraño. Esto se debía a que el general a cargo de las fuerzas realistas en la región, Pedro Olañeta, nativo de Charcas, era un reaccionario, profundamente trastornado por la revolución liberal de 1820 en España. Aunque tenía el apoyo total del virreinato de Lima, Olañeta y su asistente y sobrino, el doctor Casimiro Olañeta, estaban convencidos de que los liberales españoles amenazaban la autoridad real. Así que en enero de 1824, el general de Charcas declaró que no estaba dispuesto a enviar tropas o abasto para ayudar a sus colegas oficiales en sus desesperadas luchas contra los ejércitos invasores de Bolívar. Durante unos 12 meses el régimen limeño aduló, imploró, y por último envió fuerzas regulares a amenazar a Olañeta. Pero éste

se rehusó a hacer concesiones, al tiempo que también se negó, pese a las constantes comunicaciones de su sobrino con diversos ejércitos rebeldes, a unir fuerzas con los republicanos.

Así, de enero de 1824 a enero del año siguiente, el Alto Perú, pese a ser realista de manera oficial, no participó en ninguno de los sucesos que afectaron al poder realista en la región, y de hecho tuvo éxito en vencer a diversas fuerzas que los realistas enviaron para forzar su cohesión. Al mismo tiempo, Olañeta desechó volverse rebelde. El resultado final fue el total aislamiento del régimen y el debilitamiento de la defensa del Bajo Perú. En diciembre de 1824 se selló el destino final de la región, cuando Sucre destruyó a los ejércitos españoles en la Batalla de Ayacucho. Aunque se incluyó a Olañeta y sus fuerzas en el acuerdo de rendición posterior a la batalla, este último se negó a ceder el mando o a entregárselo a Bolívar. Este confuso estado de cosas condujo a que, por último, Sucre se viera forzado a encabezar un ejército en el Alto Perú para alentar la deserción de las tropas de Olañeta. En enero de 1825, el viejo general fue muerto en una batalla, a manos de su propia tropa amotinada. Con su muerte, las guerras de independencia, tanto para la América del Sur española como para el Alto Perú, finalmente llegaron a su fin, después de casi 16 años de amarga guerra civil, de grave pérdida de vidas y de un severo desencajamiento.

La liberación del Alto Perú en diciembre de 1824 y enero de 1825 no resolvió de inmediato el desenlace de la región. Del mismo modo que la iniciativa de hacerle la guerra a las fuerzas realistas se había salido de las manos de los patriotas locales después de 1816, también perdieron el control sobre su destino. De hecho, fueron Bolívar y Sucre quienes determinaron el futuro de las provincias del Alto Perú, ya que eran ellos quienes controlaban tanto al ejército de liberación como al Congreso peruano. Inicialmente, la idea de que el Alto Perú pudiera ser una república independiente era anatema para Bolívar y sus planes de formar una república tan ancha como el continente. Tal acto sólo podía llevar al debilitamiento de América del Sur en el orden mundial. Pero estas ideas iniciales de unidad pronto debieron enfrentar la realidad de un creciente conflicto entre su Estado gran colombiano y el régimen peruano establecido por él. Para 1825 Bolívar ya

comenzaba a ceder y a temer el crecimiento de una república peruana demasiado poderosa, que pudiera a su vez amenazar la existencia e importancia de su propia base en la Gran Colombia. Por último, la recepción hostil que tuvo Argentina ante sus planes hacía que la idea de un Estado intermediario entre Perú y Argentina fuera una propuesta razonable.

Al final Bolívar permitió que Sucre decidiera la situación por sí mismo. Transferir la autoridad a Sucre fue, a su vez, una medida positiva encaminada a la autonomía alto-peruana. Sucre mismo no estaba tan preocupado como Bolívar por las visiones continentales, y al mismo tiempo tenía mayor influencia sobre los intelectuales alto-peruanos, que estaban muy imbuidos de la idea de crear un Estado autónomo. El líder de estas figuras con ideas independentistas fue el sobrino de Olañeta, Casimiro. Tanto él como los líderes republicanos sobrevivientes habían pasado por una experiencia común durante la guerra, lo que los volvía contrarios a la idea de una unión con Argentina. Ambos bandos sentían aversión por la conducta de los cuatro ejércitos expedicionarios argentinos que habían invadido el Alto Perú. Aunque los líderes de las republiquetas habían apoyado con lealtad a Buenos Aires, los argentinos habían demostrado su indiferencia ante las necesidades de la población local, así como su voluntad de sacrificar a la región ante sus propias exigencias. Al mismo tiempo, los realistas ya habían gobernado durante casi 15 años, bajo el virreinato de Lima, y ya no estaban atados a las redes de Buenos Aires, como lo habían estado antes de 1810.

En cambio se percibía cierta simpatía por amalgamarse con Perú. El altiplano sureño de Perú formaba una región natural con el altiplano al sur del lago Titicaca, ya que compartían tanto una cultura común, quechua y aymara, como una ecología semejante y una base económica casi idéntica. De igual modo, los lazos comerciales de las ciudades alto-peruanas, aunque muy debilitados por el constante cambio de centros virreinales, aún estaban primordialmente con Lima, ciudad que se consideraba la más importante de la zona, la que vinculaba a todas las redes regionales.

Sin embargo, los peruanos mantenían una relación difícil con Bolívar y con sus ejércitos colombianos en ese momento, en tanto que la élite limeña no estaba preparada para impulsar coherentemente la incorporación del Alto

Perú a sus propias fronteras nacionales. Estaban más preocupados por definir las jurisdicciones de Puno y las fronteras en las costas de Atacama, en especial la región de Tarapacá, que por enlazar a las ciudades de la vieja Audiencia de Charcas en un Estado unificado. Los peruanos también consideraban al Alto Perú un colchón crucial contra la agresividad de los regímenes del Río de La Plata y, por tanto, sentían una relativa indiferencia respecto al destino del Alto Perú, siempre y cuando no se volviera parte de Argentina.

En este contexto de necesidades y exigencias en conflicto por parte de los centros de poder externos, la élite local tomó la iniciativa en manos propias y empujó a Sucre a declarar una república independiente de manera formal. Con Lima desinteresada, si no es que hostil, y con su propia larga historia de gobierno regional autónomo, los alto-peruanos estaban más que dispuestos a asumir la responsabilidad de su propio destino y a hacer *de jure* lo que en los hechos había ya existido: un gobierno regional independiente.

El 9 de febrero de 1825, cuando Sucre y su ejército llegaron a La Paz (acompañados por Casimiro Olañeta como asesor de Sucre), se decretó la convocatoria a una asamblea constituyente de todas las provincias del Alto Perú, que debían mandar delegados en abril de dicho año para determinar el futuro de la región. Este decreto fue la última decisión tomada por los poderes externos antes de permitir que los alto-peruanos crearan su propio gobierno. Mientras que Bolívar estuvo furioso al principio por el decreto de Sucre, no lo vetó y procedió a aceptar la iniciativa. Después de ciertos retrasos, finalmente se reunieron 48 delegados en Chuquisaca, en julio de 1825, para decidir la cuestión. Con una abrumadora mayoría a favor, la Asamblea declaró formalmente la independencia, y el 6 de agosto de 1825 se emitió dicha declaración; el nuevo Estado, como reconocimiento, recibió el nombre del propio libertador.

Fue justo en este momento cuando Bolívar, en cumplimiento de una vieja promesa, entraba al Alto Perú en un recorrido triunfal. El Congreso de Chuquisaca le envió una delegación a La Paz, solicitando apoyo para sus acciones y para las controversiales decisiones que tomó Antonio de Sucre. Mientras que al principio Bolívar sostuvo que el Congreso peruano aún debía

determinar el destino final de la región, transigió luego de su visita triunfal por las ciudades del Alto Perú, y por último ignoró sus propios decretos previos y aceptó la independencia de la nueva república, e incluso fue su presidente interino durante algunos meses.

Para los últimos meses de 1825 se creó la República independiente de Bolivia, en lo que fuera la vieja Audiencia de Charcas (véase el mapa 4.1). Para el resto del mundo Bolivia era aún una región mítica de campesinos indígenas y ricas minas. Sin embargo, la verdad era distinta. Al iniciar su vida republicana, Bolivia se vio desgastada por la guerra y económicamente deprimida, con un estancamiento económico que duró cerca de medio siglo.

Mapa 4.1. Bolivia en 1825
y en la actualidad

Desde aproximadamente 1803 y hasta finales de la década de 1840, la economía boliviana experimentó una descapitalización progresiva de su industria minera, una crisis en su economía internacional y la más grande caída de su población urbana, que incluso superó con creces la gran depresión

del siglo XVII, lo que dejó a la economía boliviana mucho más dominada en el aspecto rural y más orientada a la subsistencia que en cualquier momento pasado.

La misma declaración de independencia tuvo un efecto negativo sobre la economía nacional, que profundizó y prolongó la crisis que empezó en los últimos años de la era colonial. En tanto historiadores recientes han tendido a disminuir el impacto de la independencia política sobre la sociedad y la política latinoamericanas, a diferencia de historiadores liberales decimonónicos, quienes la consideran un enorme hito de la historia nacional, una lectura de la crisis económica muestra cuán importantes fueron los sucesos de 1825. Los historiadores del siglo XX tienen razón al señalar la persistencia de las élites tradicionales con una apariencia republicana, y en enfatizar la continuidad de las instituciones sociales y políticas hasta muy entrado el siglo XIX, instando con urgencia a considerar la década 1880 como un periodo de transformaciones fundamentales de las estructuras coloniales. Pero también es importante darse cuenta de que la destrucción de la unión aduanera colonial que implicaba el imperio español-americano tuvo un impacto profundo sobre la economía nacional e internacional de las nuevas repúblicas, incluida Bolivia.

La creación de las nuevas repúblicas en América del Sur llevó a una moderna era de mercantilismo, ya que la mayor parte de éstas se apresuraron a crear barreras arancelarias unas contra otras, aunque no siempre contra los comerciantes ingleses, que dominaban el panorama. Para Bolivia esto implicó que sus mercados tradicionales del norte de Argentina se redujeran, lo que a su vez llevó a un descenso económico de largo plazo en las provincias del noreste argentino. El fin de los lazos íntimos con Lima creó una seria crisis crediticia que no podían aliviar con facilidad los pocos capitalistas extranjeros que llegaban. Los costos de transporte, que siempre habían sido una limitación grave para el comercio internacional boliviano, se volvían ahora más prohibitivos, ya que Perú, Chile y Argentina le cobraban a Bolivia el uso de sus puertos. La creación de un puerto boliviano en Cobija, en el desierto de Atacama, fue poca compensación ante estas nuevas barreras comerciales, ya que incluso en su momento de mayor apogeo, sólo una

tercera parte del comercio exterior de Bolivia circulaba por esta bahía, y el transporte por tierra estaba totalmente controlado por extranjeros.

Así, puede decirse que la independencia restringió gravemente la mayor parte de los vínculos económicos tradicionales del Alto Perú, y empujó aún más su economía hacia la subsistencia. Como sus ingresos propios menguaron a partir del comercio internacional, los gobiernos bolivianos de principios del siglo XIX se vieron forzados a depender, cada vez más, de una carga fiscal regresiva, de la manipulación de la moneda y del monopolio forzado del acuñado y la exportación de plata. Mientras que expandir el comercio internacional era la fuente común de los mayores ingresos de los estados más avanzados de la región, la imposición fiscal boliviana se volvió cada vez más regresiva, así como una limitación sobre el comercio y la producción.

La destrucción de minas y refinerías de plata durante las guerras de independencia, la monopolización gubernamental de las exportaciones argénteas, el aumento de los costos de transportación como consecuencia de las nuevas barreras arancelarias, y el final del crédito real y del subsidio a las ventas de mercurio del gobierno imperial fueron elementos que llevaron, todos, a una severa crisis de la industria minera. Mientras que en 1803 había 40 ingenios y varios cientos de minas en operación en Potosí, para 1825 ya sólo había 15 ingenios y unas 50 minas en funcionamiento. La producción de plata, que durante la última década del siglo XVIII promediaba 385 000 marcos por año, había caído a 300 000 para la primera década del siglo XIX, y descendió aún más, a un promedio de 200 000, en la década de 1810, para finalmente caer a una cifra históricamente baja de 150 000 marcos por año, en la década de 1820. Aunque la producción se elevó ligeramente en la década siguiente, no fue sino hasta la de 1850 que la producción alcanzó una vez más el nivel de los 200 000 marcos.

También hubo un descenso en las unidades de producción. En un censo oficial que finalmente se llevó a cabo en 1846, se calculó que en la república había unas 10 000 minas abandonadas, no por falta de mineral de plata, sino porque las guerras, la destrucción del capital y del equipo, así como la migración de los técnicos, las llevaron a un simple proceso de abandono.

Estas minas, aún bastante ricas, podían abrirse sólo con un enorme insumo de capital, pues requerían la utilización de máquinas de vapor para retirar el agua que las cubría. Éste era un problema universal.

Con su sector de exportación desalentado a largo plazo, las poblaciones urbanas de habla hispana de Bolivia disminuyeron también. Potosí y Oruro, los dos principales centros mineros, se vieron afectados con tal intensidad que, en 1827, el investigador británico J. B. Pentland calculó que su población urbana combinada había caído a menos de 15 000 personas (9 000 en Potosí y 4 600 en Oruro). A otras ciudades que dependían de la minería les fue apenas un poco mejor; en Chuquisaca la población cayó a 12 000 habitantes.

Pero a Bolivia la habitaban también unos 800 000 campesinos indígenas hacia 1827. Y del mismo modo que el colapso del sector de exportación durante la crisis del siglo XVII había resultado positivo para los mercados agrícolas regionales, locales, y para las comunidades indígenas libres, durante esta crisis de principios del siglo XIX sucedería lo mismo. Así, a diferencia de la penuria en los centros mineros y en sus poblados satélite, las dos poblaciones comerciales clave, Cochabamba y La Paz, permanecieron estables o crecieron en el número de pobladores. En 1827, la ciudad de La Paz sin duda era la más populosa de la nueva nación, con unas 40 000 personas, mientras que Cochabamba le seguía de cerca, en segundo lugar, con 30 000. Ambas eran comunidades principalmente de actividad agraria, y ambas daban servicios a tierras aledañas con grandes poblaciones campesinas indígenas.

El hecho de que estas ciudades crecieran, al tiempo que los centros mineros del sur padecían, muestra bien el problema paradójico del crecimiento boliviano anterior al siglo XX. El decrecimiento del sector exportador redujo el nivel de la explotación a manos de españoles y aumentó el ingreso de los campesinos indígenas. Los indígenas pudieron aumentar su comercio interno gracias a su ingreso más alto, y las ciudades que les daban servicios prosperaron. Cuán importantes se habían vuelto las poblaciones indias se reveló en el patrón de ingresos gubernamentales, cuestión que se volvió clara en la nueva república. En tanto que la primera asamblea republicana tuvo que

adoptar por la fuerza los decretos peruanos emitidos por Bolívar, que proscribían el impuesto tributario recolectado por el gobierno real a todos los hombres indígenas entre 18 y 50 años, el gobierno de Bolivia pronto encontró que no se podía dar el lujo de sobrevivir sin este impuesto, y en cuestión de un año lo había instaurado nuevamente sobre toda su población indígena. Esta carga fiscal, recabada como se hacía durante el periodo colonial, daba cuenta de alrededor de 60% del ingreso gubernamental, mientras que a fines del siglo XVIII constituía menos de 25% de los ingresos de la Corona. Con un comercio internacional estancado, una producción de plata en descenso y una burocracia incapaz de recolectar impuestos sobre la tierra o sobre las empresas de los blancos y de los cholos, el gobierno llegó a depender del impuesto indígena per cápita como su fuente de ingresos más lucrativa, y debió mantener esa carga impositiva hasta finales de siglo.

Mientras que tal impuesto era una carga obvia sobre la población indígena, también comprometió al gobierno boliviano a proteger a las comunidades libres de las amenazas blanca y chola. Los Congresos bolivianos otorgaron legitimidad constante a los gobiernos comunitarios y a sus derechos sobre la tierra, a diferencia de la legislación bolivariana oficial, que había puesto en riesgo su derecho mismo a existir. En realidad, no fue sino hasta finales de la década de 1860 cuando la importancia del impuesto tributario disminuyó seriamente respecto al total de los ingresos gubernamentales, cuando el gobierno central finalmente adoptó la ideología liberal contemporánea sobre la tenencia de la tierra y comenzó a enfrentar la legalidad de la estructura corporativa de propiedad de la tierra, presente en las comunidades.

La situación tan desastrosa de la economía, existente durante los primeros años de la república, queda patente en la falla del primer gobierno reformista en cuanto a revivir, con éxito, una economía nacional e internacional viable. El régimen de Antonio José de Sucre, instaurado a principios de 1825, y que no llegó sino hasta abril de 1828, fue de hecho un modelo para América Latina, y se comparaba favorablemente con los regímenes reformista y liberal de Rivadavia en Buenos Aires, y de Santander en Colombia, del que copió muchas de sus propias reformas. Sucre fue un liberal clásico del siglo XVIII, con excelentes ideas sobre la creación de un orden económico y social viable.

También fue un ardiente republicano, e intentó crear las instituciones propias de un régimen representativo y relativamente abierto. Incluso intentó emprender una seria reforma de las relaciones entre las masas indígenas y el Estado de habla hispana, a favor de los primeros.

Frente a la necesidad de volver a desarrollar la economía del Alto Perú, quebrada por la guerra, Sucre comenzó una reorganización absoluta de la industria minera. En agosto de 1825 decidió la nacionalización de las minas abandonadas; además, acudió a capitalistas extranjeros para que proveyeran el capital que se necesitaba urgentemente, e invitó tanto a empresarios argentinos como, de manera más relevante, a británicos, para reabrir las minas. Esto llevó a una febril actividad en los años 1824 y 1825, durante la cual varios ingenieros y representantes británicos viajaron a Bolivia para inspeccionar las minas. También se desarrolló un auge especulativo en el mercado de capitales londinense, con la creación de unas 26 "asociaciones" o compañías mineras, establecidas para explotar las minas sudamericanas. La más importante de estas nuevas compañías, en lo que concernía a Bolivia, fue la Potosí, La Paz and Peruvian Mining Association, que supuestamente contaba con un capital de un millón de libras esterlinas, pero que en realidad sólo recabó 5% de dicho monto. El colapso del mercado londinense en diciembre de 1825 llevó a la caída de casi todas estas empresas especulativas, así que muy poca maquinaria, capital o personal de ingeniería llegó a Bolivia desde Inglaterra. Los pocos mineros que pudieron salir avante, ya fueran argentinos o británicos, se enfrentaron con el hecho, rápidamente evidente, de que los costos de reabrir las minas eran prohibitivos sin introducir bombas de extracción de agua impulsadas por vapor, así como sin lograr una disminución sustancial del costo de mano de obra. De entre estos costos, el más difícil de superar fue el de la mano de obra. En julio de 1825 Bolívar había abolido la mita en toda la zona peruana, y el nuevo gobierno republicano no fue capaz de restablecer la institución. Así, Potosí debió entrar al libre mercado para hacer frente a sus necesidades de mano de obra, y debió ofrecer altos salarios para atraer a los campesinos y distanciarlos de la agricultura. Tales nuevos gastos resultaron, sencillamente, una carga demasiado pesada para la frágil industria en ese momento.

Aunque Sucre resucitó con éxito tanto la Casa de Moneda como el Banco de San Carlos (el banco de compra de minerales) sobre bases sólidas, y procedió a lograr que se acuñaran monedas en un nivel razonable, poco podía hacer para reabrir las minas abandonadas, y al final quedó sólo con algunos mineros bolivianos que utilizaban métodos extractivos simples en las vetas que aún quedaban accesibles y que eran las proveedoras del mineral de plata para el Banco y la Casa de Moneda. La introducción de máquinas de vapor utilizables para desaguar las minas inundadas, la innovación tecnológica crucial, necesaria para la industria minera, aún estaba a décadas de distancia, lo que significó que Sucre no pudo aumentar su producción real.

Los intentos de Sucre por introducir un sistema fiscal progresivo para apuntalar al nuevo régimen republicano fueron aún más revolucionarios que sus esfuerzos con la minería. Impulsó la abolición de la mita y rescindió el impuesto tributario de manera temporal; atacó a los odiados monopolios reales y liberó a la industria tabacalera de toda restricción; abolió la alcabala (el famoso impuesto sobre la venta) y redujo los impuestos especiales, como el que había sobre la producción de coca. Todos estos impuestos discrepantes, que eran o personales, regresivos contra los elementos más pobres de la sociedad o restrictivos en cuanto al comercio y la producción, fueron ahora sustituidos por un único impuesto directo sobre la propiedad urbana y rural, así como sobre los ingresos individuales. Esta "contribución directa" fue una reforma verdaderamente revolucionaria, que prometía modernizar la estructura fiscal del Estado al instaurar la estructura fiscal más progresiva disponible hasta entonces.

Pero al año de su puesta en marcha, la nueva contribución directa sobre la riqueza (expresada tanto en tierras como en ingreso) se abandonó. La burocracia estatal fue incapaz de administrar tal impuesto, que requería de una cuidadosa evaluación de todos los recursos de la ciudadanía. No existían censos catastrales, ni conteos, aparte de las viejas listas para el tributo indígena; tampoco tuvo el régimen la capacidad de llevar a cabo estos registros vitales. Con la liberación del imperio español, Bolivia también había perdido a la mayoría de su burocracia gubernamental de buena educación y capacitación técnica. Se trataba de un problema típico de todas las áreas antes

coloniales, de reciente liberación: los bolivianos quedaron con el caparazón del Estado y con pocos individuos experimentados capaces de hacer frente a las necesidades gubernamentales. Más aún, con la reducción de sus ingresos, el nuevo Estado también encontró que no podía ofrecer salarios que atrajeran a las pocas personas calificadas que quedaban en Bolivia para que trabajaran para el gobierno. Así, los ambiciosos planes de Sucre de lograr un sistema fiscal progresivo se fueron a pique debido a la incapacidad del Estado para concretarlos. A esto se añade que el continuo descenso del comercio exterior, sobre el que pendía una pesada carga fiscal, privó al Estado de una fuente de ingresos potencialmente importante y en expansión. Para finales de 1826, se forzó a la administración a abandonar el impuesto directo y a retomar los impuestos tradicionales tributarios y sobre las ventas, así como a otros impuestos regresivos, para mantener las finanzas del Estado.

El que estas reformas fiscales no hayan generado capital colaboró a impulsar a Sucre a una confrontación con la Iglesia. Anticlericales como la mayor parte de los integrantes de su generación, tanto Sucre como Bolívar impulsaron la destrucción del papel de la Iglesia en la nueva república. En esta tarea, Sucre recibió el apoyo de una jerarquía bastante reaccionaria dentro de Bolivia, que había colaborado con la causa realista hasta el final. Así, la Iglesia contaba con un liderazgo debilitado y desacreditado cuando Sucre comenzó sus ataques, por lo que fue incapaz de resistir de manera efectiva.

De hecho, el golpe de Sucre a la Iglesia fue uno de los más radicales en América Latina durante el siglo XIX y, sin reservas, su acción gubernamental más exitosa. Comenzó por asumir el control de la colecta del diezmo eclesiástico, que probablemente sumaba unos 200 000 pesos anuales; posteriormente concluyó las reformas reales previas, que consistían en consolidar la estructura crediticia de la Iglesia, y confiscó todas las capellanías y obras pías que eran o intereses sobre hipotecas o pagos anuales por propiedades privadas concedidas a la Iglesia para subsidiar misas y prestaciones a los clérigos. Luego atacó monasterios y conventos, al ordenar el cierre de todos aquellos que albergaran a menos de 12 personas; de este modo los redujo de 40 a 12. A los que quedaron se les confiscaron sus

propiedades para ser administradas por el gobierno, quien pagó salarios a los residentes que quedaban en los monasterios. En este golpe se confiscaron unos tres millones de pesos en propiedades urbanas y rurales. Se llevó a cabo un ataque semejante sobre los conventos, a los que también se les arrebataron propiedades y se redujo su cantidad. Se calculó que se confiscaron otros 3.8 millones de pesos por las viviendas de religiosas. Con todas estas acciones, Sucre quizá puso bajo control estatal algunas propiedades cuyo valor oscilaba entre los ocho y los diez millones de pesos.

La confiscación de las riquezas de la Iglesia redujo significativamente la importancia de esta institución en la vida republicana. Pero al final la medida aportó poco al régimen a nivel financiero, ya que en los deprimidos mercados urbano y rural el Estado pudo encontrar pocos compradores para estas propiedades. Así, el Estado debió rentar la mayor parte de estas tierras y viviendas, y recolectó no más de lo que la Iglesia había recabado sobre la mayor parte de estas propiedades. Sin embargo, ahora debía asumir la responsabilidad de los salarios de la clerecía, y la manutención del resto de los monjes y monjas, que sumaban, quizá, unas 500 personas. También debía pagar a sus propios administradores, de modo que las entradas totales al Estado en razón de las propiedades eclesiásticas confiscadas eran muy pequeñas. Pudo utilizar algunas de estas propiedades para avalar préstamos internos, pero, dado el estado de la economía nacional, el mercado de capital interno no era lo suficientemente grande o seguro como para ofrecer una fuente principal de ingresos para el Estado. La mayor parte del ingreso generado por las propiedades antes de la Iglesia sirvió para pagar el establecimiento de servicios sociales, así como de instalaciones educativas, en los centros urbanos del país. Las siete ciudades principales (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija) obtuvieron escuelas primarias gratuitas, al igual que orfanatos; pero la mayor parte de estas instituciones sobrevivieron sólo un corto lapso y tuvieron poco impacto real sobre la estructura económica o social.

Así, la reforma eclesiástica de Sucre no trajo consigo la bonanza financiera que se esperaba, pero en términos políticos se trató de un éxito absoluto: Bolivia se adueñó del total de los poderes clientelistas reales, absorbió todas

las tierras de la Iglesia, redujo las órdenes monásticas a un grupo insignificante, abolió los vínculos entre la laicidad y el clero al eliminar las cofradías, e incluso llegó a tomar los artículos de plata que había en todos los templos. Todo esto no ocasionó ninguna protesta de las élites urbanas ni de las masas campesinas; en consecuencia, la Iglesia se volvió actor pasivo y dependiente ante los asuntos del Estado durante el resto del siglo. Además, Bolivia no sufrió los horrores de los conflictos religiosos experimentados por muchas de las repúblicas de América, y mostró una tolerancia religiosa inusual para los estándares latinoamericanos.

Durante el renacimiento del poder de Roma en el mundo a finales del siglo XIX, Bolivia también vería el renacer de una Iglesia relevante. La reaparición de los jesuitas y la llegada de nuevas órdenes, como los salesianos, revivirían sus poderes educativo y religioso; sin embargo, su papel económico jamás se restauró, y el poder político de la Iglesia boliviana quedó silenciado y fue de poco interés, tanto para la élite tradicional como para las masas revolucionarias.

A pesar de ser un líder popular y un capaz jefe militar, Sucre finalmente se encontró con una situación de ingobernabilidad. Los ingresos del Estado descendieron o se estancaron durante su gobierno de dos años y medio. La carga de un ejército colombiano de ocupación de unos ocho mil hombres también pesaba fuertemente, tanto sobre el tesoro como sobre la vida política nacional. El proceso de fragmentación de la generación de generales republicanos victoriosos tenía su efecto en todos los territorios liberados, contexto del que Bolivia no fue la excepción. El desilusionado Sucre pronto se encontró en oposición a sus viejos camaradas de armas. Un intento de asesinato y un golpe de Estado abortado en Chuquisaca, en agosto de 1828, destruyeron rigurosamente el interés de Sucre por permanecer como jefe de Estado. Mientras se recuperaba de sus heridas, renunció al gobierno y salió a un exilio voluntario, de vuelta a su nativa Caracas.

El fin del gobierno de Sucre no terminó con los regímenes liberales y reformistas, ni marcó el inicio de una era de anarquía, como sucedió en algunas de las otras repúblicas cuando se derrocó a sus líderes originales. De hecho, los hombres que compartieron el servicio con Sucre como sus leales

seguidores serían quienes ahora encabezarían los gobiernos siguientes. Los generales liberales que siguieron a Sucre enfrentarían los mismos problemas que el primer presidente, pero también se apegaron a la misma meta de establecer un Estado liberal y próspero.

El más importante de estos primeros líderes fue Andrés de Santa Cruz. Nativo de La Paz, de padre español y madre quechua, Santa Cruz entró al servicio militar real al principio de las guerras de independencia y, después de una larga y exitosa carrera, se unió al bando republicano en 1821, primero como parte de los ejércitos de San Martín, y después de 1822, en los de Bolívar. Ese año Bolívar lo elevó al cargo de general; logró una victoria importante a mediados de 1823, cerca de la frontera boliviana, en la Batalla de Zepita, que fue la más famosa de sus múltiples acometidas.

Gracias a su padre, también militar, tenía vínculos cercanos con las clases altas de Cuzco, así como con asociaciones de larga data en los sucesos más importantes, políticos y militares, de Perú. Este profundo involucramiento con los asuntos peruanos hizo que al principio Santa Cruz tuviera mayor interés por la política peruana que por la boliviana. Al ser electo en su natal La Paz para ser parte de la Asamblea Constituyente en 1825, declinó este honor y permaneció tan sólo como prefecto de Chuquisaca durante la época de la Asamblea Constituyente, y más tarde, durante el régimen de Sucre, se le nombró jefe del distrito de La Paz. Pero en septiembre de 1826 Bolívar lo volvió a llamar a Lima y lo hizo presidente de la república peruana, puesto que tuvo tan sólo un año. El derrocamiento de Sucre, que se debió en parte a los esfuerzos de su amigo, el general Agustín Gamarra, de Cuzco, llevó a que se decidiera convocar a Santa Cruz para ocupar la presidencia de Bolivia. Ésta fue una medida que incluso Sucre apoyó.

Desde el momento en que se le hizo la propuesta y hasta la llegada de Santa Cruz a Bolivia hubo varios gobernantes temporales, uno de ellos el general Blanco, quien intentó tomar el gobierno en sus manos, pero no lo logró. En mayo de 1829 Santa Cruz ocupó la presidencia. Su gobierno, de diez años, sería fundamental para la historia republicana, y las instituciones que fundó serían el marco básico de organización de la vida civil de la república a lo largo de los dos siglos siguientes. Entre 1829 y 1839, año en

que una intervención militar chilena lo destituyera, Santa Cruz demostró ser uno de los administradores más capaces que Bolivia jamás conociera. El principal logro del régimen de Santa Cruz fue la creación de un orden político, económico y social estable. Después de casi un cuarto de siglo de guerras e invasiones ininterrumpidas, pudo darle a Bolivia unos diez años de paz, estabilidad que permitió crear una estructura financiera estatal más viable, y extraer los mayores recursos de la economía. También pudo utilizar dichos recursos para sostener un ejército semiprofesional, y asegurarse de contar con una administración civil activa y responsable.

En términos económicos Santa Cruz fue un mercantilista decidido. Al establecer su gobierno impuso importantes aranceles proteccionistas, llegando incluso al extremo de prohibir por completo la importación de géneros tocuyo, el textil de uso básico en el país. También decidió que intentaría forzar a que todas las importaciones pasaran por Cobija, el único puerto que le quedó a Bolivia después de varios tratados de reorganización territorial con Chile. A las importaciones que provenían de los puertos más naturales de Arica y Tacna, ahora en manos peruanas, se les imponía una fuerte carga fiscal, al tiempo que se ofrecían incentivos en la forma de menores impuestos, tránsito libre por el puerto y subsidios, a los productos que pasaran por Cobija. Se calculaba que en su momento de mayor actividad, cerca de una tercera parte del comercio internacional de Bolivia pasaba por esta ciudad. Cobija pasó de ser una población de un par de cientos de personas, a sumar más de mil, incluidos las de sus muelles y almacenes. De igual forma, se construyó un camino que iba de Cobija a Potosí, a la vez que se abrieron otras rutas internas para disminuir los cruciales costos del transporte.

Santa Cruz prestó atención a las áreas de preocupación usuales en la minería. Una vez más, de manera típica respecto a su modo de racionalizar la estructura económica, redujo considerablemente los impuestos de la minería. En 1829 se eliminó el gravamen colonial a la acuñación, y los demás impuestos se redujeron a una carga fiscal uniforme de 5%. El impuesto tradicional de 3% sobre el oro se eliminó en 1830, y parece haberse dado

cierto incremento en la producción de dicho metal, aunque la producción de plata permaneció relativamente estable a lo largo del periodo.

Pero no obstante estas políticas económicas y la seguridad que otorgaba un Estado pacífico y bien administrado, la economía no respondió de manera espectacular. Se estima que la producción de tela tipo tocuyo, pese a que se le protegió, disminuyó a una cuarta parte respecto del nivel que alcanzó durante la colonia, y para finales de este periodo el régimen debió retirar la prohibición a las importaciones para hacer frente a las demandas del mercado local. Además, a pesar de todas las reducciones fiscales, la falta de capital para la minería evitó la expansión de la producción, y durante las décadas de 1820 y 1830 la producción de plata quedó estancada, siendo la principal exportación de la república.

A pesar de la considerable mejora del crédito público y del cobro de gravámenes, los ingresos gubernamentales reales se estancaron durante las tres primeras décadas de la república. La cifra de 1.5 millones de pesos anuales de ingresos parece haber sido imposible de superar por cualquier gobierno, hasta la década de 1850. Además, esa cifra también escondía cambios estructurales económicos de largo plazo. Como señalaría el economista boliviano José María Dalence en 1846, cada fuente de ingreso gubernamental extraída de la economía descendió constantemente durante los años 1820-1840. Fue tan sólo el incremento de la población rural y el subsecuente aumento del impuesto tributario lo que mantuvo el ingreso total en niveles estables. Así, la importancia relativa del ingreso tributario en las entradas republicanas totales pasó de 45% en 1832 a 54% en 1846, al tiempo que las aduanas registraron aranceles tanto internos como externos —ítem fiscal segundo en importancia—, de sólo 22% de los ingresos totales.

El estancamiento a largo plazo del sector minero resultaría fatal de cara al crecimiento sostenido de la economía nacional, por lo que se limitó en gran medida la disponibilidad de fondos gubernamentales para la inversión en infraestructura básica, o bien la provisión de créditos para el crecimiento industrial. A pesar de sus intensos esfuerzos, Santa Cruz, como todos los anteriores presidentes republicanos, se encontró con que constantemente los gastos eran superiores a los ingresos. Mientras que en los primeros años

redujo, en cierta medida, el gasto militar, el ejército aún consumía la mayor parte del ingreso gubernamental: en un año normal, los gastos militares representaban entre 40 y 50% del total; el costo de manutención del clero era el segundo factor más importante del presupuesto; y al añadir a lo anterior el costo para sostenimiento de la burocracia, quedaba muy poco para la inversión. Como demostraría Santa Cruz, sólo con imponer gravámenes extra al comercio interior podía obtener los fondos necesarios para gastos básicos.

Esta restricción a largo plazo sobre los presupuestos gubernamentales, que se mantuvieron en déficit de manera uniforme a lo largo del periodo, llevó a Santa Cruz a emitir una nueva moneda de plata, "devaluada": en 1830, por un decreto secreto, se acuñó una nueva moneda en Potosí que contenía 18.05 gramos de plata en lugar de los tradicionales 24.45 gramos (en el viejo español colonial se diría: "peso á 8"). Mientras que la decisión de crear un nuevo peso de plata devaluado (moneda feble) probablemente se tomó como temporal, para generar una ganancia "caída del cielo", a largo plazo se volvió un lastre para la economía, y el que su producción haya crecido en relación con el viejo "peso duro" fue un buen indicador del aumento de la crisis de la estructura financiera estatal. Mientras que el régimen sólo emitió 3.5 millones de pesos de la moneda devaluada en la década de 1830, a diferencia de los 16.5 millones de la moneda tradicional para 1840, la proporción se había reducido a nueve millones y once millones respectivamente. Para el decenio de 1850, la nueva moneda era abrumadoramente dominante, con una emisión de 21 millones de pesos, en comparación con sólo 2.5 millones de la moneda vieja.

Dado el hecho de que el régimen intentó recolectar impuestos en pesos viejos y pagar con nuevos, se creó una incertidumbre general en la economía nacional, que aumentó con los años. Así, el estancamiento económico a largo plazo llevó a una crisis igualmente de larga data en el financiamiento gubernamental, que a su vez condujo a la manipulación monetaria; esto acentuó aún más la incertidumbre económica. Incluso el impresionante crecimiento de Cobija y su comercio durante el régimen de Santa Cruz descendió rápidamente después de 1836, cuando la creación de la confederación peruano-boliviana hizo del puerto de Arica, una vez más, la

entrada legítima a Bolivia. La reducción de los impuestos discriminatorios contra Arica le permitieron alcanzar su dominio natural, y virtualmente eliminar a Cobija como alternativa viable.

Mientras que las reformas económicas de largo plazo de Santa Cruz pueden no haber hecho retroceder el estancamiento de la economía nacional, sus reformas políticas y administrativas, así como la paz política que en efecto logró, fueron de vital importancia. Después de encargar estudios parlamentarios y de organizar comisiones especiales, finalmente promulgó un importante código civil y comercial, modelado a partir de los lineamientos de las leyes napoleónicas. También sistematizó la administración local y restableció los procedimientos de aplicación de censos en zonas rurales que habían sido la base del éxito de la recolección fiscal colonial. Al tiempo que aprobó una Constitución democrática con presidencia limitada, también adquirió al instante poderes dictatoriales, llevó a cabo una censura completa de la prensa y de inmediato exilió a sus opositores. Debe ponerse énfasis, no obstante, en que para los estándares de su época Santa Cruz fue extraordinariamente tolerante con sus detractores y mantuvo el derramamiento de sangre en niveles mínimos durante los conflictos políticos. Más aún, la tranquilidad de su régimen entre 1829 y 1835 fue tal, que recibió un apoyo abrumador de la élite y de la sociedad.

En tanto que Santa Cruz se mantenía como figura dominante para Bolivia, Bolivia no fue la única preocupación de Santa Cruz. Desde sus primeras participaciones en la vida de Cuzco, hasta su periodo presidencial en Lima, a mediados de la década de 1820, Santa Cruz estuvo profundamente involucrado en los sucesos peruanos. Fue un participante tan comprometido en la política del sur de Perú y de Lima como lo fue en las intrigas de Potosí o de Chuquisaca. El haber tomado las riendas presidenciales de Bolivia en ningún momento supuso que hubiera dejado de lado sus ambiciones políticas en Perú. Y mientras más caótica se volvía la situación política en dicho país, más atractiva aparecía la figura de Santa Cruz para los peruanos, en especial para los habitantes de la región austral.

Para mediados del decenio de 1830, la constante inquietud ocasionada por las intensas actividades del líder del sur de Perú, Gamarra, quien intervino

activamente también en el política boliviana, junto con el debilitamiento del régimen plagado de crisis de Salaverry en Lima, dieron a Santa Cruz la excusa para que sus seguidores en ambos Estados intentaran establecer un nuevo régimen en Perú. En junio de 1835, un ejército boliviano invadió Perú, invitado por una de las facciones de las guerras civiles locales. Para agosto, los bolivianos habían derrotado al ejército de Gamarra, y después de una larga serie de batallas, finalmente se derrotó y ejecutó a Salaverry en enero de 1836.

En este momento Santa Cruz decidió reorganizar al propio Perú en dos Estados autónomos, Perú del Norte y Perú del Sur, y unirlos con Bolivia en lo que se llamaría la Confederación Perú-Boliviana. Después de hacer que lo nombraran protector, Santa Cruz maniobró para que todos los grupos regionales apoyaran su idea de unidad, y se estableció el gobierno de la confederación en octubre de 1836. Pese a toda su astuta actividad política, Santa Cruz mantenía una base de poder real sólo en Bolivia y en Perú del Sur, aunque en esta última zona se enfrentaba a la constante oposición de Gamarra.

Sin menoscabo de sus problemas, existe poca duda de que la confederación llevara tanto paz a Perú como respeto a su poder a lo largo de toda la región del Pacífico. Aunque la población de Perú en este momento era apenas un poco mayor que la de Bolivia, del orden de 1.5 millones de personas, los recursos del Estado peruano eran mucho mayores. A diferencia de Bolivia, Perú contaba con muchas economías regionales poderosas, productos fuertes, más una gran variedad de recursos de relativamente fácil explotación, que podían desarrollarse rápidamente para su exportación al mercado mundial. A diferencia de la economía estable pero estancada de Bolivia, la riqueza de Perú era de fácil desarrollo, de modo que el potencial de un importante crecimiento estaba muy a la mano. Lo que en esencia se necesitaba para despertar por completo a este gigante adormecido era un sistema político estable, así como una burocracia responsable y controlada.

Tal situación era ideal para Santa Cruz, cuya fama se fundamentaba en sus excelentes habilidades administrativas. De inmediato estableció códigos civiles y comerciales para el nuevo Estado, se generaron estadísticas, se

reorganizaron las aduanas, se introdujeron aranceles proteccionistas, y la burocracia se reorganizó y refinanció. También de inmediato se proveyó de fondos y apoyos al ejército, institución que entonces se volvió aliada incondicional del régimen.

Desafortunadamente para Santa Cruz, también los chilenos reconocieron su potencial para convertir a Perú en una potencia de renombre. Vieron su propia expansión como un movimiento norteño a lo largo del territorio disputado en el Pacífico, y compitieron de manera activa contra Perú por los mismos mercados europeos. De este modo, no podían aceptar un Perú revitalizado o al mando de Santa Cruz. En consecuencia, Chile apoyó de manera activa a los políticos peruanos disidentes, al grado de armarlos y transportarlos de vuelta a Perú. También "disfrazaron" a su propia tropa de rebeldes peruanos, con la intención de plantear una trascendental campaña para derrocar a Santa Cruz por la vía de incursiones constantes.

El resultado final de estas invasiones de inspiración chilena y de las revueltas subsidiadas fue un debilitamiento del gobierno de la confederación. En tanto que Santa Cruz obtuvo triunfos en algunas batallas importantes, los conflictos, arrastrados una larga temporada, tuvieron un alto costo. Para 1838, los chilenos colocaron un ejército regular en Perú, y en una relevante batalla cerca de Lima, en enero de 1839, tanto el gobierno de la confederación como la carrera política del notable Santa Cruz llegaron a su fin a manos de las armas chilenas.

Forzado al exilio en Ecuador, Santa Cruz también debió abandonar el gobierno de Bolivia, de modo que su representante local, el general José Miguel de Velasco, asumió el control del nuevo Estado independiente. Pero el régimen de Velasco sería difícil; el aliado anterior se volvió un amargo contrincante de Santa Cruz y confiscó todos sus bienes personales. Pronto se encontró enfrentado a otro de los generales de Santa Cruz, José Ballivián, quien organizó varias revueltas contra el nuevo gobierno. Velasco pudo llevar a cabo algunas reformas: volvió a redactar la Constitución para lograr una presidencia más controlada, e incluso cambió el nombre de la ciudad de Chuquisaca por el de Sucre. Sin embargo, fue incapaz de acallar la situación

política. Por último, después de unos dos años en el cargo, una revuelta a favor de Santa Cruz derrocó al régimen en junio de 1841.

La deposición de un gobierno boliviano no se consideraba un suceso local en el contexto de la política internacional contemporánea. Desde la caída de Santa Cruz, el gobierno de Lima había estado bajo el control de Gamarra, su más viejo enemigo. Perú, Chile, e incluso Argentina habían seguido de cerca los eventos bolivianos, y cuando quedó claro que Santa Cruz finalmente había triunfado, Gamarra anunció su intención de invadir la república para evitar que el temido Santa Cruz recuperara el poder. En julio un ejército peruano comenzó a cruzar la frontera y para octubre había tomado La Paz sin mayor enfrentamiento. Ahora quedaba claro ante todos que Gamarra esperaba anexar una buena parte de Bolivia a Perú. Otros vecinos de la república lo vieron como una oportunidad potencial. Argentina apoyó a un ejército bajo las órdenes de Velasco en el sur, al tiempo que Ballivián parecía virar entre varias opciones, dando apoyo en un principio a Gamarra, para por último decidir tomar el gobierno para sí mismo y oponerse a la invasión peruana.

En todas las intrigas y maniobras, fue Ballivián quien finalmente surgió como figura líder. Con tres rebeliones internas por separado pero a la vez, y con un ejército invasor que amenazaba la existencia misma del Estado, al final todas las facciones decidieron interrumpir el apoyo a la vuelta de Santa Cruz, y optaron por Ballivián como el general más capaz. De muchas maneras ésta resultó ser una decisión vital en los asuntos internacionales de la nueva república.

Ballivián se enfrentó a Gamarra en el poblado de Ingavi, en noviembre de 1841, y derrotó a las fuerzas invasoras de Perú. Resultado de esta acción, el gobierno de Gamarra cayó en Perú, Bolivia quedó libre de sus obligaciones económicas para con Perú, que se habían impuesto debido a la caída de la confederación, y la cercana conexión entre la política peruana y la boliviana se rompió en definitiva. Después de Ingavi, Perú jamás volvió a tomar parte en los asuntos bolivianos, y ningún líder político boliviano volvió a ser un contendiente potencial en la política peruana. El fin de la amenaza de Santa Cruz también significó que Chile y Argentina cesaran de involucrarse intensamente en los asuntos internos bolivianos, y permitió que la política de

Bolivia volviera a preocuparse por temas principalmente nacionales. El fin de la era de Santa Cruz también señaló la terminación de Bolivia como una potencia contendiente de relevancia en el hemisferio sur de América Latina. Igualmente puso fin a la época más brillante en términos del extraordinario liderazgo que obtuviera la nueva república. Mientras que el estancamiento económico de la república había limitado, en última instancia, su rango de acción, los regímenes tanto de Sucre como de Santa Cruz representaron lo mejor de la ideología revolucionaria de los grandes movimientos de liberación. Ambos mostraron tener una humanidad esencial, así como tolerancia en sus acuerdos políticos, que se elevarían en agudo contraste con el próximo grupo de líderes que gobernaría la república.

5. LA CRISIS DEL ESTADO, 1841-1880

José Ballivián nació en La Paz en 1805. Provenía de una familia de clase alta; su tío fue Sebastián de Segurola, el funcionario real que encabezó la exterminación de la rebelión de Túpac Amaru. Pero él mismo tenía poca educación, relativamente hablando, por haber entrado a la carrera militar desde los 12 años. Fue un importante líder de los ejércitos independentistas, y llegó a los rangos más altos en los ejércitos de Santa Cruz. Pese a su gran involucramiento en las complejas intrigas políticas previas a su llegada al poder, la era de Ballivián, de 1841 a finales de 1847, fue un periodo de calma para Bolivia, y se considera el último régimen estable del temprano periodo de caudillos. Con Ballivián el Congreso estuvo activo, y muchos civiles participaron en el gobierno central. Poco a poco, la población y el ingreso gubernamental comenzaron a crecer, ya que la nación no participaba en conflictos internacionales de envergadura.

Para el nuevo régimen resultó fundamental haber modificado su posición respecto al papel de Bolivia en las relaciones de poder en el Pacífico. Después de un intento fallido por invadir Perú, Ballivián abandonó las pretensiones respecto a este país y se estableció para gobernar Bolivia. En este momento se enfrentaba a un ejército demasiado grande, que absorbía casi la mitad del presupuesto nacional y tenía un general por cada cien soldados. Al establecer concesiones especiales de tierra y promulgar leyes para pensiones, Ballivián intentó desmantelar la máquina de guerra boliviana y reducir su peso en la política nacional. Se redujo la cantidad de soldados y de oficiales, e incluso se establecieron algunas “colonias militares” en las tierras bajas orientales. Sin embargo, el costo de otorgar estas pensiones para desmovilizar al ejército creó una nueva carga sobre la deuda pública, pues los gastos para el ejército cambiaron poco.

En otras áreas el régimen tuvo un poco más de éxito. Aunque el presupuesto nacional continuó cargando con su tradicional déficit, los ingresos se elevaron de 1.5 millones de pesos en los años 1820-1830 a una cifra cercana a dos millones de pesos para finales de la década de 1840. Aunque fuera algo modesto, se trataba de un incremento. Sin embargo, aun en este caso, las restricciones estructurales a largo plazo todavía eran evidentes. El tributo indígena seguía proveyendo de 40% del ingreso total, y las entradas aduanales aún fluctuaban ampliamente de un año a otro. Ahora, sin embargo, el Estado había organizado aranceles e impuestos internos importantes, que ofrecían fuentes de ingreso más estables. El impuesto sobre la producción de coca, producto del consumo estrictamente indígena, ahora generaba un promedio anual de 200 000 pesos, y la exportación de corteza peruana (cascarilla), recientemente revitalizada para la manufactura de quinina, producía una cantidad igual y constituía un importante producto secundario de exportación, junto con la plata.

El gobierno también fijó su atención en las tierras bajas orientales. Se estableció el departamento del Beni de manera formal, se organizaron colonias militares, e incluso se promovieron varias compañías colonizadoras europeas, aunque con poco éxito. También hubo discusiones considerables respecto a la apertura de nuevas rutas ribereñas o por canal en las tierra bajas orientales, para desarrollar una salida de la producción boliviana por el Atlántico. Justo cuando el gobierno comenzaba a prestar atención a la región oriental por primera vez, también reconoció, finalmente, la transformación de la realidad demográfica y de recursos boliviana, al solicitar un obispado independiente para Cochabamba, ahora la segunda ciudad más grande de la república. En 1843, el Congreso decretó el establecimiento de su cuarto distrito eclesiástico mayor, finalmente aprobado por el Vaticano en 1847. Así, Bolivia ahora tenía obispados en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, así como un arzobispado en La Plata (Sucre).

Por último, en 1846 se realizó el primer censo nacional boliviano, organizado por el experimentado estadista José María Dalence. Se descubrió que la población había aumentado continuamente, hasta llegar a alrededor de 1.4 millones de personas, con un estimado adicional de 700 000 indios sin

gobierno, dispersos por los territorios bajos orientales. Pero a pesar del crecimiento de la población durante la vida republicana de casi un cuarto de siglo, había habido poco cambio en la organización social y económica de la sociedad. La Paz aún era la ciudad más grande, pero ahora albergaba sólo a 43 000 personas, mientras que en Cochabamba, el centro que le seguía en tamaño, habitaban 30 000 personas. Contando la población de las 11 ciudades y 35 villas (o pueblos) de la república (quienes vivían en poblados de aproximadamente 500 personas o más), la población urbana sólo era de 11%, cifra no muy distinta de los cálculos que hizo Pentland para mediados de la década de 1820.

Como era de esperarse, por la falta de inversiones gubernamentales y el estancamiento general de la vida urbana, el nivel educativo de la sociedad era extraordinariamente bajo. Sólo 22 000 niños asistían a la escuela en 1847, 10% de la cantidad total de niños en edad escolar de la república. Esto parecía implicar que se podía esperar poco cambio en alfabetización a futuro, ya que Dalence calculó, con generosidad, que había un máximo de sólo 100 000 personas alfabetizadas en español en la república, lo que representaba únicamente 7% de la población. Sin un aumento sustancial de la asistencia a la escuela, era evidente que la próxima generación sería apenas un poco más alfabetizada que la de 1846.

La economía tampoco había cambiado mucho, no obstante la paz relativa garantizada ahora por los periodos de Santa Cruz y de Ballivián en el poder. Aunque la minería de plata había caído a 156 000 marcos por año en la década de 1820, aumentó sólo de manera moderada en la década de 1830, a 188 000 marcos, y a sólo 192 000 en el decenio de 1840, exactamente la mitad de la producción pico de 385 000 marcos en la década de 1790. Además, Dalence calculó que aún habían 10 000 minas de plata abandonadas en la república, dos tercios de las cuales aún tenían plata, pero estaban bajo el agua y no podían trabajarse sin maquinaria de bombeo. Para 1846 había, de hecho, sólo 282 propietarios de minas activos en la república, quienes empleaban solamente unos 9 000 mineros, la mayor parte de los cuales laboraban a tiempo parcial, ya que también trabajaban en la agricultura.

En cuanto a la industria nacional, Bolivia tenía una considerable sociedad de artesanos que satisfacía la mayor parte de las necesidades de sus poblaciones más pobres. Los textiles de lana para el consumo personal o local conformaban una industria importante, a la par que la de procesamiento de alimentos. El área que el gobierno intentó desarrollar a lo largo de los primeros años, textiles de algodón baratos, simplemente no sobrevivió. Pese a las prohibiciones esporádicas y los altos aranceles contra las telas de algodón inglesas de bajo costo, la industria de la tela de algodón tocuyo, con centro en Cochabamba, jamás volvió a tener la importancia que tuvo durante el siglo XVIII. Mientras que en el periodo colonial se estimó que la industria del tocuyo de Cochabamba tenía varios cientos de obrajes, éstos bajaron a sólo cien para 1846, y su valor había declinado de una producción anual calculada en 200 000 pesos, a unos 60 000 en la década de 1840. Las necesidades de algodón barato de los bolivianos ahora eran cubiertas por géneros británicos que dominaban el mercado.

Bolivia permaneció como una sociedad abrumadoramente rural; 89% de la población vivía fuera de las ciudades y caseríos, y producía más de dos terceras partes del producto nacional (cuyo valor se estimaba en 13.5 millones de pesos en cuanto a bienes, comparado con 2.3 millones en minerales, y 3.9 millones en productos manufacturados, en 1846). Esta población no sólo era analfabeta, sino que en gran medida ignoraba incluso la lengua nacional. Pese a que no existen cifras sobre las lenguas en uso, no sería una exageración calcular que no más de 20% de la población nacional podía sostener una conversación en español, ya fuera como hablantes monolingües o bilingües. El quechua continuó siendo la lengua predominante de la república, con el aymara en un cercano segundo lugar. Así, el español quedó como una lengua minoritaria en la república, aunque única en la vida nacional, política y económica.

En la sociedad rural, el equilibrio del control entre haciendas y comunidades (de indígenas libres) permaneció de manera muy semejante a como existió durante el periodo colonial tardío. En 1846 había más de 5 000 haciendas, valuadas en 20 millones de pesos, y unas 4 000 comunidades libres, valuadas en sólo 6 millones de pesos. Pero mientras el valor relativo y

las cantidades parecían favorecer a las haciendas en las áreas rurales, en los hechos la mayor parte de la fuerza de trabajo vivía en las comunidades libres. Dalence calculaba que había sólo 5 135 cabezas de familia que eran hacendados, y que 138 104 cabezas de familia vivían en las comunidades. Aceptando los cálculos de Dalence de cuatro y media personas por familia como multiplicador, tenemos que más de 620 000 indígenas vivían en las comunidades, y que componían, en total, 51% de la población rural total. La población de yanaconas (o trabajadores sin tierra) de las haciendas probablemente era de entre 375 000 y 400 000, y las otras 200 000 personas, parte de la población rural, probablemente eran propietarios de las regiones sureñas, o trabajadores migrantes sin tierra, que la rentaban ya fuera de las comunidades o de las haciendas.

Mientras que las haciendas obviamente tenían las propiedades más valiosas comercialmente hablando, estaban también, pese a ello, en un estado de estagnación relativo, con excepción de dos áreas: los yungas y el valle de Cochabamba. Los yungas eran fuente importante de producción de coca, que estaba a la alza, al igual que la población indígena. En cuanto a Cochabamba, parecía haberse recuperado del golpe económico de la crisis colonial tardía, y era ahora la principal productora nacional de los dos granos básicos, trigo y maíz, esto es, había regresado a su posición preeminente de granero de Bolivia. En cualquier otro lugar, sin embargo, las haciendas permanecieron relativamente inmóviles y no representaban una amenaza seria a las regiones densamente pobladas, donde predominaban las comunidades libres.

Dentro de las propias comunidades libres había, sin embargo, modificaciones constantes y gran estratificación interna. La eliminación de la mita había sin duda favorecido a los originarios, integrantes oriundos de las comunidades, otorgándoles el mayor acceso a tierras. A partir del retiro de las onerosas obligaciones laborales, parece que sus cantidades crecieron, o cuando menos se estabilizaron, y se calculó que en la década de 1840 representaban 35% de todos los jefes de familia en las comunidades libres. Los agregados con tierra (o personas que llegaron más tarde, con menores propiedades en las comunidades) representaban 42% de la población de las comunidades, y un nuevo e importante grupo de forasteros sin tierra daban

cuenta, entonces, de 23% de las familias indígenas. Evidentemente, el lento crecimiento de la población comenzaba a crear una clase de indígenas sin tierra en las propias comunidades libres.

Al tiempo que sucedían algunos cambios en el mayoritario mundo rural el estancamiento de la industria minera y la incapacidad de los manufactureros nacionales de cumplir con la demanda local significó que, durante el primer cuarto de siglo de existencia, Bolivia se encontrara en la inusual posición de estar en déficit constante en su balanza de pagos. Durante cada año desde 1825, y hasta muy entrada la década de 1850, Bolivia mostró un déficit en su cuenta comercial legal que sólo podía enfrentarse mediante la exportación ilegal de plata, parte de un comercio de contrabando muy activo. De este modo, el Banco de Rescate (de compras de minerales) del gobierno enfrentaba cada vez más dificultades para recolectar la plata que se producía en el país, al tiempo que las pérdidas gubernamentales por artículos exportados de manera ilegal parecen haber sido bastante altas. Por último, el déficit gubernamental fue un fenómeno constante, ya que los gastos, en especial los de naturaleza militar, superaban los recursos del Estado.

Así, para mediados de siglo Bolivia se encontraba en peores condiciones de las que había enfrentado al principio de su vida republicana, y parecía que la situación sólo se podía deteriorar más. Esta expectativa se reforzaría, en apariencia, por la caída de Ballivián y el principio del periodo más caótico de los gobiernos caudillistas, entre 1848 y 1880. Pero, de manera paradójica, fue precisamente este periodo de mayor inquietud política el que daría paso a la gran era de expansión de la economía boliviana. Fue en las décadas de 1850 y 1860 cuando la implantación de las máquinas de vapor en la industria minera del altiplano comenzó con todo éxito. Fueron también, en gran medida, los comerciantes y hacendados del área de Cochabamba y de algunas de las regiones más avanzadas productoras de grano quienes ahora ofrecían el capital con el cual abrir las minas principales. Al obtener su capital de operaciones comerciales internas, estos nuevos mineros-comerciantes pudieron comenzar a invertir seriamente en nuevas tecnologías mineras.

Junto al lento desarrollo de la minería del altiplano, las décadas de 1860 y 1870 verían el rápido crecimiento de la minería en el litoral pacífico de

Bolivia. Las minas de plata de Caracoles en el decenio de 1870, así como las minas más viejas del altiplano, entrarían ahora a la producción total. A su vez, el crecimiento de compañías mineras modernas atrajo capital internacional, con los recursos para expandir aún más las nuevas iniciativas mineras.

Toda esta renovada actividad económica sucedería en medio del periodo más violento y caótico de la historia política republicana. Pero el caos de la violencia política parece haber tenido poco impacto sobre el crecimiento, lento pero consistente, de un sector de exportaciones moderno. En el mejor de los casos, los regímenes que llegaron en las décadas de 1860 y 1870 respondieron bien a las demandas de la nueva élite minera, e hicieron frente a sus preocupaciones más inmediatas, que se relacionaban primordialmente con poner fin a las perspectivas monopólicas del gobierno en la compra y comercio de metales.

Pero la causa de este crecimiento paradójico aún debe determinarse. Para empezar, es evidente que una serie de sucesos externos a Bolivia desempeñaron un papel decisivo en el despertar del gigante minero. La creciente productividad y la baja en los costos de las máquinas de vapor en Europa y en América del Norte durante la primera mitad del siglo XIX implicaron que la máquina de vapor de las décadas de 1850 y 1860 fuera un bien mucho más barato, así como que estuviera mucho más a mano que en el decenio de 1820; de este modo, los costos por abrir una mina inundada se redujeron considerablemente. Además, el crecimiento de la minería peruana y la chilena en este periodo ofreció un bagaje regional de capital y de experiencia técnica que podía exportarse de inmediato a la incipiente industria boliviana, así como proveer, también, de un mercado listo para recibir las exportaciones bolivianas. Por último, la baja de los precios internacionales del mercurio redujo un elemento principal del costo implicado para la extracción de plata.

Sin embargo estos factores sólo explican las condiciones internacionales generales que proveyeron de un abasto muy superior de ingenieros, maquinaria y mercurio, a un costo mucho más bajo que antes para los mineros del altiplano. El capital inicial colocado en la minería boliviana de

los altos provino de los propios bolivianos. Y la pregunta clave sigue siendo: ¿de dónde salió este capital, dado el relativo estancamiento de la economía durante el primer cuarto de siglo de existencia republicana? A partir del análisis de las primeras compañías mineras en Potosí y en Oruro, es evidente que una porción desproporcionada del *stock* de capital provino de la aristocracia comercial y terrateniente del valle de Cochabamba. Así, parecería que el crecimiento continuo, pero no espectacular, de la población nacional, pese a algunas epidemias bastante graves durante la década de 1850, crearon un mercado interno en expansión para la producción agrícola, en especial para el maíz y el trigo, núcleo de la agricultura cochabambina. De este creciente mercado interno, la élite de Cochabamba pudo extraer capital excedente. Cochabamba parece haber tenido también una clase de empresarios incipientes que estaban más que dispuestos a correr los riesgos de hacer grandes inversiones de capital en la industria minera, tradicionalmente muy poco predecible. El hecho de que la región de Cochabamba fuera el corazón de la población chola más avanzada en la república, y tuviera también a la clase más activa de rentistas entre sus campesinos propietarios, cuya facción principal era bilingüe en español y quechua, también ayuda a explicar las evidentes habilidades empresariales.

A partir de la década de 1830 se volvió común establecer compañías nacionales de acciones conjuntas para iniciar operaciones mineras. Por lo general vendían gran cantidad de acciones a bajo costo, y estas compañías podían producir, en promedio, beneficios por el orden de los 10 000 pesos de capital activo. Entre las numerosas compañías que se formaron en esta época pionera, la más importante fue la Huanchaca Mining Company, fundada en 1832, que trabajó las minas Porco en la provincia de Potosí. Como todas las empresas del tipo, estas primeras compañías apenas podían con los costos, y pasaron muchos años construyendo drenajes y nuevos socavones para echar a andar las minas, utilizando los depósitos de plata de las superficies más accesibles para pagar los constantes costos. Muchas de las compañías quebraron antes de poder completar sus operaciones, y para 1856 la Huanchaca Mining Company fue un caso típico, habiendo gastado unos 180 000 pesos en infraestructura básica, sin haber generado aún ganancia alguna

para sus accionistas. El mismo año, el mercader Aniceto Arce compró su entrada a la compañía por 40 000 pesos, y pronto comenzó a proveer el capital fundamental que se requería para que la compañía marchara. De manera semejante, a mediados de la década de 1850 la familia Aramayo compró la quebrada Compañía Minera Real Socavón de Potosí. Por último, en 1855 el mercader Gregorio Pacheco adquirió las minas Guadalupe, antes propiedad de uno de sus deudores en el distrito de Chicas, de la provincia de Potosí.

Así, en el lapso de unos cuantos años, las tres dinastías mineras de plata más importantes se implantaron en los distritos mineros de Potosí. Con nuevas inyecciones de capital, así como con un nuevo liderazgo, las compañías empezaron a prosperar. Para la década de 1860, los tres líderes se concentraban en la racionalización de sus operaciones y en emprender cambios estructurales a largo plazo en la industria, mediante la introducción de maquinaria moderna, operaciones de bombeo y reconstrucción de socavones. Para el decenio de 1870 comenzó a llegar capital extranjero en cantidades siempre crecientes, y para la segunda mitad de la década, se puede decir que la industria minera de plata boliviana alcanzó niveles internacionales de capitalización, desarrollo tecnológico y eficiencia. Bolivia fue una vez más uno de los productores líderes de plata refinada del mundo, y una industria de exportación trascendente y pujante que había revitalizado tanto a la economía interna como al comercio internacional del país.

Fue este ritmo económico creciente de la década de 1850 lo que de diversas maneras explica la configuración tan extraña de gobiernos que aparecieron en la escena política. Tras la caída del régimen de Ballivián surgió otro paceño de su generación, el general Manuel Isidoro Belzu (nacido en 1811), como nuevo líder político. De origen humilde, aunque en apariencia de extracción española, y como Ballivián, principal y exclusivamente militar desde su juventud, Belzu había sido oficial importante en los ejércitos de Santa Cruz. Una vez que Ballivián tomara el poder, desempeñó un papel militar clave en el nuevo régimen. Constantemente cambiando de aliados, como lo hizo Ballivián antes, Belzu surgió como el general de oposición más fuerte, exigiendo un sitio en el gobierno.

Luego de la caída de Ballivián, en diciembre de 1847, Belzu surgió como la figura más poderosa, y tomó la presidencia de manera formal en 1848. Se mantuvo en el poder hasta 1855, cuando se retiró voluntariamente —primer presidente boliviano en hacerlo desde la época de Sucre—. Pero el continuo caos en las finanzas gubernamentales, el progresivo debilitamiento de lealtades, así como la presencia de personalidades en contienda, dejaron la escena política llena de generales impagos e insatisfechos, todos deseando ser presidente. Sin un sistema bien establecido de partidos políticos para canalizar las demandas o las aspiraciones, o para controlar los apetitos, la política nacional era una espantosa batalla campal en la que podía participar cualquier líder regional de poca monta. La consecuencia fue que Belzu debió enfrentar algo así como entre 30 y 40 revueltas distintas en los seis años que duró su gobierno. Al final, el sinnúmero de batallas, de intentos de asesinato y de intrigas agotaron incluso a este guerrero indomable, que terminó por renunciar a su puesto de manera voluntaria.

Sin embargo, por debajo del nivel de la intriga sucedían ciertos cambios muy importantes que Belzu reflejaba con precisión. El régimen de Belzu se ha considerado una aberración en la opinión de muchos historiadores bolivianos, que le han aplicado libremente los epítetos de "demagogo" y "socialista". No hay duda de que Belzu expresaba franca hostilidad ante la alta aristocracia de Chuquisaca y ante otras élites provinciales, o que se expresaba a favor de algún tipo de operación para confiscar la riqueza de los poderosos. También fue un populista muy imaginativo, que gustaba de declararse a sí mismo representante de los cholos y de las clases bajas de las ciudades, que hablaba de sí mismo en términos de un socialismo cristiano y atacaba la legitimidad de la propiedad privada y las estructuras de clase. A menudo distribuía dinero entre los pobres de las ciudades, en gestos demagógicos clásicos. Pero esencialmente mantuvo la estructura social tradicional, y fue el último de los presidentes de principios del siglo XIX en apoyar con firmeza una postura mercantilista tradicional.

La profusa legislación promulgada por Belzu en el área económica incluía aranceles proteccionistas contra las manufacturas inglesas, la promoción de las industrias artesanales nacionales, incentivos fiscales para los productos

nacionales, la creación de monopolios de Estado, e incluso de leyes que prohibían a los extranjeros operar en el comercio nacional. Éstos eran esfuerzos a los que los comerciantes se oponían de manera directa junto con sus nuevos aliados mineros, grupo que favorecía el libre comercio y una economía abierta. Pero justo cuando el movimiento por el libre comercio comenzaba a adquirir importantes partidarios económicos de peso, las clases tradicionales lucharon por evitar el desmantelamiento del viejo esquema mercantilista. Belzu fue hostil a los nuevos mineros de la plata, llegando incluso a establecer diversos bancos más para la compra del mineral, así como un banco monopolista para la compra de la corteza de la quinina. Las nuevas élites mineras y comerciales lo atacaron amargamente por estas acciones, al tiempo que era objeto de un extenso apoyo popular.

Cuán extenso fue el apoyo popular a Belzu se hizo evidente desde el principio de su régimen. En marzo de 1849, un primer intento por derrocar a su gobierno, emprendido por algunos generales, llevó a levantamientos populares en las ciudades de La Paz y Cochabamba, las más avanzadas y densamente pobladas de la república, en apoyo al régimen. Durante varios días, en ambas ciudades, muchedumbres de clase baja lideraron un ataque bastante sistemático contra las élites locales. Además, el apoyo popular fue tan poderoso, que incluso un intento de asesinato de Belzu en septiembre de 1850, que casi logró su cometido y fue seguido de una larga convalecencia, no llevó al derrocamiento de su mandato.

Del mismo modo que las clases altas se oponían a Belzu debido al apoyo popular con que contaba y a sus ideas fuertemente mercantilistas, algunos Estados extranjeros discutían con él cuando intentaba evitar la penetración de bienes extranjeros al mercado nacional, y restringir el papel de los comerciantes extranjeros. Este conflicto incluso llevó a la expulsión del representante de la diplomacia británica, y tuvo por consecuencia la historia, a menudo relatada pero falsa, de que en represalia, la reina Victoria borró a Bolivia del mapa.

El creciente poder económico de la oposición a favor del libre comercio, y el menguante poder de los artesanos y de los manufactureros locales, erosionaron, con el tiempo, el apoyo con que Belzu contaba y financiaron por

completo a las fuerzas que se le oponían. Cansado de acallar una rebelión más de sus tropas, fomentada por sus contrincantes, Belzu declaró su intención de retirarse y propuso a su dócil yerno, el general Córdova, para presidente. Esta elección controlada, de 1855, que contó con unos 13 500 electores, llevó al establecimiento de un gobierno transitorio, pero moderado, antes de que los defensores del libre comercio y del capital extranjero obtuvieran su victoria final.

Córdova duró dos años en el cargo, y en 1857 fue remplazado por el primer presidente civil de Bolivia, José María Linares. El régimen de Linares, a pesar de sus problemas, señaló claramente el cambio de poder a favor de los elementos más nuevos de la economía y el fin del papel monopólico del gobierno en la industria minera. En tanto que Belzu y Córdova habían mostrado indiferencia ante las exigencias de la industria minera, Linares las hizo su preocupación central. Aunque nació en 1810 en Potosí, y por tanto era parte, sin duda, de la generación de todos los presidentes desde Santa Cruz, Linares era único por jamás haber seguido una carrera militar. Hijo de una familia española de clase alta, el muy educado Linares rápidamente ascendió en la política y en el gobierno civil, habiendo desempeñado algún papel en la educación secundaria en la capital de Chuquisaca. Inicialmente fue seguidor fiel de Santa Cruz, y fungió como prefecto, legislador y administrador del gobierno central durante los años de la confederación. Cuando finalmente se opuso a ésta, también rechazó al régimen de Ballivián y se fue a vivir a Europa y a practicar derecho en España.

Regresó a Bolivia durante los últimos años del régimen de Belzu, y se involucró constantemente en los planes contra el viejo general; incluso se postuló contra Córdova en las elecciones de 1855, en las que alcanzó unos 4 000 votos. Pero su derrota a manos del gobierno, que controló las elecciones por completo, hizo que se comprometiera con el derrocamiento violento del régimen. El gobierno de Linares —consecuencia de dicho derrocamiento, que duró desde 1857 hasta su propia destitución en 1861—, se mostró mucho más receptivo a las ideas del libre comercio. Los aranceles que protegían a la industria textil nativa se redujeron, se puso fin al monopolio sobre la quinina, y todos los minerales, con excepción de la plata, ahora podían entrar

libremente al mercado, siempre que se refinaran en Bolivia. El régimen, no obstante, no llegó a adoptar el libre comercio de manera tan intensa como deseaban los mineros, y en los hechos estrechó la reglamentación sobre la venta del mercurio, haciendo de la industria un monopolio temporal del Estado, y aumentando el control sobre la minería. Sin embargo, el gobierno de Linares alentó a los mineros a formar una cámara o grupo de interés poderoso, apoyado por el gobierno, para impulsar sus demandas.

Cuán importantes se habían vuelto estos nuevos propietarios de minas quedó en evidencia en los primeros años del nuevo régimen. Mientras que los ingresos totales gubernamentales aún rondaban entre los 1.5 y los 2 millones de pesos anuales, las principales compañías mineras, como la Real Socavón Mining Company de Potosí, propiedad de Aramayo, por ejemplo, habían invertido 281 000 pesos durante su organización, entre 1854 y 1861. Las compañías de Pacheco habían invertido 333 000 pesos entre 1856 y 1861, y una suma similar se gastó en la Huanchaca Mining Company. El uso de máquinas de vapor, de vagones enrielados y de maquinaria de refinación moderna, ya era común en las zonas mineras, y para mediados de la década de 1860 estas compañías buscaban subsanar sus necesidades de capital en el extranjero. De este modo las inversiones, tan sólo en las tres compañías mineras más grandes, se acercaban al ingreso total generado por la hacienda nacional en cualquier año.

Junto con el constante crecimiento de las zonas mineras tradicionales, la provincia litoral de Atacama, a lo largo de la costa del Pacífico, finalmente comenzaba a adquirir importancia. Para 1857 se habían descubierto los primeros depósitos de salitre en la región de Mejillones; esto llevó al crecimiento lento, pero continuo, del puerto de Antofagasta, que pronto sería rival de Cobija como puerto principal de Bolivia en el Pacífico. No obstante, este crecimiento estaba por completo bajo el control de capitalistas británicos y chilenos, quienes cuadraron contratos bastante favorables con el gobierno boliviano, que en lo esencial añadieron pocos ingresos verdaderos a la tesorería central. Por ejemplo, en el presupuesto de 1860, el impuesto tributario aún representaba un ingreso del doble de cualquiera otra fuente de entradas nacionales, y daba cuenta de 36% del total. Además, el ingreso por

exportaciones de quinina, alguna vez muy lucrativo, había desaparecido por completo. Fuente principal de ingresos gubernamentales, así como de exportaciones, en el decenio de 1840 y principios del de 1850, el monopolio de la producción de quinina boliviana fue roto por Colombia en 1855, y a partir de entonces la producción descendió hasta volverse relativamente insignificante. Por último, pese a los intentos de Linares por controlar al ejército y reducirlo a sólo 1 500 hombres, las fuerzas armadas aún absorbían 41% del gasto nacional.

Aunque fue incapaz de corregir el ingreso y el gasto gubernamental, Linares hizo un esfuerzo exitoso por refinanciar la deuda interna y restaurar alguna apariencia de normalidad en cuanto a la emisión gubernamental de plata. También intentó reorganizar la administración nacional, así como tener condiciones para lograr gobiernos locales más eficientes. Parece haber podido adquirir algún financiamiento para la educación local. Así, mientras que la administración de Linares no modificó la economía pública de manera abrumadora, sí inició algunos cambios a largo plazo, en una dirección que había de marcar la victoria final de la ideología del libre comercio. También comenzó una absoluta reorganización del crédito público, que llegaría a ser un precedente de la mayor importancia para los regímenes de las décadas de 1870 y 1880.

El gobierno duro y reformista, muy estricto, de Linares, quien incluso estableció una dictadura formal después de septiembre de 1858, finalmente generó una pesada oposición a su régimen. Al tiempo que sus seguidores más ardientes, entre ellos Tomás Frías y Adolfo Ballivián, se organizaron en un poderoso grupo de apoyo que posteriormente tomaría el mote de los “rojos”, sus opositores movilizaron un apoyo a gran escala para su derrocamiento. En 1860, el régimen masacró a rebeldes indios en la capilla de Copacabana, en el lago Titicaca, y al mismo tiempo se vio forzado a desviar un gran intento de revuelta. Estas acciones debilitaron de tal modo al dictador, que tres de los ministros más importantes, colocados por él en sus puestos, lo forzaron a salir al exilio en enero de 1861.

Se eligió un nuevo Congreso en el que muchos de los rojos quedaron representados. No obstante, el general José María Achá, uno de los tres

conspiradores, fue seleccionado por el Congreso para presidir la república, y se excluyó del poder a Linares y sus seguidores. El nuevo régimen continuó de varias maneras las decisiones básicas en cuanto a las políticas del periodo de Linares, liberando en los hechos aún más la economía. Se abolió el monopolio del mercurio creado por Linares y se continuó la reorganización fiscal, aunque se abandonaron los sólidos manejos centralizados del presupuesto llevados a cabo por éste.

El nuevo régimen iba a tener la distinción única de ser el más violento de los gobiernos decimonónicos en términos de represión a sus opositores. En 1861, en un episodio típico de maniobras políticas, se encarceló en La Paz a unos 70 simpatizantes de Belzu, incluido al expresidente Córdova, en una acción del comandante local, el coronel Yáñez. Utilizando la evasiva de la amenaza de levantamiento encabezado por Belzu, Yáñez ordenó la ejecución de estos líderes políticos, en lo que constituyó la represalia más sangrienta de la historia republicana hasta tal fecha. A partir de entonces el régimen se enfrentó, como era lo usual, a una intranquilidad política constante, en la que los futuros contendientes a la presidencia se ponían a prueba en una serie de juegos de poder y revueltas militares. Lo que es impresionante respecto a todos estos intentos de revuelta es el escaso impacto que tuvieron sobre la estructura general, económica y social, del Estado. Mientras que el ejército boliviano bajo Sucre y Santa Cruz había contado con entre 5 000 y 10 000 soldados, el ejército boliviano quedó reducido a una fuerza de entre 1 500 y 2 000 hombres para el periodo posterior a la confederación, y en especial después del fin de la amenaza peruana de Ingavi, en 1841. Se trataba de un ejército que supuestamente controlaba a una sociedad que alcanzaba alrededor de 1.8 millones de personas en la década de 1850.

De este modo, las constantes revueltas por lo general involucraban sólo unos 500 hombres de cada lado y, en efecto, alteraban poco la vida económica o social del país. Además, mientras que los regímenes militares reflejaran el creciente poder de la nueva oligarquía minera, los nuevos capitalistas mineros más o menos los ignoraban. Por estar profundamente involucrados en el establecimiento de sus compañías sobre una base económica viable, tenían poco tiempo para dedicarse a la política, siempre

que el gobierno satisficiera sus necesidades fundamentales. Y hasta que los caudillos militares entraron, por último, en un enfrentamiento grave con los aliados y partidarios más cercanos de estos mineros, los chilenos no sintieron necesidad de intervenir.

Dada la indiferencia de las nuevas y viejas élites económicas, los políticos civiles se vieron incapaces de controlar a los generales o a la tropa. Linares había sido su mayor esperanza, con la consecuencia de que la facción constitucionalista, o los rojos, continuaran presentando un fuerte atractivo para quienes estaban comprometidos con un régimen poderoso, dominado por civiles. Pero la mayor parte de las facciones, desde la de Santa Cruz hasta la de los seguidores de Belzu, siguieron encontrando algún general o coronel que resultaba conveniente para encabezar su causa y declararse a favor de su candidato. Hasta que estas otras facciones políticas y oligárquicas estuvieron de acuerdo en plantear sus exigencias en una arena distinta, el patrón de revueltas militares siguió un esquema preciso y bastante gastado.

Mientras el régimen de Achá estuvo de acuerdo con el modelo típico, al tiempo que reflejaba los nuevos intereses económicos, hubo un nuevo factor que comenzaba a hacerse sentir en el escenario político y económico boliviano. En 1863 se forzó al régimen de Achá a lidiar con la primera avanzada agresiva, de relevancia, de Chile, en la región minera de Atacama. En ese año se llevó a la corte boliviana, para su arbitrio, la disputa de una compañía minera chilena financiada por Gran Bretaña. En este conflicto, el gobierno chileno se rehusó a reconocer la jurisdicción boliviana, y en 1863 amplió su reclamo de territorio para incluir los campos de salitre de Mejillones. Mientras que Achá envió a Frías a negociar, el Congreso de 1863 votó por la guerra, así que el gobierno boliviano se encontró impotente contra su vecino del sur, y se vio forzado a aceptar la demanda chilena de estos campos extraordinariamente ricos.

Cuando terminaba el régimen de Achá, el general intentó establecer elecciones libres; los dos movimientos civiles más poderosos serían el de los rojos constitucionalistas y el de los populistas de Belzu. Pero antes de que se pudieran llevar a cabo las elecciones, un pariente cercano de Achá, el general Mariano Melgarejo, tomó el gobierno en diciembre de 1864. De este modo

comenzó una de las dictaduras más largas y amargamente enfrentadas de la historia de Bolivia, un régimen que ha sido objeto de grandes debates en la historia del país. Como Achá antes que él, Melgarejo provenía de Cochabamba y había participado en una serie de ocupaciones y rebeliones militares, así como en maquinaciones políticas. Difería de su predecesor principalmente por su edad —nació en la década de 1820— y por su falta total de apoyo por parte de clase alguna. A diferencia de todos sus antecesores, con excepción de Belzu, estaba comprometido por completo con las clases altas. Era hijo ilegítimo y había hecho su exitosa carrera solamente gracias a su destreza militar. Al mismo tiempo, no tenía ni un poco de la ideología revolucionaria de Belzu, y por ello no intentó apelar a las clases populares con seriedad.

Con todo, pese al término de "caudillo bárbaro" con el que los historiadores bolivianos lo calificaron, Melgarejo representaba, de muchas maneras, la llegada al poder total de la élite minera del país, así como el triunfo de su política de libre comercio. Las políticas económicas liberales del régimen representaban una continuación coherente de aquellos programas que se habían puesto en marcha, incluso desde el periodo de Linares. Además, no obstante su supuesta "ebriedad" y estilo de vida disoluto, Melgarejo obtuvo apoyo importante de la nueva élite minera durante gran parte de su periodo gubernamental. Su régimen también vería el primer intento serio de atender el tema de la tierra desde los primeros días de la república, en un ataque que enfrentaba los derechos legales de las comunidades libres. Tanto su oposición a la tenencia de la tierra indígena corporativa como su liberalización de la economía reflejaban las demandas de la élite minera, que él apoyaba por completo. Su régimen refleja íntegramente la reemergencia de una poderosa industria de exportación de minería de plata en Bolivia.

Se debe considerar el periodo de Melgarejo en el contexto de la economía internacional para entenderlo a cabalidad. Los años entre 1864 y 1873 fueron un momento en extremo próspero, acompañados de la gran era de exportaciones de capital de Europa hacia el mundo en desarrollo. En el mismo lapso hubo un gran auge de la industria de exportaciones costeras en

el Pacífico, primero de guano y luego de nitratos, así como la entrada de capital inglés, estadounidense y europeo continental, a las industrias mineras locales, en alianza con capitalistas chilenos y peruanos. Toda esta actividad inversionista febril también afectó en gran medida a la región sureña de Atacama, conocida como Mejillones, que aunque Chile la disputara constantemente, aún se encontraba bajo el control nominal de Bolivia. Aquí había grandes depósitos de guano y de nitrato, y pronto se descubrirían importantes yacimientos de plata en la cercana región de Caracoles.

Los pocos recursos de capital boliviano que existían se encontraban atados por completo al desarrollo de una moderna industria de plata en los centros mineros tradicionales del altiplano. Por lo tanto, todas estas nuevas zonas actuaron como imanes para los vecinos de Bolivia. Para los mineros del altiplano este interés del capital extranjero por la minería costera resultaba bienvenido, porque se extendía hasta crear intereses en apoyo al crecimiento de la minería del altiplano. Para el gobierno boliviano, siempre en penurias, cuyo ingreso había sido virtualmente estable durante casi 50 años, este interés en sus recursos costeros fue una cornucopia inesperada que sólo podía llevar a riquezas individuales insospechadas. Mientras que la mayor parte de los gobernantes anteriores de Bolivia tendieron a vivir en el exilio extranjero, en condiciones de pobreza, los líderes actuales de pronto se encontraron cortejados por gobiernos y capitalistas extranjeros; fueron incapaces de resistir las tentaciones, y tampoco estaban dispuestos a hacerlo.

Tanto historiadores como escritores bolivianos han condenado justificadamente al gobierno de Melgarejo por vender la nación, consistentemente, al mejor postor. ¿Pero podrían otros regímenes haberse resistido con éxito ante estas lisonjas, después de unos 50 años de ingresos fiscales estancados y un cuerpo de funcionarios insaciables en cuanto a sus demandas de poder? Además, uno puede cuestionar, con seriedad, si la nueva élite minera tenía alguna preocupación por las enormes concesiones otorgadas a los capitalistas chilenos, o por otros aspectos de la política de gobierno, que esencialmente ponía fin a todo intento de control mercantilista, ya fuera en términos de la industria minera o en la protección de las industrias nacionales.

Si Melgarejo y sus generales eran mejores o peores que otros no es el tema, pero sin duda eran más activos. Por primera vez desde las especulaciones británicas de 1825 y 1826 había una avalancha de capitalistas extranjeros en Bolivia, con modelos para enriquecer a todo mundo. Algunos empresarios estadounidenses clásicos, como Henry Meiggs y el coronel George E. Church, estaban en el escenario, junto con respetables compañías chilenas como Concho y Torres, y con empresas británicas clásicas como Gibbs & Company. La fuente primaria de riqueza potencial eran los campos de guano y nitrato de Mejillones. En un tratado de 1866, Chile y Bolivia habían acordado compartir los recursos de la región de Mejillones y habían vuelto a delinear la frontera para otorgar a Chile el control directo sobre cualquier cosa que yaciera por debajo del paralelo 24. Ésta era una real fuente de ingresos, y los extranjeros, en su mayoría británicos y chilenos, firmaron contratos de exportación a largo plazo, así como arreglos especiales de concesiones ferroviarias.

Como el régimen de Melgarejo se enfrentó a un presupuesto deficitario desde su primer día en el cargo, estaba dispuesto a firmar contratos en extremo generosos a largo plazo por cantidades relativamente pequeñas, pero inmediatas. Estos contratos valían varios millones de pesos, aceptados con las peores condiciones para Bolivia, ya que ataban recursos valiosísimos durante largos periodos mediante compromisos onerosos. De hecho, muchos de estos contratos se volverían muy vinculantes respecto al gobierno, y con el tiempo serían el escenario crucial de los conflictos comerciales que llevaron a la Guerra del Pacífico. Pero el gobierno era indiferente, en lo esencial, a todos estos problemas a largo plazo. Durante los primeros días del nuevo régimen, Melgarejo recurrió a préstamos forzados con la intención de generar ingresos para las arcas públicas, aunque realmente jamás fueron suficientes para hacer frente a sus gastos en expansión. De este modo, cualquiera que ofreciera unos cuantos cientos de miles de pesos podía obtener millones en concesiones a largo plazo. Además, parecería que para los políticos del altiplano el auge mercantil costero era un mundo irreal sobre el que tenían poco control, y sobre el que estaban dispuestos a conceder virtualmente cualquier cosa que estos extranjeros industriosos desearan. También vale la pena notar que, pese

a los complejos contratos de exportación de guano y de nitrato, los programas ferroviarios de la costa del Pacífico, las compañías ribereñas para el Amazonas, las compañías colonizadoras belgas y cualquier otra propuesta especulativa, real o imaginaria, no hubo un intento por permitir que los operadores extranjeros entraran a la industria minera del altiplano. Ésta permanecía firmemente en manos de inversionistas nacionales.

Con su nueva riqueza proveniente de la minería costera y del capital extranjero especulativo, incluso los gobiernos cercanos estaban dispuestos a participar en el más que generoso régimen de Melgarejo. Así, Bolivia firmó tratados comerciales y territoriales a finales de la década de 1860 con cada uno de sus vecinos. En 1865 entró en vigor un tratado especial con Perú, mediante el que Bolivia, por obtener derechos de puerto en Arica, virtualmente se volvió parte de la unión aduanal con Perú. Bolivia terminó por cobrar impuestos aduanales peruanos en Cobija, y a su vez recibió un ingreso fijo de 450 000 pesos anuales por la aduanas de Arica y Tacna. Gracias a este tratado, las manufacturas peruanas entraban a Bolivia sin restricciones. A su vez, este ingreso fijo proveniente de Perú se hipotecaba rápidamente ante intereses extranjeros, a cambio de préstamos a corto plazo para el régimen de Melgarejo.

Luego llegó el tratado con Chile de 1866, que no sólo resolvió la ocupación de Mejillones y otras previas a favor de Chile, sino que también estipuló que los puertos locales del Pacífico podían exportar productos minerales libres del pago de impuestos bolivianos, y que los bienes chilenos podían entrar a tales puertos, también libres de la carga arancelaria usual. Debido a estos dos actos, el programa mercantilista completo de aranceles proteccionistas se destruyó por entero, y Bolivia fue ahora parte de un acuerdo virtual de libre comercio con Chile y con Perú. Entonces Bolivia negoció salir de las partes del tratado que versaban sobre su participación en la producción colectiva de guano, y lo hizo ante compañías extranjeras en términos desastrosos, de tal modo que sólo incitó la constante presión chilena. Por último, Melgarejo ofreció al representante diplomático chileno, con quien había cultivado una simpatía a lo largo de las negociaciones del tratado, el puesto de ministro de

Finanzas en su propio gobierno. Cuando se rechazó la oferta, ¡Melgarejo lo hizo su propio representante diplomático ante el régimen chileno!

Luego se acordaron dos tratados con Argentina y Brasil en 1868, que concedieron derechos fluviales libres en el Atlántico para la transportación de mercadería boliviana, a cambio de más concesiones en relación con la importación de productos de ambas naciones. Además, en el tratado con Brasil se hizo un "ajuste" territorial de unos 64 000 km^2 a favor de este último. Así, todos los tratados —pese a sus excesivas concesiones en cuanto a ingresos, e incluso territorio, como en los casos chileno y brasileño— casi desmantelaron por completo la cuidadosa edificación previa de aranceles proteccionistas que habían sido el sello de la economía política boliviana hasta ese momento. Todo esto se relacionaba de manera directa con el gran deseo de la élite minera del altiplano de permitir que el libre comercio se volviera el principio operativo de la economía nacional.

En la esfera económica interna, Melgarejo también intentó llevar a cabo algunas reformas fundamentales. Mientras que el régimen cometió grandes excesos al acuñar moneda devaluada, llevó a cabo la reforma básica de la vieja moneda colonial y retiró el peso a favor de una nueva moneda de base decimal llamada boliviano, en 1869. De manera más importante, intentó destruir los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades libres. Este decreto extraordinario de 1866 fue el primer ataque verdadero sostenido contra los derechos de propiedad comunal indígena, desde los decretos bolivarianos de 1824 y 1825, que quedaron en suspenso debido a la decisión de Sucre de volver al tributo como forma básica de cobro de impuestos. Gracias a la riqueza súbita generada por el mineral del Pacífico y los depósitos de guano, la importancia relativa del ingreso por tributo para las entradas totales del Estado comenzó a declinar. Mientras que la cantidad real tras el tributo permaneció estable, de entre 800 000 y 900 000 pesos por año, su importancia relativa descendía lentamente, conforme el ingreso por las exportaciones de mineral y los impuestos por la minería comenzaban a adquirir la misma importancia. Además, el lento renacimiento de la industria minera tenía impacto sobre el crecimiento de los mercados urbanos y el consecuente aumento en el ritmo de la agricultura comercial para abastecer a

dichos mercados. De este modo, la década de 1860 vio los primeros revuelos de interés renovado en las haciendas rurales, así como los principios de un ataque sostenido a la propiedad comunal de la tierra.

Conforme lo estipulado por el decreto confiscatorio, se declaró que todas las propiedades comunitarias eran en verdad terrenos propiedad del Estado, y que los indígenas que vivían en ellos ahora debían comprar títulos de propiedad individual, en una suma no menor de 25 pesos y no mayor de 100. Los indígenas que no compraran su título de propiedad en los 60 días posteriores a la emisión del decreto perderían sus tierras, y el Estado entonces las subastaría a otros compradores. Se estipulaba que aquellos a quienes el Estado les debiera podían usar dicha deuda como pago por las tierras. Si nadie compraba las tierras en subasta pública, los indios que trabajaban en ellas tendrían permiso para mantenerlas como rentistas, y se verían forzados a pagar un impuesto por ellas al Estado. Incluso si el indígena pudiera comprar sus tierras, la posesión final aún recaía en el Estado, de modo que las tierras debían volverse a comprar, una vez más, pasados cinco años.

Al finalizar el periodo de Melgarejo en 1870, más de 1.25 millones de pesos en tierras se habían "vendido" a blancos y mestizos, la mayor parte de las cuales se pagó con deuda del Estado. El clamor contra las fuerzas de Melgarejo, y el hecho de que la protesta indígena fuera muy sangrienta, tuvo su impacto para terminar con esta iniciativa antes de que las tierras comunitarias pudieran confiscarse de manera efectiva, y el gobierno sucesor de hecho devolvió la mayor parte de las tierras tomadas. Pero fue el hecho de que Melgarejo se hubiera anticipado al mercado demasiado rápido lo que en verdad explica la "falla" de este modelo confiscatorio. De hecho, la demanda de tierra de las comunidades creció enormemente, de modo que, para finales de la siguiente década, el gobierno boliviano llevaría a término el programa confiscatorio de Melgarejo.

Melgarejo también completó su embestida contra la ideología mercantilista de su predecesor al abatir todos los arreglos monopolistas sobre la plata que habían sido el punto de contención clave entre los nuevos mineros de la plata y el gobierno. Durante su régimen, las compañías mineras de plata más grandes, como la empresa Huanchaca de Aniceto Arce, quedaron exentas de

pagar gravamen y se les permitió exportar su plata al mercado internacional de manera libre. Así, desde finales del decenio de 1860 y en adelante, el porcentaje de plata extraída, comprada por el Banco de Rescate (banco de compras de mineral), descendió abruptamente, y el control efectivo del gobierno en cuanto a establecimiento de precios para la producción nacional de plata terminó. Mediante estas acciones, Melgarejo satisfizo la exigencia más importante de la nueva élite minera.

El derrocamiento político de Melgarejo, en 1870, no conllevó cambios serios en ninguna de las políticas iniciadas durante sus seis años en el cargo. Aunque el nuevo régimen del general Agustín Morales (1870-1872) renegoció con desesperación algunos de los contratos más extravagantes y restituyó de manera temporal las tierras a los indígenas, en los hechos realzó las políticas generales que iniciaron con el régimen de Melgarejo. Con la apertura de las minas de plata de la costa del Pacífico, Caracoles, en 1870 —que en dos años tenía un total de capital invertido de diez millones de dólares—, y el continuo auge de la región de Mejillones, ahora había incluso mayor cantidad de fondos disponibles para el gobierno central. Esto significaba que podía permitirse emprender las reformas esenciales que el gobierno de Melgarejo, en extremo ambicioso, no estuvo dispuesto a iniciar. En 1871 y 1872, el gobierno finalmente abolió el monopolio de las compras de plata para todas las compañías, y declaró el libre mercado para el mineral. También finalizó el acuñado de las famosas monedas degradadas, que databan de la época de Santa Cruz. El Banco Nacional de Bolivia, semiprivado, creado en 1871, tenía la misión de canjear este dinero devaluado y de reorganizar la moneda nacional.

El nuevo gobierno tampoco se mostraba adverso a dar continuidad a muchos de los arreglos esencialmente corruptos en torno a préstamos comenzados por Melgarejo. El contrato con la Iglesia para establecer una compañía de barcos de vapor en los ríos de oriente finalmente recabó dos millones de libras esterlinas, de las cuales el gobierno no recibió prácticamente nada, y con el que jamás se entregó barco alguno a Bolivia. La primera concesión ferroviaria exitosa se otorgó a Meiggs y a otros capitalistas extranjeros, también en 1872, y cuando menos hubo algo de fortuna en esto.

La Nitrates and Railroad Company of Antofagasta se estableció ese año con un sólido subsidio boliviano, y comenzó la construcción de una vía férrea desde Antofagasta y los campos de Mejillones hasta las nuevas minas de plata, Caracoles. De este modo comenzó la era de la construcción del ferrocarril en la república, aunque hasta ese momento no se comenzó ninguna vía de trenes sólida que fuera al altiplano desde la costa —ruta que se convirtió en la siguiente demanda importante de los nuevos mineros de plata del altiplano.

El derrocamiento del régimen de Melgarejo en lo esencial trajo a los viejos constitucionalistas civiles de Linares —o rojos— de vuelta al poder. Mientras que el general Morales triunfó en una elección muy controlada en mayo de 1872, con la emisión de unos 14 000 votos, su aparente desorden y asesinato evitó que este gobernante, en potencia despótico, amenazara seriamente el dominio de los rojos en el gobierno. En una nueva elección, en mayo de 1873, su líder principal, Adolfo Ballivián, hijo del expresidente, fue elegido en una campaña electoral bastante libre, que registró 16 674 votos. Ballivián, una figura cosmopolita, bien educada y sofisticada, condujo con éxito a sus seguidores al poder, y fue remplazado a su muerte, por enfermedad en 1874, por el doctor Tomás Frías, el segundo líder del partido y cabeza del Congreso. Así, desde fines de 1870 y hasta 1876, el gobierno central estuvo esencialmente bajo el control de los viejos líderes del partido de Linares, quienes representaban a los elementos más avanzados del liderazgo civil del periodo.

Pero la incapacidad de los rojos para controlar al ejército y su corrupción en los contratos y negociaciones internacionales, que se distanciaban poco de las modalidades asumidas por Melgarejo, implicó que los regímenes civiles (el primero de su tipo desde la propia dictadura de Linares, y sólo el segundo episodio de régimen no militar desde la fundación de la república) no se pudieran mantener en el cargo. Estos civiles, aunque adoptaban las políticas del libre comercio, aún no se relacionaban de manera directa con la élite minera nacional. Los propietarios de minas ahora se encontraban en medio de su mayor fase organizativa y prestaban poca atención directa a la política. La

falta de apoyo de la élite y la constante corrupción debilitaron a los civiles, haciéndolos vulnerables a las maquinaciones militares tradicionales.

El general Hilarión Daza surgió, en tiempos del régimen de los civiles, como la principal figura militar de la república, a la cabeza del batallón de élite Colorado, constituido en la época de Melgarejo. Siguiendo el mismo molde de Melgarejo y de Morales, Daza derrocó al gobierno en 1876. Al tomar el poder, como era común, se encontró con una grave escasez de fondos, y saqueó a la tesorería nacional para retribuir a sus inquietos oficiales y mantenerse en el poder. De este modo, las reformas fiscales desarrolladas por los civiles al principio de la década se habían deshecho durante la segunda mitad de la década de 1870, bajo el régimen de Daza. A su vez, el colapso de la tesorería central llevó a la salvaje extravagancia de instaurar más préstamos ficticios, concesiones empresariales especiales, y mayores desvalijos al tesoro nacional a manos de especuladores extranjeros y nacionales. Todo esto provocó un ambiente potencialmente explosivo, ya que las políticas en torno a las concesiones, conflictivas como eran, y las reglas fiscales modificadas, creaban una tensa situación entre las compañías extranjeras, que operaban con el apoyo chileno en territorio costero boliviano. La situación también alentaba la creencia chilena de que los territorios de Atacama podían arrebatarse.

Así, el breve régimen civil posterior a la caída de Melgarejo trajo pocos cambios formales a las políticas gubernamentales y a la organización política nacional. Pero la satisfacción de todas las demandas básicas de la élite minera del altiplano, cubiertas por Melgarejo y sus sucesores, permitió que la élite entrara a su fase más expansiva de operaciones y reorganización. El lapso que va de 1873 a 1895 se considera la gran era decimonónica de la minería de plata del altiplano. Para finales de la década de 1870, tan sólo Huanchaca generaba mayores ingresos que el propio gobierno central. Además, todas las otras grandes compañías ahora recibían mayores insumos en la forma de capital europeo y chileno. El crecimiento de la producción minera boliviana de la época fue fenomenal, como puede verse en las estadísticas de producción. Las minas, que en el decenio de 1860 aún promediaban 344 000 marcos al año, aumentaron a un promedio de 956 000 en la década de 1870,

para luego saltar a 1.1 millones en los años de 1880 y llegar a unos 1.6 millones en el decenio de 1890. El pico de la producción de plata del siglo XIX sucedió en 1895, cuando se estima que se produjeron unos 2.6 millones de marcos.

Los propietarios de minas bolivianos no se esforzaron por garantizar el control del gobierno por la élite civil, ya que el regreso de un régimen militar bajo Daza no parecía amenazar de modo alguno sus intereses fundamentales. De hecho, Daza los apoyó al dar continuidad a todos sus proyectos principales, promover sus intereses en Chile e incluso gobernar con un parlamento civil que redactó la muy importante Constitución de 1879, la cual proveyó de una carta estatutaria liberal, básica para el gobierno nacional, y puso énfasis en el derecho a la propiedad privada. Pero la indiferencia política de la élite del altiplano no duraría mucho tiempo, ya que la propia debilidad del régimen militar llevaría a Bolivia a una guerra a gran escala con Chile, que a su vez engendraría serios problemas políticos y económicos, una vez más, para los propietarios mineros de Bolivia. La Guerra del Pacífico de 1879 parece, desde la perspectiva boliviana, casi una tragedia griega. Aunque Bolivia protestó por la expansión chilena desde el principio, había permitido, de facto, que el control de sus territorios de Atacama pasara a manos tanto de capitalistas como de trabajadores y colonizadores chilenos, desde el primer periodo de descubrimiento de guano en las décadas de 1840 y 1850. A partir de 1863, se erigieron presiones internas y externas hasta llegar a su clímax inevitable. El creciente ritmo de exportaciones de guano llevó a la ocupación militar chilena de aquel año, y al tratado de 1866, que legitimó los reclamos más extremos de Santiago. Luego se descubrieron los nitratos en la zona controlada en conjunto cerca de Mejillones, y comenzó un nuevo periodo de penetración intensiva, seguido casi de inmediato por el establecimiento del puerto de Antofagasta en 1868, con el consiguiente abandono de Cobija. A las huelgas de las minas de plata en Caracoles en 1870 les siguieron otras en la British-Chilean Nitrates and Railroad Company, en 1872. Esta compañía minera pronto controló los campos de nitrato y logró dominar los campos mineros de Caracoles, dentro del desierto, cuando terminó su vía férrea. Y como las poblaciones de los territorios costeros bolivianos se componían

principalmente de ciudadanos chilenos, la provincia era, para todo propósito, una colonia de Chile.

Las autoridades bolivianas habían permitido que se desarrollara este inusual estado de cosas debido a su necesidad de fondos y a la incapacidad de los capitalistas nacionales de desarrollar este desierto, antes vacío. Pero los líderes militares se desesperaron cada vez más, desde que habían vaciado la tesorería, y encontraron que su nueva fuente de ingresos sólo podía provenir de estos mismos centros costeros. En el altiplano, el poder de los mineros de Oruro y de Potosí evitó que el ejército aumentara sus exacciones por temor a sucumbir a una confrontación política directa, que llevaría a una destitución inmediata. Los territorios costeros, en cambio, estaban distantes y eran indiferentes a la política de las ciudades del altiplano, de modo que los generales se sentían menos inhibidos al intentar reacomodar las concesiones, o renegociar impuestos.

Fue en este contexto que en 1878 el gobierno boliviano inició un nuevo impuesto mínimo sobre los nitratos exportados por la Nitrates and Railroad Company of Antofagasta. El director inglés, con el apoyo total de los chilenos, se rehusó a pagar este impuesto "injusto" e "ilegal". Cuando las autoridades bolivianas intentaron arrestar al desobediente director, éste escapó a Chile, y cuando el gobierno anunció que confiscaría propiedades de la compañía para pagar una indemnización, los chilenos iniciaron su acción, larga y cuidadosamente planeada. En febrero de 1879, las tropas chilenas desembarcaron exitosamente en Antofagasta, en apoyo de los chilenos locales; dos días después tomaron Caracoles, y en marzo finalmente tuvieron un gran enfrentamiento con los bolivianos en el oasis de Calama. En abril se emitió una declaración de guerra formal y se dio la participación de Perú a favor de Bolivia. Pero para entonces el total de los territorios costeros, incluido Cobija, ya estaban en manos de la poderosa marina chilena. Así, a dos meses de comenzado el conflicto, Chile había tomado el total de los litorales bolivianos.

La Guerra del Pacífico sólo fue el principio, ya que los chilenos tenían el propósito de ocupar no sólo los territorios bolivianos, sino también la mayor parte de las regiones mineras costeras de Perú. Utilizando como excusa un

llamado “tratado secreto de apoyo mutuo”, acordado entre Bolivia y Perú en 1873, los chilenos, de hecho, se habían preparado para sostener una larga guerra naval con este último país. Chile deliberadamente provocó a Perú para que ayudara a Bolivia, y luego procedió a concentrar todos sus esfuerzos en la destrucción del poderío militar peruano. Al momento de la declaración formal, ya había bloqueado los puertos peruanos del sur.

Y cuando Bolivia pudo por fin congregar un ejército de 4 000 soldados y movilizarlos a la costa, los chilenos ya estaban atacando los puertos peruanos de Iquique y Tacna, y las fuerzas bolivianas, en operación conjunta con las peruanas, fueron destruidas paso a paso por las fuerzas chilenas. Para el final del año, Daza encabezaba a las tropas bolivianas en la costa peruana, pero mostró ser incluso peor general que político. Pese a todos los esfuerzos de la tropa, la miserable calidad de liderazgo del militar boliviano llevó a una derrota inevitable, ya que para entonces los chilenos tenían completo control de los mares y podían golpear a voluntad a lo largo de la costa.

Aunque el gobierno de Bolivia pensó que una invasión al altiplano era inminente después de la derrota de sus ejércitos principales a finales de 1879, los chilenos no tenían intención de cruzar los Andes. Eran totalmente indiferentes al altiplano boliviano, y reconocían que una campaña en el corazón de este país sería un asunto amargo y muy costoso, y pocos los beneficios. De este modo los bolivianos, en su mayor parte, se volvieron socios menores de los peruanos, y esencialmente espectadores pasivos de la contienda masiva llevada a cabo en Perú. La sorpresa de la guerra, la total falta de preparación de sus soldados y las desastrosas campañas de Daza como líder militar llevaron a un amplio descontento popular. En diciembre de 1879, tanto los ciudadanos de La Paz como las tropas de la costa peruana se insurreccionaron contra el gobierno y destituyeron a Daza.

Después de intensas negociaciones, los líderes rebeldes finalmente acordaron designar a Narciso Campero como nuevo presidente. Fue el único general que no había participado en ninguna de las actividades rebeldes y, sin reservas, el mejor capacitado del ejército boliviano. Con gran renuencia Campero tomó el cargo en enero de 1880, y concedió dirigir a la nación en su continua lucha contra Chile. Campero, ingeniero educado en St. Cyr, en

Francia, y en otros importantes centros militares europeos, estaba totalmente comprometido con la eliminación de los peores aspectos del gobierno militarista y con el establecimiento de un régimen civil estable. Rápidamente se deshizo de lo peor de entre los viejos oficiales, atrajo al calificado general liberal Eliodoro Camacho para apoyar sus esfuerzos e inmediatamente convocó a sesión a un Congreso especial para darle apoyo.

El hecho de que el Congreso de 1880 incluyera entre sus miembros no sólo a cada uno de los líderes políticos importantes del país, sino también a propietarios de minas como Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, indicaba el fin de la indiferencia de la élite minera del altiplano ante la política nacional. La Guerra del Pacífico había interrumpido sus cercanos vínculos tradicionales con el capital chileno, así como sus exportaciones, y los forzó a reconocer que sus intereses a largo plazo ahora requerían de la instauración de un gobierno estable y financieramente sólido. De igual manera, la industria pronto encontraría que su expansión dependía de la creación de una moderna infraestructura en comunicaciones, percibida en ese momento como necesidad fundamental para un futuro crecimiento de la minería. Sólo un régimen políticamente estable y económicamente viable, se creía, podía proveer el financiamiento para carreteras y ferrocarriles, ahora que la riqueza quimérica de la costa del Pacífico se había perdido para siempre. El descrédito de los viejos líderes militares, el desastre de la estructura financiera estatal que había llevado directamente a la costosa guerra y la pérdida de todos los centros costeros productores de riqueza se combinaban para forzar a los mineros y a la élite del altiplano a participar en la política de manera directa. El desastre de la Guerra del Pacífico destruyó el poder del ejército y también otorgó a los políticos civiles la justificación que necesitaban para, por último y de manera efectiva, hacer que la estructura política nacional entrara en algún tipo de relación coherente con la naturaleza cambiante de las economías de exportación y urbana. El resultado fue el final de la era de los regímenes de caudillos militares y el principio de una moderna estructura parlamentaria con participación política limitada, dominada por civiles. De este modo, unos 55 años después del

establecimiento de un gobierno republicano autónomo, Bolivia finalmente entraría a la era del clásico gobierno civil decimonónico.

6. LAS ERAS DE LA PLATA Y EL ESTAÑO, 1880-1932

El año 1880 fue un punto de inflexión importante en la historia de Bolivia. Para los contemporáneos, el suceso más dramático de este año fue la absoluta derrota de las armas bolivianas a manos de los invasores chilenos y la pérdida total de su territorio costero durante la Guerra del Pacífico. Un suceso menos drástico pero de importancia semejante fue la instauración de un nuevo gobierno para remplazar al régimen caudillista previo. Aunque la sustitución de gobiernos mediante golpes militares fue un rasgo común de la vida política en la república desde su creación, 55 años antes, el nuevo gobierno en efecto señaló un cambio fundamental en los procesos políticos nacionales. Representaba el primer gobierno republicano viable, de naturaleza civil oligárquica, que se volvería la norma en la vida política hasta 1934. Aunque la pérdida de su acceso directo al mar seguiría siendo el más intransigente de los problemas internacionales de Bolivia de 1880 hasta el presente, la instauración de un sistema moderno de partidos políticos y de un gobierno dominado por civiles ocasionaría cambios a largo plazo en lo político, lo económico y, finalmente, incluso en lo social y lo cultural en la sociedad boliviana, modificaciones que determinarían profundamente su evolución histórica.

La estabilización y maduración fundamentales de la política boliviana después de 1880 no fueron resultado de la guerra con Chile, sino más bien de los cambios esenciales en la economía boliviana comenzados cuando menos 30 años atrás. Iniciando aproximadamente a mediados del siglo, la industria minera de la plata había interrumpido casi medio siglo de depresión y dado pie a una reorganización a gran escala. Dicha reorganización incluyó la

introducción de capital a la minería en la forma de maquinaria moderna, la consolidación de muchas compañías mineras, y la liberación del control gubernamental de la producción y el acuñado. Todos estos sucesos llevaron un tiempo considerable, ya que la mayor parte del capital se generaba internamente, y se debió constituir una nueva generación de técnicos para desarrollar la industria. Para las décadas de 1860 y 1870, las minas bolivianas alcanzaban ya estándares mundiales en términos tanto de producción como de tecnología. Esto, a su vez, llevó a mayores necesidades de capital y a una apertura de la minería del altiplano a capital chileno y europeo.

La nueva élite minera, después de haberse organizado inicialmente en lo político para romper el monopolio gubernamental de las ventas de plata al extranjero, y forzado a que hubiera compras locales, comenzó a operar como un grupo de cohesión afín, para lograr que hubiera un gobierno incluso más maleable ante sus intereses. Éstos se centraban principalmente en crear gobiernos estables, que ayudaran a financiar los vínculos ferroviarios vitales, tan desesperadamente requeridos por los propietarios de minas. Como alcanzaron un nivel de producción total al mismo tiempo que comenzaba un descenso a largo plazo en el precio de la plata en el mercado mundial, la nueva élite se vio constantemente forzada a reducir los costos y a aumentar la productividad. Con este fin se incrementó el uso de maquinaria y electricidad y, sobre todo, la mecanización del transporte.

En tanto que la mecanización de las minas y su electrificación serían la preocupación exclusiva de los mineros bolivianos, los problemas en torno al transporte estaban más allá, incluso, de sus recursos. Con todo, el costo se había vuelto un obstáculo mayúsculo para la continua expansión boliviana. Por esta razón, los subsidios gubernamentales y el financiamiento internacional eran imperativos, y sólo un gobierno estable, reactivo a sus necesidades, podía proveer a los propietarios mineros de aquello que deseaban. Para ellos la guerra fue un choque terrible, con el que deseaban terminar tan pronto como fuera posible, y volverlo un punto de ventaja para Bolivia. Con vínculos estrechos con sus nuevos contrapartes capitalistas chilenos, consideraban que la guerra era una ruptura fatal con sus fuentes de nuevo financiamiento, así como una seria perturbación al comercio

internacional. También culparon a la incompetencia de los regímenes militares previos de ser la causa principal de la guerra. La consecuencia final fue que los mineros crearon un poderoso partido por la paz y apoyaron con todas sus fuerzas al iluminado general Campero, que había ayudado a destituir al régimen militar de Daza en diciembre de 1879.

A partir de ahí buscaron una rápida conclusión del conflicto con Chile, así como una indemnización por los territorios perdidos, para destinarse exclusivamente a la construcción del ferrocarril. Para lograr estas metas crearon un partido político formal, conocido como Partido Conservador. Erigido en el mismo tenor que otros movimientos semejantes, presentes en el continente, el Partido Conservador de Bolivia, de hecho, no se conformó con el molde tradicional. Mientras que en lo formal defendían los intereses eclesiásticos, la preocupación principal de los conservadores era la creación de un poderoso régimen parlamentario, una presidencia civil, un gobierno dedicado a dar apoyo irrestricto a la construcción de una infraestructura para la comunicación. Dado el papel de la Iglesia boliviana como institución débil y, además, apolítica, se desarrolló en Bolivia un poderoso y coherente movimiento anticlerical. De este modo los conservadores, a diferencia de la mayoría de sus contrapartes contemporáneos en América, entablaron pocos ataques contra las reformas liberales anticlericales, y concentraron todas sus energías en la modernización política y económica de Bolivia. El desarrollo de un moderno sector de exportación tuvo un gran efecto sobre la estructura social, así como política y económica, de la nación. El crecimiento de las minas de Oruro y Potosí creó nuevas demandas de alimentos y mano de obra y, en consecuencia, unos dos millones de bolivianos se vieron profundamente afectados por los cambios. Un dinámico empuje se originó en el área de la agricultura comercial; la apertura de vías ferroviarias creó nuevos mercados para zonas hasta entonces aisladas.

Todo este crecimiento significó que el sistema de haciendas, que como la minería había sido restringido durante casi medio siglo, pudo recuperarse y extenderse. Al mismo tiempo, la mengua en la importancia del impuesto per cápita indígena, en algún momento fuente principal de ingresos gubernamentales, significó que el gobierno nacional ya no tuviera un interés

particular en la protección de las comunidades libres en sus tierras. En tanto que los títulos de propiedad de la tierra de estas comunidades habían sido cuestionados ya para el periodo de Melgarejo, en la década de 1860 la resistencia indígena había anulado el ataque, y las comunidades habían mantenido su control efectivo sobre las tierras. Pero para el decenio de 1870, blancos y cholos aumentaban la presión, y los nuevos mercados urbanos y de los campamentos mineros ofrecieron el incentivo económico para que la élite terrateniente emprendiera un nuevo ataque a gran escala. Al aceptar la conveniente tesis de que las comunidades representaban un sistema anacrónico de tenencia de la tierra, así como una barrera para la integración social y el crecimiento económico moderno, la élite utilizó clásicas ideas liberales decimonónicas ante la necesidad de un campesinado libre, propietario directo de la tierra. Forzaron un sistema de compra directa de la tierra sobre las comunidades en la década de 1880, en el que los títulos de propiedad eran individuales y no corporativos. La creación de un campesinado indígena individual, que poseyera derechos de propiedad *de jure*, otorgó a los hacendados el poder de fraccionar el control que de facto tenían las comunidades al comprar unas cuantas parcelas pequeñas y destruir, con esto, la cohesión de la comunidad. El resto era simple; el fraude y la fuerza eran tan comunes como una compra simple, y pronto hubo una enorme expansión de las haciendas a lo largo del altiplano y de los valles subpuna adyacentes, a costa de las propiedades indígenas tradicionales.

El ataque de Melgarejo sobre las comunidades en 1860 se había fundamentado en estas mismas ideas liberales, pero las décadas de 1870 y 1880 fueron un periodo que permitió nuevo capital para hacer efectivo ese ataque. De este modo, de 1880 a 1930 Bolivia tuvo una segunda gran época de construcción de haciendas. Aún en posesión de la mitad de la tierra, y representando alrededor de la mitad de la población rural en el decenio de 1880, las comunidades se redujeron a menos de una tercera parte de tierras y población para 1930. El poder de las comunidades indígenas libres fracasó en definitiva; sólo la marginalidad de las tierras que aún mantenían y el estancamiento de la economía nacional después de la década de 1930 evitaron su completa liquidación.

Esta disminución progresiva de la comunidad implicó la pérdida no sólo de la propiedad de las tierras, sino también de cohesión social. En tanto muchas de las haciendas habían recreado la organización política y social de los gobiernos de la comunidad libre, los ayllus hacendarios a menudo no tenían el poder para proteger a sus miembros de la expulsión de las estancias. Además, la necesidad de mano de obra en éstas era menor de lo que habían exigido las excomunidades libres. La consecuencia fue una mayor disolución de las normas sociales indias, migración a las ciudades y expansión de las poblaciones mestizas, urbanas y rurales. Lo único que obstaculizó la destrucción total de la cultura indígena fue el constante aumento de las poblaciones campesinas indígenas a lo largo del siglo XIX. Aunque una serie de epidemias sucedidas a mediados del siglo habían detenido dicho crecimiento, la desaparición de enfermedades contagiosas, tales como el cólera, para la última cuarta parte del siglo, permitió la permanencia constante de tasas de crecimiento sólidas. Además, la ausencia de educación pública en las zonas rurales antes de la década de 1930 significó que las lenguas de las zonas rurales, para todas las clases y grupos, fueran aún las indígenas.

Bolivia persistió como nación predominantemente campesina, rural e indígena hasta muy entrado el siglo XX, pese al crecimiento de un moderno sector de exportación, a la drástica expansión de las haciendas, e incluso al crecimiento de centros urbanos modernos. Se calculó, en el censo de 1846, que la población indígena representaba 52% de la población nacional; para 1900 aún era 51% del total. Incluso si definiéramos lo urbano de manera amplia, para 1900 Bolivia todavía contaba a 73% de su población como rural. Por último, el español no sólo era una lengua hablada por la minoría en la república, sino que la tasa de analfabetismo, aun entre hablantes de español, era en extremo alta. Teniendo como base a la población de siete años o más, en 1846 se calculaba que sólo 10% habían sido escolarizados, cifra que aumentó a tan sólo 16% para 1900. Si acaso, estas cantidades probablemente exageran las tasas de alfabetización verdaderas para el periodo.

Así, los gobiernos republicanos establecidos después de 1825 se erigieron sobre la base de un pequeño porcentaje de la población nacional, y para todo

propósito sólo representaban a las personas alfabetizadas hablantes de español de la república; en el mejor de los casos, sólo a una cuarta parte de la población nacional. Dado el requisito de saber leer y escribir para ejercer el voto, así como las restricciones financieras para ocupar un puesto, el régimen boliviano era, en toda la extensión de la palabra, un sistema político de participación limitada, con una base electoral que oscilaba entre 30 000 y 40 000 personas a lo largo del periodo, y hasta 1900.

En términos de las masas campesinas indígenas, no hubo nada democrático o participativo en torno a los gobiernos republicanos después de 1880. En este sentido, los regímenes de entonces fueron más explotadores que los caudillistas previos, cuando menos debido a que la expansión económica de la élite blanca siempre se dio a costa de los indígenas, ya fuera que se trataba de mineros o de agricultores con tierras. Tampoco hubo disputa alguna en torno a esto entre la élite, profundamente preocupada por mantener a las masas indígenas fuera del ámbito de la política, a la vez que se les negaba acceso a las armas o a cualquier otro medio de protesta eficaz. El ejército, en especial después de su profesionalización y modernización, se volvió una herramienta indispensable para mantener la sumisión de los indios, y se le convocaba para suprimir los periódicos levantamientos indígenas.

La élite se dividió en partidos políticos, e incluso recurrió a las armas para derrocar gobiernos. Pero tales actos de conflicto y violencia quedaban muy circunscritos, y se trataba, en gran medida, de problemáticas urbanas e intraclase. Los llamados de la élite a los grupos que no pertenecían a ésta, y que no hablaban español, eran en extremo raros. La vida política del periodo de 1880 a 1934 sucedía preponderantemente sin reglas definidas de manera estricta. Sólo en una ocasión, en 1899, se permitió que los campesinos indígenas participaran temporalmente en un conflicto político nacional. Esta intervención terminó en la total supresión de los líderes indios; para las masas rurales indígenas, la expresión política se confinaba al grupo tradicional de ancianos, o a los líderes temporales de revueltas, que encabezaban sus “guerras de castas” conservadoras. Se trataba de levantamientos circunscritos a pequeñas comunidades, de naturaleza exclusivamente defensiva, que protestaban ya fuera por el aumento en la explotación o por ataques a sus

derechos sobre la tierra. Hasta muy entrado el siglo XX, la política era preocupación exclusiva de sólo 10 a 20% de la población nacional, incluso como observadores participantes —ni hablar de intervenir como actores formales.

El impacto del cambio económico sobre la vida política y social de la nación también tuvo una contraparte en la cultura nacional. La vida cultural durante la temprana república fue un aspecto muy devaluado de la existencia nacional. El aislamiento social e intelectual, consecuencia de la independencia, tuvo su impacto sobre el pensamiento y la actividad de las élites, del mismo modo que el colapso de los grandes centros de riqueza redujo el subsidio para el arte popular, que tanto había florecido en el periodo colonial.

Aunque se habían instituido nuevas universidades durante las primeras décadas del siglo, la Universidad de San Francisco Xavier, en Sucre, continuó siendo el centro intelectual dominante de la nación. Pero los estudiantes de Chile y de Río de La Plata ya no acudían a estudiar, aunque los campos principales de estudio en la universidad aún eran los tradicionales: teología y derecho. Además, la pérdida de los cuadros metropolitanos, en combinación con el descenso general del comercio y los contactos internacionales de Bolivia, implicaron la ausencia de estímulo europeo inmediato. Ahora Bolivia recibía las tendencias europeas mediante el filtro de la experiencia de sus vecinos americanos. Durante las primeras décadas del siglo, Bolivia retrocedió a un nivel de actividad intelectual mucho menos intenso y cosmopolita que durante cualquier otro momento de su historia.

Hubo, por supuesto, algunas excepciones a este patrón, pero se trató de individuos aislados, educados en el extranjero, que escribieron sus obras fuera de Bolivia o que trabajaron dentro del país en un medio totalmente desierto. Igualmente, sólo unos cuantos intelectuales extranjeros distinguidos, como José Joaquín de Mora, Bartolomé Mitre y Ramón Sotomayor Valdés, escribieron poemas, novelas, historias u otras obras literarias significativas durante su estancia en Bolivia. Hubo, por supuesto, una activa literatura panfletaria que trataba temas políticos o económicos del momento, pero pocos mostraron una originalidad sobresaliente o bien tuvieron un impacto

efímero. La única excepción a este escenario general en la cultura no popular, previa a 1880, fue José María Dalence, cuyo trabajo estadístico sobre la sociedad nacional sin duda le hace merecedor del título de Padre de las Ciencias Sociales de Bolivia. Sus esfuerzos hacia la reconstrucción sistemática de la estructura social y económica de la nación en la década de 1840 fueron únicos, y la inteligencia y sofisticación de su obra lo señalan como analista social a la par de los últimos desarrollos europeos.

En el área de la literatura y las artes se logró poco. La primera novela escrita por un boliviano no apareció sino hasta la década de 1860, y las primeras revistas literarias, efímeras, a finales de dicha década y principios de la siguiente. Los críticos nacionales consideran que la poesía y el teatro de la época fueron de la menor calidad. La única excepción fue la obra de Nataniel Aguirre, considerado uno de los novelistas más importantes de Bolivia del periodo moderno. Aunque Aguirre comenzó su educación formal y elaboró sus primeros escritos antes de 1880, su obra más importante apareció posteriormente.

Después de la década de 1880, la vida intelectual revivió bajo el impacto combinado de un gobierno civil estable, un aumento en la riqueza nacional, la profesionalización de las ocupaciones y el establecimiento de planes de estudio modernos en las escuelas. Los escritores en lo individual encontraban grupos de pares, mientras que las personas de familias acomodadas tenían una amplia oportunidad de escribir y vivir en el extranjero, y de participar en lo último de las culturas latinoamericana y europea. Así, el poeta boliviano Ricardo Jaimes Freye se unió a Rubén Darío en Buenos Aires, y fue una poderosa voz del movimiento modernista que copó a las letras latinoamericanas y españolas. Un escritor de talla nacional, como Gabriel René Moreno, destacado historiador boliviano, encontró empleo en las bibliotecas y archivos de Chile, y un novelista y ensayista como Alcides Arguedas, que vivía en París, se volvió famoso en América debido a su nuevo enfoque realista en la literatura. Dado el incremento del ritmo en la producción escrita de poesía, literatura y de las humanidades en general, los bolivianos llamaron a los escritores que llegaron a su madurez en este periodo la “generación de los ochenta”. Se trató de la primera generación de

las letras republicanas, que fungió como base importante sobre la que se desarrollarían todos los sucesos culturales posteriores. El periodo entre 1880 y 1920 fue, de varias maneras, una época de oro de la literatura nacional.

En las ciencias, sin embargo, la estructura tradicional de las universidades nacionales limitó cualquier avance formal. Pese a que Bolivia contaba con adelantos tecnológicos en minería tanto como cualquier nación del mundo para la década de 1880, toda su maquinaria y sus técnicos eran importados. Algunos ingenieros extranjeros, educados en las mejores escuelas europeas y de Estados Unidos, montaron tecnología de punta en plantas y minas, pero había muy pocos ingenieros nativos, y no se hicieron descubrimientos significativos en Bolivia, ni siquiera en metalurgia. El problema con lo que los bolivianos llamaban las "ciencias exactas" era la falta total de infraestructura. Los bajos presupuestos y el hecho de tener maestros sólo de tiempo parcial evitaron que se crearan laboratorios científicos o se emprendiera una investigación sistemática. Mientras que los novelistas, humanistas y científicos sociales podían provenir de las profesiones tradicionales de derecho, teología y medicina, esto no sucedía para las ciencias o la tecnología. Aunque los bolivianos capacitados que laboraban en el extranjero participaron en el desarrollo de la ciencia moderna en los países avanzados, hasta ese momento Bolivia se habla mantenido como un país importador de ciencia y tecnología.

En las artes plásticas, el estancamiento económico y el concomitante declive de la Iglesia católica durante las primeras décadas del siglo XIX pusieron fin a la gran era de actividad artística creativa del periodo colonial. La eliminación del diezmo que hizo Sucre, así como la confiscación de ingresos y propiedades de la Iglesia, impusieron un alto a la edificación de iglesias. Así, tras haber terminado el patrocinio a la Iglesia y a los ciudadanos piadosos con recursos, la demanda de pinturas y esculturas también menguó. La Iglesia decimonónica, de igual modo, se volvió menos tolerante con el catolicismo popular, más tímida en cuanto a su aceptación de los estilos artísticos indígena y mestizo, y archiconservadora en su gusto artístico general. Así, cuando sus ingresos volvieron a ser significativos, tras la victoria de los conservadores, y se retomó la construcción de iglesias, los

clérigos y la élite blanca rechazaron la rica herencia artística colonial y adoptaron de manera servil los modelos europeos más reaccionarios. La consecuencia fue el estancamiento de las artes plásticas bolivianas durante la mayor parte del siglo XIX, así como la eliminación de los artesanos indígenas y cholos de cualquier participación relevante en la vida cultural de la nación.

Como se ha visto, el crecimiento del sector de exportación boliviano durante la segunda mitad del siglo XIX, y en especial después de la década de 1880, tuvo aspectos tanto positivos como negativos en términos de la vida política, social y cultural de la nación. Por primera vez en su historia republicana, el comercio internacional proveía a Bolivia de excedentes constantes y abasteció al gobierno nacional de recursos financieros estables y cuantiosos. Pero el crecimiento también tuvo algunos efectos inquietantes sobre la economía nacional; el crecimiento de la plata no sólo revivió a los centros urbanos, estimuló a la economía hacendaría y reorganizó el espacio económico interno de la sociedad, sino también hizo que la economía boliviana fuera más vulnerable ante las fuerzas económicas internacionales. Tanto los importadores de bienes manufacturados, que pagaban sus compras con divisas obtenidas de las exportaciones de minerales, como el gobierno, que se había vuelto totalmente dependiente de sus impuestos sobre el comercio internacional, participaban ahora de manera íntima de las fortunas del sector de exportación. Este sector, a su vez, se volvió más vulnerable a las fluctuaciones de la demanda internacional conforme conseguía mayores éxitos. Así, el gobierno, los propietarios de minas y la élite nacional estaban sujetos a las limitaciones internacionales, que creaban problemas de estabilidad sobre los que tenían poco control.

En términos de un economista, Bolivia era el ejemplo clásico de una economía abierta. Ya que el grueso del poder adquisitivo interno provenía del sector minero, el país quedaba muy vulnerable a los cambios en los precios de sus exportaciones primarias. Además, hasta finales del siglo XX, aun en el sector minero se trataba de una economía dominada por un metal; para 1900 este metal fue la plata; desde entonces y hasta los años ochenta, el estaño, y de ahí hasta finales del siglo XX, el zinc. De este modo, las modificaciones al precio mundial tuvieron un impacto directo e inmediato sobre la economía

local. Se podía eliminar a poderosas élites regionales de un día para otro debido a cambios abruptos en los precios internacionales, con el consecuente trastorno del cimiento mismo de la élite gobernante. Los bolivianos aprendieron a vivir con esta incertidumbre e intentaron responder con presteza a los nuevos incentivos en cuanto a precios. Pero las salvedades en cuanto a los recursos naturales imponían límites a sus respuestas, al tiempo que prometían que el progreso económico a largo plazo no era inevitable para la nación en su conjunto.

Esta incertidumbre explica gran parte del comportamiento de los propietarios de minas, quienes fueron líderes políticos predominantes en la época posterior a 1880. De cara a una caída en los precios mundiales, así como a los límites de su propio capital, tomaron el control del gobierno y condujeron sus esfuerzos unánimes hacia la disminución de los costos de transporte, el elemento más caro del proceso minero. Esto implicó que los mineros desearan un gobierno civil estable, cuyos recursos fiscales pudieran destinarse a la construcción ferroviaria. Los mineros y sus aliados tuvieron éxito en esta meta, aunque al final el colapso del mercado mundial de la plata los llevaría a su propia caída.

Era necesario contar con el apoyo de partidos políticos formales para crear el sistema político que la élite minera deseaba, y éstos se crearon durante los debates en torno a la Guerra del Pacífico. Los mineros tomaron una postura pacifista prochilena desde los primeros días de la guerra, y se agruparon en torno a dos figuras clave: Mariano Baptista, abogado de las compañías mineras, y Aniceto Arce, propietario de minas y el productor más grande del país. El grupo antichileno, contrario a la paz, unió fuerzas con el popular coronel Eliodoro Camacho, líder de la revuelta contra Daza y relevante teórico liberal.

La puesta a prueba de la viabilidad de estos partidos sucedió durante las elecciones de 1884. El general Narciso Campero, que había encabezado el disminuido esfuerzo de la guerra boliviana después del derrocamiento de Daza, terminó su periodo en el cargo, estableció un Congreso viable e incluso hizo que entrara en vigor, en 1880, la Constitución escrita en 1878. Al supervisar una elección por completo libre, el régimen de Campero fue capaz

de ofrecer suficiente estabilidad como para crear dos partidos coherentes. Quien por último ganó la elección, después de que fuera necesario un segundo conteo a cargo del Congreso, fue el minero disidente Gregorio Pacheco, el segundo productor de plata más importante de Bolivia. Con Mariano Baptista como su vicepresidente, Pacheco inició la época que los bolivianos han llamado la "era de la oligarquía conservadora", que duró de 1884 a 1899. Durante este periodo ambos partidos se definieron de manera integral, en tanto que el gobierno se concentró en lograr un acuerdo con Chile y promover la construcción de una red ferroviaria.

Sin embargo, aunque Pacheco prometió neutralidad ante las elecciones de 1888, el régimen conservador apoyó a Aniceto Arce. Una consecuencia fue que las elecciones de 1888 se volvieran un suceso violento en el que los liberales, amargados, finalmente se abstuvieron de participar. Así, se volvió a recurrir a la violencia en la política para finales de la década de 1880. Este regreso a la violencia se hizo inevitable debido a que todos los gobiernos subsecuentes se rehusaron a ceder la presidencia al partido opositor. Una vez en el cargo y cercanos a la única fuente importante de ingreso, además de la minería y de las haciendas, los políticos se rehusaban a entregar su botín usando cualquier vía, electoral o democrática. La votación en todas las elecciones estaba abierta y era controlada diligentemente por personas designadas por el gobierno central en todos los distritos locales, de manera que las elecciones presidenciales y las curules se obtenían con facilidad. Cada partido en el gobierno aseguraba tener mayoría en el Congreso, pero permitía una representación sustancial de todos los partidos de oposición como válvula de escape fácilmente soportable, que no amenazaba seriamente el control que ejercía sobre los cargos. No obstante, la presidencia debía controlarse a toda costa, incluido el fraude. Esto implicó que a lo largo del periodo de las eras conservadora y liberal la violencia política fuera endémica. Pero debe subrayarse que esta violencia en lo general fue controlada por los civiles de algún partido, se limitó claramente a un medio urbano y de élite, e involucró poco derramamiento de sangre.

Dado el hecho de que los procesos democráticos parecían estar en juego en todo momento, la violencia también tendía a limitarse a periodos posteriores

a alguna derrota electoral y legítima, cuando un partido de oposición y la mayor parte del público votante sentían que el gobierno había violado sus derechos. Las revueltas tendían a seguir el ritmo de los cambios en los periodos presidenciales, y mientras que la tradición de los golpes de Estado continuaba como parte del paisaje político, no representaba necesariamente la ruptura del poderoso régimen civil, ni el surgimiento de la anarquía social. Aunque comentaristas posteriores acostumbraban contabilizar la enorme cantidad de revueltas que tenían lugar durante este periodo, y llegaron a suponer que había alteración total, de hecho el periodo que va de 1880 a 1936 fue de notable continuidad y estabilidad, a pesar del recurso periódico a una violencia limitada.

El régimen de Aniceto Arce (1888-1892) representó el periodo más espectacular de gobierno conservador. Arce aplastó un gran levantamiento liberal, luego llevó a cabo un importante programa de construcción de carreteras e inició el vínculo ferroviario desde el puerto chileno de Antofagasta, primero a Uyuni, luego a Oruro, y que eventualmente llegaría hasta la ciudad de La Paz en 1917, dando acceso a Bolivia al mar por ferrocarril, por primera vez en su historia. Arce también fundó una academia militar y profesionalizó al ejército de manera sistemática. Adoptó la práctica, ahora común, de permitir que hubiera representación liberal en el Congreso, pero les negó el acceso a la presidencia. El resultado fue otra elección fraudulenta en 1892, de la que resultó presidente Mariano Baptista, el ideólogo del Partido Conservador.

Como sus antecesores, Baptista (1892-1896) se concentró en la construcción del ferrocarril. También firmó un tratado preliminar de paz con Chile, y se concentró en el desarrollo de los recursos naturales de caucho en los territorios de Acre. A su vez, Baptista entregó el gobierno al último de los oligarcas conservadores, el propietario de minas Sergio Fernández Alonso (1896-1899). No obstante, para este momento el poder del régimen conservador, firmemente atrincherado en las zonas mineras de plata sureñas y en la ciudad de Sucre, se erosionaba progresivamente debido al colapso de los precios de la plata en el mercado mundial. De la misma manera, los liberales encontraban que su poder aumentaba de manera progresiva,

conforme se asociaban más íntimamente con las clases profesionistas urbanas de La Paz, y con grupos no relacionados con la minería de la plata, sobre todo los nuevos mineros del estaño, concentrados en desplazar a la vieja oligarquía. El surgimiento de la producción de estaño como industria principal de Bolivia después de la década de 1900 tuvo sus orígenes en los sucesos de la era conservadora. La gran época de la moderna industria minera de la plata había sido escenario de la obtención de lo último en tecnología, desde la utilización de herramientas eléctricas y de la electricidad misma hasta la contratación de ingenieros innovadores. Al mismo tiempo, los magnates de la plata y sus regímenes conservadores habían construido una muy importante red ferroviaria que conectaba a las regiones mineras con la costa del Pacífico.

Cuando la plata colapsó en el mercado internacional, fue posible transferir la tecnología y los medios de transporte a otros minerales. En este caso, una expansión fortuita de la demanda mundial de estaño para enlatados, así como para una variedad de nuevos usos industriales, junto con el agotamiento de las minas de estaño europeas tradicionales, permitieron que Bolivia capitalizara sus recursos y respondiera veloz y eficazmente a la demanda internacional. El estaño había sido un importante derivado de la minería de la plata desde las primeras épocas, pero el costo de enviarlo en bruto a fundiciones europeas siempre había sido prohibitivo, principalmente debido a los primitivos sistemas de transporte bolivianos. La disponibilidad de transporte ferroviario barato, por primera vez en la historia nacional, implicó que de pronto se volviera provechoso para Bolivia embarcar este mineral. De igual modo, el hecho de que el estaño estuviera exactamente en las mismas zonas mineras que la plata, y a menudo precisamente en las mismas minas, significó que existía una relativa dislocación en términos de los enclaves mineros tradicionales o de las redes de transporte.

La transición de la plata al estaño fue relativamente sencilla, tanto para la economía como para la sociedad boliviana; lo fue menos para la élite tradicional. En primer lugar, el crecimiento de la minería de estaño tuvo un efecto de auge súbito, ya que la producción se elevó, de niveles mínimos a exportaciones masivas, en menos de diez años. Además, en tanto que las

zonas mineras generales eran las mismas, hubo un giro en el énfasis, sutil pero importante, hacia el norte, ya que las minas del norte de Potosí y del sur de Oruro desempeñaron un papel dominante en la producción. Por último, la transformación fue tan súbita y el capital invertido en activos fijos tan copioso, que muchos de los tradicionales mineros de la plata encontraron difícil mudarse al estaño. El resultado fue que gran parte de la élite de los magnates tradicionales de la plata no realizaron la transición, una plétora de compañías extranjeras entraron en el mercado y surgió un nuevo grupo de empresarios bolivianos que se incorporaba por primera vez a la escena nacional.

Todos estos cambios crearon una ruptura importante en el medio político nacional. La vieja élite, atrincherada en Potosí y su ciudad de apoyo, Sucre, se vio cada vez más incapaz de suprimir la creciente popularidad de los liberales en la oposición. A la vez, el enorme crecimiento de La Paz, que ahora se había convertido en el centro de servicio clave para la nueva industria minera del estaño, acentuó aún más su dominio en la economía nacional y en la vida social. Esto llevó a una revuelta combinada, liberal y regionalista, en 1899, por la que la élite de La Paz, en gran medida liberal, suplicó por un régimen federalista local, así como por el derrocamiento de los conservadores.

La revuelta de 1899 (que duró de diciembre de 1898 a abril de 1899) encontró aislados a los rebeldes de La Paz, con pocas armas y amenazados por un ejército nacional bien equipado, encabezado por el presidente Alonso. Los liberales fueron más allá de las reglas tradicionales del conflicto entre élites y exhortaron a las masas campesinas indias a participar. Bajo el liderazgo del principal líder aymara, Pablo Zárate, *Willka,* de Sicasica, se levantó un ejército indio entre los campesinos del Departamento de La Paz. Esta fuerza campesina pobremente armada sirvió de pantalla defensiva para las fuerzas liberales y sufrió pérdidas importantes; asimismo, permitió que los liberales construyeran una fuerza de lucha efectiva. Pero los indios también tenían su propia agenda, y en dos comunidades, Mohoza y Peñas, tomaron tierras en disputa y comenzaron a masacrar a personas blancas locales. La movilización india se dispersó de La Paz hacia Oruro, Cochabamba y Potosí,

representando la actividad militar india más grande desde la época de Túpac Amaru. Pero cuando los liberales derrocaron al ejército de Alonso, no sólo abandonaron el federalismo, ya que La Paz se volvió la capital de facto de la nación, sino que también enviaron tropas a desarmar a los indios y a aprisionar a sus líderes, suprimiendo con violencia la movilización india.

De este modo, el nuevo siglo comenzó con el surgimiento de un nuevo partido político y con la creación de una nueva industria minera. En muchos sentidos, el régimen liberal que siguió al conservador difirió en pocos aspectos fundamentales; ambos se comprometieron con un importante subsidio gubernamental al transporte, apoyo para la industria minera y desarrollo y modernización de sus centros urbanos; ambos regímenes buscaron activamente la destrucción de las comunidades indias y la expansión del sistema de haciendas, al tiempo que todos los gobiernos mostraron indiferencia ante la cuestión de la Iglesia, problemática prominente en la mayor parte de los otros Estados latinoamericanos durante este tiempo.

En la era liberal, los viejos patrones de participación política persistieron; aunque las elecciones para el Congreso permanecieron relativamente libres, las de la presidencia serían controladas, con el correspondiente recurso a la violencia limitada como el único medio para "sacar" a los políticos y lograr acceder al poder ejecutivo. Una prensa abierta, libertades civiles para blancos y mestizos y una vida intelectual boyante para la élite fueron todos aspectos que se conservaron en la nueva época liberal. Pero surgió entonces un nuevo tipo de liderazgo político. Reflejo de las complejidades de la nueva época, los mineros del estaño estaban demasiado involucrados en sus propios temas como para participar de manera directa en la vida nacional. Mientras tanto, el apoyo sistemático a la educación y profesionalización por parte de los conservadores finalmente había creado un sector de abogados en cantidad y con experiencia suficientes para administrar los asuntos del gobierno.

Así nació lo que los analistas políticos posteriores llamarían la "rosca", aludiendo a un gobierno de políticos profesionales que operaban principalmente a favor de los importantes barones del estaño de la nación. Los grupos de poder económico ya no debían intervenir directamente en el proceso político para lograr sus fines; esto fue esencial para los líderes locales

del estaño, ya que les permitió concentrarse por completo en una intensa y competitiva lucha por el dominio sobre las minas bolivianas de este mineral. Dado el hecho de que para las minas no había restricciones a la inversión foránea, y que Bolivia estaba abierta a todo tipo de empresarios e ingenieros extranjeros, al principio mismo de su expansión por el estaño, resulta sorprendente notar que los propios bolivianos surgieran como los propietarios mineros dominantes después de tres décadas de intensa competencia. Al principio algunos capitalistas europeos, estadounidenses e incluso chilenos compitieron contra capitalistas bolivianos por el control del sector minero del estaño; se establecieron cientos de compañías, muchas de ellas incluso trabajando en la misma montaña-yacimiento; sin embargo, a pesar de la competencia de todos estos poderosos y bien dotados opositores, los capitalistas locales se transformaron en el grupo que controlaría la industria en los años veinte.

De entre los tres líderes principales surgidos de esta coyuntura, el más poderoso sin duda fue Simón I. Patiño. Nacido en el valle de Cochabamba en 1860, Patiño parece haber procedido de un pasado de artesano y cholo. Asistió a la escuela secundaria para hacerse aprendiz en varias compañías mineras y de importación de equipo para su explotación en la década de 1880 y principios de 1890, cuando la industria platera aún predominaba. En 1894 compró su primera acción en una mina de estaño en Oruro, en el cantón de Uncía, frontera con la provincia de Potosí. Para 1897 había adquirido suficientes acciones como para tener el control de la mina, y en 1900 tropezó con una de las venas de estaño más ricas jamás encontradas en Bolivia. En 1905 su mina de estaño, La Salvadora, se había vuelto la más grande del país, y Patiño había reunido, en torno a ella, un equipo completo de técnicos extranjeros, así como lo último en tecnología de refinación. A partir de esta inversión inicial, Patiño expandió rápidamente sus propiedades tanto vertical como horizontalmente. En 1910 compró la Compañía Minera Uncía, vecina suya, de propiedad británica, y en 1924 consagró su dominio sobre los dos centros mineros de Uncía y Llallagua, al comprar la Compañía Estañífera Llallagua, chilena, lo que hizo que alcanzara un lugar permanente de control

sobre casi 50% de la producción nacional, con una fuerza de trabajo de más de 10 000 trabajadores.

Mientras tanto Patiño centró su atención en la integración vertical de sus operaciones mineras, y en una acción poco común en los círculos capitalistas latinoamericanos, tomó medidas para controlar a sus refinadores europeos. Después de unir fuerzas con sus consumidores estadounidenses, finalmente, en 1916, asumió el control de la fundidora de estaño boliviano más grande del mundo, la Williams, Harvey & Co. Ltd., de Liverpool. Para principios de los años veinte Patiño vivía permanentemente en el extranjero, y para entonces podía describírsele con mayor precisión como un capitalista europeo, dadas sus vastas posesiones fuera de Bolivia. No obstante, también fue el minero dominante de Bolivia, su principal banquero privado, y su capitalista más poderoso, hasta su muerte, en la década de 1940.

Respecto a los otros dos mineros prominentes de aquel momento, se dividieron de manera equitativa la otra mitad del total de la producción; uno también era boliviano, miembro de la vieja familia minera de la plata, los Aramayo, y el otro un ingeniero judío europeo de nombre Mauricio Hochschild. Las compañías de ambos, Aramayo y Hochschild, tenían sólidos insumos de capital europeo, pero ambas se administraban —a diferencia de las compañías de Patiño— en gran medida desde la propia Bolivia. En tanto que Hochschild tenía algunas inversiones en Chile, su residencia principal, virtualmente hasta el final de su carrera, fue Bolivia, su principal zona de inversión. Para la familia Aramayo también sería Bolivia su principal área de actividades. Así, para la década de 1930, los tres grandes mineros que dominaban la producción estannífera y un buen porcentaje de las minas de plomo, zinc, wolframio y otros, tenían su base principalmente en Bolivia, o como las compañías de Patiño, eran propiedad absoluta de bolivianos. Dada la naturaleza totalmente abierta de la industria minera boliviana a todos los empresarios extranjeros a partir de mediados del siglo XIX, ejercer tal control por bolivianos fue un desarrollo verdaderamente inusual en la historia minera latinoamericana.

El retiro de Patiño y de los nuevos magnates del estaño, de la participación directa en los asuntos nacionales, dejó la política boliviana en manos de una

élite de profesionistas urbanos de la clase media alta, así como de representantes de la élite con tierras a nivel provincial (hombres que poseían terrenos modestos y que controlaban una cantidad relativamente menor de campesinos, pero cuyo abolengo social era sólido). Casi todos ellos tenía formación en derecho, y aunque estaban comprometidos con una concepción liberal de gobierno parlamentario y derecho constitucional, creían con firmeza en el sistema de castas y en el gobierno ejercido por una oligarquía blanca.

Esta creencia en la casta fue apuntalada por la sorprendente estabilidad de la estructura social boliviana, a pesar de todas las muy veloces transformaciones que se llevaron a cabo. De este modo, en el censo de 1900 sólo 13% de la población aparecía como "blanca". Asimismo, mientras que el censo señalaba que hubo un crecimiento importante de población urbana desde 1846, se usó como base una definición muy generosa de lo urbano, como cualquier comunidad de más de 200 personas. El uso de una definición más realista de urbano: poblados de más de 20 000 habitantes, sin embargo, muestra que habían sucedido pocos cambios significativos. Así, entre 1846 y 1900, el porcentaje de las personas que vivían en tales poblados había aumentado de 6 a sólo 7%. Incluso La Paz, el centro urbano más grande de la nación, sólo había aumentado a unas 55 000 personas en 1900, 12 000 más que medio siglo antes. Aunque las nuevas minas habían creado varios poblados en el sur de Oruro y el norte de Potosí, el auge de la industria minera de 1900, con sus 13 000 trabajadores, aún absorbía sólo a 1% de la población económicamente activa. De este modo, pese al crecimiento de un nuevo sector de exportación, la expansión de las nuevas clases de élite, blanca y chola, y el masivo fraccionamiento de la propiedad de la tierra india en las zonas rurales, Bolivia seguía siendo sorprendentemente tradicional en cuanto a su composición social. Los liberales, por tanto, no se sentían muy compelidos a ocuparse de los serios problemas de clase y de casta que dividían a esta sociedad multiétnica.

Los liberales fueron aún más agresivos con las comunidades libres de lo que habían sido sus predecesores conservadores, y desarmaron a aquellos indígenas que los apoyaron en la revuelta de 1899. También se justificaron

ante las mismas élites económicas al dar continuidad al potente apoyo gubernamental del sector minero, apoyo que implicó la defensa del libre comercio, una carga fiscal mínima sobre la minería y sobre las élites con tierras y adineradas, así como un subsidio gubernamental para la construcción del ferrocarril. Incluso en términos de su ideología política, los liberales demostraron no ser más liberales que sus predecesores. Al igual que los conservadores antes que ellos, esta nueva estirpe de líderes políticos también se rehusó a ceder la presidencia a los opositores. No obstante el tremendo crecimiento de la economía nacional, el gobierno aún representaba una importante fuente de empleo y el presidente era el principal garante del mismo. De esta manera, los patrones tradicionales de elecciones parlamentarias abiertas, elecciones presidenciales fraudulentas y golpes de Estado limitados, encabezados por civiles para remplazar el régimen de un partido a largo plazo, aún eran la norma.

Una vez en el cargo, los liberales adoptaron virtualmente todas las posiciones de los conservadores, antes desdeñadas. Se abandonó por entero la ideología federalista y se estableció en La Paz un régimen centralista total. En su desesperación por completar la red ferroviaria y modernizar las ciudades, abandonaron por propia voluntad los territorios nacionales y las posiciones internacionales tradicionales, política que dejó a Bolivia totalmente sin acceso al mar, así como fuertemente endeudada.

El primero de estos sucesos internacionales importantes fue la disputa de Acre. En el núcleo de la zona de auge del caucho amazónico, los territorios de Acre, adyacentes a la frontera con Brasil, estaban poblados, en gran parte, por migrantes brasileños. Cuando el último régimen conservador estableció con éxito una aduana en el río Acre, en Puerto Alonso, y recolectó ingresos fiscales relevantes por el caucho que se embarcaba rumbo a Brasil, los resineros locales se rebelaron. El régimen liberal envió tropas a las distantes tierras bajas orientales para aplastar la revuelta, pero el apoyo encubierto brasileño dio a los rebeldes suficiente fuerza para superar a los bolivianos. El resultado fue la derrota total de las armas bolivianas, así como la anexión del territorio de Acre a Brasil mediante el Tratado de Petrópolis, en 1903, por la cantidad de 2.5 millones de libras esterlinas.

Mientras que el gobierno liberal había asumido una postura centralizada en torno al territorio de Acre, fue mucho menos agresivo en el frente chileno. En este caso fue aún más allá de las concesiones más extremas jamás propuestas por sus antecesores conservadores, en un intento por obtener financiamiento y terminar con una problemática de larga data y políticamente sensible que se sentía que distraía los recursos naturales. Invirtiendo su postura irredentista previa, que exigía el retorno sin reservas del territorio arrebatado, los liberales firmaron un tratado de paz formal con Chile en 1904. Bolivia acordó ceder todas las tierras litorales tomadas, y dejó de lado su demanda de conservar un puerto en el Pacífico. A su vez, Chile estuvo de acuerdo en construir un ferrocarril que fuera de Arica a La Paz, proveer una indemnización formal de 300 000 libras, garantizar préstamos para la construcción de vías férreas internas en Bolivia y dar por terminados sus acuerdos de nación más favorecida respecto al comercio con Bolivia. Aunque el tratado resolvió de manera formal el problema territorial del Pacífico, de hecho el tema ha permanecido como cuestión irresuelta en las relaciones internacionales andinas desde la década de 1880 y hasta el presente.

Los acuerdos del Acre y chileno dieron a los liberales paz relativa en el frente internacional, así como amplio apoyo financiero para continuar la construcción del ferrocarril. En lo interno, los acuerdos alejaron temporalmente la principal problemática internacional de disputa política. La eliminación de este tema divisivo, la adopción del programa económico básico de los conservadores y el declive de la élite de Sucre tuvieron por consecuencia la dominación casi exclusiva de los liberales en el gobierno de la nación. Tan fuerte fue el movimiento liberal, que no hubo intentos de golpes de Estado entre 1899 y 1920, un récord en la historia de la evolución política de Bolivia.

José Manuel Pando, el líder del partido durante los años en que fue oposición, encabezó el primer régimen liberal (1899-1904). En tanto que Pando mantuvo algunas de sus posturas de los primeros años, sus seguidores eran mucho más pragmáticos y les interesaba el poder de manera exclusiva. Estos nuevos hombres funcionaban bajo el dominio de Ismael Montes, el segundo presidente del periodo liberal, quien terminaría ocupando el cargo

durante dos periodos: 1904-1909 y 1913-1917. Educado como abogado, Montes representaba una nueva casta de político urbano de clase media. De carácter enérgico, con un instinto práctico para la política, fue capaz de evitar con efectividad el surgimiento de un partido de oposición de "ajenos", hasta después de la Primera Guerra Mundial. En este esfuerzo tuvo la colaboración del tremendo auge económico proveniente de la creciente exportación de estaño. Con esto se financió una importante expansión de la burocracia estatal, que a su vez utilizó para comprar a cualquier potencial oposición.

La élite nacional también fue eficazmente compensada por el nuevo régimen liberal, mediante un enorme compromiso con la construcción de obra pública. Asimismo, Montes sentó las bases del sistema educativo nacional reformando la educación a través de una misión belga y creando la primera normal de maestros en Sucre, en 1909. Con excedente positivo y bastante considerable en la balanza de pagos, Montes pudo garantizar financiamiento bancario privado internacional para los préstamos al gobierno. En 1906, un enorme préstamo bancario privado de los Estados Unidos permitió que Bolivia finalizara sus conexiones internacionales ferroviarias con ramales hacia las principales ciudades del interior, Cochabamba y Sucre, así como con vínculos internacionales con los centros mineros de Potosí y Oruro. Se construyó una nueva vía férrea a Guaqui en el lago Titicaca, lo que la vinculaba con la red ferroviaria peruana. También hubo proyectos importantes de construcción, instalaciones sanitarias y electrificación urbana, así como un medio económico boyante hasta la crisis de 1913-1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial.

De este modo Montes pudo dominar el proceso de selección de su sucesor, Eliodoro Villazón, para luego apuntalar su propia reelección formal en 1913. Pero la segunda administración de Montes no representó el triunfo incuestionado, como la primera. Los intentos por establecer un banco nacional de la administración liberal crearon amargas presiones entre elementos clave de la élite. Luego, la súbita crisis anterior a la Primera Guerra Mundial en el comercio internacional ocasionó que tanto la producción como las exportaciones estaníferas cayeran en una tercera parte entre 1913 y 1914. Por último, ciertas condiciones climáticas adversas

ocasionaron una severa crisis agrícola en el mismo periodo. Con insolvencia monetaria y un descenso en los ingresos gubernamentales, el despreocupado Montes se encontró con una oposición intransigente que no podía sobornar. Además, por haber estado en el poder demasiado tiempo, no estaba dispuesto a utilizar el tacto o a calmar sutilmente a esta creciente oposición. El resultado fue la casi inevitable ruptura del Partido Liberal en dos grupos formalmente constituidos. Uno de los nuevos partidos resultantes de esta división recibió el nombre de Republicano y se estableció formalmente en 1914.

Así, Bolivia volvió una vez más a un arreglo bipartidista, más normal. Pero como reconocieron tanto Montes como el fundador del nuevo partido, Daniel Salamanca, este nuevo agrupamiento político fue una copia de los liberales; su fortaleza se debía a las mismas clases, apoyaba sin dudar todas las demandas de la minería, era tan racista y oligárquico como sus opositores. Montes les llamaba "apóstatas" liberales, mientras que Salamanca sostenía que la meta de su partido era sólo garantizar elecciones libres y restricciones al poder presidencial. La consecuencia final de la vuelta a la política efectiva de dos partidos fue un regreso a las políticas de elecciones presidenciales cerradas y fraudulentas, y el uso de la violencia como última instancia, así como los golpes de Estado a manos de la oposición.

La recuperación del periodo posterior a la Primera Guerra Mundial permitió que Montes llevara a término sus reformas bancaria y financiera con poca oposición republicana, e incluso que obtuviera el apoyo de alrededor de 80 000 votantes en las elecciones presidenciales y del Congreso. En 1917 pasó el cargo a un sucesor más moderado, quien fue incapaz de mantener a los republicanos bajo control. Con fuerte apoyo de elementos contrariados de la comunidad empresarial, los republicanos avanzaron de manera considerable, y cuando el último presidente liberal, Gutiérrez Guerra, intentó controlar las elecciones de 1920, el Partido Republicano se opuso mediante una exitosa revuelta que puso fin al gobierno liberal.

El advenimiento del régimen republicano, que duró hasta 1934, trajo consigo un cambio sutil pero importante en el sistema político local. De un simple arreglo bipartidista, la política nacional evolucionó hacia el

multipartidismo. Al mismo tiempo, los estándares en cuanto a las creencias, basados en la ideología liberal decimonónica y en un fuerte racismo, comenzarían a cambiar lentamente. Por último, la naturaleza extraordinariamente abierta de la economía nacional implicaría que Bolivia fuera una de las primeras naciones del mundo en sentir los efectos de la gran crisis de la economía mundial conocida como la Gran Depresión.

El crecimiento económico, que había sido el sello de los gobiernos, tanto conservador como liberal, inicialmente se limitó a ciertos grupos de élite. Para la segunda década del siglo XX este crecimiento comenzaba a crear conmoción sobre la mayoría mestiza e indígena, pero a menudo de manera conflictiva. La expansión de las haciendas llevó a crecientes conflictos en torno a la tierra con los indios de las comunidades, cuestión que llevaría a una serie de grandes revueltas en la década de 1920; pero algo incluso más inmediato para la élite fue la organización de los primeros sindicatos modernos en Bolivia. Aunque las actividades organizativas databan del siglo XIX, Bolivia estaba retrasada varias décadas respecto a sus vecinos, en cuanto a agitación y organización laborales. No fue sino hasta 1912 que se llevó a cabo la primera celebración del 1º de mayo, y en 1916 y 1917, cuando se establecieron confederaciones laborales urbanas locales. En 1920 comenzaron a realizarse huelgas urbanas importantes en el ámbito nacional.

En la década de los veinte la élite se hizo consciente, por vez primera, de la existencia de demandas alternativas y de grupos potencialmente amenazadores, fuera de la arena de la élite política. Conforme la vida política se volvía más compleja, en la era del Partido Republicano, surgirían partidos menores que discutían, de manera seria por primera vez, los problemas en torno al conflicto entre clases sociales y su potencial. Los años veinte también fueron testigos de las primeras agitaciones provocadas por el pensamiento marxista europeo, cuando llegara a Bolivia filtrado por escritores argentinos, chilenos y peruanos.

Inmediatamente después de tomar el poder, el Partido Republicano se dividió en dos ramas opuestas, una encabezada por el intelectual urbano de clase media Bautista Saavedra, y la otra por el hacendado cochabambino Daniel Salamanca. Fueron Saavedra y sus seguidores quienes pudieron tomar

la iniciativa y asumir el mando del gobierno y del partido en 1921. Pero Salamanca y sus fuerzas establecieron un nuevo partido, el Republicano Genuino, y procedieron activamente a violentar el nuevo régimen.

La creciente tensión política de la década de 1920 se combinó con la profundización de las crisis políticas y los comienzos de la Gran Depresión, para desencadenar una violencia política y un conflicto social más intensos que cualquier hecho experimentado en décadas anteriores. Saavedra apenas se había instalado en el cargo cuando un gigantesco levantamiento indio en el distrito de Jesús de Machaca, cerca del lago Titicaca, condujo a la matanza de cientos de indios y docenas de blancos y cholos de la localidad. Saavedra, sin titubear, utilizó toda su fuerza para apagar la revuelta y atacó a los gobiernos comunitarios, o ayllus, llamándoles instituciones reaccionarias que debían reprimirse por la fuerza. Así, sostuvo una postura decimonónica clásica, liberal, en torno a la problemática indígena.

No obstante, Saavedra demostró ser más abierto en sus puntos de vista respecto a la fuerza de trabajo organizada. Consideraba a los sindicatos como potenciales aliados políticos, en especial conforme se erosionaban sus propias bases en las clases alta y media debido a la oposición liberal y republicana genuina. Apeló a estos nuevos actores políticos al dar fundamento a la primera legislación laboral y social moderna de la historia de Bolivia. También expresó su voluntad de impulsar una actividad huelguística limitada, al igual que dar apoyo a la sindicalización. Ésta fue la primera vez que un presidente de la nación tomaba tales medidas. Pero ante la creciente actividad huelguística, incluida la grave agitación en las minas y la primera huelga general, que tuvo lugar en 1922, Saavedra se encontró rápidamente retirando su tentativa de apoyo. De hecho se utilizó la tropa en una sangrienta represión de mineros en Uncía a finales de 1923: una de las muchas masacres contra trabajadores mineros. De este modo, mientras que su legislación laboral y discursos a favor de la fuerza de trabajo representaron cierta idea de parte de la élite blanca de que existía conflicto de clases en Bolivia, el constante retraimiento del régimen sobre el tema revelaba que Saavedra mantenía esta postura más como consecuencia de la conveniencia política que

porque él y sus seguidores hubieran avanzado más allá de las creencias liberales decimonónicas y del pensamiento positivista.

Empero, los años veinte conformaron un periodo en el que otros integrantes de la élite comenzaron a adoptar posturas no tradicionales. En 1920 se establecieron los primeros partidos socialistas locales. Para finales de 1921 se fundó un partido socialista nacional que, aunque constituido por un pequeño grupo de intelectuales, con apoyo mínimo de la fuerza de trabajo comenzó a discutir problemas básicos, como la servidumbre indígena *(pongueaje),* el reconocimiento legal de los gobiernos comunitarios indígenas, y los derechos laborales y de las mujeres. Mientras que estas ideas resultaban novedosas y revolucionarias en el contexto boliviano, ya eran parte de la tradición política marxista, bien establecida y más radical, de todos los países vecinos de Bolivia, incluido Perú. La famosa división de los partidos socialistas marxistas latinoamericanos, y el surgimiento de movimientos comunistas en América del Sur en la década de 1920, por ejemplo, no tuvieron eco en Bolivia. Este país no produjo su primer partido marxista, ni siquiera moderado, sino hasta finales de los años veinte, a la vez que su primer partido comunista formal no se estableció sino hasta los años cincuenta.

Gran parte de esta primera agitación se asociaba con una depresión breve, pero muy intensa, que comenzó en el decenio de 1920. En cuanto continuó la producción minera, para finales de 1922, la agitación laboral comenzó a disminuir. Más aún, Saavedra encontró que el naciente movimiento de la fuerza de trabajo organizada, aunque finalmente hubiera establecido sus primeras federaciones nacionales y llevado a cabo su primera huelga general, era un apoyo demasiado débil para su régimen. Las clases medias-bajas, favorecidas por primera vez por una legislación social tibia, dieron su apoyo a Saavedra. No obstante, dada su fuerte personalidad, resultaba inevitable que los liberales y los genuinos republicanos unieran sus fuerzas para oponerse a ese régimen, de modo que le resultaba cada vez más difícil gobernar.

Después de varios intentos por formar alianzas con la fuerza de trabajo y las clases medias-bajas, Saavedra acudió a los mercados extranjeros de capital privado para promover grandes proyectos de desarrollo: la fuente de

popularidad de los gobiernos previos. En Nueva York negoció un préstamo bancario privado por 33 millones de dólares para el ferrocarril, obras públicas y el financiamiento del Banco de la Nación. Éstas fueron las preocupaciones clásicas de los liberales y de los conservadores que le antecedieron. Pero la deuda ya era alta para Bolivia, en tanto que los términos del préstamo, que incluían control directo de los Estados Unidos sobre el ingreso fiscal de Bolivia, eran por completo inaceptables para la mayoría de los bolivianos. Era pues innegable que los negociadores bolivianos se habían corrompido y que, pese a su excelente historial crediticio, se había forzado a la nación a pagar tasas de interés muy altas. La oposición al llamado préstamo Nicolaus fue inmediata e intensa.

Para añadir uno más a sus problemas, Saavedra, de la misma manera arbitraria que Montes, intentó resolver el gran debate que rodeaba a las concesiones de petróleo de la región de los bajos orientales de Bolivia. En 1920 los republicanos habían abierto las áreas de la reserva a los extranjeros, una vez que los empresarios bolivianos demostraran ser incapaces de echar a andar pozos productivos. En 1920 y 1921, algunos empresarios estadounidenses obtuvieron concesiones, pero estas compañías más pequeñas eran en realidad fachadas de la Standard Oil Company de Nueva Jersey, a la que el gobierno permitió, en 1921, comprar estas concesiones, añadir algunas nuevas y establecer la Standard Oil Company de Bolivia. Dado el trato especial que se le brindó a esta compañía, y la intensa oposición de la élite a Saavedra, resultaba ineludible que hubiera un clamor en contra.

De este modo, a toda la problemática usual en torno a la corrupción, el favoritismo y el dominio presidencial, Salamanca y sus seguidores más conservadores añadieron un tema totalmente nuevo: el del nacionalismo económico. La oposición a que las compañías extranjeras explotaran los recursos naturales comenzó en Bolivia virtualmente desde la primera concesión que se otorgara sobre el petróleo. Mientras que no se expresó una sola protesta por la minería, y Guggenheim y otras compañías estadounidenses participaron activamente en la economía, el petróleo fue un tema especial, y el ataque contra la Standard Oil se volvió parte de la retórica

tanto de la derecha tradicional como de los nacientes movimientos de izquierda en Bolivia.

Para el final de su periodo, Saavedra intentó con desesperación apaciguar a todas las facciones. Por un lado, ayudó a los propietarios de las minas a suprimir la huelga de Uncía en junio de 1923, y por el otro, llevó a cabo un importante ajuste en la estructura fiscal de la minería a finales de dicho año, y logró duplicar los impuestos gubernamentales sobre la producción de estaño. Molesto, Patiño trasladó sus oficinas centrales mineras de Bolivia a los Estados Unidos a principios de 1924, registró la compañía Patiño Mines and Enterprises en Delaware e incluso le prestó al gobierno 600 000 libras esterlinas para la construcción de vías férreas, a cambio de que Saavedra otorgara la garantía de que no volvería a elevar los impuestos durante cinco años.

Toda esta actividad de Saavedra no sirvió para sus fines, y pese a todos sus intentos por elegir a su sucesor, incluso por prorrogar su periodo, se vio forzado a entregar el cargo al candidato de su propio partido, Hernando Siles, a quien se oponía. El periodo de Siles fue de activa evolución política y de constantes divisiones en los partidos tradicionales. En vista de que Saavedra controlaba al Partido Republicano, Siles creó su propio Partido Nacionalista. Apoyó al movimiento de reforma universitaria, que era una gran innovación en cuanto a gobierno universitario y planes de estudio, y en 1928 los estudiantes radicales instauraron la primera FUB (Federación de Universitarios de Bolivia). Pese a que se trataba todavía de pequeños grupos de intelectuales, tanto los socialistas como la FUB sugerían transformaciones radicales en la sociedad, y ambos hacían un llamado a favor de la reforma agraria y para dar fin al feudalismo rural en cuanto a la fuerza de trabajo. Instaban a la socialización de los recursos naturales y abogaban por cambios en la definición de la propiedad privada, a la vez que otorgaban un sólido apoyo al naciente movimiento laboral.

Al mismo tiempo el escenario económico comenzó a deteriorarse a un nivel alarmante. En el periodo 1926-1929 el gobierno enfrentó déficit presupuestarios cada vez mayores, así como crecientes dificultades para cumplir con sus obligaciones internacionales en cuanto a deuda. Esto sucedía

justo cuando el precio del estaño en el mercado internacional se había elevado al máximo y había comenzado su largo declive secular hasta caer en la catástrofe de la Gran Depresión. En un intento por hacer frente a esta crisis, cuyo nivel aún no se conocía, el gobierno recurrió a ciertas medidas tanto tradicionales como, algunas, muy radicales. En 1927 y 1928, con el respaldo de algunos impuestos creados especialmente, se obtuvieron nuevos préstamos de bancos privados estadounidenses. El mismo año el gobierno adoptó las reformas propuestas por la misión Kemmerer de los Estados Unidos, y finalmente estableció un banco central, controlado por el gobierno, para vigilar los aspectos de la emisión de moneda nacional, y creó la Contraloría General. Además, el reavivamiento temporal de la disputa en torno a la frontera del Chaco con Paraguay, a finales de 1928, presagió conflictos más amargos y dio a Siles la excusa para, mediante un estado de sitio formal, controlar a sus enemigos internos. El incidente fronterizo fue un hecho sangriento que forzó a Siles a convocar a las reservas y ordenar una represión abierta. Sin embargo, no quería que se desarrollara una guerra total y negoció un Acta de Conciliación con Paraguay a principios de 1929.

El surgimiento del patriotismo, la imposición de estados de sitio y las reformas políticas y económicas llevadas a cabo por Siles tuvieron escaso efecto en la política nacional. Éste mostró ser un político demasiado apegado al molde tradicional como para permitir el libre juego de las fuerzas democráticas. Su régimen galvanizó a liberales, republicanos genuinos y republicanos saavedristas en un frente unido pero temporal. Entre tanto, en 1929 Bolivia alcanzó su récord de producción de todos los tiempos, con un monto de 47 000 toneladas de estaño exportadas, pero a un precio inferior al que tuvo a principios de la década. En 1927 el precio estaba en 917 dólares la tonelada, bajó a 794 dólares en 1929 y finalmente llegaría a su mínimo de 385 dólares por tonelada en 1932. Los ingresos gubernamentales fueron afectados por descensos en el precio del estaño. Para 1929, 37% del presupuesto gubernamental se destinaba al pago de la deuda exterior y 20% a gastos militares, dejando poco para las necesidades básicas del gobierno, sin mencionar obras públicas o bienestar nacional.

Siles intentó continuar en el puesto más allá de su periodo presidencial. A mediados de 1930 anunció sus planes formales de prorrogar su gobierno al hacer que el parlamento lo eligiera formalmente para un nuevo periodo. Entonces le entregó el gobierno a una junta militar que vigilara su reelección formal, pero la oposición a esta acción era universal. Por primera vez en la política nacional los estudiantes universitarios hicieron sentir su poder al levantarse contra el gobierno. En respuesta, el ejército se rebeló y el liderazgo de la junta tuvo que huir. En medio del desorden, hubo incluso una invasión de marxistas radicales en Villazón, poblado fronterizo del sur que encontró algún eco en el movimiento laboral urbano. Así, la caída de Siles incorporó fuerzas de oposición más complejas que las que se habían manifestado hasta entonces. Aunque las fuerzas tradicionales y conservadoras finalmente se alzarían victoriosas ante la revuelta popular de 1930, se trataba, sin embargo, de la primera ruptura en la ideología política unificada de la oligarquía blanca, y llevaría, con el tiempo, a una erosión de las creencias básicas tradicionales.

Daniel Salamanca finalmente surgió como el candidato presidencial de una coalición de todos los partidos. Por tratarse de un político de molde clásico estaba aún menos convencido de los nuevos desarrollos en los frentes estudiantil y laboral que Saavedra o Siles. Salamanca era un terrateniente de Cochabamba, un famoso orador parlamentario y, además, un liberal extremadamente rígido e inflexible, de estilo decimonónico. Sus únicos programas inmediatos eran crear un gobierno moral y sostener elecciones libres, lemas sin sentido que violó tan rápidamente como lo habían hecho sus predecesores.

Pero el gobierno oligárquico republicano, fundamentado en una participación política limitada, establecido por los conservadores en la década de 1880, comenzaba a deshacerse para 1930. En su lugar surgía una modificación sutil, pero claramente importante, en la ideología política de las clases gobernantes. La reforma estudiantil universitaria había llevado el pensamiento marxista radical a los hogares de la élite blanca, por vez primera en la política nacional. Los movimientos laborales comenzaron a atraer la atención nacional y se llevaron a cabo actividades huelguísticas incluso más

graves, que condujeron a la intervención militar en las minas, así como a una guerra abierta. Incluso el campesinado indio había estado inusualmente intranquilo, con dos levantamientos bastante masivos: el de Jesús de Machaca de 1921 y otro en Chayanta en Potosí en 1927.

De diversas maneras la depresión daría un periodo de gracia al gobierno de Salamanca. Los despidos en masa de trabajadores forzaron a muchos mineros a regresar al campo y dedicarse de nuevo a una agricultura de subsistencia, al tiempo que la depresión arrasaba con la mayor parte de las ganancias del movimiento laboral, débilmente organizado. Los campesinos indios se volvieron más pasivos conforme la era de la gran expansión de las haciendas llegaba a su fin, con el cierre de grandes inversiones de capital en propiedades rurales. Pero la juventud universitaria no desaparecería en silencio; el creciente impacto de la depresión creó una nueva conciencia a la que Salamanca fue incapaz de responder, excepto infundiendo temor total y represión. Para los estándares de otros países de América del Sur, el radicalismo boliviano no dejó de ser débil y relativamente poco sofisticado, del mismo modo que se mantuvo una o dos generaciones atrás de lo que sucedía en los países vecinos. El constante rechazo de Salamanca y sus seguidores respecto a prestar oídos a estas ideas, a diferencia de los republicanos de la década de 1920, orilló a que los grupos reformistas y radicales marginales se vieran forzados a participar en una confrontación siempre más violenta con el sistema político tradicional. Sin embargo, estos grupos aún eran sólo un pequeño sector de la sociedad que jamás podría haberse vuelto una amenaza si Bolivia no hubiera sufrido el mayor desastre militar de su historia bajo el liderazgo de Daniel Salamanca. Durante la Gran Depresión, la Guerra del Chaco fungiría como escenario crucial de una ruptura que finalmente destruiría el sistema tradicional del periodo 1880-1934.

En primer lugar, la industria del estaño entró en un severo declive. Para 1929 Bolivia, junto con otras tres regiones productoras de estaño —Nigeria, Malasia e Indonesia—, proveía cerca de 80% de la producción mundial. Pero Bolivia tenía el mineral de menor pureza, los precios de transporte más altos y por tanto, era el productor de estaño con los mayores costos. Por eso

resintió primero la baja en los precios y por eso también le fue imposible forzar a otros importantes productores para que recortaran su producción de manera voluntaria, ya que, con precios negativos para los bolivianos, los demás aún podían lograr algunos márgenes de ganancia. En julio de 1929, instados por Patiño, se conformó una Asociación de Productores de Estaño, organizada por las compañías privadas que trabajaban en los cuatro centros de producción más importantes. Acordaron, de manera voluntaria, recortar los gastos de producción, cuestión que las tres compañías bolivianas más grandes llevaron a cabo con impaciencia a finales de 1929 y principios de 1930. Pero las compañías no bolivianas no hicieron lo propio, de modo que para mediados de 1930 este esquema voluntario se consideró fallido.

Ante condiciones intolerables en el mercado libre, y restricciones voluntarias imposibles de lograr, los productores decidieron, a finales de 1930, tomar la drástica medida de exigir participación gubernamental en el modelo de control de la producción. Se trató de un cambio importante y abrupto en la beligerante postura de los propietarios privados de minas contra cualquier tipo de intervención gubernamental en la empresa privada. Por primera vez se le asignarían al gobierno boliviano no sólo mínimos privilegios fiscales, sino también control total sobre las cuotas de producción, lo que llevaría, en las décadas siguientes, a un control mercantil completo sobre las ventas al extranjero. Sin duda se trataba de un acto desesperado mediante el que los mayores productores esperaban retener el control directo sobre las decisiones gubernamentales que los afectaban, pero también posibilitaba la primera intervención realmente potente del gobierno en asuntos de minería, desde mediados del siglo XIX. Aunque habría acuerdos irregulares en torno a cuotas, los itinerarios de producción, muy reducidos para todas las compañías, implicaron que ninguna de ellas pudiera aumentar la producción de manera fácil y rápida si sus cuotas de mercado se modificaban mediante decreto gubernamental. Esto introdujo una tensión especial en la relación entre las tres grandes compañías, que llevaría sus conflictos por competencia a las oficinas mismas del gobierno. Los grandes mineros ahora prestarían una mayor atención al escenario político local de la

que habían prestado durante algún tiempo, de modo que comenzaron a apoyar facciones en contienda dentro de la propia élite.

Como sólo había tres gobiernos involucrados —Bolivia, los Países Bajos, Gran Bretaña—, resultó que el sistema de producción por cuotas impuestas se pudo llevar a cabo con éxito y, el 1º de marzo de 1931, sólo unos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno de Salamanca, el Programa Internacional de Control del Estaño entró en vigor. La producción boliviana se redujo drásticamente, creando una enorme crisis económica interna para la república. Aunque el programa de restricción de la producción finalmente redujo el suministro de estaño mundial no vendido, y por último estabilizó el precio, no sería sino hasta 1933 cuando la producción boliviana lentamente comenzó a volver a niveles apenas moderados.

Todos estos cambios internacionales, y el golpe para la economía nacional resultante de ellos, fueron objeto de cercana atención entre la élite. La Junta de Gobierno experimentó con programas de obras públicas y apoyó totalmente los planes de recorte de producción propuestos por Patiño. También limitó los desembolsos presupuestales a lo estrictamente necesario y se concentró en diversos proyectos de recuperación nacional que se ensayaban en otros lugares del mundo. De todos los grupos que participaron en este debate sobre la economía nacional, los liberales tuvieron las propuestas más concretas. Aunque su enfoque era ortodoxo, sugirieron que se diera una intervención gubernamental seria; pero Salamanca parecía no tener conciencia de la problemática en conjunto. Se le preguntaba constantemente cuáles eran sus ideas económicas, a lo que contestaba con evasivas sobre la necesidad de un gobierno moral. Tales ideas vacuas podrían haber sido buenas en épocas de crecimiento, con un orden social estable, pero no tenían sentido en el contexto contemporáneo; en consecuencia, sus republicanos genuinos sufrieron una derrota total durante las elecciones parlamentarias de 1931; los liberales obtuvieron una mayoría absoluta. El rígido Salamanca de pronto se encontró de cara ante un Congreso hostil, por completo fuera de su control, con una economía de la que entendía poco y una sociedad que padecía una severa dolencia para la que no podía ofrecer soluciones. También enajenaría a los partidos tradicionales de la élite, al hacer de su gobierno una

instancia partidaria pese al apoyo de todos los partidos para hacerlo llegar al poder.

No sólo rechazó el apoyo liberal, sino que también anunció, a un público bastante sorprendido, que el problema principal que enfrentaba el país no era la crisis económica sino el radicalismo y el comunismo. Esta obsesión ante la amenaza roja era algo completamente nuevo en un político tradicional. Al mismo tiempo, Salamanca asumió una postura abiertamente hostil ante la fuerza de trabajo organizada, y forzó la disolución legal del Sindicato de Trabajadores del Telégrafo, durante una huelga, y reprimió otra general, en solidaridad, emprendida por la federación de trabajadores de La Paz. Pero la economía no dejaba de ser problema; el gobierno se rehusó a pagar a sus empleados de cualquier modo que no fueran promesas, y a fines de julio Salamanca anunció que Bolivia dejaría de pagar su deuda externa.

A pesar de su extremo atrincheramiento en el funcionamiento normal del gobierno, Salamanca propuso el programa más ambicioso y caro, de penetración militar del Chaco, jamás imaginado por algún presidente boliviano. Como grandes zonas del Chaco aún no se habían explorado y no las habían ocupado ni Bolivia ni Paraguay, esta nueva postura, más agresiva, propuesta por Salamanca, implicó una transformación mayor de la política nacional, de una posición en gran medida defensiva, a otra, ofensiva. Conforme el escenario interno económico y político se volvía cada vez más tenso, Salamanca prestaba mayor atención a la cuestión de la frontera del Chaco, que consideraba de sencilla solución si se mantenían posturas firmes y rectas, mientras que la situación económica se volvía más compleja y, en apariencia, irresoluble.

El 1º de julio de 1931 Salamanca utilizó un típico incidente fronterizo para romper relaciones diplomáticas con Paraguay, medida que muchos sintieron agresiva en exceso. Después, durante su informe presidencial, en agosto, reconoció el continuo descenso en los ingresos gubernamentales y enfatizó que virtualmente todos los servicios del gobierno se habían recortado, pero anunció una ampliación del presupuesto militar. También propuso una política abierta, de total supresión de las actividades sindicales y de huelgas entre la clase obrera organizada de la nación.

En junio, Salamanca llevó a Demetrio Canelas, un líder del partido de Oruro, al Ministerio de Finanzas. Canelas dio término a la política conservadora de los meses previos y presionó a Salamanca respecto a la necesidad de tomar medidas económicas más radicales para combatir la crisis. Su propuesta principal fue buscar una solución inflacionaria, que entonces adoptaban muchos países del mundo. Quería que Bolivia dejara el patrón oro, adoptara papel moneda inconvertible y aumentara el abasto monetario. Al principio los liberales se opusieron a estos cambios, en especial porque controlaban tanto el Banco Central como el Congreso, pero se vieron forzados a aceptarlos cuando la propia Gran Bretaña anunció, en septiembre, que saldría del patrón oro. Como parte del bloque de la libra esterlina, Bolivia se vio forzada a hacer lo mismo. Pero los precios comenzaron a elevarse de inmediato y la postura del gobierno fue en extremo impopular. En respuesta, los liberales volvieron a presionar al gobierno y, después de una serie de agresivas interpelaciones parlamentarias a los ministros, forzaron para que el gobierno de Salamanca llegara a un acuerdo. Los términos del mismo incluían un pacto bipartidista formal, así como el convenio de otorgar a los liberales poder de veto sobre todas las decisiones económicas.

Al ver frustradas sus iniciativas en la esfera económica, Salamanca intentó implantar sus ideas respecto al gobierno autoritario. Sosteniendo que había una amenaza comunista de la que pocos líderes de partidos tradicionales parecían estar conscientes, propuso, a finales de 1931, promulgar una Ley de Defensa Social, que otorgaba poderes extraordinarios al presidente para lidiar con la oposición política de izquierda. La reacción a esta propuesta fue intensa. En enero de 1932 las manifestaciones protagonizadas por la fuerza de trabajo, los pequeños partidos de izquierda, los estudiantes y los saavedristas finalmente forzaron al gobierno a retirar la propuesta de ley. Al mismo tiempo, Salamanca falló en su intento por plantear un préstamo internacional para aliviar los déficits gubernamentales, y en marzo de 1932 debió aceptar en su gabinete a tres ministros designados por los liberales, al igual que la destitución de Canelas.

Salamanca, amargado por el escenario político nacional, se volvió aún más agresivo en el frente internacional. Fortaleció al ejército de manera

sistemática, a costa de todos los otros servicios gubernamentales. También empujó al ejército a una exploración y programa de colonización cada vez más amplio en el Chaco. Las intenciones de Bolivia eran tan obviamente provocadoras que, a lo largo de los primeros meses del año, algunos grupos radicales comenzaron a pedir que las preparaciones para la guerra terminaran. Pero en este tema había una división entre los radicales marginales y los grupos estudiantiles, y los partidos más tradicionales. Los saavedristas, quienes adoptaron el nombre de Partido Socialista Republicano, adheridos a la izquierda contra la Ley de Defensa Social, apoyaban íntegramente la aventura del Chaco de Salamanca, a la vez que los liberales también apoyaron unánimemente a Salamanca en su fortalecimiento del ejército.

Así, Salamanca se encontró con un sólido apoyo de los grupos tradicionales y decidió empujarlo al límite absoluto. En mayo y junio, un importante enlace entre dos divisiones militares llevó a un típico choque menor por un relevante punto de riego en el Chaco. Las tropas bolivianas expulsaron a la fuerzas paraguayas ya atrincheradas ahí. Al argüir más tarde que no existía un puesto paraguayo antes, el ejército boliviano se rehusó a ceder la nueva ubicación y comenzó una concentración grande y veloz en el área para oponerse al esperado contraataque paraguayo. Durante los últimos días de junio sucedió la esperada contraofensiva, que fue derrotada por los bolivianos. Hasta este punto dicho incidente no fue distinto de docenas similares; la cantidad de soldados que tomó parte era bastante pequeña y el conflicto muy limitado. Los procedimientos normales sugerían que hubiera una negociación formal, pero Salamanca decidió romper con los precedentes y estimular una guerra generalizada. Para fines de julio había comenzado una guerra a gran escala.

Esta decisión tuvo mucho que ver con las amargas frustraciones de Salamanca en el terreno de la política nacional, así como con su percepción de que una crisis económica en aumento llevaría a la anarquía social. El hecho de que en mayo la organización para el control internacional del estaño (International Tin Council) adoptara el procedimiento radical de prohibir toda la producción de estaño durante los meses de julio y agosto, y de reducir la producción a partir de entonces a un tercio del rendimiento de 1929, significó

que los recortes más extremos se propusieron justo en vísperas de la decisión de Salamanca respecto al Chaco. En respuesta al cierre durante dos meses y a la situación comercial en extremo desequilibrada que tuvo por consecuencia, el gobierno fue forzado a tomar el control total sobre todos los tratos que hicieran en oro sus ciudadanos, y obligó a los propietarios de minas a entregar más de 65% de sus letras de cambio, en divisas, al Banco Central. No se pone en duda que este bloqueo a la economía, en total exceso respecto a exportaciones, fue de importancia crucial en las decisiones que tomó el gobierno a lo largo de las semanas siguientes.

Según la documentación recopilada a partir de esa guerra, Salamanca y el gobierno boliviano deliberadamente hicieron escalar un típico incidente fronterizo para llegar a una guerra a gran escala, para sorpresa incluso de los paraguayos. También es evidente que cuando se tomaron las decisiones finales, fue Salamanca quien, contra el consejo por escrito de su personal, obligó a que el conflicto fuera más allá de cualquier arreglo pacífico, para volverse la guerra más costosa de Bolivia durante su historia republicana.

Ante todo el mundo, sin embargo, se aceptó como verdad, de manera casi inmediata, que la Guerra del Chaco fue consecuencia de un conflicto elemental sobre terrenos petrolíferos entre la Standard Oil de Nueva Jersey, con su apoyo a las demandas bolivianas, y la Royal Dutch Shell, atrincherada en Paraguay. No hay duda de que hacia el final de este largo y sangriento conflicto, cuando las tropas paraguayas victoriosas llegaban al final de la región del Chaco y se acercaban a los pies de las montañas andinas, el petróleo se volvió preocupación importante en los objetivos de la guerra. Pero hasta finales de 1935 la guerra se efectuó a cientos de kilómetros de los campos petroleros más cercanos. Además, fue evidente, después de la guerra, que la Standard Oil de Nueva Jersey había vendido petróleo boliviano de manera ilegal a Argentina, y de ahí a Paraguay, al tiempo que proclamaba que no podía producir nada para Bolivia en estos mismos terrenos. La causa de la guerra, más bien, debe buscarse primero en el complejo conflicto político dentro de Bolivia y en las presiones ocasionadas por la Gran Depresión sobre un sistema político frágil; su continuación sólo puede entenderse en términos del apoyo que dio Argentina a las metas paraguayas.

La capacidad de Argentina de evitar medidas hacia la paz hasta el final, junto con los constantes éxitos paraguayos, implicaron que, en cuanto comenzara la guerra, Bolivia tendría poca capacidad de frenar su arremetida.

El que las causas de la guerra fueran diferentes de aquellas proclamadas en el momento no reduce en los hechos la vital importancia de la creencia generalizada respecto a que la Guerra del Chaco fue un conflicto por petróleo. En el periodo posterior a la guerra, las decisiones fundamentales políticas y económicas, incluida la confiscación de la Standard Oil en 1937 y la creación de una compañía monopólica petrolera estatal, fueron resultado directo de esta idea. Gran parte de la amargura del contexto político posterior a la guerra también se definió en gran medida por esta concepción.

Sin embargo, más importantes que la causa fueron las consecuencias del conflicto. La Guerra del Chaco, en efecto, destruyó el sistema político que había existido en Bolivia desde la década de 1880. El final de la guerra vio el colapso tanto del gobierno civil como de los partidos políticos tradicionales. Las ideas que antes habían sido acuñadas por sólo un pequeño grupo de intelectuales radicales ahora se volvían la preocupación de gran parte de los jóvenes y de los excombatientes con conciencia política. Este cambio fue tan distintivo, que los bolivianos mismos hablarían de los grupos que llegaron a la madurez durante la Guerra del Chaco como la generación del Chaco. La cuestión indígena, la cuestión laboral, la cuestión de la guerra y la dependencia económica de los mineros privados se volvieron temas nuevos de debate nacional, más que los viejos problemas de los gobiernos civiles, las elecciones honestas y la construcción de ferrocarriles. Estas discusiones llevaron a la creación de nuevos partidos y movimientos revolucionarios a finales de las décadas de 1930 y 1940, y finalmente a la revolución social de 1952.

La Guerra del Chaco también tuvo la marca de un hito importante en la historia económica de la nación. La Gran Depresión y el conflicto del Chaco resultante marcaron el final de la expansión e incluso de la capitalización de la industria minera. A partir de entonces, la producción y la productividad comenzaron a declinar en una industria que virtualmente no vio cambios en su estructura o patrones de inversión sino hasta 1952. También en las áreas

rurales, el relativo estancamiento de la economía nacional llevó al final del gran auge expansivo de la hacienda, que había durado desde el decenio de 1880 hasta finales de la década de 1920. Al concluir este periodo, la cantidad de peones sin tierra probablemente se había duplicado, y el número de indios libres, de comunidad, ahora era considerablemente menor que el de campesinos sin tierra. Así, una restructuración fundamental de la economía rural se había llevado a cabo en el periodo 1880-1932, pero terminó antes de la total destrucción de las comunidades libres y se volvió una fuente sin fin de conflicto durante el periodo post-Chaco, cuando las haciendas salieron a la defensiva.

Todo el crecimiento que se llevó a cabo como resultado de la gran expansión del estaño tuvo poco impacto en la modernización de la sociedad como un todo. Se calculaba que para 1940 más de dos terceras partes de los bolivianos funcionaban principalmente al margen de la economía de mercado, e incluso para los años cincuenta el número de artesanos urbanos que tomaban parte en la economía nacional era igual al de trabajadores en las fábricas. Aunque dos terceras partes de la población económicamente activa trabajaban en la agricultura, Bolivia aún era un importador neto de alimentos, incluidos los tubérculos tradicionales de los altos. De este modo, mientras que el auge del estaño afectó a la tercera parte de la nación urbana hablante de español, sus efectos multiplicadores tuvieron poco impacto sobre la población rural, excepto quizá para disminuir su nivel de vida, consecuencia de la correspondiente expansión del sistema latifundista.

Bolivia entró a la Guerra del Chaco como una economía altamente tradicional, subdesarrollada, dominada por las exportaciones, y emergió de dicho conflicto con las mismas características. Pero cambió de ser una de las sociedades menos movilizadas de América Latina en términos de ideología radical y organización sindical a ser una de las más avanzadas. La guerra minó los sistemas de creencias tradicionales, y llevó a un replanteamiento fundamental de la naturaleza de la sociedad boliviana. El resultado de dicho cambio en el pensamiento, en gran medida de la élite, fue la creación de un movimiento político revolucionario que acogió algunas de las ideas más radicales que surgieron en el continente. La guerra también crearía el clima

necesario para el desarrollo de uno de los movimientos laborales más poderosos, independientes y radicales de las Américas. Desde estas perspectivas, la Guerra del Chaco, como la Guerra del Pacífico, demostraría ser uno de los puntos de inflexión más relevantes del desarrollo histórico boliviano.

7. DESINTEGRACIÓN DEL ORDEN ESTABLECIDO, 1932-1952

La Guerra del Chaco comenzó el 18 de julio de 1932, cuando Salamanca anunció a la soprendida nación que las fuerzas paraguayas habían tomado un fortín boliviano en el Chaco. Se ignoró el hecho de que este fortín fuera en realidad territorio paraguayo, tomado por los bolivianos a finales de mayo. Salamanca impuso una ofensiva de gran envergadura esa noche, así como un estado de sitio. En este punto, el Estado Mayor del ejército boliviano se rehusó a respaldar los planes de guerra de Salamanca, pues sostenía que el ejército no estaba preparado para un ataque en grande y consideraba que escalar el conflicto era desproporcionado respecto al incidente. El debate entre el Estado Mayor del ejército y el presidente fue tan intenso, que Salamanca, por último, se vio forzado a aceptar la responsabilidad total sobre todas sus decisiones relativas al inicio del conflicto, en un documento formal. El Estado Mayor del ejército, absuelto de cualquier responsabilidad por el asalto y acciones subsecuentes, declaró que estas acciones iban en contra de los intereses nacionales, pero estuvo de acuerdo en poner en práctica las decisiones de Salamanca.

A pesar de las protestas paraguayas e internacionales en torno a la legitimidad de las demandas bolivianas, los líderes locales apoyaron la postura de Bolivia y atacaron a Paraguay como si fuera el país iniciador de la situación bélica. Manifiestos de apoyo nacionalista fueron firmados por todos, desde Alcides Arguedas en la derecha, hasta Franz Tamayo y Carlos Montenegro en la izquierda. También hubo grandes manifestaciones patrióticas en todos los centros urbanos, mientras se olvidó temporalmente la crisis económica. Para garantizar la unanimidad, el gobierno utilizó el estado

de sitio con la idea de reunir a los radicales políticos y laborales, ya fuera encarcelando o enviando al exilio a hombres como Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsborg y Porfirio Díaz Machicao, entre otros. Aquellos miembros de la izquierda a quienes no se encarceló ni envió al exilio, fueron alistados de inmediato y enviados al frente de batalla. Así, en un gesto veloz, Salamanca, en apariencia, había exterminado a la izquierda, aunque el desastroso esfuerzo la haría retornar más fuerte que nunca.

A pesar de la movilización boliviana, los paraguayos supusieron que estaban lidiando con un típico incidente fronterizo. Después de retomar su fortín en julio, volvieron a Washington, donde esperaban continuar negociaciones en torno a un tratado de no agresión. Sin embargo Salamanca se rehusó a modificar su postura, y los tres principales fortines, de indiscutida propiedad paraguaya, fueron tomados. Estos tres fortines —Boquerón, Corrales y Toledo— resultaban vitales para la línea defensiva paraguaya. Su toma requirió de una respuesta a gran escala que el mando general boliviano había reconocido como algo inevitable, que sólo conduciría a una guerra total. En cambio Salamanca pensó que este único acto audaz había destruido toda iniciativa paraguaya, y llamó entonces a frenar las operaciones militares a principios de agosto. Se desarrolló en ese momento un amargo debate entre los generales y Salamanca respecto a lo que en realidad había sucedido durante los primeros contactos entre las tropas, a quién debía culparse por la movilización y cuáles eran los fines guerreros de los bolivianos en última instancia. Las palabras de acusación y recriminación fueron excesivamente violentas e indicaban con claridad un pesimismo extremo respecto al incidente, que parecía implicar una derrota final y desastrosa para las armas bolivianas. Todo esto sucedió durante el primer mes de la guerra, ¡antes de que Bolivia hubiera perdido alguna batalla!

A partir de tal principio, la guerra pronto se deterioró para volverse una derrota y desastre corrupto, sangriento y sin fin para Bolivia. Al darse cuenta de que Salamanca tenía la intención de mantener sus fortines de manera indefinida, los paraguayos ordenaron una movilización general e iniciaron una gran contraofensiva. Para septiembre el avance boliviano se frenó por completo e inició la batalla de Boquerón. Las tropas paraguayas rodearon a

unos 600 soldados bolivianos en su viejo fortín. Con sólo 1 500 efectivos en total en el frente del Chaco, los bolivianos fueron incapaces de reaccionar ante el cerco. Al final del mes los efectivos debieron rendirse, y la nación, conmocionada, recibió las noticias a principios de octubre.

El efecto de la caída de Boquerón fue inmediato y drástico. Entre la opinión pública ilustrada ya se escuchaban ciertos rumores sobre la duplicidad boliviana; se sentía molestia por el deliberado uso político que Salamanca hacía de la guerra. Además había siempre menos tranquilidad por la tensa situación social conforme se iba sintiendo la conscripción militar en todos los niveles de la sociedad. Así, la noticia de la derrota en Boquerón ocasionó grandes disturbios. El 4 de octubre, unos 20 000 manifestantes antigubernamentales exigieron la renuncia de Salamanca y el regreso del general alemán Hans Kundt, exasesor del ejército boliviano, a quien habían expulsado los republicanos de Salamanca en 1930. Cuatro días después, el Congreso también exigió la vuelta de Kundt a las tropas. Dos oficiales de campo importantes, David Toro y Carlos Quintanilla, incluso exigieron la destitución del propio Salamanca. Aunque la rebelión finalmente fue detenida, el omnipotente poder de Salamanca, que había durado en su nueva modalidad cuatro meses completos, terminó, y se le forzó una vez más a solicitar a los liberales que se reunieran en un gobierno de coalición. Antes de que tal gobierno multipartidista pudiera formarse, los paraguayos habían recuperado otro fortín, y para finales de octubre ya habían vuelto a capturar no sólo sus viejos fortines, sino que habían movilizado su ofensiva a territorio boliviano, flanqueando y finalmente tomando el fortín boliviano de Arze. La batalla de Arze resultó en una capitulación total de las fuerzas bolivianas. La consecuencia de esta enorme derrota fue una fragmentación del gobierno, así como negociaciones de salida de los partidos. Los liberales y los republicanos de oposición atacaron a Salamanca, y él, a su vez, alentó a la turba en actos violentos contra sus periódicos. En noviembre Salamanca también proscribió todos los sindicatos y las federaciones laborales. Empero, para diciembre quedó sin opciones y tuvo que llamar al general Kundt, que estaba en Europa, reduciendo con ello su propio papel en el ejército, para quedar como asesor civil.

Aunque Kundt era un excelente organizador y rápidamente reconstruyó al golpeado ejército boliviano, era un débil estratega. Después de haber creado una potente fuerza, pasó los siguientes seis meses destrozándola en un precipitado asalto sobre el impenetrable fortín paraguayo de Nanawa, en una campaña que duró de enero a julio de 1933. Los paraguayos no sólo mantuvieron su fortín, sino que destruyeron las fuerzas que los atacaban, y procedieron a flanquear a los bolivianos en otras zonas, infligiéndoles una serie de nuevas derrotas. Para mediados de 1933 los paraguayos no sólo habían destruido varias divisiones, sino que habían implantado tremendos avances territoriales en la parte del Chaco en manos bolivianas. Para finales de aquel año se destituyó a Kundt y se puso a cargo del ejército al general Enrique Peñaranda, con David Toro como su asesor clave. Pero el cambio sólo profundizó el pesimismo nacional. Con Kundt se había movilizado a 77 000 efectivos, de los que 14 000 habían muerto en combate, 10 000 cayeron prisioneros, 6 000 desertaron, y se evacuó a 32 000 debido a enfermedad y heridas. Esto dejó a 7 000 combatientes en el frente, con 8 000 en la retaguardia dando servicios de apoyo; un remanente lastimoso y desmoralizado de lo que alguna vez fue un ejército poderoso y bien equipado.

Con Peñaranda se organizó un tercer ejército de unos 55 000 hombres, y durante seis meses hubo un empate relativo. Pero en agosto de 1934 el capaz líder paraguayo, el general Estigarribia, finalmente encontró un punto débil en la defensa boliviana e irrumpió en la línea del Chaco. A partir de este momento los paraguayos realizaron una arremetida sin freno en las faldas de los Andes, y la guerra se volvió una batalla abierta por petróleo, ya que los paraguayos finalmente estaban a escasa distancia de los depósitos bolivianos. En los cuatro meses que van de agosto a noviembre, los paraguayos capturaron más territorio del que jamás hubieran exigido en sus demandas más extremas antes de la guerra.

Para finales de noviembre Salamanca había ideado la elección de su leal seguidor, Franz Tamayo, y se mostraba decidido a llevar a término sus últimos actos en el cargo, destruyendo a sus opositores militares. En específico, viajó al Chaco para forzar a que Peñaranda y Toro entregaran el control del ejército. En lugar de esto, el 25 de noviembre de 1934 el ejército

arrestó a Salamanca en su cuartel general de Villa Montes y lo forzó a renunciar. El gobierno se entregó entonces al vicepresidente y líder del Partido Liberal, José Luis Tejada Sorzano.

Las consecuencias inmediatas de esta revuelta militar fueron en extremo favorables para el esfuerzo bélico boliviano. Tejada Sorzano era tanto un excelente administrador como un hábil político. Rápidamente organizó un gabinete que incluía a todos los partidos, incluso a seguidores de Salamanca; logró que el barón del estaño, Aramayo, tomara el Ministerio de Finanzas, para luego dar su apoyo incuestionado al mando del ejército. Las finanzas de guerra de Bolivia se fortalecieron en buena medida; terminaron los conflictos del frente interno, en los que incluso el ataque sobre la extrema izquierda se detuvo, y se creó un frente unido. Del lado militar, Bolivia finalmente estaba cercana a sus propias líneas de abasto; peleaba en territorios bien conocidos y asentados, y enfrentaba a un enemigo que ahora estaba peligrosamente extralimitado y penosamente subfinanciado.

Con la caída de Salamanca la guerra llegó lentamente a su fin. Los paraguayos invadieron Tarija y Santa Cruz, e incluso tomaron algunos de los campos petrolíferos a principios de 1935, pero como sin Villa Montes no se podía mantener este avance, se planeó una importante batalla por este baluarte boliviano. Fue entonces que surgió el líder militar más eficaz de esta guerra, el boliviano Germán Busch, un mayor que se hizo cargo de planear la defensa de la zona del comando sur, y no sólo derrotó a los paraguayos en Villa Montes, sino que pudo montar una gran contraofensiva que provocó la salida de todos los paraguayos de Tarija y Santa Cruz, y llevó a la toma de todos los centros petrolíferos antes arrebatados.

Llegado este momento, ambas partes estuvieron listas para firmar la paz. Los recursos paraguayos se habían extinguido, y la derrota en Villa Montes implicó que jamás pudieran tomar la zona de las faldas de los Andes. Al mismo tiempo, era evidente que continuar la guerra podría ocasionar algunas pérdidas ante sus ganancias del Chaco, ya que el nuevo liderazgo militar del lado boliviano parecía haber resucitado sus habilidades militares. Para éstos, recuperar todos los territorios que no eran el Chaco era suficiente victoria. Aunque el gobierno, a diferencia del régimen paraguayo, estaba bien

abastecido financieramente gracias a los impuestos sobre la minería de la revitalizada industria estañífera, y podría haber continuado la guerra durante algún tiempo, la nación completa deseaba la paz. La amargura de los años de Salamanca y la creencia general de que la guerra se peleó por la Standard Oil, y que seguramente la había iniciado la propia Bolivia, había destruido la fe nacional en el esfuerzo de guerra. Se organizó una conferencia por la paz en Buenos Aires en mayo de 1935, y el 14 de junio del mismo año se firmó un tratado formal de paz.

Así terminaron, casi en el mismo mes, los tres años del conflicto más amargo de la historia boliviana. Aunque Bolivia perdió territorios más valiosos en su guerra contra Chile durante el siglo XIX, la lucha de entonces fue mínima y el impacto sobre la misma población, ligero. En el conflicto del Chaco las pérdidas fueron mayores: más de 65 000 personas murieron, desertaron o perecieron en cautiverio, cifra que representa, más o menos, 25% de los combatientes bolivianos. Tales pérdidas se dieron en una población total de apenas unos dos millones de personas, proporción igual a la que tenían las naciones europeas durante la Primera Guerra Mundial.

Más aún, la guerra vulneró profundamente la validez de las instituciones nacionales. El ejército mismo había sido organizado por castas: los blancos eran los oficiales, los cholos los suboficiales y los campesinos indígenas, la tropa. El único grupo que incumplió esta estructura fue el de los trabajadores y radicales capturados por Salamanca, cuando los envió al frente de batalla. De este modo, el mismo sistema de castas de la sociedad nacional se mantuvo de manera íntegra en los frentes de guerra, lo que creó un hondo abismo entre comandantes y tropa y alentó aún más la notable corrupción de los oficiales blancos. Para los pocos blancos que otorgaron su servicio en el frente de batalla la experiencia fue amarga, y a muchos se les comprometió con una postura radical respecto a las divisiones raciales de su sociedad. Para los indios implicó la continuación de los usuales patrones de explotación. Muchos soldados desertaron y hubo varios motines importantes en los frentes de batalla; pero cuando la guerra terminó, la tropa aymara y quechua, desesperada, regresó a sus tierras y se reintegró a las comunidades tan rápidamente como fue posible.

Sin embargo, para los cholos y los blancos no militares la historia fue distinta. Muchos de estos individuos, antes comprometidos, se encontraron enajenados al sistema tradicional. Habían quedado paralizados por la corrupción e incompetencia del alto mando, así como perplejos por las revelaciones de la duplicidad boliviana durante la guerra. Para estos jóvenes de la generación del Chaco, su sacrificio había sido vano. Emergieron de la guerra apesadumbrados y frustrados por el sistema político que había creado el embrollo del Chaco. La liberación más inmediata para esta sensación de pesadumbre y frustración fue una gran efusión de novelas realistas que comenzaron a aparecer de inmediato en los primeros meses de la guerra, y siguieron dominando la literatura nacional hasta muy entrada la siguiente década. Las amargas novelas proletarias se volvieron el género del Chaco; cada novela retrataba la crueldad de la guerra, el dispendio de vidas, el hambre y la sed. La incompetencia, la traición y la cobardía de la casta de oficiales fueron temas comunes.

La novela del Chaco no surgió, como el ave Fénix, de las cenizas de la derrota del Chaco, sino que tuvo sus orígenes en las novelas realistas y crudas de la generación de 1880. En la cima de la paz y euforia liberales durante las primeras décadas del siglo, algunos escritores, como Armando Chirveches, Alcides Arguedas y Jaime Mendoza, habían publicado novelas que tocaban temas de corrupción política entre la élite, así como la explotación y opresión de los trabajadores mineros y los indios campesinos. Tales temas sobre clases sociales no fueron los únicos explorados por esta generación. Adela Zamudio, tanto en poesía como en cuento corto, explicaba los problemas de la discriminación sexual. Sobre la base de este legado, los escritores de la década de 1930 pudieron expresarse en un idioma ya muy apreciado por la élite letrada. La novela del Chaco les acercaba la experiencia íntima del desastre de la guerra. Tanto como cualquier forma de ideología política o propaganda revolucionaria por sí misma, el realismo de la novela de la Guerra del Chaco tuvo un profundo impacto sobre los jóvenes e intelectuales que conformaban el núcleo del pensamiento elitista.

Pero la de los novelistas no fue la única voz elevada en amarga protesta. El desastre también creó un nuevo movimiento político radical que ofrecía una

serie de ideas desafiantes para la élite nacional. Aunque Salamanca había hecho todo lo posible por destruir a este movimiento, el desastre de la Guerra del Chaco permitió a la izquierda una importante actuación. La izquierda radical de la preguerra mantuvo una propaganda antiguerra y contra la sociedad tradicional, muy presente y notablemente activa, que de hecho demostró tener tal éxito que pudieron alentar la deserción de la tropa y volverse una relevante fuerza ideológica en la época de la posguerra.

Esta reinterpretación radical de la realidad boliviana conformó un ataque fundamental al consenso racista de la sociedad boliviana y a la naturaleza oligárquica de su vida política y económica. Se culpó a las corporaciones multinacionales por la guerra, en específico a la Standard Oil de Nueva Jersey. También se consideró que se trató del último aliento del viejo orden que, para defender su poder, había llevado a la nación a iniciar un conflicto internacional. Para este grupo de pensadores radicales, de entre quienes el más prominente en este primer periodo fue Tristán Marof, la ideología indigenista y marxista del peruano José Mariátegui ofreció un marco para revaluar a la sociedad boliviana. Esta concepción de la realidad andina sostenía que el problema del indio en realidad era un problema de explotación y tierra; que los españoles y sus seguidores habían saqueado las tierras a los indios e intentado destruir su cultura para poder explotarlos, y que la pasividad y el atraso de los indios se debía, de hecho y de manera exclusiva, a su explotación. La única manera de terminar con ella era destruyendo las haciendas y devolviendo las tierras a sus trabajadores indios. Muchos de estos escritores sostenían también que siempre que individuos privados controlaran los minerales, la mayor fuente de riqueza nacional, la nación no se beneficiaría de estos recursos no renovables. Se decía que el propio Estado era administrado por la “rosca”, término despectivo para hablar de un grupo de políticos y abogados que administraban el aparato estatal a favor de mineros y hacendados. Los regímenes no democráticos oligárquicos que gobernaban Bolivia estaban ahí por necesidad, ya que ésta era la única manera en que los mandarines económicos podían explotar íntegramente a la nación. Mientras Marof y otros ofrecían diversas soluciones, todos hablaban

de alianzas entre trabajadores, mineros y campesinos indios, cuya meta última debía ser “tierras al indio” y “minas al Estado”.

Al mismo tiempo que pocos aceptaban, al menos al principio, los argumentos propuestos por la izquierda radical, la enunciación de los principales problemas de la sociedad nacional creó el contexto en el que sucederían los futuros debates. El tema de la nacionalización de las minas se implantó con firmeza en la conciencia política de blancos y cholos en aquel momento, e incluso la problemática del indio y sus justas demandas se aceptaron como legítimos.

El que estas ideas encontraran un acorde favorable puede verse en el sutil giro que dio la naturaleza política de la posguerra. Los levantamientos indios, por ejemplo, se volvieron menos clásicas guerras de castas y más movimientos sociales de protesta, en los que el elemento primario era los derechos panindígenas. La creciente conciencia de clase entre los campesinos tenía continuación en un compromiso marxista más radical, tanto de quienes organizaban la mano de obra como de jóvenes radicales. Tan intensa fue la actividad de los comités de deserción y de los grupos contra la guerra, que desde su exilio argentino muchos de estos movimientos finalmente se fusionaron para formar movimientos políticos permanentes. De este modo, en 1934, en un congreso especial celebrado en Córdoba, Argentina, nació el primero de los principales partidos radicales de la posguerra, el Partido Obrero Revolucionario (POR), bajo el liderazgo de Tristán Marof y José Aguirre Gainsborg. Aunque se trató de un pequeño agrupamiento de exiliados radicales, éste fue el primer partido creado por la generación del Chaco, y décadas más tarde formaría la vanguardia del movimiento revolucionario.

Aunque el POR pronto se vería desgarrado por disputas internas en torno al trotskismo, su impacto ideológico fue impresionante. La derrota absoluta de las armas bolivianas, no obstante contar con más personal, riqueza y recursos, conmocionó a la mayor parte de las personas ilustradas. Pero aún peor fue la corrupción tan publicitada, así como la incompetencia de los oficiales, lo que llevó a la masacre o captura considerable de efectivos, mediante la incompetencia y la inanición. Había un sorprendente poco odio hacia los

paraguayos, pero sí mucha hostilidad hacia los líderes en Bolivia. Fue este público arengado y frustrado el que al final de la guerra exigió una rendición de cuentas de todos aquellos que los habían llevado a este fracaso. Y cuando tal rendición de cuentas no llegó, buscaron cambiar el orden social, económico y político de la sociedad donde vivían.

Con la firma de la paz en junio de 1935 todas estas tensiones políticas rindieron fruto luego del colapso del arreglo tradicional de los partidos. Mientras el ejército había solicitado a Tejada Sorzano que prorrogara su periodo presidencial hasta que se firmara un acuerdo de paz definitiva, los partidos más viejos se opusieron a estas acciones y los saavedristas esperaban volver a gobernar. Pero ahora había un cúmulo de nuevos partidos que tomaron nombres y símbolos exóticos, pero que representaban a la juventud y a los excombatientes que habían representado elementos de apoyo clave de los viejos partidos. De pronto la palabra "tradicional" se volvió epíteto de los partidos oligárquicos de la preguerra, y toda una gama, desde los corporativistas italianos hasta las ideologías indigenista y marxista, se volvieron la moneda de curso de quienes antes habían apoyado al viejo orden. No sólo se culpó a los seguidores del recientemente fallecido Salamanca de todos los males de la guerra, sino que también se culpó a los liberales y a los diversos partidos republicanos.

También surgió un amargo movimiento de excombatientes como poderosa fuerza política que exigía rendición de cuentas por la capitulación: un renacido y vital movimiento laboral exigía derechos fundamentales, y un nervioso cuerpo de oficiales insistía en la protección de su amenazada casta. Estos tres grupos principales de poder temían y se oponían a una vuelta a la política tradicional. Los partidos mismos ya no podían movilizar el popular apoyo de la élite para apaciguar a estos opositores, ya que este sostén ahora se había fraccionado en una serie de nuevos agrupamientos reformistas, fascistas y radicales. Incluso entre los propios partidos tradicionales había modificaciones importantes. Mientras los liberales se mantenían firmes en posturas clásicas y apoyaban a Tejado Sorzano, el viejo Partido Nacionalista de Siles —el más reformista de los viejos grupos— se disolvió, cercenando, de este modo, cualquier vínculo formal entre la nueva izquierda y los

trabajadores y políticos tradicionales. Los republicanos de Saavedra anunciaron un programa “socialista” aproximadamente al mismo tiempo, e incluso cambiaron su nombre formal por el de Partido Socialista Republicano. Pero el título de socialista llevó pocos cambios al grupo y las fuerzas de la posguerra lo ignoraron.

Después del tratado de paz, el capaz gobierno de Tejada Sorzano intentó apaciguar todos estos nuevos movimientos. Formalmente apoyó a los excombatientes, y en octubre inició acción legal contra la Standard Oil, que llevaría, por último, a su confiscación. Para finales de año aceptó convocar a una convención constitucional, e incluso propuso establecer nuevos ministerios de bienestar y del trabajo para iniciar una legislación de reformas sociales. Pero ninguno de estos gestos pareció satisfacer a los grupos reformistas; una organización laboral reanimada en un mercado de trabajo estrecho debido a una floreciente economía de posguerra finalmente fue fermento del derrocamiento del régimen. Los radicales laborales que volvieron tuvieron éxito en la reorganización de todas las viejas confederaciones provinciales, y en mayo de 1936, encabezados por el radical sindicato de impresores, declararon una huelga general. Tan poderoso fue el movimiento, que Tejada Sorzano, temeroso de la violencia revolucionaria, devolvió a la policía a sus barracas y el mando general declaró su neutralidad. La huelga general fue un éxito total y los sindicalistas tomaron a las fuerzas policiacas, de manera temporal, en las ciudades. Con una exigencia de 100% de aumento salarial, los trabajadores declararon la huelga indefinida. La obvia debilidad del gobierno central frente a esta masiva expresión laboral fue la excusa que el inquieto cuerpo de oficiales necesitaba para madurar sus planes, y el 17 de mayo de 1936, el viejo orden llegó a su fin cuando los coroneles David Toro y Germán Busch declararon un golpe de Estado y tomaron el gobierno.

El golpe militar de 1936 marcó el inicio de un periodo de gobiernos encabezados por los oficiales más jóvenes de la Guerra del Chaco. El ejército se encargaría de reflejar las divisiones dentro de la vida política nacional en conjunto, girando de moderado a radical, y luego a conservador, conforme se realineaban las fuerzas políticas nacionales. Para los jóvenes coroneles que

dirigirían el gobierno boliviano en los siguientes 12 años, se trataba de una combinación de identificación con la generación del Chaco y sus demandas de reforma, del claro temor a una represalia, lo que motivaba su intervención. El reclamo de un tribunal para los crímenes de guerra, proveniente de excombatientes y el Congreso, fue una motivación crucial tras la propia decisión de intervención del ejército.

Al inicio los coroneles rebeldes pidieron a David Toro que los dirigiera, con Germán Busch como el poder detrás del trono. De modo muy semejante a como lo hiciera Saavedra en cuanto a su sensibilidad para con los cambios en las tendencias nacionales, Toro respondió al nuevo estado de ánimo político de la nación al declarar que su gobierno sería "militar socialista". Al ser también poco sofisticado políticamente respecto al marxismo, como lo fue Saavedra cuando rebautizó a su partido como republicano socialista, Toro implicaba, al usar tal término, una administración esencialmente populista y reformista. Acercándose a la izquierda, creó el primer Ministerio del Trabajo de Bolivia y designó como titular a la cabeza del radical sindicato de impresores. En tanto que esto llevó al gobierno a una pequeña camarilla de marxistas y anarcosindicalistas, los principales grupos civiles que llegaron a asociarse con el nuevo régimen se vinculaban más de cerca con una postura fascista modificada. El grupo que articulaba de manera más clara la ideología "nacional socialista" fue el pequeño Partido Socialista, creado un par de meses antes de la toma del poder por Toro. Sus mejores representantes fueron los ideólogos Carlos Montenegro y Augusto Céspedes, quienes serían cruciales para la formación de partidos nacionalistas de movimientos de masas posteriores. Durante los primeros meses del nuevo régimen, este grupo comenzó a publicar *La Calle*, que después se volvió el órgano oficial de la propaganda fascista alemana y asumió una virulenta postura antisemita. El hecho de que Hochschild, uno de los tres barones del estaño, fuera judío, ofrecía a los nacionalistas un tema combinado de ataque a los propietarios mineros, al tiempo que articulaban su tesis en torno a una conspiración internacional. Los nacionalsocialistas tenían la suficiente influencia como para lograr que Toro propusiera un modelo corporativo para la legislatura nacional, y una sindicalización forzada bajo el control estatal. Pero los

radicales del Ministerio del Trabajo fueron tenaces contra estas propuestas, y a la vez que apoyaban las necesidades organizativas del trabajo, exigían que el gobierno dejara el control sindical en manos de los trabajadores. Su oposición y la propia indiferencia esencial de Toro fueron suficientes para acabar con estos planes.

Al tiempo que los nuevos grupos políticos radicales y los partidos tradicionales maniobraban constantemente para apoderarse del control de la dirección del gobierno de Toro, los inquietos oficiales se desencantaban con todas las discusiones, debates y falta de unanimidad entre los civiles. El periodo más creativo de la efervescencia política llegó a una conclusión abrupta a finales de junio, cuando Busch anunció el término de la alianza militar-civil, el exilio del problemático Saavedra y la creación de un régimen completamente militar. El indefenso Toro se vio forzado a aceptar estas decisiones, y a lo largo de los siguientes meses gobernó con la finalidad de agradar tanto a Busch como a los oficiales jóvenes, y de llevar a cabo algunas reformas moderadas que generaran apoyos en los planos nacional y popular para su régimen.

Toda esta agitación había creado inquietud no sólo entre los oficiales, sino también en la élite tradicional. Con los liberales incapaces de retener el poder a pesar del desorden de los republicanos de Salamanca, y de que las fuerzas de Saavedra coquetearan con los nuevos movimientos radicales, la oligarquía se sintió convocada a reorganizar sus defensas formales. En mayo el minero del estaño, Carlos Aramayo, fundó un nuevo órgano, el Partido Centralista, cuya finalidad era defender los intereses de la élite. Aunque al principio obtuvieron un potente apoyo de la Asociación de Industriales Mineros, este partido terminaría por colapsar como fuerza importante. No obstante, su creación misma señalaba a los viejos partidos que su breve relajamiento ante la efervescencia post-Chaco no iba a tolerarse. Se trataba de una clara afirmación oligárquica de que la política, tal como se desarrollaba, con las viejas reglas, no tenía la suficiente orientación de clase y se distanciaba del papel fundamental que este partido debía desempeñar.

En tanto que los movimientos radicales aún podían estar en su etapa reformista y relativamente poco eficaz, su amenaza potencial era clara, y los

propietarios de minas ansiaban una respuesta más poderosa ante ésta. La finalidad de los centralistas era forzar a que los partidos tradicionales olvidaran sus viejos conflictos y se unieran en un partido de coalición coherente, con base en la clase social. Ésta sería la meta de la élite minera desde 1936 hasta 1952, mientras buscaban recrear la vieja estabilidad mediante maniobras legales o extralegales. El hecho de que el Partido Centralista pronto desapareciera de la escena, cuando se llevaban a cabo pláticas para la coalición entre los liberales y diversos republicanos, implicaba que los partidos tradicionales habían aprendido la lección.

Para satisfacer las contradictorias exigencias que enfrentaba, Toro, con su usual modo de ser, intentó comprometerse con todas las facciones. Tranquilizó a la derecha extrema al sacar a los radicales del Ministerio del Trabajo y respondió a los grupos reformistas al proponer una convención constitucional, así como una nueva acta constitutiva nacional. Pero Busch y su camarilla de jóvenes oficiales se impacientaron ante estas discusiones, y en los primeros días de 1937 Busch presentó su renuncia como un voto de no confianza en el régimen de Toro. Para todo intento y propósito, se trataba del anuncio formal de un golpe inminente.

En respuesta a la amenaza de Busch, Toro intentó crear una problemática popular que le ofreciera el apoyo que desesperadamente necesitaba. Diez días después del pronunciamiento de Busch, aceleró el proceso legal contra la Standard Oil, y el 13 de marzo de 1937 anunció la confiscación fiscal de la Standard Oil Company de Bolivia. Todas las pertenencias, equipo y material de la compañía pasaron automáticamente, sin compensación a manos del monopolio petrolífero estatal de reciente formación: Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). Se trató de un acto histórico en los ámbitos nacional e internacional. Fue la primera confiscación, en su tipo, de una importante compañía multinacional estadounidense en América Latina, y precedió a las confiscaciones mexicanas, de mayor envergadura, por un año. A la vez, lanzó al gobierno al mercado de manera directa, haciéndolo un importante productor de bienes primarios. Mediante este acto, el gobierno boliviano deliberadamente rompió con su postura *laissez-faire* más tradicional y mantuvo un papel más activo en la economía. La existencia de

bancos de compra de minerales en el siglo XIX y el plan de racionamiento del estaño a principios de 1930 fueron precedente. Sin embargo, esta medida sería el principio de una evolución mayor que, para la década de 1950, vería alrededor de la mitad del producto nacional bruto bajo el control de corporaciones estatales.

Más tarde Toro intentó organizar un nuevo Partido Socialista, e incluso recibió algún apoyo tentativo de la confederación sindical nacional. Pero esta febril actividad no apagó la creciente sensación de Busch de que no se debía confiar en Toro, y de que él mismo tenía ahora suficiente experiencia para gobernar el país, con el apoyo de los oficiales jóvenes. A principios de julio, después de 15 meses de la actividad política más caótica y creativa en la historia nacional, el régimen del presidente Toro llegó a su fin cuando Busch anunció que éste ya no contaba con el apoyo del ejército. Dada la amplia popularidad que disfrutaba el reformista régimen de Toro, parecía, ante la mayor parte de los observadores, que el desconocido Busch traería consigo la restauración del tradicional régimen partidista, bajo un sólido control de la minería. Pero en los hechos, el nuevo régimen sería continuación del periodo de reforma y reconstrucción partidista de la era de Toro.

Aunque al principio Busch mostró algún interés por revivir una coalición de los partidos tradicionales, en la práctica sucedió lo opuesto. Busch se rehusó a permitir que los viejos partidos se unieran al gobierno, y siguió emitiendo nuevas leyes reformistas. Ningún partido solo se debía asociar con el régimen, de modo que la nueva actividad partidista continuó sin cesar, llevando, al fin de la década, al establecimiento de nuevos y poderosos partidos reformistas nacionales. Los partidos tradicionales, por su parte, encontraron que no haberse unido al gobierno, o no haber encontrado lugar en algún parlamento normal, implicó cuatro amargos años de erosión, de modo que, para el decenio de 1940, serían esqueletos de sus seres anteriores.

Debe subrayarse que las reformas por las que abogaron y que promulgaron Toro y Busch eran propuestas relativamente moderadas en torno a políticas de bienestar y prosindicalistas, que no involucraban un serio desvío de los recursos nacionales, ni la confiscación de propiedad privada, excepto en el caso único de la Standard Oil. De hecho el ejército, cuando mucho, tuvo un

subsidio más sólido en la era Toro-Busch de la posguerra de lo que había tenido durante la misma Guerra del Chaco. Aunque ahora se reducía a un total de 5 000 efectivos, el sector militar aún absorbía 32% del presupuesto nacional en 1937. Además, mientras más se movía Busch a la izquierda, más se movían los principales generales de la vieja clase de oficiales a la derecha; por su parte, la designación de Carlos Quintanilla como cabeza del mando general implicó una clara pérdida de poder para los jóvenes oficiales radicales.

No obstante, pese a su naturaleza reformista e indecisa, la era del militar-socialismo echó los cimientos para cambios de mayores alcances. En ningún sitio se expresó mejor este potencial que en la nueva convención constitucional de 1938, la primera desde la promulgación del acta constitutiva liberal de 1880. Esta Constitución, típica del siglo XIX, ofrecía las bases para un estilo relativamente limitado de régimen constitucional, en el que los derechos del individuo se protegían contra la intervención del Estado, y los poderes del gobierno central tenían límites estrictos.

Esta tendencia a circunscribir la intervención gubernamental cambió en América Latina con la Constitución mexicana de 1917. Los reformistas radicales de toda la región ahora exigían que el Estado desempeñara un papel proactivo en la educación y el bienestar de toda la ciudadanía, como lo había estipulado la Constitución mexicana, aun si reducía los derechos de propiedad del individuo. Conocida como "constitucionalismo social", esta tendencia pronto dominó el pensamiento político de los teóricos radicales latinoamericanos, en su búsqueda por crear modelos de cambio radical por darles legitimidad constitucional a los nuevos desarrollos. Tal modificación en la teoría constitucional boliviana quedó en evidencia en los debates del periodo inmediatamente posterior a la guerra, para volverse un común denominador entre las nuevas fuerzas políticas que surgían de la generación del Chaco. En las elecciones para la Convención Constitucional de mayo de 1938, el régimen de Busch apoyó a los nuevos grupos con los que Toro simpatizaba; incluso permitió que el movimiento de excombatientes y la federación del trabajo central participaran con su propia selección de candidatos. Esto, más el estado debilitado de los viejos partidos,

medianamente desorganizados, significó que la composición de la Convención de 1938 fuera en extremo radical.

La nueva convención revisó la carta constitucional de 1880 con una mirada de constitucionalismo social. Los debates surgidos en la convención también proveyeron de un foro legitimador para la diseminación de la corriente ideológica más radical en la nación. Aunque las propuestas más radicales de reforma agraria, legalización del ayllu y nacionalización de las minas fueron finalmente rechazadas por la Convención, la Constitución misma limitó los derechos de propiedad individuales de manera rigurosa. La propiedad ya no debía tomarse como un derecho privado inalienable de los individuos, sino como un derecho social cuya legitimidad se definía por la utilidad social. A la vez, se responsabilizó al Estado por el bienestar económico del individuo, la protección de las mujeres, los menores y la familia, y por proveer educación libre y universal. La meta esencial de la Convención en todos estos artículos era comprometer al Estado a ostentar la responsabilidad total por la salud, la educación y el bienestar de toda su ciudadanía. El clásico gobierno liberal tipo *laissez-faire,* con un mínimo de intervención, quedaba ahora remplazado por el concepto de un Estado activo, interventor en todas las áreas de la vida privada de la ciudadanía, para poder proveer el bien colectivo.

Un reformismo tan activo dejó a Busch bastante desconcertado. En constante giro de izquierda a derecha, parecía incapaz de definir su propia postura política, justo cuando los izquierdistas moderados, e incluso los partidos tradicionales, definían con claridad sus propias posiciones durante el periodo de la posguerra. Para los moderados y los radicales, la Convención Constitucional ofrecía un foro tanto para la educación ideológica como para el establecimiento de alianzas políticas más coherentes. Los liberales rechazaban su ala más reformista, y entregaron su partido al escritor Alcides Arguedas, ahora un intelectual bastante reaccionario, opuesto a todas las reformas de la generación del Chaco. En marzo de 1938, la muerte de Saavedra, el último de los grandes caudillos de la preguerra, permitió que todos los partidos republicanos se reunieran en un frente unido. Los dos partidos tradicionales negociaron un acuerdo conocido como la "Concordancia". Esta alianza fue otro paso para obligar a los partidos de la

preguerra a actuar como un agrupamiento consistente de defensa de clase, con la idea de contener la arremetida de los nuevos movimientos. A su vez, la Convención dio fundamento para que muchos de los nuevos partidos establecieran una base más firme.

Pero ninguna de estas aclaraciones políticas satisfizo a Busch, y ni siquiera logró aceptar las reformas a la Constitución de 1938, pese al relativo amplio apoyo popular del que disfrutaban las nuevas reformas sociales. No encontraba satisfacción ni siquiera en la nueva calma política que había brotado. En abril de 1939 declaró que, a partir de ese momento, administraría su gobierno como dictadura. Con este acto se prohibió el funcionamiento de todos los partidos políticos, se cancelaron las elecciones para el Congreso y se suspendió la Constitución de 1938. Entonces la nueva dictadura emitió un flujo de nuevas leyes, la mayor parte de las cuales trataban de la moralidad en el gobierno. Pero entre estas legislaciones, bastante ingenuas, se decretó un nuevo código laboral en mayo de 1939. Aunque se gestó a partir de las reformas propuestas por el Ministerio del Trabajo en tiempo de Toro, la promulgación final de un código laboral moderno era una pieza fundamental de la legislación nacional, y el "Código Busch", como se le llamó, se consideró —junto con la Constitución de 1938— la pieza más firme de actividad gubernamental llevada a cabo durante su mandato.

Busch también repelió un tenaz ataque emprendido por los barones del estaño contra el Banco Central para las ventas de divisas al extranjero. En 1936 Toro había establecido el Banco Minero de Bolivia para ayudar a la minería pequeña y mediana, y para regularizar las ventas del mineral mediante compras gubernamentales. De manera aún más importante, había impuesto el requisito de que la gran minería entregara sus ingresos por ventas al extranjero al Banco Central, para que se convirtieran en moneda boliviana a tasas de cambio especiales. Al mantener una tasa de cambio más baja que la del mercado abierto, el gobierno pudo cuadruplicar sus impuestos directos e indirectos de la industria minera. Busch no sólo defendió la posición de Toro en este tema, sino que aumentó aún más el requisito y disminuyó las tasas especiales, aumentando con ello la porción gubernamental de las ganancias de las minas a 25% del valor del total de las exportaciones de estaño. Aunque

los mineros habían esperado finalmente volver a un mercado libre con Busch, sus acciones iban en dirección opuesta. Además, entre 1936 y 1952 el Banco Central, bajo regímenes tanto radicales como conservadores, mantuvo el control sobre los ingresos de toda la exportación del estaño boliviano, manipulando la tasa de cambio para generar ingresos gubernamentales en la forma de impuestos indirectos.

Pese a todos los genuinos avances llevados a cabo por el nuevo régimen, Busch parecía permanecer totalmente insatisfecho con la ambivalencia política. Se molestó en extremo por el escándalo en torno a la venta de visas a judíos en Europa, pese a su decisión de proveer tales visas gratis para que los judíos europeos se establecieran en el Chaco y en las tierras bajas orientales. Pensó que Hochschild estaba violando las reglas de la tasa de cambio y lo hizo arrestar; fue forzado a liberarlo, apenas un par de días después. Seguía organizando para luego deshacer a su propio partido en el gobierno, sólo para renegociar los contactos con los partidos tradicionales. Y al tiempo que gobernaba por decreto, con la esperanza de cambiar el destino de Bolivia como por milagro, sentimiento que a menudo expresaba en público, pronto también se dio cuenta de que sus moderadas reformas no tenían un impacto contundente.

Es evidente, a partir de sus últimos discursos y actos públicos, que Busch era un individuo resuelto y en extremo trastornado, que parecía totalmente insatisfecho con cualquier cosa que llevara a cabo. En agosto de 1939 se suicidó; este acto azoró a la nación a la vez que generó el tipo de veneración y apoyo del que Busch sintió que carecía en vida. Su suicidio, más el cambio inmediato de políticas que sucedió a su muerte, convirtieron a Busch en un mártir de la izquierda revolucionaria. También se volvió una creencia popular que los barones del estaño, y la rosca que los apoyaba, de algún modo habían asesinado al héroe de la Guerra del Chaco. En tanto que la mayor parte de los estudiosos aceptan la evidencia del suicidio, la muerte de Busch, así como el papel de la Standard Oil respecto a haber ocasionado la Guerra del Chaco, se volvió otro poderoso mito político en el arsenal de la izquierda radical y reformista que otorgaba legitimidad a sus exigencias de cambio.

La muerte de Busch puso fin al liderazgo carismático de los oficiales de la Guerra del Chaco, al tiempo que permitió que la oligarquía terminara el experimento del radicalismo militar. A través del liderazgo del general Quintanilla, quien encabezaba el ejército bajo Busch, la derecha quitó del poder a los oficiales radicales clave, y así, cuando Busch murió, el ejército estaba más que listo para entregar el gobierno a los partidos tradicionales. Para muchas personas de derecha, la muerte de Busch parecía ofrecer una oportunidad única para eliminar todos los cambios que se habían dado como consecuencia del fermento de la posguerra.

Sin embargo, los partidos tradicionales descubrirían que era imposible regresar a las condiciones previas a la guerra. El periodo que va de 1936 a 1939 había sido de notable crecimiento de la izquierda radical, pero incluso más para la izquierda moderada, antes inexistente. Fue una época de educación, de la minoría de habla hispana, en la ideología contemporánea radical y reformista, campaña que también alcanzó a algunos campesinos y cholos urbanos, más pobres. En algunos momentos alentada por Toro y por Busch —y en otros desatendida e incluso perseguida—, la izquierda moderada aumentó sin freno a lo largo del periodo de la posguerra, en especial entre la clase media y la clase trabajadora alfabetizada. En cuanto a la izquierda extrema, los grupos fundamentales laborales y de estudiantes universitarios, núcleo de todos los movimientos de izquierda en América Latina, se radicalizaron y alcanzaron nueva fortaleza y poder organizativos. Además, al haber penetrado estos grupos, la izquierda radical incluso comenzó a hacerse escuchar también entre la clase media.

De este modo, la era del militar-socialismo señaló el fin del sistema político tradicional que se había creado a partir de 1880 y vio la transición de un clásico régimen republicano intraclase, de participación limitada, a uno basado en políticas de clase con una importante lucha en torno a la participación de las clases más bajas en la vida política nacional. Aunque las izquierdas moderada y extrema eran aún relativamente débiles y apenas habían creado algunos partidos estables, la derecha encontró imposible frenar su desarrollo. En el periodo posterior a Busch, la lucha se agudizaría y se volvería apasionada, mientras cada una de las partes se alejaba de la

estructura política civil y recurría a la violencia para apoyar sus posturas, ideológica y de clase.

Sin embargo, a la muerte de Busch los conservadores pensaron que la situación podía retornar a las normas de la preguerra. Inmediatamente presionaron a Quintanilla para que convocara a elecciones libres y facilitara un retorno al gobierno civil. Quintanilla, sin duda, tenía la ambición de administrar su propio gobierno, pero enfrentó una sólida oposición a que continuara en el cargo. Por un lado, los partidos de la Concordancia exigieron el fin del régimen militar, y por otro, los inquietos oficiales jóvenes expresaban su lealtad al general Bilbao Rioja, héroe del periodo de guerra y seguidor de las líneas Busch-Toro. Pasado un mes en el cargo, Quintanilla volvió a la Constitución de 1938 y convocó a elecciones presidenciales y parlamentarias. También exilió a Bilbao Rioja, con lo que terminaba la alianza entre los oficiales del Chaco y los nuevos grupos de izquierda. Parecía que la izquierda quedaba descabezada y que la derecha retomaría el poder.

Pero las elecciones de 1940 sacudieron a la vieja élite. Todos los partidos tradicionales se reunieron en torno al general Enrique Peñaranda como candidato oficial para la presidencia, y apoyaron una lista electoral de unidad entre liberales y republicanos para las elecciones del Congreso. La izquierda extrema dio su apoyo a un profesor de derecho y sociología de Cochabamba, José Antonio Arze. Éste era parte de la pequeña alternativa de marxistas radicales que no sólo se habían opuesto a la Guerra del Chaco, sino que también había enfrentado el reformismo de Toro, quien los exilió en 1936. Desde su exilio en Chile, Arze organizó una coalición de grupos socialistas marxistas llamada Frente de Izquierda Boliviana. En la elección, Arze obtuvo 10 000 votos de los 58 000 que se emitieron en la elección, pese a ser una figura desconocida en el plano nacional, sin una organización partidaria formal, sin apoyo de ninguna publicación y sin el sostén de la izquierda moderada, que votó por Peñaranda. A pesar de todos estos obstáculos, Arze pudo convencer a 10 000 votantes del viejo régimen —esto es, a los blancos y cholos urbanos educados— de que un programa marxista revolucionario era el único viable para Bolivia. La sorpresa de la candidatura de Arze

destruyó la complacencia de la derecha y puso punto final a su esperanza de retornar al sistema previo a 1932.

Dicha complacencia se tambaleó aún más durante las elecciones para congresistas. La izquierda, en sus alas tanto moderada como radical, tomó el control del nuevo Congreso. La era de Peñaranda de principios de la década de 1940, más que ser un retorno a las normas previas, mostró ser un nuevo periodo de definición y organización política. En esencia un político liberal, Peñaranda, hizo volver al país al tradicional sistema parlamentario, al tiempo que apoyó con ímpetu a los aliados en el conflicto internacional que se libraba en Europa. Mediante ambos esfuerzos, proveyó de un foro para el debate, así como de las problemáticas nacionales e internacionales en torno a las que la izquierda se podía organizar, definir sus diversas posturas y crear, de ese modo, partidos más coherentes y estables a partir de las diversas tendencias de pensamiento radical y reformista, surgidas durante la década anterior.

El grupo más importante que surgiría en el nuevo Congreso fue el de la izquierda moderada, conformada por intelectuales de clase media que fueron parte de las administraciones de Toro y de Busch, influidos por la ideología fascista. Éstos, llamados nacionalsocialistas, habían dado su apoyo a la candidatura presidencial de Peñaranda, pero se sentían molestos por su creciente cercanía con los Estados Unidos. Esta política a favor de los aliados también implicó una conversión de la industria estannífera boliviana, aliada y dependiente de la industria de guerra estadounidense, lo que profundizó la molestia de estos nacionalistas económicos. Admiradores de Alemania e Italia en el escenario internacional, los nacionalsocialistas se comprometían dentro de Bolivia con la nacionalización de las industrias básicas, sobre todo de las minas de estaño. Dadas sus posiciones, tenían interés en promover un movimiento laboral minero poderoso y radical. Bajo la dirección de Carlos Montenegro, Augusto Céspedes —entonces ambos a cargo del periódico *La Calle*— y Víctor Paz Estenssoro, que encabezaba su ala parlamentaria, comenzó a surgir un nuevo partido en la época de Peñaranda que tomó el nombre de Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el cual promulgaba la alianza de clases.

A la izquierda del MNR surgió un partido integrado por los seguidores de Arze en el viejo grupo del Frente. Liderados por Antonio Arze y Ricardo Anaya estos intelectuales marxistas establecieron formalmente un partido radical llamado Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), a mediados de la década de 1940. El PIR se pronunciaba por la nacionalización de las minas y la liberación de los indios, y también asumió una enérgica postura prosoviética en el ámbito internacional. Aunque aún no se trataba oficialmente de un partido comunista, el PIR era en extremo empático con la causa de los aliados, debido a la participación de Rusia en la Segunda Guerra Mundial.

El MNR y el PIR surgieron al lado del viejo POR, trotskista, como los tres partidos de la izquierda que se oponían a los partidos tradicionales, conocidos indistintamente como la "Concordancia" o "Alianza Democrática". Los tres partidos defendían la nacionalización de las minas de estaño, a la vez que apoyaban al movimiento laboral, en particular a los mineros. Pero más allá de esto existían diferencias fundamentales: tanto el POR como el PIR iban mucho más lejos que el MNR y hablaban del problema indígena exigiendo el fin de las obligaciones de servicio personal y de los latifundios; también exigieron que los campesinos se organizaran en coaliciones con obreros y con la clase media, para formar una vanguardia revolucionaria. En esta preocupación por el campesinado indígena, el programa del MNR quedaba en silencio, si no es que en esencia hostil, reflejando sus orígenes de clase media blanca.

En el debate sobre problemáticas internacionales, que por primera vez comenzó a volverse importante en la política nacional, el POR era indiferente ante el gran conflicto mundial y se pudo concentrar exclusivamente en temas nacionales. Sin embargo, el MNR y el PIR tomaron posturas comprometidas: el MNR a favor del fascismo y el PIR, de los aliados. Dado el contexto de las políticas mineras bolivianas, esto implicaba que el MNR, como el POR, sostenían una posición mucho más independiente en relación con las problemáticas nacionales que el PIR, que siempre se preocupó por que la producción minera boliviana continuara apoyando la causa aliada. Esta postura a favor del esfuerzo de guerra, y su susceptibilidad ante los llamados

de la derecha respecto a una alianza antifascista, obstaculizó seriamente al PIR en el escenario político nacional.

Inicialmente el PIR fue el partido dominante de la izquierda, con el MNR en un distante segundo lugar y el POR como una minoría marginal. Ya que la izquierda tenía una poderosa voz en el gobierno, el movimiento laboral respondió con presteza al clima transformado entre la élite. Se llevó a cabo una febril actividad de sindicalización entre los mineros, con marchas y huelgas constantes, y todos los grupos laborales presionaron para lograr aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. Los trabajadores encontraron un importante apoyo para estos esfuerzos en el Congreso, y hombres como Víctor Paz Estenssoro se volvieron exponentes de los derechos de sindicalización. Los partidos tradicionales se opusieron con acritud al apoyo a la fuerza de trabajo, así como al ataque que la izquierda hacía a la administración, pero Peñaranda se rehusó a censurar a los tres partidos de izquierda. El parlamento de los años cuarenta fue el más radical y libre de Bolivia, hasta la fecha.

Aunque fue liberal en cuestiones políticas, el gobierno de Peñaranda fue conservador en temas económicos y laborales. Desesperado por obtener préstamos, asistencia técnica y compromisos a largo plazo para la venta de estaño a precios razonables, del gobierno de los Estados Unidos, la administración enfrentó la implacable oposición de la Standard Oil. Al exigir compensación o la devolución de sus instalaciones, la Standard Oil pudo controlar la política exterior estadounidense hacia Bolivia. Pese al deseo del Departamento de Estado estadounidense de poner fin a los cercanos vínculos entre Bolivia y Alemania —que incluían todo tipo de aspectos, desde misiones militares y apoyos para la línea aérea nacional (Lloyd Aéreo Boliviano) hasta el subsidio del periódico del MNR, *La Calle*— y su incuestionable necesidad de obtener contratos para la extracción del mineral, éste pareció incapaz, durante largo tiempo, de vencer las demandas de las compañías petrolíferas.

Sin embargo, la necesidad de contar con la cooperación boliviana se volvió tan vital, que para finales de 1941 los Estados Unidos aplicaba fórmulas de préstamo-renta indirectas a Bolivia, con el envío de misiones técnicas y, por

último, acordó compras de mineral a largo plazo, controladas por el gobierno. En este contexto, la Standard Oil Company finalmente estuvo de acuerdo en negociar. Este acuerdo involucraba una "compensación" para la Standard Oil por la confiscación, cuyos términos implicaban que los bolivianos compraran todos los mapas petrolíferos y de prospección aún en posesión de la compañía multinacional. De hecho se trató de una victoria de la diplomacia boliviana, ya que la confiscación no fue cuestionada y se aceptó incluso la legalidad de su postura. Sin embargo, provocó fuertes protestas de la izquierda y de la nación en su conjunto, que aún mantenía que la Standard Oil había sido responsable de la guerra del Chaco.

Se volvieron tan violentas las protestas, que el gobierno aceptó documentos falsificados, provistos por los Estados Unidos, que acusaban al MNR de tener un ardid fascista pagado por los alemanes. Se cerró *La Calle* y se expulsó al ministro alemán. No se exilió a los congresistas del MNR y el debate que siguió fue apasionado. Reveló que el PIR y otros grupos radicales desconfiaban en lo esencial del fascismo del MNR, pese a que creían que el ardid golpista había sido fabricación estadounidense. Al tiempo que apoyaban los elementos reformistas y nacionalistas incluidos en el programa del MNR, se oponían acremente a otros aspectos de la ideología de este partido.

En diciembre de 1941, los Estados Unidos entraron a la Segunda Guerra Mundial, y en enero de 1942 Bolivia se unió a las fuerzas aliadas y rompió relaciones tanto con Alemania como con Japón. Aunque el MNR mantuvo simpatía por los fascistas, ya no tenía una relación tan cercana con Alemania y el vínculo se cortó de manera formal. Esto permitió que el partido se concentrara de lleno en el escenario nacional, que se volvía un hervidero de huelgas y de actividad sindical, y que moderara su hostilidad hacia los partidos de extrema izquierda.

El que toda esta agitación radical estuviera teniendo impactos quedó evidenciado en dos sucesos importantes expresados durante la última parte del periodo de Peñaranda. El primero fue la elección para congresistas de 1942, y el segundo la exitosa organización de un sindicato nacional minero, en el contexto de una gran masacre en las minas. Durante las elecciones para

miembros del Congreso de mayo de 1942, los partidos tradicionales ganaron tan sólo 14 163 votos, en comparación con los 23 401 que obtuvieron los nuevos partidos, no tradicionales. La erosión del apoyo del electorado ilustrado, en gran medida blanco, para los partidos tradicionales, no podía frenarse. En cada elección, hasta la presidencial de 1951, el electorado blanco, fundamentalmente de clases media y alta, mostró su oposición al sistema político anterior a la guerra, con mayorías cada vez más poderosas, y se mudó hacia posturas aún más radicales.

Con la progresiva radicalización de los blancos de clase media, llegó una todavía más profunda entre las clases trabajadoras, en especial de su vanguardia más poderosa y revolucionaria: los trabajadores mineros. Hacia 1940, los diversos sindicatos mineros locales habían tratado de organizar una confederación nacional. A pesar de los intentos gubernamentales por cerrar estas organizaciones, con el pretexto del esfuerzo de guerra, los sindicatos mineros fueron objeto de un fuerte respaldo del Congreso, proveniente de todos los partidos de izquierda. En noviembre y diciembre de 1942 se llevaron a cabo una serie de importantes huelgas en Oruro y Potosí, en demanda de salarios más altos, así como de reconocimiento. La huelga más larga y amarga de entre ellas involucraba a las minas Catavi, propiedad de Patiño. A finales de diciembre la tropa abrió fuego contra los mineros y sus familias, y se ejecutó a cientos de trabajadores desarmados. La masacre de Catavi se volvió una poderosa bandera de lucha de la izquierda y de los mineros, y fue el suceso que fusionó a ambos grupos en una poderosa vanguardia política.

El gobierno decidió hacer del marxista PIR el chivo expiatorio de la masacre; cerró sus periódicos y apresó a sus líderes. Pero fue el MNR quien capitalizó la mayor parte de lo que aún era un movimiento apolítico de los trabajadores mineros. Bajo el liderazgo de Paz Estenssoro, el partido montó un gran ataque al gobierno de Peñaranda, desde el Congreso, en apoyo a los mineros y, de manera fortuita, por la relación entre mineros, gobierno y los Estados Unidos. En los debates que siguieron, el gobierno frenó una acción de censura, pero al hacerlo destruyó las coaliciones que quedaban entre moderados y la izquierda, cada vez más radical. Los viejos grupos socialistas

moderados que quedaban del periodo de Toro y Busch fueron destruidos durante los debates en torno a Catavi, e incluso muchos políticos tradicionales desertaron de sus partidos. El resultado fue que el gobierno tan sólo encontró el apoyo de los liberales y republicanos más reaccionarios. El sustento potencial del PIR, que debido a la entrada de Rusia a la guerra del lado de los aliados tenía ahora más simpatía por el gobierno, fue rechazado por el régimen de Peñaranda. De este modo el gobierno forzó al PIR a unirse al MNR y al POR, en la oposición.

Para finales de 1943, quedaba claro que el régimen había perdido el control político, y también había comenzado a perder control sobre el ejército. Habían sucedido varias pequeñas revueltas y comenzaron a circular noticias sobre la organización de logias militares secretas. El más importante de estos clubes fue el Radepa (Razón de Patria), que se había organizado en los campos paraguayos de prisioneros de guerra, entre los oficiales jóvenes. Con el exilio de Bilbao Rioja, el Radepa surgió como el grupo con mayor conciencia política, pero a diferencia de sus antecesores, este grupo y sus varias ramificaciones se inclinaban mucho más hacia la línea fascista que hacia la reformista-socialista. A finales de diciembre de 1943, estos oficiales se aliaron con el MNR y dieron un exitoso golpe de Estado contra Peñaranda, llevando al poder parcial al primer gobierno del MNR en la historia boliviana.

El nuevo régimen fue una junta militar encabezada por el desconocido comandante Gualberto Villarroel, que ni era héroe de guerra, ni figura importante de la época del militar-socialismo. No obstante, su posición dentro de Radepa fue vital; estaba comprometido con el modelo vagamente reformista y fascista que el grupo defendía. Al aceptar a tres integrantes del MNR en su gabinete, Villarroel intentó aliar a su grupo de oficiales, en minoría, con los nuevos movimientos radicales. Luego de organizar el nuevo gobierno, el MNR colocó a Paz Estenssoro —que fungió como ministro de Hacienda— como su dirigente en lugar del ala fascista extrema representada por Carlos Montenegro y Augusto Céspedes. Sin menoscabo de cuánta simpatía sintiera la junta por la causa del Eje, para 1944 las realidades de la situación les exigieron moderar sus expectativas. Cuando los Estados Unidos y la mayor parte de los gobiernos de América Latina se rehusaron a reconocer

a la junta, se forzó al régimen a despojarse de los líderes más extremos del MNR para después requerir su retiro total hacia los primeros meses de 1944. Pero esta ruptura temporal con el MNR de ninguna manera destruyó los vínculos entre ambos grupos y la línea ideológica del régimen quedó definida por las preocupaciones del MNR.

Estas preocupaciones incorporaban ahora un compromiso con las masas indígenas, así como apoyo al movimiento de los trabajadores mineros, en especial a la rama laborista del POR. El MNR operó cerca del líder minero "porista" Juan Lechín. Este apoyo, junto con la ayuda de los trabajadores ferroviarios, llevó, finalmente, a la organización de una federación nacional de mineros, con unos 60 000 integrantes, en Huanuni, en junio de 1944. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia asumió el liderazgo del movimiento laboral como su organización más poderosa, y otorgó un relevante respaldo al MNR y a la junta a pesar de la oposición general de los trabajadores al régimen y del tradicional apoyo al PIR.

El régimen reunió a más de mil líderes indígenas del campesinado, de habla tanto quechua como aymara, en el primer congreso indígena nacional celebrado en La Paz, en mayo de 1945. En esta convención Villarroel prometió proveer instalaciones educativas en las comunidades libres, y decretó la abolición de las odiadas obligaciones de servicio de los indígenas, conocidas como *pongueaje.* Un acto verdaderamente revolucionario cuyo decreto jamás entró en vigor. No obstante, el congreso ofreció cuando menos alguna posición para los radicales indígenas, y otorgó sus primeros contratos transcomunitarios a muchos líderes indígenas tradicionales, allanando con ello el camino para la posterior movilización del campesinado.

En el área de los derechos democráticos y las libertades civiles, el régimen de Villarroel sería uno de los más perniciosos de la historia nacional. Cuando el PIR obtuvo una porción considerable de votos durante las elecciones de la convención constitucional de 1944, este gobierno asesinó a sus líderes y encarceló a sus seguidores. A su vez, una revuelta de corta duración en Oruro, a finales de 1945, le dio la excusa necesaria para capturar a los políticos tradicionales más relevantes y ejecutarlos. Recurrir a la violencia contra intelectuales y políticos de clase media era una novedad en la política

boliviana y dividió profundamente a la nación, haciendo que la mayoría de las actividades de reforma del régimen fueran inútiles, ya que gran parte de la élite tachaba al gobierno de gansteril y fascista. Finalmente fue el uso de la violencia y la hostilidad del régimen contra los líderes marxistas y los políticos tradicionalistas lo que destruyó y redujo al MNR, de manera temporal, a una potencia menor en el escenario nacional.

A lo largo de 1944 y 1945 la continua represión, tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha, forzó, en última instancia, a que ambos grupos se coaligaran en un conjunto democrático antifascista. Para principios de 1946 esta coalición controlaba la mayor parte del movimiento laboral no minero, a los estudiantes universitarios y a la mayoría de la élite política nacional. Pese a la constante represión gubernamental, la coalición ganó terreno, y en junio y julio de 1946 una huelga magisterial les permitió movilizar a la opinión pública contra el régimen. El 14 de julio de 1946, una marcha popular de protesta se transformó en revuelta. Así, sin la deserción de ningún oficial policial o militar, los civiles llevaron a cabo un derrocamiento del régimen. Villarroel fue arrastrado desde el palacio presidencial y colgado de un poste de luz en la plaza Murillo.

De este modo, parecía que el MNR y el Radepa habían quedado desacreditados, y que el futuro dependía del PIR, que de hecho fue el elemento radical clave de la revuelta popular de julio. Pero a tres años de la rebelión y del exilio del liderazgo del MNR, éste surgió nuevamente como el partido de izquierda más popular y el movimiento político más poderoso de la nación. Este vuelco de la suerte fue producto tanto de la astucia del MNR como de la crasa incompetencia del liderazgo del PIR. Aquello de lo que el MNR pronto se dio cuenta, y el PIR olvidó, fue que la generación del Chaco aún vivía, y que las exigencias de cambio eran tan sólidas como siempre. Se demostró, a su favor, que el MNR aprendió de su desastrosa experiencia con los fascistas militares y que fue capaz de resurgir en el periodo del llamado Sexenio (los seis años que van de 1946 a 1952), como un partido de cambio, radical y popular. Se libró de una vez por todas de sus integrantes fascistas, para lo cual contó con la ayuda de Lechín y sus seguidores, comprometidos con la transformación revolucionaria que exigía que el partido apoyara su programa.

Asimismo, Paz Estenssoro y nuevos líderes como Hernán Siles Zuazo se concentraron en restablecer su fuerte base de clase media, con un enérgico programa de estabilización económica, por un lado, y de nacionalización económica, por el otro. Se volverían tan exitosos, que en la mitología revolucionaria subsecuente, la muerte de Villarroel a manos de la muchedumbre, en julio de 1946, se convirtió en un gran acto reaccionario, y Villarroel quedaría como otro mártir, junto con Busch y los mineros de Catavi, en el panteón revolucionario de la nación.

En todos estos sucesos las acciones del PIR fueron cruciales, ya que en el derrocamiento del MNR y de Villarroel el PIR decidió que sólo la total cooperación con los partidos tradicionales podía ser útil a su causa, cuestión en la que estaban errados, porque, del mismo modo que el MNR no olvidó las transformaciones impuestas por el conflicto del Chaco, tampoco lo hicieron los partidos tradicionales. Comprometidos con su postura ahora de defensa de clase, la Concordancia estaba decidida a destruir a las nuevas fuerzas políticas desencadenadas por los diversos regímenes reformistas y radicales. De este modo, estaba encantada tanto de utilizar al PIR para cubrir sus propias acciones como de culparlo por todas sus operaciones antilaboristas, en especial las dirigidas contra los trabajadores mineros. Los partidos tradicionales, una vez afianzados en el poder, estaban decididos a frenar todo cambio, e intentaron volver al sistema de la preguerra. Pero se trataba de una esperanza quijotesca, pues terminaron por destruir no sólo al PIR, sino a ellos mismos. Durante la conclusión del sexenio se forzó a los políticos tradicionales a abandonar por completo el gobierno constitucional y a depender del ejército como defensa única contra las demandas populares de cambio.

Cuán revolucionarias eran aquellas demandas quedó claro a lo largo de los meses posteriores a la rebelión. Durante el cuarto congreso nacional de los mineros, celebrado en Pulacayo en noviembre de 1946, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) adoptó la tesis de la revolución permanente; al mismo tiempo convocó a una lucha armada, violenta, de la clase obrera. La llamada Tesis de Pulacayo fue un documento revolucionario que rechazaba toda postura reformista. Aunque aceptaba la

revuelta de julio como popular, retaba al antifascismo de los partidos de la Alianza Democrática y hablaba del verdadero fascismo de la oligarquía. Exigía una alianza trabajadores-campesinos y un gobierno controlado por los obreros. Aun en sus demandas muy específicas, por lo general la parte moderada de las declaraciones obreras, la FSTMB llamaba a que los trabajadores se armaran de inmediato, a que participaran en la administración de las minas, y a la promoción de huelgas revolucionarias, a diferencia de economicistas. Ésta de hecho fue la declaración más poderosa del ala minera del POR, y no sólo comprometía a los mineros con la acción revolucionaria, sino que también forzaba al MNR a adoptar una postura mucho más revolucionaria.

En respuesta a este plan, el gobierno decidió reprimir al sindicato y utilizó a los ministros del PIR para dirigir el ataque contra los trabajadores. Por su parte, el PIR, habiendo probado el poder durante el gobierno temporal post-Villarroel, se rehusó a entregarlo cuando los republicanos ganaron la elección de 1947 y permanecieron en un gabinete de coalición. Esto sería un error fatal, ya que los republicanos, con Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagiotia al frente, pertenecían al sector más reaccionario de los partidos tradicionales y estaban decididos a destruir a la FSTMB. A principios de 1947, fue un ministro del PIR quien ordenó que las tropas marcharan a las minas. La masacre y culminación de una huelga en Catavi, a manos de dicha tropa, llevó al fin del PIR como el partido representativo de la izquierda.

El MNR, por su parte, jamás perdió a sus seguidores de clase media, aun cuando la mayor parte de sus líderes, incluido Víctor Paz Estenssoro, estuvieran en el exilio. En las elecciones de 1947 habían quedado reducidos a un mínimo de apoyo popular, pero aún ganaron 13 000 votos en comparación con los 44 000 de los republicanos victoriosos. Así, conforme se destruía el PIR y los partidos tradicionales mostraban una creciente hostilidad incluso ante los reformistas moderados de la postguerra, tipo Toro-Busch, el MNR logró ampliar su respaldo. Para las elecciones intermedias del Congreso, de mayo de 1949, surgió como el segundo partido más poderoso, detrás de los republicanos, pese a la potente oposición gubernamental. Tan inesperado fue

su retorno a la popularidad, que Hertzog renunció a la presidencia y entregó el gobierno a su vicepresidente, Urriolagoitia.

No obstante, tanto los republicanos como el PIR se rehusaron a abandonar el gobierno. Poco después de las elecciones de congresistas, comenzaron nuevas huelgas en Catavi que llevaron al exilio a Lechín, a Mario Torres y a los otros líderes de la FSTMB. La noticia de su exilio llevó a un levantamiento de trabajadores armados en Catavi, así como a una enorme intervención del ejército. Mediante este acto, parecía que el ejército se había purgado por completo de todos los elementos reformistas y se comprometía de manera integral con las políticas represivas del régimen republicano. Temiendo un movimiento revolucionario de obreros y del MNR, se unieron tras su casta conservadora de oficiales superiores.

La caída de los precios internacionales del estaño posterior a la Segunda Guerra Mundial disparó una severa crisis fiscal para el gobierno. Los precios comenzaron a elevarse rápidamente en el mercado interno; el gobierno republicano no podía enfrentar la estagnación e inflación económicas, de modo que perdió a sus seguidores incluso de entre grupos que antes lo apoyaban. Algunos elementos clave de la élite se mostraron indiferentes ante el careo final entre el gobierno y el MNR. Respecto a este último, las represiones violentas de los trabajadores y el uso del fraude para reducir sus victorias electorales comprometieron al partido a un derrocamiento armado del régimen. En septiembre de 1949 el MNR, al mando de Siles Zuazo, organizó una rebelión civil y enfrentó al ejército durante dos meses en todas las ciudades provinciales, incluso estableciendo un cuartel general transitorio en Santa Cruz. Aunque se aplastó la revuelta con gran derramamiento de sangre, marcó un cambio importante en el estilo de la política nacional. Se trató de una operación completamente civil, y el ejército mantuvo la unidad contra los rebeldes y apoyó al régimen. A pesar de la anterior alianza entre el MNR y el ejército, el cuerpo de oficiales se mantuvo firme contra el partido y peleó en su contra hasta la derrota. Esta rebelión fue única también en cuanto a la coalición de obreros y clase media que la respaldaba. Al igual, fue un indicador para el partido de que, no obstante sus viejos vínculos fascistas y militares, tendría que hacer la revolución y destruir al mismo ejército.

A pesar de la continua represión, la fuerza del MNR crecía día con día. Una señal de su creciente dominio sobre el movimiento obrero llegó en mayo de 1950, cuando los trabajadores fabriles de La Paz convirtieron una huelga en otra insurrección armada obrera/MNR. Se usaron aviones y artillería contra el cuartel obrero de La Paz para destruir la asonada, pero la relevancia del suceso yació en la toma del MNR del Movimiento Obrero Urbano, hasta aquel momento baluarte del PIR. Ahora el partido contaba con el apoyo prácticamente de todos los obreros organizados, sin importar su semblante político local, así como de la mayor parte de la clase media.

No obstante que sus integrantes más radicales, por último, forzaron al PIR a abandonar el gobierno, no podían lograr que asumiera una postura más revolucionaria. A principios de 1950, la juventud del partido desertó de sus filas para formar el Partido Comunista Boliviano, y el partido mermó hasta la insignificancia. Mientras tanto, el MNR hizo un último intento por apropiarse del poder por medios democráticos. En las elecciones presidenciales de mayo de 1951, presentó las candidaturas de Víctor Paz Estenssoro, que seguía en el exilio, y de Hernán Siles Zuazo. Ante la consternación de la derecha, el MNR ganó la elección por mayoría indiscutible, obteniendo 39 000 votos de los 54 000 emitidos. Los republicanos ganaron sólo 13 000, y el PIR terminó tan sólo con 5 000 votos, aún menos que los liberales.

Antes de que el MNR pudiera asumir la presidencia, el ejército decidió intervenir. Un par de días después de la elección, Urriolagoitia renunció y entregó la presidencia al jefe del mando general, quien a su vez designó presidente al general Hugo Ballivián. El nuevo gobierno de inmediato anuló las elecciones y proscribió al MNR tildándolo de organización comunista, la nueva retórica que reflejaba la ideología de la Guerra Fría, en ciernes en el contexto internacional. Pero el ejército encontró que sólo los republicanos y un pequeño partido fascista proclerical de derecha, la Falange Socialista Boliviana, estaban dispuestos a darles apoyo. Incluso los generales se daban cuenta del inevitable resultado de la lucha por venir, y muchos oficiales de monta ocuparon puestos diplomáticos en el extranjero durante este momento crucial del conflicto.

Fue evidente para todos los observadores que el MNR ahora intentaría tomar por la fuerza aquello que se les negó en las urnas. Siempre dispuesto a recurrir a la violencia, el MNR emprendió una oposición militar a gran escala, convencido de que sólo una política de guerra civil les daría el gobierno. El cuerpo de oficiales permaneció leal por completo a la junta. Así, Paz y los líderes del partido finalmente acordaron armar a todos los civiles y se comprometieron con una insurrección popular armada. Incluso durante la guerra civil de 1949, el partido no había abierto los arsenales al público, sino que había utilizado a sus propios integrantes en la lucha, temeroso de que una guerra civil total pudiera llevar a la destrucción de todo orden en Bolivia. Pero ahora se comprometía con tal postura como la única que podría conducir a la victoria.

En este contexto de intensas maquinaciones y violencia, el régimen militar bloqueó la venta de estaño a los Estados Unidos debido al tema de los precios, lo que llevó a una severa depresión de la economía nacional. A finales de 1951, el gobierno apoyó las quejas de la minería estannífera en torno al bajo precio de la compra a largo plazo del estaño, y acordó frenar las ventas y la producción durante algunos meses, para forzar una negociación con los Estados Unidos. Con el tiempo, esta táctica demostró su éxito, pero exacerbó las tensiones políticas y económicas del país.

Después de numerosos intentos, la rebelión final se llevó a cabo el 9 de abril de 1952. Durante tres días de intensa lucha, en los cuales los depósitos de armas se abrieron al público y los mineros marcharon sobre La Paz, el ejército quedó finalmente derrotado. Al costo de una gran destrucción y de la pérdida de más de 600 vidas, el MNR retornó al poder. Pero el partido de 1952 era muy diferente del grupo profascista derrocado en 1946; ahora era un partido de elementos radicales de la clase media, así como de trabajadores revolucionarios, que representaba un nuevo movimiento populista. También había alcanzado el poder a costa de los partidos políticos tradicionales y de las instituciones principales del orden y la autoridad: el ejército y la policía. Al aceptar la participación e ideología obreras, y armar a la muchedumbre, se había comprometido con la destrucción del viejo orden.

Por haber alcanzado el poder enfrentando al ejército y a los partidos tradicionales, los líderes del MNR no sentían obligación alguna de ofrecer un programa moderado o de establecer compromisos con cualquier institución tradicional, política o militar. Las clases urbanas blanca y chola, y las masas de indígenas rurales estaban en posesión de las armas, y el ejército y la fuerza policiaca nacional estaban totalmente desorganizados. Esto es: los propósitos del partido eran conocidos por todos; las armas estaban en manos de la muchedumbre militante y los líderes exiliados que volvían del extranjero no actuarían con limitaciones. Así comenzaba la revolución social y económica más dinámica de América Latina desde la Revolución mexicana de 1910.

8. DE LA REVOLUCIÓN NACIONAL A LA GUERRA FRÍA, 1952-1982

En 1950 Bolivia aún era una sociedad predominantemente rural; la mayoría de su población estaba integrada a la economía nacional sólo de manera marginal. De todas las personas económicamente activas registradas en el censo de 1950, 72% participaba en la agricultura y en industrias de este sector, aunque esta fuerza de trabajo sólo producía 33% del producto nacional bruto, discrepancia que indica de manera clara el grave rezago económico de este sector. Sin embargo, desde 1900 la sociedad boliviana había experimentado cambios notables en su composición social; la población urbana (quienes vivían en ciudades o poblados de 5 000 personas o más) había aumentado de 14 a 23% de la población nacional, y en cada departamento del país los centros urbanos principales habían crecido más rápidamente que el departamento en su conjunto. El nivel de alfabetismo y el número de menores que asistían a la escuela también creció en el mismo periodo, en especial después de las grandes inversiones en educación llevadas a cabo por los regímenes post-Chaco. Entre 1900 y 1950, la población alfabetizada se elevó de 17% del total a 31%, y la población estudiantil preuniversitaria pasó de unos 23 000 a 139 000, o de 1 a 5% del total de la población. En los niveles superiores, sin embargo, las transformaciones fueron mucho menores, y mientras que la cantidad de estudiantes universitarios había llegado a 12 000 para 1951, sólo 132 personas, en todo el país, en ese año, se habían graduado de niveles superiores a la secundaria.

En gran medida rural y agrícola, Bolivia ni siquiera podía alimentar a su población para mediados del siglo XX. Mediante la constante expansión del sistema de hacienda, la distribución territorial se había vuelto una de las más

injustas en América Latina. El 6% de los terratenientes que poseían mil hectáreas o más controlaban 92% de la tierra cultivada de la república; además estas grandes propiedades se subutilizaban: de un promedio de mil o más hectáreas se cultivaba sólo 1.5%. En el extremo opuesto se encontraba 60% de los terratenientes que poseían cinco hectáreas o menos, verdaderos minifundios que daban cuenta de sólo 0.2% del total de la tierra y se les forzaba, en promedio, a hacer trabajar 54% de sus tierras. La extrema desigualdad en la división de la tierra era esencial para el control de la mano de obra rural. Al controlar el acceso a las mejores tierras en todas las zonas de la república, los hacendados obtenían su fuerza de trabajo al ofrecer tierras en usufructo a cambio de mano de obra. Se requería que los indígenas abastecieran las semillas, las herramientas, en algunos casos los animales para la labor; e incluso se les pedía que transportaran la cosecha. El propietario sólo participaba con pocos insumos. El hacendado también exigía servicios personales para él, su familia y sus capataces. El *pongueaje* (obligación de prestar servicios personales) había sido parte de los requisitos exigidos a los indígenas de las haciendas desde la época colonial. Esto no hacía a tales obligaciones menos molestas; pero lo que todos los indígenas campesinos odiaban era el *pongo,* sistema por el que el hacendado exigía que se atendiera a él y su familia, aun si se encontraba en una residencia urbana distante y les implicara grandes cantidades de tiempo y esfuerzo llegar a ella, todo a costa del propio campesino.

Este sistema no incluía el peonaje por deuda ni otros medios forzosos, y los indígenas solían entrar y salir de los latifundios sin restricciones, pero las crecientes presiones sobre la tierra en las zonas de comunidad libre, en particular después de la última gran expansión hacendaria, compelían a los campesinos a adaptarse al sistema. A pesar de que los centros urbanos se expandían cada vez más, no lo hacían tan rápidamente como para absorber a la creciente población rural. De manera similar, las subdivisiones de las parcelas de las comunidades libres alcanzaban en corto tiempo proporciones críticas, de modo que cada vez más hijos de campesinos se veían forzados a trabajar, ya fuera en las haciendas para poder alimentarse ellos y sus familias, o como mano de obra barata en minas y poblados.

Con mano de obra económica, las semillas y aun las herramientas en ocasiones gratis o con costos mínimos, y con mercados agrícolas protegidos, los incentivos para que los hacendados invirtieran en sus posesiones eran mínimos. De hecho, la propiedad en ausencia era la expresión dominante en las zonas rurales, y la mayoría de los hacendados tenían profesiones urbanas. El resultado de este sistema fue el uso de una tecnología rudimentaria y de semillas de baja calidad, con producciones de alimento en extremo bajas. El sector agrícola estaba tan atrasado, que era incapaz de satisfacer las necesidades de la población, que aumentaba en los centros urbanos, y de la nación en su conjunto. Mientras que 10% de las importaciones en la década de 1920 consistía en comestibles, en el periodo 1950-1952 la cifra ascendió a 19%; buena parte de la comida importada consistía en tubérculos andinos tradicionales, que se producían sólo en Bolivia y en Perú. El sistema agrícola boliviano, ineficiente, improductivo e injusto, también mantenía a un alto porcentaje de la mano de obra nacional fuera del mercado, al fijar su ingreso en niveles bajos mediante la explotación de su mano de obra y la obligación de prestar servicios personales. Esto, a su vez, restringía el mercado de las manufacturas a la pequeña minoría urbana y a los centros agrícolas activos, que eran relativamente pocos, como el valle de Cochabamba.

Dada la naturaleza limitada de este mercado interno, no sorprende que Bolivia tuviera un sector industrial pequeño, que en 1950 daba cuenta de sólo 4% de la población económicamente activa. La industria consistía, esencialmente, en algunas fábricas textiles y en plantas de procesamiento de alimentos. Para 1950 se estimaba que hubo poca transformación en la estructura de capital de este sector, y que la mayor parte de las fábricas eran viejas y subproductivas respecto a estándares mundiales. La misma carencia de nuevos insumos de capital que afectaba a la agricultura y a la industria era aún más evidente en la minería. Desde finales del decenio de 1930 y en adelante, hubo aparentemente poca nueva inversión en el sector minero, justo cuando la mayor parte de las minas comenzaron a agotar las vetas más ricas. Así, con una planta industrial envejecida y la calidad de los minerales en declive, los costos de la minería se forzaron, de manera inexorable, a elevarse a niveles que se volvían no económicos y no competitivos, excepto en

periodos de escasez en el mercado mundial, o en épocas de guerra. Para 1950 Bolivia era el país productor de estaño con el más alto costo del mundo, y en pocos años la industria apenas cubría sus gastos. Los márgenes de ganancia eran exiguos, lo que hacía que la industria fuera aún más sensible a la menor fluctuación de los precios en el ámbito mundial. Además, aun cuando los precios aumentaran de manera súbita, la baja calidad del mineral disponible y la baja productividad de las minas implicarían que fuera extremadamente difícil para Bolivia aumentar la producción. En 1952 todavía se decía que el mejor año de producción estannífera había sido 1929, cuando la nación exportó 47 000 toneladas. De hecho, tal cifra sigue siendo un récord hasta el día de hoy.

Dado el relativo estancamiento y atraso de la economía nacional, sería relativamente fácil para el MNR llevar a cabo profundas transformaciones. Las haciendas, propiedad de una clase en gran medida ausente, con poca inversión de capital, podían tomarse sin mayor oposición. Y en vista de la movilización campesina ocurrida después de abril de 1952, no podían arrebatarse sin el apoyo total de los poderes policiacos del Estado. La absorción del envejecido sector minero por el Estado tampoco enfrentaría una vigorosa oposición por parte de los barones del estaño, siempre y cuando se les ofreciera una compensación adecuada. En resumen, la fuerza de la élite económica estaba relativamente agotada en el momento de la revolución, en gran medida del mismo modo que su poder político se había debilitado.

Los nuevos líderes del MNR tampoco encontraron oposición militar. Los tres días de lucha entre civiles y mineros, por un lado, y el ejército, por el otro, vieron el colapso de este último. Este suceso de abril de 1952 fue verdaderamente sorprendente, ya que el poder policiaco entero del Estado fue arrollado en un momento. La distribución indiscriminada de armas a la multitud, la creación de milicias urbanas y rurales, y la neutralización de la policía nacional, transformaron la realidad política, económica y social de Bolivia más allá de las mayores expectativas de los líderes del MNR. De este modo, sin menoscabo de cuán limitadas fueran las metas del liderazgo más moderado del MNR hacia abril de 1952, la realidad del colapso del Estado y de armar a las masas populares y a sus líderes implicó que el resultado final

fuera una revolución social en serio. Los “revolucionarios reacios”, como algunos les llamaron, se vieron así forzados de manera lenta e inexorable a proponer una reorganización total de la sociedad boliviana.

Uno de los primeros actos del nuevo régimen fue establecer el sufragio universal al eliminar el requisito del alfabetismo. De una pincelada se le concedió el voto a las masas campesinas indígenas, y la población que podía votar saltó de unos 200 000 a poco menos de un millón de personas. Enseguida, la academia militar nacional se cerró temporalmente y se depuró a unos 500 oficiales de entre sus filas. Cuando se le dio al ejército la tarea de reorganizarse a sí mismo, éste quedó tan reducido en poderío y cantidad que mucha gente pensó, durante una época, que había dejado de existir. Al inicio las milicias civiles del MNR estaban mejor armadas que la policía y que el ejército, y se encargaron de todas las tareas internas de las que estas dos fuerzas por lo general se ocupaban.

El MNR también emprendió la reorganización de sus fuerzas para fortalecer su propia base de poder. El régimen dio su total apoyo a los mineros cuando instauraron una nueva federación laboral nacional, la COB (Central Obrera Boliviana), durante los últimos días de abril. Mientras que la COB se proclamó neutral en lo político y permitió que el POR, el PIR y el nuevo PCB tuvieran representación, en los hechos se volvió una poderosa aliada del régimen y terminó nombrando a tres ministros del trabajo en el nuevo gabinete. Lechín, que encabezaba la FSTMB, también se volvió cabeza de la COB, y en su momento se le dio el Ministerio de Minas y Petróleo. La COB y la FSTMB representaban el ala revolucionaria radical del partido, y con presteza anunciaron un programa revolucionario. Uno de los primeros actos de la COB fue exigir la nacionalización de las minas sin compensación, la liquidación del ejército y su remplazo por las milicias, y una reforma agraria con la abolición del sistema de latifundios y de todas las formas de trabajo campesino obligatorio.

El liderazgo del MNR, al mando del presidente Víctor Paz Estenssoro y de Hernán Siles Zuazo, respondió lentamente a la presión política y paramilitar de los trabajadores, pero intentó restringir sus reformas tanto como fuera posible. Fue en el mes de julio cuando el régimen pudo al fin declarar

monopolio del Estado a toda la exportación y venta de los minerales, que ahora quedarían a cargo del Banco Minero. Aunque se trataba de un paso lógico según incluso los patrones previos a la reforma, llevó varios meses de intenso debate llegar a este punto, y aquellos miembros del partido que deseaban detenerlo enfrentaron las crecientes exigencias obreras de emprender una confiscación sin compensaciones. Se volvió tan poderosa esta presión que, por último, el liderazgo accedió a una nacionalización a gran escala. A principios de octubre, el gobierno estableció una empresa estatal semiautónoma para administrar cualquiera de las minas propiedad del Estado; la empresa llevaba el nombre de Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Entonces, el 31 de octubre nacionalizaron las tres grandes compañías de Patiño, Hochschild y Aramayo. Mediante este acto entregaron alrededor de dos terceras partes de la industria minera a la Comibol y al Estado.

En tanto que los radicales laboristas exigían la confiscación sin indemnización, el MNR se preocupaba por la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. Ya que el MNR había hecho todo lo posible por suavizar esas relaciones, incluido terminar el boicot al estaño, en gran medida en términos del gobierno estadounidense, no deseaba antagonizar con un aliado potencialmente peligroso. Dado que la Guerra Fría se desarrollaba en su máxima expresión, y que los Estados Unidos intervenían de manera activa en Guatemala para suprimir a un gobierno radical, el MNR esperaba evitar la etiqueta de régimen de inspiración comunista. En vista de que los Estados Unidos habían calificado inicialmente al MNR de partido fascista, orientado al peronismo, teniendo en cuenta su viejo papel en la época de Villarroel, habían obtenido un tibio apoyo al régimen. Por esto, el MNR prometió una compensación a los tres grandes, pero no hizo gesto alguno que indicara la posible nacionalización de cualquier otra mina, incluidas las diversas minas de mediano tamaño, no productoras de estaño, propiedad de compañías estadounidenses. Sin embargo, el régimen se vio forzado a aceptar la orientación de la COB y la FSTMB, así como un cogobierno obrero en la administración de la Comibol. Los trabajadores obtuvieron dos de los siete lugares de su junta directiva y se les otorgó poder de veto sobre las decisiones de la Comibol que afectaran a los obreros. Esto cambió el poder a manos de

los trabajadores, quienes impulsaron tanto mayores contrataciones como el establecimiento de *pulperías* o tiendas de la compañía, bien subsidiadas.

Mientras tanto, durante la segunda mitad de 1952 y principios de 1953, la sociedad rural comenzó a colapsar no obstante los esfuerzos del régimen por controlar la situación. Con un ejército ineficaz, las armas arribando al campo a pasos agigantados y los jóvenes políticos radicales difundiendo el cambio, comenzó un sistemático ataque campesino sobre la estructura latifundista. De manera semejante al movimiento campesino conocido como el Gran Miedo *(Grande Peur)* de la Revolución francesa, el periodo que va entre finales de 1952 y principios de 1953 vio la destrucción de los registros de trabajo en las áreas rurales, el asesinato y la expulsión de capataces y terratenientes, y el arrebato de tierras. Los campesinos, con base en las organizaciones comunitarias tradicionales, comenzaron a organizar sindicatos con el aliento de la COB, así como a recibir armas y crear milicias. Aunque el campo se había mantenido relativamente indiferente y poco afectado por los grandes conflictos de abril de 1952, fue escenario de tremenda violencia y destrucción para finales de dicho año.

Sin menoscabo de cuán renuente pudo haber sido el nuevo régimen para atacar el problema de la hacienda de manera seria, la movilización masiva de los campesinos, ahora la mayor parte del electorado, así como la destrucción sistemática del sistema de tenencia de la tierra, forzaron al régimen a actuar. En enero de 1953 se estableció una Comisión de Reforma Agraria que incluía a integrantes del POR y del PIR, que el 3 de agosto promulgó un radical Decreto de Reforma Agraria; además, expropió todas las tierras de las haciendas y ofreció un compensación para los terratenientes, que tomó la forma de bonos de indemnización a 25 años, y las otorgó a los trabajadores indígenas mediante sus sindicatos y comunidades, con la limitante de que dichas tierras no podían venderse de manera individual. Con el tiempo se consideró que los bonos otorgados no tenían valor. El gobierno intentó salvar lo que quedara en las áreas rurales en cuanto a sector moderno de capital intensivo, al excluir las unidades de producción con esas características, pero en las áreas indígenas del altiplano se tomaron prácticamente todas las tierras; los indígenas rápidamente dejaron de pagar la compensación, y las tierras, en

pocas palabras, fueron confiscadas. Las únicas excepciones fueron la región de Santa Cruz, relativamente despoblada, así como las regiones de hacienda sureñas, de mediano tamaño, como Monteagudo, que tenía una modesta agricultura de capital intensivo y ninguna población indígena residente; otra región no afectada fue la de viñedos, cuya tenencia era de pequeña propiedad, del valle de Cinti. En los demás sitios se abolió la hacienda, se destruyó a la clase hacendada y la tierra pasó a manos de los campesinos indígenas de manera primordial.

A la vez, el tutelaje que ejercían los trabajadores mineros y urbanos sobre las organizaciones sindicales indígenas terminó pronto, y surgieron líderes campesinos como elementos relevantes del poder en las zonas rurales. Aunque hubo numerosos grupos en competencia, al igual que asociaciones regionales entre los indígenas, los centros más importantes de liderazgo político campesino fueron la comunidad de Achacachi, en el distrito del lago Titicaca, y el pueblo de Ucureña; el primero se volvió el centro de la organización campesina aymara, y el último, el de los hablantes de quechua. A pesar de que a menudo se encontraban en disputa uno con otro, y que los regímenes en el poder los sobornaban, los campesinos mantuvieron el control de sus propios sindicatos, y desde 1952 hasta la actualidad han sido fuente vital de fortaleza política nacional. Satisfechos con la cuestión de la tierra, los indígenas fueron una fuerza política relativamente conservadora en la nación y se volvieron indiferentes ante sus antiguos colegas trabajadores urbanos. Durante las próximas dos generaciones su preocupación fundamental fue recibir unidades modernas de salud y educativas en sus comunidades, y el respaldo a sus títulos de propiedad sobre la tierra.

La genialidad de Paz Estenssoro fue darse cuenta de la importancia que esta fuerza totalmente nueva y bastante conservadora tenía para el escenario nacional. Conforme disminuía su poder entre sus antiguos seguidores de la clase media, y crecía su dependencia de la radical COB y de los grupos obreros, le quedó claro que debía crear una nueva base de apoyo para las alas de centro y de derecha de su partido, entre el campesinado. Este impulso tuvo tal éxito que, durante el próximo cuarto de siglo, el campesinado se volvió el bastión de los elementos conservadores del gobierno central. Y una vez

creada, esta alianza sobreviviría a la destrucción inicial del MNR, e incluso al retorno de los regímenes militares derechistas.

El colapso del Estado, la nacionalización de las minas, la destrucción del sistema de haciendas y el giro masivo de los recursos gubernamentales hacia programas de bienestar social crearon, en conjunto, estragos en la economía nacional y en el ingreso gubernamental. La absorción de las minas drenó sumas masivas de las arcas del Estado, y la reforma agraria redujo drásticamente el abasto agrícola a las ciudades, lo que provocó grandes importaciones de comestibles para evitar la hambruna. La única manera de resolver estos problemas era aumentando la emisión de la moneda nacional. La consecuencia se expresó en uno de los registros inflacionarios más espectaculares del ámbito mundial entre 1952 y 1956. En esa época el costo de la vida subió 20 veces, con tasas de inflación anuales superiores a 900 por ciento.

A partir de esa decisión de financiar la revolución mediante una drástica devaluación de la moneda, el MNR provocaba que, en efecto, las clases medias pagaran parte de dicha revolución. Se liquidaron las rentas fijas y los valores inmobiliarios urbanos desaparecieron de un día para otro. De pronto la clase media vio atacados sus intereses más fundamentales; la eliminación de gran parte de sus ingresos generó una hostilidad inmediata ante el régimen. Después de haber sido el núcleo del partido y de haber conformado su respaldo más devoto, las clases medias urbanas desertaron del MNR en gran escala, y luego de haber rechazado al PIR y al PCB como alternativas viables, mudaron sus lealtades hacia la Falange Socialistas Boliviana (FSB), antes de menor importancia.

La FSB, partido católico conservador de tendencia fascista, se fundó durante el exilio chileno en el seno de la Universidad Católica en Santiago, en la década de 1930. Al igual que el POR, se trató de un partido relativamente menor en sus primeras fases; contaba con el poderoso apoyo de la Iglesia y su postura era nacionalista moderada. Pero en vista de sus inclinaciones, competía con grupos de centro y de derecha que apoyaban al MNR en el periodo previo a 1952, en tanto sus tendencias clericales alienaban a la mayoría de posibles seguidores en vista de la débil posición de la Iglesia en la

sociedad nacional. Pero cuando el MNR embistió el ingreso de la clase media después de 1952, y en los hechos movió por la fuerza sus ahorros a favor de las clases más populares, el clericalismo del FSB se olvidó y la Falange surgió como el partido más poderoso de los centros urbanos. Esta nueva fuerza de la FSB se reveló en las elecciones intermedias durante el primer régimen de Paz, y aún más durante las elecciones presidenciales de 1956, en las que la FSB dominó en las ciudades sin ninguna duda, atrayendo a la mayor parte de los seguidores tradicionales del MNR antes de 1952.

Pero la coalición del MNR compuesta por radicales urbanos, obreros organizados y el campesinado remplazó al respaldo que antes otorgaba la clase media y permitió que el partido tuviera victorias en las urnas. Empero, pese a su pérdida de la clase media, el MNR se rehusó a moverse aún más hacia una revolución socialista. Constantemente ponía énfasis en su legitimidad y en su relación con el viejo orden, y a la vez que nacionalizaba las tres grandes compañías mineras, hizo todo lo que tuvo a su alcance por atraer nuevo capital extranjero y proteger la propiedad privada. Con la reforma agraria en efecto sacrificó a la propiedad en gran medida, pero aún intentó mantener la zona de Santa Cruz como área importante para la expansión de la inversión privada. Por último, mientras que la creación de la Comibol y el fortalecimiento de YPFB hicieron del gobierno el productor más relevante de la economía nacional y creó un modelo económico de "capitalismo de Estado", la corporación desarrollista del gobierno, la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), invirtió grandes sumas en desarrollar ingenios azucareros, plantas procesadoras de leche, y en otorgar capital de operación al sector industrial privado.

Frente a una economía en bancarrota, a la incapacidad del régimen de alimentar a su pueblo, así como a una falta de capital para poner en vigor los ambiciosos programas de bienestar social y de reforma propuestos, el partido decidió también buscar ayuda financiera de los los Estados Unidos. Incluso para junio de 1953, bajo una intensa presión de los Estados Unidos y la negativa de la fundidora de Patiño en Inglaterra, la Williams Harvey Company, de refinar estaño boliviano, el gobierno accedió a compensar a Patiño, a Hochschild y a Aramayo. Al mes siguiente firmó un contrato de

compra de minerales con los Estados Unidos, que también anunció tanto la duplicación de su programa de ayuda previo como el inmediato envío de cinco millones de dólares en alimentos en los términos de la U.S. Public Law (Ley Pública) 408. Bolivia fue el primer país latinoamericano en recibir tal subvención de envío de comestibles. Para finales de esta década, de enorme ayuda, Bolivia había alcanzado la extraordinaria distinción de haber obtenido cien millones de dólares como ayuda de los Estados Unidos, lo que la convirtió en la receptora más grande de ayuda exterior estadounidense en América Latina, así como de la asistencia per cápita más alta del mundo. Bolivia se volvió tan dependiente de este auxilio, que para 1958 una tercera parte de su presupuesto se cubría, de manera directa, con fondos de los Estados Unidos.

Para los Estados Unidos, la decisión de otorgar este apoyo a Bolivia fue en extremo paradójica, ya que había sucedido durante el muy conservador régimen del periodo de la Guerra Fría, del secretario de Estado John Foster Dulles y del presidente Dwight Eisenhower. Hostil ante todos los regímenes revolucionarios, la administración republicana estadounidense hubiera parecido ser el gobierno con menor posibilidad de ser receptivo a las solicitudes de ayuda bolivianas. Pero el reciente surgimiento de regímenes radicales en Guatemala y en Guyana había generado un inusual temor en los Estados Unidos respecto a perder el control del hemisferio occidental, ya que estaba convencido de que Bolivia sería el próximo. La administración de Eisenhower, ante el primer reto a su hegemonía absoluta sobre América Latina durante la Guerra Fría, sentía que apoyar a los "fascistas" del MNR era la única manera de evitar que la revolución cayera en manos comunistas. Bolivia, en efecto, había sido una región modelo para el primer gran programa de ayuda en América Latina, el de Punto Cuatro en la administración Truman, y había tenido grandes resultados. Así, la embajada estadounidense favoreció continuar la ayuda a Bolivia y aceptó la postura de Paz Estenssoro de que él y su régimen eran los únicos factores que evitaban una toma comunista del poder. Por último, dado lo pequeño de la inversión estadounidense en las mineras y en las tierras agrícolas bolivianas, ninguno de los decretos confiscatorios afectaron a las compañías estadounidenses de

manera grave, de modo que el Departamento de Estado no tenía elementos para oponerse al régimen. La enorme ayuda que se derramó sobre Bolivia fue vital para la estabilidad económica del país. Los cargamentos de comida enviados en términos de la Ley Pública 480 entregaron a Bolivia los comestibles cruciales, necesarios para superar el periodo de severa dislocación agrícola ocasionada por la Reforma Agraria. Esta ayuda sin duda ofreció al gobierno la ecuanimidad que requería para lidiar con el campesinado, que podía no haber tenido en caso de una verdadera hambruna en las ciudades. También otorgó el financiamiento para construir un moderno sistema de caminos, vital para la integración de la sociedad nacional. Esta ayuda, y la vinculación de Santa Cruz de la Sierra con Argentina y Brasil, con la conclusión de los ferrocarriles a Yacuiba y Puerto Suárez, respectivamente, también fueron trascendentes para el desarrollo de toda la región de Santa Cruz, tan relevante para la economía boliviana. Las inversiones en salud y educación también fueron fundamentales para el desarrollo de los atrasados servicios sociales de Bolivia y su transformación en un sistema más moderno. Por último, el financiamiento de las operaciones gubernamentales directas, en extremo cruciales e inusuales, ayudó a fomentar la paz social que podía no haber existido si el régimen no hubiera contado con ayuda. Dadas las cantidades necesarias para mantener al régimen a flote y a la población alimentada y vestida, la ausencia de tal financiamiento sin duda habría conducido a una historia social más sangrienta de la que el país experimentó después de 1952.

Pero esta asistencia no estuvo exenta de costos, ya que el gobierno de los Estados Unidos, como era usual, exigió apoyo para las compañías privadas estadounidenses que operaban en el extranjero. Esto implicó que, a la par de sus incesantes demandas de reducción del poder de la COB y el fin del cogobierno obrero en las minas, se encontraban concesiones tales como cubrir los bonos impagos de la década de 1920, hasta nuevos códigos de inversión y petrolero favorables a los intereses estadounidenses. Pese a su gran apoyo al gobierno, los Estados Unidos se resistieron a todo esfuerzo boliviano por apoyar a la YPFB. Se le hizo saber a Bolivia que sólo habría nuevas inversiones en petróleo luego de la promulgación de un nuevo código

que permitiera una vez más inversiones directas privadas estadounidenses. En octubre de 1953 se elaboró un nuevo código petrolero con la colaboración de los Estados Unidos, y para finales de la década operaban unas diez empresas estadounidenses en Bolivia. La más importante de ellas, la Gulf Oil Company, comenzó operaciones en 1955. Además, cuando la compañía petrolera estatal de Brasil, Petrobras, propuso al gobierno boliviano que se le otorgaran concesiones como las de los tratados preexistentes, o bien con el nuevo código, bastante liberal, el gobierno boliviano rechazó toda proposición.

En la mayoría de los casos estas decisiones a favor del capital estadounidense o a favor del voto internacional estadounidense tuvieron relativamente bajos costos para el régimen. Pero la decisión de forzar a Bolivia a aceptar una estabilización monetaria era un tema por completo diferente, al igual que la intervención directa estadounidense en la política nacional. Para los últimos años del régimen de Paz, el MNR había desarrollado, *grosso modo,* dos grupos: una ala de clase media de centro-derecha, representada por Siles Zuazo, y una coalición de izquierda y obrera encabezada por Lechín y la COB. Ya sea que favoreciera a una ala u otra, Paz, en lo esencial, desempeñó el papel de líder neutral, por encima de las facciones. Los moderados aceptaron las diversas reformas sociales, pero presionaron al régimen para que mantuviera su base de clase media. También fue la facción moderada del partido la que exigió una modernización de la economía, incluso a costa de algunas de las metas sociales de la revolución. Dado el final de la fase inicial destructiva de la revolución y el continuo aletargamiento de la economía nacional, era quizá inevitable que finalmente los elementos conservadores moderados fueran los que dominaran. Aunque ambos grupos estaban divididos en lo ideológico, no quedaba en duda que trabajaban en conjunto. De este modo, cuando Paz terminó su periodo, se concertó que Siles lo sucediera en la presidencia y que Lechín buscara el tercer periodo. Para sellar el acuerdo, Siles aceptó a incluir a Nuflo Chávez Ortiz, ministro del Trabajo, a cargo de los asuntos campesinos, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia.

En las elecciones de junio de 1956, fue evidente que el MNR tuvo pocos problemas para movilizar a su poderosa coalición campesina y obrera, de modo que obtuvo una cómoda mayoría con unos 790 000 votos. Pero la erosión de las clases medias también quedó en evidencia con 130 000 votos, en gran medida de blancos y urbanos, que captó la FSB, con los que quedó como el segundo partido en relevancia. En un intento por volver a captar a esta inquieta base de clase media, así como por promover sus ideas de desarrollo, el régimen de Siles decidió aceptar los dictados del Fondo Monetario Internacional en términos de política fiscal nacional. Dada la crecientemente difícil situación de la economía nacional y la incapacidad del régimen de sobrevivir sin subsidios directos estadounidenses, era inevitable ceder en ciertos puntos. El régimen de Siles sólo tenía tres opciones: generar el capital que requería mediante una completa socialización de la economía, cuestión que ideológicamente no tenía la voluntad de hacer; continuar el programa inflacionario hasta que llegara un colapso total o que una revuelta falangista terminara con el régimen; o aceptar los términos de los Estados Unidos y extraer la mayor cantidad de ayuda posible, con un costo mínimo para sus programas sociales. Optó por la última solución.

Los Estados Unidos cuadraron su "plan de estabilización" para finales de 1956, y Bolivia lo aceptó bajo los auspicios del FMI en enero de 1957. El plan exigía que Bolivia conciliara su presupuesto, terminara el subsidio de alimentos a los mineros, evitara el aumento del salario, creara un tipo de cambio único y adoptara otra serie de medidas, restringiendo la iniciativa y los gastos gubernamentales. El plan de estabilización era extremo para los parámetros de la época, ya que concebía la creación de una moneda estable con un crecimiento inflacionario de casi cero, en un lapso de uno a dos años. El plan fue exitoso: se estabilizó la moneda, se cortó el déficit en el gasto gubernamental y la Comibol logró tener un presupuesto más equilibrado. Para principios de la década de 1990, de hecho, Bolivia finalmente pudo arreglárselas sin el subsidio directo estadounidense a su presupuesto; en ese momento entraba a sus arcas una gran cantidad de capital extranjero privado y, sobre todo, público, de otros gobiernos, en forma de préstamos e inversiones. La productividad aumentó en las minas, y la estabilidad

económica necesaria para el ahorro y la inversión internos finalmente se consiguieron.

Pero el costo fue alto. Estados Unidos insistió en que se llevara a cabo el programa sin menoscabo de sus consecuencias políticas. La izquierda se opuso enérgicamente al régimen de Siles. El vicepresidente Nuflo Chávez renunció y, pese a importantes huelgas mineras encabezadas por Lechín, se cerraron las pulperías subsidiadas en las minas. Ahora la embajada estadounidense confiaba en que podía aislar y destruir a Juan Lechín, quien se volvió, a ojos de los Estados Unidos, el archienemigo. Del mismo modo que Siles jamás usó la fuerza contra los mineros y logró prácticamente todas las concesiones de la COB mediante huelgas de hambre propias y amenazas de renuncia, jamás rechazó a la izquierda del partido de manera grave. Al sostener que la estabilización y el recorte eran las únicas políticas que podían garantizar las victorias de la izquierda y suprimir a la creciente ala derechista y la Falange, de todos modos aceptó la idea de que Lechín y la COB le sucedieran en 1960. Pero la constante presión estadounidense, influida por una serie de liberales del periodo de la Guerra Fría, que fueron embajadores estadounidenses durante los regímenes demócratas, permanecieron firmes contra Lechín y la izquierda. Con la esperanza de disminuir dicha hostilidad, Lechín y Siles aceptaron una plataforma de compromisos para el tercer periodo presidencial. Paz conduciría el partido una vez más y Lechín sería su vicepresidente. Este último viajó a Washington; incluso visitó Formosa para reunirse con algunos líderes nacionalistas chinos, y así, de manera simbólica, aceptó las peores posiciones de la Guerra Fría de los Estados Unidos. También accedió a terminar el cogobierno obrero en las minas, que fue el precio impuesto para acordar una inversión de 41.5 millones de dólares, con recursos del gobierno alemán, de los Estados Unidos, y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo en la Comibol, en el llamado Plan Triangular.

Sin embargo, a diferencia de Siles, Víctor Paz Estenssoro se mostró implacablemente opuesto al poder de la COB y de los mineros durante su segundo periodo (1960-1964). Volvió a armar al ejército, justificando la acción una y otra vez ante los Estados Unidos como una medida para evitar la

subversión comunista. Permitió que el ejército de los Estados Unidos infiltrara la estructura del Estado Mayor boliviano e impulsara sus ideas de "subversión interna" y contrainsurgencia en su entrenamiento del ejército local. Paz también evitó que las milicias se rearmaran e hizo todo lo posible por modificar el equilibrio del poder militar para devolverlo al ejército y alejarlo de las milicias civiles y obreras. Pero en este momento Siles y Lechín unieron fuerzas y rompieron con el partido, destruyendo temporalmente al MNR. Al encontrarse solo, con el ejército y los campesinos como sus principales seguidores, Paz colocó a un importante general de la fuerza aérea, René Barrientos, como su candidato para la vicepresidencia, e intentó participar para un tercer periodo en el cargo.

Las elecciones de 1964 otorgaron la presidencia a Paz; pero con la izquierda y el centro del MNR en la oposición, y la Falange aún como enemiga implacable, era inevitable que se alentara al ejército a volver al poder. De este modo, en noviembre de 1964, unos cuantos meses después de la elección presidencial, el ejército derrocó a Paz en un golpe relativamente incruento, y colocó el gobierno en manos de una junta encabezada por el vicepresidente Barrientos. De este modo, el ejército volvió a la política nacional, y permanecería como fuerza dominante del gobierno entre 1964 y 1982. Así llegó a su fin la fase reaccionaria de la Revolución Nacional y seguiría una larga reacción termidoriana.

Durante los siguientes 18 años, diversos grupos e instituciones lucharían dentro de la sociedad nacional para dominar las fuerzas desencadenadas durante el periodo de la Revolución Nacional. El ejército, los campesinos, los trabajadores organizados y los partidos, tanto tradicionales como nuevos, todos buscaban el poder. En esta disputa, larga, amarga y violenta, surgió un sistema político más sofisticado, así como una sociedad más compleja, cuyo costo fue alto para todos. Aunque los líderes de la oposición al MNR suponían que el derrocamiento de Paz Estenssoro era una transición temporal, la realidad era que había surgido una nueva era política en 1964. Los oficiales jóvenes del ejército que habían accedido al poder cobijados por el MNR crearían una compleja alianza con el campesinado y se mostrarían hostiles ante la política democrática y los obreros organizados. Estos oficiales

justificaron la legitimidad de un gobierno militar autoritario como la única solución para la modernización —ideología prevaleciente a lo largo de las Américas en ese periodo—. Muchos de estos regímenes también encontrarían apoyo entre los elementos más nuevos de las clases más acaudaladas, al igual que entre las poderosas élites regionales que consideraban que el ejército tenía mayores probabilidades de favorecer sus intereses que el viejo MNR.

Pero el cambio institucional, los ascensos a menudo caóticos del personal militar y el conflicto ideológico dentro del propio ejército, en comparación con una organización militar más tradicional y de jerarquías firmes en Chile, Argentina y Brasil, crearon una clase de oficiales mucho más impredecible que muchas otras en América Latina. Así, la época de los regímenes militares fue de cambio radical de perspectivas, abruptos cambios de régimen y constante surgimiento de personalidades nuevas y sorprendentes. Sin embargo, a pesar de todas las veloces transformaciones, a menudo aparentemente azarosas, existía una serie de acuerdos básicos que sólo se transformaron en raras ocasiones. Estas coaliciones se fundamentaban en la aceptación por el ejército de las reformas sociales y económicas básicas de la Revolución Nacional y, sobre todo, de un firme compromiso con la Reforma Agraria y con la movilización del campesinado. Fue el reconocimiento y la aceptación activa de este sector lo que marcaría a estos nuevos regímenes militares como semipopulistas, en lo fundamental erigidos sobre una alianza entre campesinos y ejército, a menudo no expresada, pero siempre en total funcionamiento. Todos estos rasgos se expresaron con claridad en el primero de estos regímenes militares, el de René Barrientos, quien estableció la mayor parte de las normas básicas que dominarían a estos gobiernos militares en los años por venir.

El régimen de Barrientos pronto mostraría su implacable hostilidad ante la fuerza de trabajo organizada y la izquierda. Buscó apoyo urbano en una nueva coalición entre el partido gubernamental y algunos demócrata-cristianos, así como entre elementos de la Falange. Pero desde el principio no escatimó en dar respaldo a las reformas revolucionarias que afectaban al campesinado, como la Reforma Agraria y el sufragio universal. Uno de los primeros actos del nuevo régimen —apoyado por cada régimen subsecuente

tanto de izquierda como de derecha— fue declarar su indefectible apoyo a la Reforma Agraria, seguido de un rápido aumento en la distribución de títulos de propiedad de la tierra. También se dio ayuda integral a los programas de bienestar social, de educación rural y a los sindicatos de campesinos, que tanto retuvieron sus armas como objetos de protección. De hecho, el régimen de Barrientos se volvió el más popular en el campo después del de Víctor Paz Estenssoro. Hablante nativo de quechua, Barrientos (cochabambino) dominaba a los sindicatos campesinos y se le conocía por su magnificencia para comprar ayuda individual y apoyo campesino. La consecuencia fue un régimen militar conservador y antiobrero urbano, en alianza con el campesinado indígena. Se trataba, en resumen, de una poderosa coalición que sólo la corrupción descontrolada y la inestabilidad del propio ejército volvió inviable.

El régimen de Barrientos logró desmantelar el sindicato minero (FSTMB), echó a unos 6 000 mineros de la Comibol e incluso masacró a mineros en huelga la noche de San Juan, en junio de 1967, en las minas Catavi-Siglo XX. Barrientos logró decapitar temporalmente al movimiento sindical, pero no erradicó su poder potencial. Los obreros bolivianos se habían radicalizado en la década de 1940 y resistieron con éxito las repetidas intervenciones y represión que una serie de regímenes militares armaron en su contra a partir de 1964. No obstante, el uso casi constante de tropa en las minas pudo aislar y controlar temporalmente al una vez todopoderoso movimiento obrero, por primera ocasión desde 1952.

La combinación de la elevación de los precios del estaño en el mercado internacional, insumos de capital privado y un recorte forzado de la mano de obra y los salarios creó la primera ganancia para la Comibol en 1966. A partir de entonces comenzó una tendencia a largo plazo en la producción y en los precios que haría de la Comibol una fuente importante de ingresos gubernamentales. Sucedieron entonces cambios fundamentales también en el sector de la minería privada. Alentados por todos los gobiernos del MNR mediante subsidios especiales y otro tipo de ayuda, el sector minero, mediano y pequeño, también aumentó su producción. Las minas de rango mediano se volvieron importantes en particular y aumentaron su producción hasta

alcanzar una tercera parte del total del sector estannífero para finales de la década. Así, no era sólo la propia Comibol la que se expandía, sino que la industria entera se hacía más compleja con el surgimiento de un nuevo grupo de propietarios de minas de mediana escala como fuerza poderosa del sector privado. En 1965 se emitió un código de inversión liberalizado para el capital privado: la United States Steel pudo rentarle a la Comibol la mina de zinc llamada Matilde y se le otorgaron mayores concesiones a la Gulf Oil. Todos estos avances económicos ayudaron a Barrientos en sus posturas políticas. Durante la elección presidencial de 1966, pudo reunir a un poderoso partido de coalición entre campesinos, los nuevos grupos acaudalados, los políticos conservadores de la Falange y algunos miembros de la burocracia gubernamental. Pese a su aplastante victoria y a la aparente desintegración de la oposición de izquierda formal, la hostilidad obrera contra el régimen no disminuyó y, por primera vez desde 1952, el gobierno de La Paz comenzó a experimentar problemas de rebelión armada.

Mientras que muchos pequeños grupos guerrilleros, en gran medida urbanos con principios de intelectuales, comenzaron a operar durante el periodo de Barrientos, el caso más importante de rebelión provino de una fuente totalmente externa al escenario nacional. En 1966, el revolucionario argentino Che Guevara llegó a Bolivia. El Che estableció una base en la provincia de Santa Cruz y estaba aparentemente más interesado en establecer un cuartel general guerrillero para llevar a cabo operaciones en Argentina y Brasil que en Bolivia misma. Aunque tenía contacto con el Partido Comunista Boliviano, no hizo intento alguno por conectar o trabajar con los mineros. Sin embargo, justo en este momento los campamentos mineros estaban sitiados por el ejército, y la violencia y el conflicto se daban casi a diario. Más bien parecía que el Che se concentraba en establecer discretamente un centro de entrenamiento en extremo aislado para su pequeño grupo, en preparación para otras aventuras. Pero en marzo de 1967, un año después de su llegada, el Che y su grupo tuvieron un primer choque con el ejército boliviano en Ñancahuazú. Con fuerte apoyo de los Estados Unidos, Barrientos y su Estado Mayor, el general Ovando, aplastaron a los rebeldes. Para abril se había capturado a Regis Debray, el periodista francés

que acompañaba al Che, y para octubre se había capturado a los rebeldes y ejecutado al Che. Así, Barrientos logró sobrevivir a la oposición armada de la izquierda y continuar con un vasto apoyo popular entre el campesinado y la clase media. No cabe duda de que cuando murió en un accidente aéreo en abril de 1969, aún tenía control total sobre la nación. Pese a la corrupción del régimen, la deserción de su cercano amigo y ministro del Interior, el coronel Arguedas, y otros problemas, Barrientos demostró ser un político tan consumado que de seguro habría ganado un segundo periodo en elecciones libres.

La casta militar que apoyaba a Barrientos fue incapaz de mantener su posición ideológica y política. Quedaron divididos y fueron corrompidos. Pese a sus antecedentes y experiencias en común, sus preferencias políticas diferían en gran medida, de modo que no hubo garantía de que sus historias pasadas fueran alguna guía para sus posturas políticas futuras. Todo esto quedó en evidencia en los regímenes que remplazaron a Barrientos. Entre 1969 y 1982 surgirían un régimen militar tras otro, cuyas posturas políticas se desplegaron en un amplio rango que iba de la extrema izquierda a la derecha reaccionaria, pasando por el reformismo de derecha. Las políticas gubernamentales dependieron por completo de las personalidades e ideas de los oficiales que tomaron el poder en lo individual, y de ninguna manera reflejaron una posición coherente dentro del mismo ejército. Mientras que en la mayor parte de los Estados de América del Sur el ejército presentaba en este periodo una personalidad corporativa y una política en común hacia el mundo civil, esto no pasó en Bolivia.

El general Ovando, compañero de Barrientos en el golpe de 1965 y jefe del Estado Mayor, tomó el poder en septiembre de 1969. Ovando pertenecía a la tradición reformista moderada del MNR y en los hechos intentó impulsar lentamente al régimen hacia el logro de un *modus vivendi* con la izquierda. En octubre de 1969 nacionalizó la Gulf Oil Company of Bolivia, y para principios de 1970 había legalizado otra vez a la COB y a la FSTMB; permitió que Lechín volviera al poder y se retiró a la tropa de las minas por vez primera desde 1964. También intentó movilizar a la vieja izquierda en un revitalizado nuevo MNR. Al final, sin embargo, no pudo congregar el apoyo

popular que Barrientos había alcanzado, ni organizar un sistema de partidos políticos coherente para respaldar su régimen. Al mismo tiempo, el ejército no estaba satisfecho con Ovando, quien lo había encabezado como jefe del Estado Mayor o como presidente durante unos ocho años. Las ambiciones frustradas del ejército, de este modo, ejercieron su papel. La consecuencia fue la decisión, en octubre de 1970, de remplazar a Ovando por el general Juan José Torres, su exjefe del Estado Mayor. Así comenzó uno de los gobiernos más extraordinarios de la izquierda boliviana. Entre octubre de 1970 y agosto de 1971, cuando se le derrocó, Torres mostró ser el general más radical de tendencias de izquierda que jamás hubiera gobernado Bolivia.

Aunque había sido falangista en su juventud, y a pesar de que desempeñó un papel activo en la campaña contra el Che y apoyó las acciones del ejército en el periodo que llevó a su toma del poder, Torres surgió como un político de izquierda idealista que quería extender la "apertura democrática" de Ovando para incluir una movilización aún más radical de trabajadores y de políticos de izquierda. Uno de sus primeros actos al asumir el cargo fue aceptar ayuda financiera rusa y europea del este para la Comibol. Tal apoyo se ofreció varias veces en el pasado, pero el MNR y algunos gobiernos militares previos no le dieron importancia, presionados por los Estados Unidos. Torres también firmó contratos para la construcción de una fundidora de estaño, con lo que se liberó a Bolivia por primera vez de su dependencia de fundidoras europeas y estadounidenses para procesar sus minerales. Al final los rusos proveyeron casi tanta ayuda financiera a la Comibol como los Estados Unidos, esto es, alrededor de 250 millones de dólares cada uno.

Torres también anuló un contrato especial entre la Comibol y una compañía minera estadounidense, para extraer estaño de los residuos de Catavi, y rescindió el contrato con la U.S. Steel para el funcionamiento de la mina de zinc Matilde. En tanto este tipo de sentimiento contra las compañías estadounidenses tenía precedentes, Torres fue un paso más allá y expulsó al Cuerpo de Paz, sobre la base de que fomentaba los abortos entre el campesinado. Aunque estas acciones antiestadounidenses contaban con apoyo popular, produjeron una fuerte reacción de los Estados Unidos, que

ahora se encontraba prácticamente ajeno a Bolivia por primera vez desde 1952.

El hecho de que Torres llevara su oposición a este extremo reflejaba en gran medida el cambio en las condiciones de la economía boliviana. Para principios de la década de 1970 Bolivia empezaba a cosechar las ganancias de las inversiones económicas y sociales emprendidas por el MNR desde 1952. El desarrollo de un moderno sistema carretero, el aumento de la agricultura comercial en la región de Santa Cruz y las fuertes inversiones en la Comibol, en especial en los YPFB —en combinación con el alza en los precios del mineral en el mercado internacional—, produjeron un gran crecimiento en la economía nacional. Se añade a esto el avance espectacular en el nivel de alfabetismo y en la educación pública, así como la liberación de recursos humanos mediante la abolición de todas las restricciones anteriores a 1952 sobre la población rural, que aumentaron el valor del capital humano en el país. El gobierno boliviano se volvió mucho menos dependiente de la ayuda directa de los Estados Unidos para mantener el nivel de las inversiones gubernamentales, e incluso para dedicar un mayor financiamiento al desarrollo. Entre las fuentes de financiamiento internacional y el principio de una gran inversión privada en el desarrollo del sector de los minerales y la agricultura comercial, Bolivia se encontró relativamente libre de su dependencia de la generosidad estadounidense.

Los esfuerzos de Torres por crear una izquierda unida en el frente nacional fueron menos eficaces. Fragmentados por las divisiones del Partido Comunista en las alas moscovitas y china, y por la subdivisión del PIR en numerosas facciones, la COB, Lechín y sus seguidores no lograron unificarse en torno a las políticas, y en los hechos temían la creciente radicalización de sus aliados más extremistas de la clase media de otra época. Al mismo tiempo, sus experiencias durante el régimen de Barrientos los volvieron desconfiados con los poderosos sindicatos campesinos. No obstante, a principios de la década de 1970, la COB instauró una asamblea política que buscaba conformar cierta unidad en torno a la vieja izquierda del MNR. Esto constituyó la base de la llamada Asamblea Popular, organizada en junio de 1970 con el propósito de sustituir al parlamento. Pero esta asamblea ni

obtuvo la legitimidad del voto popular ni las facultades de una legislatura boliviana, a pesar del hecho de hospedarse en el edificio del Congreso. Compuesta, por último, por unos 218 delegados, la Asamblea sólo contaba con 23 representantes de las confederaciones campesinas, comparados con los 123 delegados de los sindicatos laborales, entre quienes tan sólo la FSTMB tenía 38. También contenía a los principales grupos de izquierda, más un nuevo y poderoso partido, el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), que recién se había formado luego de la escisión del ala izquierdista del Movimiento Demócrata Cristiano y del sector universitario del viejo MNR. Pero la izquierda radical y los trabajadores no pudieron garantizar la total cooperación del régimen, relativamente inestable, de Torres. Aunque la Asamblea atemorizó a la derecha y al centro con desafiantes actos simbólicos, no promulgó leyes significativas. Además, el gobierno se negó a otorgar armas a los trabajadores o a retar de cualquier modo el poder y la supremacía del ejército.

La agitación de la Asamblea Popular generó el apoyo civil para un golpe militar. En enero de 1970, el coronel Hugo Banzer, entonces jefe del Colegio Militar, intentó derrocar a Torres, pero el ejército se mantuvo leal. En los meses subsecuentes la Asamblea dio su apoyo a la toma del periódico *El Diario* y de pequeñas minas y algunas haciendas de Santa Cruz, a manos de obreros, organizadas por el Partido Comunista prochino. Así, cuando Banzer se lanzó a un segundo golpe de Estado en agosto de 1971, la izquierda no logró detenerlo. Con el apoyo del viejo partido MNR de derecha y de centro de Paz Estenssoro, así como de la FSB, Banzer recibió un financiamiento importante de la élite regional cruceña, inquieta por las amenazas de ampliar la reforma agraria hacia las nuevas zonas de agricultura comercial. El derrocamiento de Torres enfrentó resistencia. Pese a que Torres se rehusó a abrir los arsenales a los trabajadores, estudiantes y obreros, éstos se opusieron al ejército, al tiempo que tropas leales intentaban defender al presidente. La consecuencia fue que el golpe de Banzer de 1971 fue la destitución más sangrienta habida en Bolivia desde la rebelión de abril de 1952.

Banzer comenzó su gobierno justo cuando los cambios en la estructura internacional de los precios de los minerales finalmente ejercían un profundo

impacto sobre la economía nacional. Entre 1970 y 1974 el valor de las exportaciones bolivianas casi se triplicó (pasó de 226 a 650 millones de dólares). Dados los 20 años previos de inversiones y cambio estructural, esta nueva riqueza se absorbió fácilmente y tuvo lugar un auge económico. No sólo hubo nuevas grandes inversiones en la minería mediana, así como una ampliación en las exportaciones no estanníferas, sino que la región de Santa Cruz ahora rendía una producción excedente significativa y, por primera vez, la nación se volvió exportadora de productos agrícolas, sobre todo azúcar y algodón. La construcción urbana tuvo un apogeo, e incluso hubo algún desarrollo del sector manufacturero.

Al mismo tiempo, los 20 años de importantes inversiones en la educación finalmente surtían efecto. Así, surgió un grupo de expertos técnicos dentro del gobierno y de sus agencias productivas autónomas, que dio al régimen una nueva fuente de poder y capacidades. Sumada al surgimiento de este nuevo sector profesional y de servicios se encontraba la emergencia de nuevas élites regionales. Al respecto, el drástico crecimiento de la ciudad de Santa Cruz resulta sorprendente, ya que pasó de ser la cuarta ciudad en tamaño de la república en la década de 1940 a la segunda en los años setenta, para volverse también una moderna metrópoli urbana, conectada con el resto de Bolivia por carreteras pavimentadas para todo tipo de clima y vinculada al mundo exterior mediante vuelos internacionales cotidianos. La expansión de Santa Cruz operó una profunda transformación en los grupos de poder nacionales y regionales. Dadas las significativas inversiones en petróleo y agricultura en la región de Santa Cruz, así como el crecimiento de su población, resultaba inevitable que sus poblaciones, en gran medida blancas y cholas, exigieran mayor participación en la toma de decisiones en el ámbito nacional. Por primera vez en la historia de la nación existía una fuente importante de poder económico y político fuera de las tradicionales regiones alteñas y de los valles intramontanos.

El régimen de Banzer fue consistente con su predecesor en cuanto a impulsar la Reforma Agraria y alentar una colonización vital de las tierras bajas. Otorgó más tierras y benefició a una mayor cantidad de familias campesinas que cualquier régimen anterior, militar o civil. De este modo, de

los 31 millones de hectáreas otorgadas a las 434 000 familias campesinas sin tierra entre 1953 y 1980, 81% quedó en manos de 62% de todas las familias durante el periodo del interregno militar entre 1964 y 1980; esto es, el régimen de Banzer, por sí mismo, otorgó más de la mitad del total de las tierras, lo que benefició a la mitad de las familias sin tierra. Pero no obstante este fortalecimiento de un aspecto fundamental del pacto campesino-militar, Banzer fue el primero de los generales en reducir la importancia de los campesinos en la vida política nacional, en gran medida debido al cambio y a las demandas que provenían de este sector. El crecimiento de la población en las áreas rurales y la consiguiente fragmentación de las propiedades, más el surgimiento de una nueva conciencia entre campesinos de ser productores agrícolas para mercados urbanos, comenzaban a tener efecto sobre las poblaciones rurales. Ya no contentos con sus títulos de propiedad, ahora deseaban crédito y apoyo por la vía del establecimiento de precios, así como otro tipo de asistencia del gobierno para mejorar su ventaja en el mercado. De este modo, no fue casualidad que la primera confrontación entre campesinos y militares desde 1952, que terminó en masacre en el valle de Cochabamba en 1974, tuviera que ver con protestas campesinas en torno a precios de comestibles sostenidos por el gobierno.

La administración de Banzer adoptó también las ideas antidemocráticas que en esa época dominaban al continente. El modelo brasileño se volvió un ejemplo para el ejército boliviano. Se sostenía que un régimen democrático llevaba, por último, al caos social, y que sólo mediante la "despolitización" de estas masas podría proceder el desarrollo económico de manera racional. Mediante un tutelaje cuidadoso y una participación "controlada" sucedería una rápida "modernización". Ya no se consideraba la intervención militar como un asunto temporal, sino como una alternativa a largo plazo para la política democrática. Casi inmediatamente después de asumir el cargo, Banzer declaró ilegales a la COB y a la FSTMB; a todos los partidos a la izquierda del MNR tradicional se les negó reconocimiento formal. Consecuencia de lo anterior fue el encarcelamiento de mucha gente y el exilio del liderazgo del MIR, del PRIN —que era entonces el nombre de la vieja ala

del MNR encabezada por Siles y Lechín—, así como el uso deliberado del asesinato y la tortura.

Banzer tomó inmediatamente medidas para resolver el conflicto con los Estados Unidos surgido durante el régimen de Torres. Se promulgó un código de inversiones, nuevo y más liberalizado, y se buscó y encontró una considerable asistencia para la consecución de materiales y personal militares. Empero, la nueva relación con Rusia y con Europa Oriental se había vuelto demasiado importante para que ni siquiera el régimen de Banzer la rechazara, y así, los Estados socialistas continuaron otorgando ayuda a largo plazo para el desarrollo del estaño y otras fundiciones. El gobierno de Banzer también dio un giro abrupto en la tradicional alianza con Argentina, a favor de una cercana y novedosa relación con Brasil. En respuesta a los intereses a largo plazo de Santa Cruz, en cuanto a abrir su economía y productos a los mercados brasileños, el régimen de Banzer firmó una importante serie de pactos económicos internacionales que favorecían la participación brasileña por encima de la argentina en el desarrollo de los recursos naturales bolivianos, sobre todo respecto al gas y el mineral de hierro de la región de Santa Cruz.

Banzer intentó crear un partido político nacional y forzó a sus dos aliados, la Falange y el ala del MNR de Paz Estenssoro, a aliarse con su "Frente" antes de participar en el gobierno. Este intento de crear un gobierno militar populista de derecha, por último, resultó poco atractivo para Banzer, y para finales de 1974 anunció un abrupto giro en su régimen, al llevar a cabo un "autogolpe", como se le llamó, y establecer un gobierno sin partido, totalmente militar, con base en el apoyo de los tecnócratas y de los expolíticos no alineados. Al destituir al MNR de su gobierno y luego exiliar a Paz Estenssoro, anunció que todos los partidos, incluso los de centro y derecha, quedaban abolidos a partir de entonces, y que el ejército ahora gobernaría sin concesión democrática alguna.

La decisión de romper de una vez por todas con la tradición se fundamentaba con claridad en dos importantes procesos, uno internacional y el otro local. El primer factor y el de mayor importancia fue el derrocamiento de la administración de Allende en Chile, en septiembre de 1973, y la llegada

al poder del régimen pinochetista. Quedaba claro a los ojos de Banzer que el modelo de un régimen autoritario y antipartidos, no democrático, se volvía la norma en la región. El segundo factor fue el extraordinario crecimiento que afectaba a la economía nacional y creaba apoyo popular para el régimen a pesar de sus actividades antidemocráticas. Entre 1973 y 1974, el precio del estaño en el mercado mundial prácticamente se duplicó, lo que a su vez resultó en la duplicación del valor total de las exportaciones nacionales y en la creación del mayor excedente comercial de la historia del país. Los precios del petróleo, también en aumento, de pronto convirtieron la pequeña producción petrolera boliviana en una bonanza de exportaciones, que en 1974 daba cuenta de 25% del valor total de éstas. De importancia a más largo plazo, ya que las exportaciones de petróleo cesaron para finales de la década, fue el comienzo de la exportación del abasto más abundante: gas natural, que se exportó por primera vez en 1972 y que, para 1974, daba cuenta de 4% del total de las exportaciones, cifra que se elevaría constantemente a lo largo del resto del siglo. Asimismo, las primeras exportaciones de estaño fundido y procesado comenzaron en 1971, y para 1974 sumaban 9% del valor de las exportaciones. Todo esto implicó que las tradicionales exportaciones de mineral de estaño y de otros minerales no refinados cayeran de aproximadamente 90% del valor total de las exportaciones en la década de 1960 a un poco menos de 50% para mediados de la década de 1970. Por último, las primeras exportaciones de bienes agrícolas comenzaron en 1970 con azúcar y luego con algodón, y aumentaron de manera sustancial en los años siguientes, hasta llegar a 6% del valor total de las exportaciones para 1974. Mientras que aún eran un factor pequeño en la suma de los bienes exportados, se trató del segundo rubro de exportación de crecimiento más rápido del país en los años que van de 1970 a 1976, con una tasa de crecimiento anual promedio de 49%, justo detrás del fenomenal aumento en las exportaciones de gas natural, que aumentaban 50% al año.

El auge de los primeros años de la década de 1970 parecía representar un cambio a largo plazo en la naturaleza de las exportaciones bolivianas y del crecimiento económico, y no sólo el ciclo de un apogeo a corto plazo, consecuencia de los bruscos cambios en los precios internacionales. Ahora

Santa Cruz exportaba sus bienes agrícolas de manera permanente, y cuando cayeron los precios del azúcar, el movimiento hacia el algodón mostró que ya existía una infraestructura básica que podía sobrevivir a los cambios en la demanda mundial. Al mismo tiempo, era evidente que las exportaciones de gas natural de Bolivia hacia países vecinos, principalmente Argentina y luego Brasil, representaban un mercado que se ampliaría continuamente en los años siguientes. Por último, el aumento a largo plazo para los minerales no estanníferos y la exportación de estaño terminado parecían implicar un futuro económico bastante próspero en el largo plazo. Los socios comerciales de Bolivia también cambiaban. Bolivia ya no dependía de un socio comercial específico, como había ocurrido en el pasado. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) ahora recibía una tercera parte de sus exportaciones, Europa 20% y los Estados Unidos sólo una tercera parte; algunos países asiáticos se llevaban el resto. Además, la mezcla de importaciones también era muy variada: los países de la ALALC y de Asia adquirían mayor importancia, en tanto que Europa Occidental y los Estados Unidos, tenían un menor peso.

El extraordinario aumento en la balanza comercial favorable llevó a un enorme auge en la construcción. Las ciudades principales, La Paz y Santa Cruz, se salpicaron de rascacielos modernos y la arquitectura urbana de estas dos ciudades cambió. Se ajustó el sistema aeroportuario y se construyó un aeropuerto internacional en Santa Cruz. De manera aún más crucial, la red de caminos pavimentados se amplió de La Paz a Oruro, y hacia el lago. Un camino pavimentado penetró en la ruta hacia la frontera de Chapare en la provincia de Cochabamba, con lo que se abrió el comercio moderno ilegal de cocaína. Chapare, que había producido no más de 5 a 10% del total de la producción de coca de la nación antes de la existencia de la nueva carretera, para finales de la década producía más de 70% del cultivo a nivel nacional. Casi toda esta producción se encaminaba al mercado internacional.

Pero el auge se desvaneció y Banzer no pudo controlar a la sociedad boliviana, en extremo movilizada. El gasto excesivo respecto a los presupuestos nacionales, así como la corrupción a la alza, lo forzaron a devaluar la moneda nacional en 40%, la primera devaluación posterior a la

ley de estabilización de 1956. La inflación resultante creó intranquilidad y la depresión salarial mostró ser sólo un recurso temporal. Pese a la presencia de tropa en los cuarteles mineros y a la supuesta liquidación de la FSTMB y la COB, la actividad huelguística y la violencia obrera continuaron. Para principios de 1976 hubo huelgas nacionales y Banzer debió cerrar las universidades. El régimen no sólo fue incapaz de suprimir a los sindicatos, sino que también perdió la mayor parte del voto nacionalista de la clase media cuando admitió su derrota en las negociaciones con Chile para obtener una salida al mar. A pesar de los intentos desesperados de Banzer por lograr una solución a cualquier precio, incluida la propuesta de intercambiar territorio boliviano por un puerto, no se pudo extraer nada de Pinochet, y para finales de 1976 se abandonaron todas las negociaciones. Por último, la clase media y alta que ofrecía la base civil de apoyo para tales regímenes militares en el resto de América Latina, en Bolivia estaba mucho más dispuesta a confiar sus intereses a un sistema de partidos democrático que a un régimen militar desconocido. Dada la corrupción e indisciplina del cuerpo de oficiales, la élite civil no podía confiar en el resultado de un golpe anti Banzer, ya que no había manera de saber si el próximo líder sería un Torres, un Barrientos u otro Banzer.

A principios de 1977 Banzer prometió que habría elecciones presidenciales en 1980, y para noviembre, sólo tres años después de su promulgación, se retiraron todos los decretos autoritarios. Sin embargo, el ejército se había vuelto tan hostil que se forzó a Banzer a declarar que él no sería candidato. Así, al final del año anunció que habría elecciones en 1978. Pero ni siquiera esto fue suficiente, ya que pronto se planteó la demanda de una amnistía total para los 348 líderes políticos y sindicales exiliados. Cuando Banzer se rehusó, comenzó, a finales de diciembre de 1977, una huelga de hambre entre las esposas de los líderes sindicales mineros en la catedral de La Paz. La Iglesia apoyaba por completo la medida, y para principios de enero más de mil personas se habían unido a la huelga de hambre en todo el país. Los huelguistas exigían una amnistía total, así como libertad sindical. Tan abrumadora fue la huelga, que se forzó a Banzer a rendirse, e incluso se le

hizo firmar un acuerdo formal con grupos de derechos humanos en apoyo del movimiento.

Al volver, los exiliados arrebataron los sindicatos a los interventores gubernamentales y en unos cuantos días se recrearon la FSTMB y la COB, con el mismo liderazgo que habían tenido antes del golpe de 1971. Las huelgas, la agitación laboral y una actividad política febril llevaron a que Banzer dejara de lado cualquier pretensión de mantenerse en el cargo. Anunció que el general Pereda Asbun sería su sucesor y que el nuevo régimen restablecería la democracia. En oposición al candidato del ejército se encontraba Hernán Siles Zuazo, junto con un nuevo agrupamiento de partidos de izquierda y de centro. Siles, al abandonar el partido MNR dominado por Paz en 1972, estableció su propio MNRI, o MNR de izquierda, durante su exilio chileno. El MNRI se alió con el MIR, el Partido Comunista y otros grupos, para formar una coalición electoral llamada UDP (Unidad Democrática Popular), justo antes de las elecciones de julio. Para asombro del ejército, la elección mostró que el campesinado ya no votaba en bloque. Como los campesinos, junto con masas urbanas, apoyaban la popular lista electoral que acompañaba a Siles, el régimen sospechó que la elección iba en su contra y el ejército decidió dar un golpe de Estado.

Pero el gobierno de Pereda sólo duró un par de meses, y en noviembre tomó el poder una nueva junta al mando del general David Padilla, quien no sólo propuso elecciones libres, sino que también anunció que el gobierno no presentaría un candidato formal ni apoyaría a ninguno de los contendientes civiles. De este modo comenzó uno de los periodos más creativos en lo político de la historia reciente boliviana. En el espacio de cuatro años y durante tres elecciones presidenciales, los viejos patrones del voto nacional cambiaron de manera importante, dando lugar a un sistema político nuevo y más complejo, que predomina hasta la actualidad. En lugar de tener un partido popular masivo con base en el apoyo campesino, en 1978 y hasta el día de hoy ha habido una serie de partidos en competencia, respaldados por complejas combinaciones de votantes urbanos y rurales. De hecho, Bolivia había creado un electorado moderno.

Esta nueva diversidad entre el electorado nacional reflejaba cambios tanto en la sociedad como en la economía. Tal como lo revelara el censo de 1976, Bolivia finalmente había sentido el efecto total de la introducción de programas modernos de bienestar social en términos de salud y educativos. La introducción de la atención médica mínima de cobertura virtualmente total implicó que la tasa de mortalidad en Bolivia finalmente había disminuido y se había estabilizado en niveles más bajos. Con una tasa de mortalidad descendente y una tasa de nacimiento alta (de aproximadamente 44 por mil), la población comenzó a aumentar a un ritmo veloz. Así, pese a una tasa de mortalidad general de 18 por mil y una tasa de mortalidad infantil extraordinariamente alta, de 202 por cada mil nacidos vivos a finales de la década de 1970, Bolivia, después de 1950, tuvo un crecimiento poblacional de 2.6% anual, con un aumento natural total de la población de 2.7 millones de personas en 1950 a 4.6 millones para 1976.

Además, esta creciente población era mucho más urbana y tenía mucho mejor educación que las generaciones previas. Mientras que en 1950 la totalidad de la gente que vivía en pueblos y ciudades de cualquier tamaño era de sólo 34%, para 1976 esta cifra había aumentado a 50% (con 42% de la población habitando ciudades de 2 000 personas o más). Sólo 31% de la población en edad escolar o por encima de ésta se consideraba alfabetizada en 1950. Para 1976 la cifra había aumentado a 67%, con más de 80% de los y las menores entre 10 a 14 años anotados como inscritos a la escuela. Por último, el porcentaje de hablantes de español había aumentado a tal grado, que para 1976 el español se volvió por vez primera la lengua de la mayoría boliviana. De los 4.6 millones de personas registradas, ahora se consideraba que 1.6 millones eran hablantes monolingües de español y 1.7 millones eran bilingües, lo que representaba en conjunto 72% de la población. Pese al aumento sin precedentes de la población rural, los hablantes indígenas monolingües habían disminuido. Las personas monolingües en quechua cayeron de 988 000 a 612 000 y los hablantes monolingües de aymara, de 664 000 a 310 000 en los dos años censados. El crecimiento entre los hablantes bilingües fue lo que dio cuenta de la mayoría que alcanzó el español en 1976, prueba del impacto de las escuelas en las zonas rurales. La

población chola no sólo se había ampliado enormemente, como señalan estas cifras, sino que, aún más importante, los campesinos indígenas rurales ahora utilizaban el español a gran escala, a la par de sus lenguas indígenas tradicionales.

De este modo, el electorado boliviano de 1979 tenía mejor educación, mayor alfabetización, al igual que la población de habla hispana más numerosa de la historia de Bolivia. Tanto Víctor Paz Estenssoro y su MNR revitalizado como Siles y su alianza de la UDP encontraron apoyo en los campesinos y los trabajadores. Además, las nuevas clases profesionistas establecieron nuevos partidos y alianzas para expresar sus necesidades particulares. De súbito, los partidos nuevos y los viejos se encontraron en una serie de grupos equilibrados entre derecha, centro e izquierda. Incluso el antes despreciado Banzer logró organizar su propio partido, con cierto apoyo regional relevante, y se convirtió en uno de los políticos civiles nacionales de fama, caso raro de transición en la política latinoamericana.

Estas divisiones políticas, muy complejas, explican por qué las elecciones de julio de 1979 vieron a Siles y a Paz Estenssoro en la jefatura de los agrupamientos de la oposición, y por qué otro viejo político de los días del MNR, Walter Guevara Arze, surgiría como el candidato de compromiso, una vez que los dos líderes llevaran las elecciones a un empate. Hasta que los nuevos y jóvenes líderes pudieran determinar sus fortalezas en elecciones abiertas, preferían apoyar a los héroes de una época anterior. La elección de 1979 fue extraordinaria, una de las más honestas en la historia nacional, que llevó a más de 1.6 millones de bolivianos a las urnas, con una mayoría de partidos y alianzas con fortalezas en todas las regiones, y con Santa Cruz, de hecho, en el campo contario a Banzer.

Aunque Paz Estenssoro ganó las elecciones por mayoría relativa, los partidos no podían llegar a un acuerdo en torno a algún candidato, en especial si aún se consideraba a Banzer y su nuevo partido socios no negociables dentro de los otros grupos. Para sortear una amarga pelea, el Congreso llegó a la conclusión de repetir el proceso electoral al año siguiente, y designó a Walter Guevara Arze presidente del Senado y viejo amigo tanto de Siles como de Paz Estenssoro, como presidente provisional hasta las nuevas

elecciones. La administración de Guevara Arze, el primer régimen civil desde 1964, duró sólo algunos meses, y fue derrocado temporalmente por una junta militar en noviembre de 1979. Pero la oposición política en el interior de la nación era tan intensa, con una violencia y huelgas generales que dejaron más de 200 personas muertas, que se forzó a que la junta militar abandonara la administración en un par de semanas. Una persona civil negociada, Lydia Gueiler Tejada, se colocó en el cargo. Fue la primera mujer presidenta de la historia del país, así como una de las pocas en toda la historia de América. La selección de Gueiler también mostró el tremendo apoyo popular que tenía el retorno a un régimen civil. En noviembre de 1979 ningún partido apoyó el golpe, y las acusaciones de que Víctor Paz Estenssoro lo había respaldado fueron suficientes para romper el *impasse* electoral que había ocurrido en las dos elecciones previas, así como en una tercera elección nacional, ya que llevó todos esos años hasta que Hernán Siles Zuazo y la UDP alcanzaran una victoria por mayoría relativa en junio de 1980.

El regreso temporal al gobierno civil bajo Gueiler costó demasiadas concesiones por parte de los oficiales militares de mano dura, encabezados por el general Luis García Meza. Se rehusaron a permitir que Siles asumiera el cargo, de modo que, en julio de 1980, el ejército tomó el gobierno, pese a la oposición de todos los partidos y grupos civiles. No obstante, el regreso a un régimen militar autoritario del estilo de los primeros años de Banzer no destruyó ni a los poderosos sindicatos, ni al sistema de partidos civiles. Aunque se declararon ilegales, como en tiempos pasados, estas organizaciones siguieron manteniendo un poderoso empuje entre la población civil. A lo largo de los dos años que duró el dominio de la junta, hubo una gigantesca oposición civil que incluía de todo, desde huelgas y marchas ilegales hasta huelgas de hambre que destruyeron cualquier posibilidad de base civil para estos regímenes. El nivel de corrupción del ejército alcanzó nuevas dimensiones con su involucramiento en el comercio internacional de cocaína, de reciente aparición. Por último, el autoritarismo de los oficiales llegó al punto de llevar a cabo el asesinato de nueve líderes del MIR en La Paz en enero de 1981, y de organizar escuadrones de la muerte paramilitares, siguiendo el modelo de la Argentina contemporánea. Tan extremo fue el

gobierno de García Meza —que duró hasta agosto de 1981— y de las juntas temporales que le siguieron, que emplearon a fascistas reconocidos internacionalmente, como el italiano Pier Luigi Pagliai y el alemán Klaus Barbie, famoso en la Segunda Guerra Mundial.

La imparable oposición civil, la muy publicitada corrupción del ejército y los irresueltos problemas económicos de finales de la década de 1970 llegaron a acechar a los gobiernos de las diversas juntas, hasta que finalmente destruyeron su apoyo incluso entre el cuerpo de oficiales. Estos problemas económicos derivaron de la dependencia de la nación de la rentabilidad y desempeño de las agencias autónomas gubernamentales. Después de siete años de gobierno de Banzer, estas administraciones estaban en un caos total. Aunque las exportaciones bolivianas habían aumentado de 200 millones al principio del régimen de Banzer a más de 700 millones para el final, y la inversión gubernamental en proyectos de desarrollo había llegado a un extraordinario 48% del presupuesto nacional, el grueso de estos fondos se había malgastado. Sobre todo, las tres agencias autónomas principales, la YPFB, la Comibol y la Enafe (la Empresa Nacional de Fundiciones), tenían capacidades exageradas y nuevas exploraciones subfinanciadas. La consecuencia fue un desastre económico; la producción estaba a la baja en todos lados y la deuda pública generada por estas compañías era asombrosa; financiar la deuda de este sector público requería un extraordinario 30% de las entradas del comercio internacional para 1980. Por último, tenemos la caída internacional de los precios de las exportaciones primarias. Mientras que los primeros años de la década las tasas de crecimiento alcanzaron un alto 6% anual, para 1977-1978 no hubo crecimiento alguno. Comenzando en 1978, el producto interno bruto (PIB) de hecho descendió, y al año siguiente hubo un decrecimiento, la primera vez que sucedía desde finales de los años cincuenta. Esta crisis en la producción nacional continuó de manera ininterrumpida hasta el inicio de la década siguiente, con el peor descenso anual (de 6.6%) entre 1982 y 1983. Bolivia entraba en una de sus depresiones más desgastantes de la historia, crisis que se prolongaría hasta la década de 1990. En el contexto de esta crisis política y económica, los regímenes militares violentos y explotadores se volvieron un anacronismo que el país no

podía tolerar. Tampoco podía un ejército violento, por más represivo que fuera, controlar a una sociedad tan movilizada.

9. LA CREACIÓN DE UNA DEMOCRACIA MULTIÉTNICA, 1982-2002

La renuncia forzada de la última junta militar en septiembre de 1982 y la decisión de retirar al Congreso elegido en 1980, finalmente llevaron al término de la época de regímenes militares autoritarios. En octubre de 1982 el Congreso, reconstituido de inmediato, eligió a Hernán Siles Zuazo para la presidencia: el sistema político democrático revivió de golpe. A la izquierda se encontraba Siles Zuazo, líder del ala progresista reconstituida del MNR, aliado de los líderes obreros tradicionales de la COB y de nuevos líderes campesinos, varios partidos de la izquierda y el importante grupo del MIR de intelectuales radicales encabezados por Jaime Paz Zamora, quien fuera su vicepresidente. A la derecha y al centro estaban los partidos que habían participado en las elecciones de 1979 y 1980 y que ahora eran fuerzas políticas bien desarrolladas, que dominarían el escenario político nacional a lo largo de la década siguiente. Al centro estaba el histórico MNR encabezado por Víctor Paz Estenssoro, que incorporaba tanto a las viejas alas central y de derecha del partido como a un grupo de líderes indígenas más viejos, quienes, aunque se habían vuelto independientes del MNR, aún daban un fuerte respaldo a Paz Estenssoro. Por último estaba la ADN (Acción Democrática Nacionalista), partido fundado por Banzer al final de su gobierno militar, y que posteriormente, en abril de 1979, amplió para incluir elementos de la vieja Falange, así como al PIR reconstituido. Para sorpresa de muchos, este partido tenía más fuerza de la esperada, y no sólo legitimaba a Hugo Banzer como un poderoso líder civil, sino que también obtuvo el apoyo de las nuevas élites económicas, como son los empresarios privados de la minería mediana y de la industria agroexportadora de Santa Cruz, así como de los muchos

tecnócratas, altamente capacitados, que habían surgido en los 25 años posteriores a la Revolución Nacional. Banzer logró distanciarse de las juntas militares del periodo 1979-1982 y apoyó los procesos democráticos de manera consistente, volviéndose con ello un pilar del sistema político civil. El interregno militar había retrasado la aparición de un liderazgo político civil más joven, por lo que ofrecía una última oportunidad de gobierno a los viejos líderes del periodo de la Revolución Nacional. Mientras que el liderazgo de la primera parte de la década de 1980 había nacido en los años de 1950, para la segunda parte de la década un nuevo circulo de políticos jóvenes comenzó a ocupar la escena política nacional.

Con una determinación sorprendente, Siles tomó medidas para desmantelar el feroz aparato paramilitar que las últimas juntas militares habían erigido con la ayuda de oficiales argentinos y fascistas extranjeros. En una veloz sucesión, el líder de la Gestapo, Klaus Barbie, fue deportado a Francia y el terrorista Pier Luigi Pagliari fue entregado al gobierno italiano. Se expulsó a los oficiales y paramilitares argentinos y el gobierno rápidamente estructuró la eliminación de los líderes más autoritarios del ejército. Así, las reacciones iniciales hacia el gobierno en los ámbitos nacional y mundial fueron muy entusiastas.

Pero la economía que el régimen de Siles Zuazo heredó estaba en ruinas, y la situación sólo empeoraría a lo largo del resto de la década. Aunque fue un hábil líder opositor, con una proba reputación, Siles era un administrador incompetente y un débil negociador político. A pocos meses de su elección, desequilibró al MIR y a sus demás seguidores importantes por su incapacidad para controlar una economía con graves fallas. La combinación de estos factores arruinaría la credibilidad de su régimen, aunque no destruiría la legitimidad del régimen civil.

El final de la inflación ocasionada por la OPEP al terminar la década de 1970, y el declive de la producción minera y petrolera se combinaron con la mala administración estatal del periodo de la junta para crear un sector público en bancarrota y una economía privada en extremo deprimida. Entre 1980 y 1984 el valor de la producción agrícola descendió 11%; el valor de las exportaciones, 25%, y entre 1981 y 1984, el PIB per cápita, medido en dólares

estadounidenses de la época, descendió 1% anual. La propia producción agrícola se afectó severamente debido a una grave sequía en 1983. La deuda externa adquirida en los días de altos precios mundiales para el mineral y bajos intereses alcanzó unos $3 000 millones para 1983, cifra que, aunque resultaba baja para los estándares latinoamericanos, era alta para Bolivia. Esta cantidad representaba 80% del PIB total, y en 1984, el servicio de esta deuda equivalía a 36% del valor de todos los productos de exportación. De manera incluso más significativa, la producción de estaño entró en una severa y permanente caída. Aunque la producción anual aún promediaba por encima de las 30 000 toneladas métricas en los años setenta, y por encima de las 20 000 durante los primeros cuatro años de la década, en 1984 cayó por debajo de las 20 000 y siguió descendiendo, para nunca volver a alcanzar dicho nivel. Brasil se volvió el mayor productor de estaño de América Latina en 1983, y a partir de entonces Bolivia ha dado cuenta de menos de 10% de la producción mundial. En 1986, empresarios mineros privados agrupados en cooperativas —minería chica y minería mediana— superaron la producción de Comibol por primera vez. Se puede decir que la era del estaño en la historia de Bolivia terminó de manera oficial en la segunda mitad de los años ochenta, y para 1990 el zinc se había vuelto la exportación minera de mayor valor del país.

Aunque la demanda internacional de cocaína comenzaría a generar un importante nuevo mercado para los artículos bolivianos, este producto de exportación muy rentable no podía compensar el descenso general de la economía minera y la desaparición de los préstamos del exterior. Al mismo tiempo, el gobierno fue incapaz de controlar los costos, a pesar de la baja en las entradas estatales. La solución inevitable para el gobierno de Siles fue imprimir más dinero. Entre 1980 y 1984, la existencia total de circulante aumentó en más de 1 000%. Los precios se afectaron de inmediato, y para mayo de 1984 Bolivia oficialmente entraba en una hiperinflación, con tasas de incremento de precios de más de 50% al mes. Mientras que el crecimiento en la década de 1970 había promediado 4.7% al año, y la inflación sólo 15.9% en la década de los ochenta, el crecimiento descendía en un promedio de 2.3%. La inflación alcanzó tres dígitos en 1983, y un increíble 2 177%

anual en 1984. Durante los primeros seis meses de 1985 se elevó a 8 170% en una base anual. Esto conllevó, a su vez, la caída del valor real de las recaudaciones tributarias y la necesidad de incrementar la oferta monetaria para cubrir gastos.

En este contexto de total crisis fiscal, era inevitable que Siles Zuazo pronto se encontrara con poco apoyo popular y con la deserción de la mayor parte de sus aliados políticos en el gobierno. En enero de 1983, Paz Zamora renunció a la vicepresidencia y el MIR se retiró del gobierno. Siles también perdió el apoyo de Lechín, de la COB, y de muchos de sus viejos aliados del MNR. Pese a una huelga de hambre autoimpuesta (en recuerdo de su exitosa táctica de 1957) e incluso de un secuestro temporal a manos del ejército, frenado por una masiva oposición civil, Siles fue incapaz de gobernar de manera efectiva o de aprobar cualquier política de estabilización seria. Dado este *impasse*, Siles quedó persuadido de que debía abandonar pronto la presidencia, sobre la base de que su mandato en realidad databa de 1980. Así, estuvo de acuerdo en convocar a elecciones presidenciales en julio de 1985.

Las elecciones de 1985 abrieron una oportunidad para los viejos partidos, en particular para que el llamado MNR histórico y la ADN establecieran su presencia como entidades poderosas. Pero también otorgó a muchos de los nuevos grupos que habían sido parte de las alianzas democrática y de izquierda, que habían dado respaldo a Siles, la oportunidad de surgir como grupos independientes. Del lado de la izquierda bien establecida, el MIR de Paz Zamora y el Partido Socialista-I de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundado en la década de 1970, aparecieron como los dos partidos de mayor importancia. Aún más significativo, en términos de sucesos futuros, sin embargo, fue el surgimiento del Movimiento Revolucionario Túpac Katari, que representaba un partido directamente pro derechos indígenas y obtendría 2% del voto popular. Se había alienado al liderazgo indígena, gracias a la COB, durante muchos años, y la gente de la izquierda lo asociaba con la alianza militar-campesina, pero en los hechos se había desarrollado un nuevo liderazgo indígena autónomo. Incluso para finales de la década de 1960 surgieron líderes más jóvenes entre los sindicatos rurales tradicionales, en especial entre los aymaras, antes más callados. El bloqueo de Cochabamba de

1974 y la subsecuente masacre campesina a manos del ejército habían dado ímpetu a aquellos nuevos hombres. En 1976 se organizó el movimiento Túpac Katari entre líderes campesinos de la región de La Paz. Para finales de los años setenta, el movimiento se adueñó de la mayor parte de los sindicatos campesinos gubernamentales oficiales y organizó su propia CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia). Para 1981 los kataristas habían tomado el control de los sindicatos campesinos aymaras y obtuvieron representación en la COB. En aquel año la COB designó por primera vez a un líder campesino e integrante de este movimiento, Jenaro Flores, como su líder. Este cambio en la COB fue permanente, ya que los líderes campesinos, trabajadores gubernamentales y sindicalistas urbanos ahora remplazaban a los antes todopoderosos trabajadores mineros como grupo clave en la confederación nacional de obreros. Los nuevos líderes indígenas exigían cambios en aquello que percibían como un trato desigual de parte del Estado en términos de los precios agrícolas, las medidas para otorgar crédito, la educación, la salud e incluso en cuanto al respeto por sus culturas tradicionales. Propusieron una serie de cambios en relación con la naturaleza de la identidad boliviana y el papel de los pueblos indígenas en la sociedad moderna, y pusieron énfasis en problemas étnicos tanto como en los de clase. Aunque pronto aparecieron organizaciones rivales para contender por el derecho a expresar este nuevo poder político de los grupos indígenas campesinos y mestizos urbanos antes subordinados, este nuevo movimiento indígena adquirió cada vez mayor poder e independencia durante los años siguientes. Finalmente encontraría su expresión más coherente y poderosa en un nuevo partido político de masas que surgiría a finales de la década de 1990. Esta mayoría indígena, de reciente movilización, destruiría finalmente el sistema tradicional de partidos durante la primera década del siglo siguiente.

Al inicio parecía que los partidos tradicionales habían logrado aprovechar este nuevo movimiento político y dirigirlo desde arriba mediante líderes clásicos de la élite política, no indígenas o mestizos. Desde principios de los años ochenta surgió un complejo sistema político en el que no dominaba ningún partido. En cada elección, desde 1985 y en adelante, el electorado por

lo general se dividía en tres agrupamientos burdos de izquierda, centro y derecha, donde cada alineación política se componía de un grupo de partidos. Para resolver este *impasse* se llevaba a cabo una segunda vuelta para votar por la presidencia, aunque en este caso fue encabezada por el Congreso recientemente elegido. En ninguna elección después del último régimen de Siles el candidato presidencial obtuvo mayoría en las urnas antes de 2005. Así, cada elección presidencial implicaba negociaciones postelectorales complejas, por lo general entre el MNR, el MIR y la ADN. Este sistema otorgaba gran poder a los pequeños partidos y a los grupos que surgían de éstos, muchos de los cuales se unían al partido que tomaba la presidencia, en arreglos de coalición. Estas elecciones fragmentadas también forzaban a que todos los partidos respondieran a las poblaciones indígena y mestiza, que representaban la mayor parte de los votantes. No obstante ser pobres y que entre ellos había una proporción significativa de analfabetos, estos campesinos tendían a votar en grandes cantidades gracias a su movilización política y a sus poderosos sindicatos y organizaciones comunitarias. Esto también produjo nuevos líderes políticos de habla aymara y quechua que se organizaron en partidos, ya fuera populistas o directamente étnicos, con la intención de movilizar el voto.

Las elecciones de 1985 definieron claramente el nuevo sistema electoral que quedara *in situ* después del intervalo militar. Alrededor de 1.4 millones de votantes acudieron a las urnas y dieron a Hugo Banzer una victoria por mayoría relativa. Pero el nuevo Congreso tenía mayoría de los partidos de centro-izquierda, y eligieron a Víctor Paz Estenssoro, ya de 77 años edad, para su cuarto periodo presidencial. En tanto que su administración anterior, de principios de 1960, echó los cimientos para una alianza militar-campesina, y parecía haber participado en el golpe militar de principios de 1980, Paz Estenssoro continuó siendo una figura poderosa entre las masas campesinas que asociaban su nombre con la Reforma Agraria de 1953, la cual aún contaba con gran apoyo. Para sorpresa tanto de amigos como de enemigos, esta al parecer reliquia de una época pasada demostró ser el político civil más dinámico y capaz que gobernara durante las últimas décadas del siglo XX. Al abandonar las posturas tradicionales, aceptar reformas radicales y

comportarse de manera implacable y veloz en sus respuestas políticas, pronto dominó la vida nacional de un modo que recordaba su primer mandato presidencial. Sin duda su acto más importante fue su llamado Nuevo Plan Económico, de mediados de 1985. Al adoptar muchas de las propuestas de la ADN, e incluso acordar un pacto informal con ellos, Paz Estenssoro impuso un programa económico que fue tanto tradicional en su estructura como inusual en su contexto.

Mientras que los gobiernos contemporáneos en Argentina y Brasil, ante los mismos problemas de una inflación desmedida y una crisis de deuda internacional, aún aplicaban aquello que sus economistas llamarían un "shock heterodoxo", Paz Estenssoro viró hacia un tradicional "shock ortodoxo". Esto implicó una devaluación de la moneda, liberación de precios y del tipo de cambio respecto al control gubernamental, y una severa reducción de los gastos gubernamentales. Se trató en muchos sentidos de un clásico ejemplo del grupo de políticas luego conocidas como del Consenso de Washington.

Para sorpresa de todos, Paz Estenssoro adoptó los principios del liberalismo económico y rechazó las ideologías económicas nacionalistas y de capitalismo de Estado, para cuya instrumentación él había sido fundamental. Las razones de este rechazo eran dobles; en primer lugar estaba el impacto de la hiperinflación por segunda vez en la historia moderna de Bolivia, crisis que envió a la economía nacional a una grave caída, y en segundo, se encontraba en colapso total el costoso sistema minero del Estado, que se había construido sobre la base de una industria estannífera que ahora menguaba rápidamente. El que estos dos eventos irreducibles ocurrieran en una sociedad más desarrollada y compleja que la que heredó Paz Estenssoro unos 30 años antes, llevó a creer que debía adoptarse una solución radical. Con la ayuda de asesores estadounidenses, en cuestión de unos cuantos meses Paz Estenssoro llevó a cabo un clásico shock de ortodoxia económica que seguía al pie de la letra el modelo de una política económica conservadora.

Por lo estipulado en el Decreto 21060 del 29 de agosto de 1985, se devaluó la moneda nacional, se estableció un tipo de cambio uniforme y de libre flotación, se eliminaron todos los controles sobre precios y salarios, se elevaron los precios del sector público de manera sustancial, se restringieron

severamente los gastos gubernamentales, y se redujeron los salarios reales de los empleados del gobierno. También se frenaron temporalmente los pagos de la deuda exterior boliviana, la única acción heterodoxa del programa. Con los precios a la alza y un freno en las inversiones, la economía entró en una grave recesión. El intento de llevar a cabo una huelga general se sosegó mediante un estado de sitio, y la popularidad general del final de la hiperinflación otorgó a Paz Estenssoro el apoyo que requería para forzar los cambios que la reforma implicaba. Junto con el shock fiscal llegaron importantes reformas al sistema de impuestos, referido a muchas de las recomendaciones del grupo asesor fiscal conocido como la Comisión Musgrave de los años setenta. Pronto se impuso un impuesto al valor agregado y las arcas del Estado comenzaron a acumular, una vez más, fondos excedentes.

Paz Estenssoro prosiguió con el ataque a la burocracia estatal. Con el remplazo del estaño por gas como principal producto de exportación, y con la producción cada vez menor de estaño de alto costo, el propósito mismo de la Comibol tenía poco sentido. Paz Estenssoro, que en principio había fundado esta alguna vez poderosa institución, comenzó a desmantelarla. La reforma de la Comibol también implicó la mutilación de sus sindicatos obreros: entre 1985 y 1986, Comibol pasó de 27 000 trabajadores a sólo 7 500. Incluso la YPFB fue forzada a despedir a 4 000 trabajadores, para quedar con una fuerza laboral de 5 000 personas en el mismo periodo. Todos estos cambios llevaron a que el poder de la FSTMB y de la fuerza de trabajo en general declinara enormemente; esta organización ya no pudo desempeñar los enérgicos papeles político y económico que había asumido en la sociedad boliviana desde la década de 1950. Un indicador de estos cambios fue el retiro de Juan Lechín como cabeza de la FSTMB en 1986, y su retiro del poder en la COB al año siguiente. Por primera vez desde 1944, uno de los tres grandes líderes del MNR no ocupaba cargo alguno en el movimiento de la mano de obra organizada. Los líderes trotskistas tomaron la muy debilitada FSTMB. Al mismo tiempo la CSUTCB, encabezada por Jenaro Flores, se volvió el grupo de mayor importancia en la COB.

La continua crisis del mercado mundial del estaño ayudó enormemente a Paz Estenssoro en este momento crucial. En octubre de 1985, el Consejo

Internacional del Estaño, una organización respaldada por 32 naciones que compraban estaño con el fin de apoyar los precios, se fue a la bancarrota y el mercado internacional del estaño colapsó. Durante casi medio año no se comerció con estaño en el mercado londinense de los minerales, e incluso el primer productor mundial de este producto, Malasia, se vio forzado a cerrar cien minas y despedir a 4 000 trabajadores. Para los estándares mundiales Bolivia era uno de los productores de estaño de más alto costo, y sus depósitos eran los de menor contenido metálico. Dados estos altos costos de extracción y las ineficiencias de las refinerías bolivianas, que finalmente habían entrado a la producción al principio de los años setenta, el estaño refinado boliviano —al igual que el mineral no procesado— no encontraba mercado. Huelgas de hambre, huelgas generales, bloqueos carreteros y otras manifestaciones lograron poco apoyo para los mineros de otros sectores de la sociedad. Cuando Paz Estenssoro terminó con las manifestaciones y encarceló a sus líderes, hubo poca oposición seria.

Pero los éxitos políticos y fiscales de la llamada nueva política económica se alcanzaron en el corto plazo, al costo del crecimiento económico, y conllevaron una crisis social acrecentada. El desempleo se elevó a más de 20%, y los centros mineros tradicionales de Oruro y Potosí entraron en un grave declive económico. La ayuda estadounidense fue fundamental para aliviar los peores aspectos del plan de austeridad gubernamental, pero fue el aumento de una economía paralela e ilegal en torno a la coca lo que proveyó a Bolivia de recursos cruciales para aminorar el impacto social de este duro tratamiento de choque. Así la hoja de coca, oriunda de Bolivia y un cultivo de gran relevancia local producida en los valles de los yungas del departamento de La Paz desde épocas precolombinas, surgió lentamente como un importante producto de exportación en la década de 1970, con la creciente demanda mundial de cocaína —su derivado principal— y con la apertura de nuevas tierras productoras de coca en las tierras bajas tropicales de oriente.

La construcción de los primeros caminos modernos en los años cincuenta, hacia la ladera amazónica del Chapare, un distrito tropical de tierras bajas en el extremo oriental de la provincia de Cochabamba, llevó a gran cantidad de migrantes del altiplano a estos terrenos poco desarrollados, y la coca fue uno

de los cultivos tradicionales que produjeron. Con un contenido más alto de alcaloides que la hoja producida en los yungas, el producto del Chapare no tenía gran acogida para el consumo local entre las poblaciones indígenas andinas, por lo que, al inicio, los migrantes de Cochabamba que cultivaban el área no se volvieron grandes productores de coca, aunque la hoja del Chapare resultaba ideal para la producción de cocaína. Las cambiantes modas en el consumo de drogas entre las poblaciones de las economías avanzadas del mundo, y sobre todo las de los Estados Unidos, se orientaron hacia la cocaína como la droga más popular en la década de 1970. Esto fue una bendición para los productores bolivianos, que daban cuenta de más de una tercera parte de la producción mundial. Ya que la hoja del Chapare se apreciaba más en los mercados internacionales que en el nacional, y que se cultivaba lejos de los centros urbanos tradicionales, la región de Chapare se volvió el centro dominante de producción de hojas de coca para exportaciones ilegales de cocaína desde mediados de 1970. La coca no sólo era nativa de la región y un producto de mano de obra muy intensiva, sino que se producía principalmente en pequeñas unidades agrícolas, para las que se estimaba que dos terceras partes de la producción provenían de parcelas de seis hectáreas o menos. Estas parcelas propiedad de campesinos se agrupaban en colonias y se organizaban en grandes "sindicatos", que eran una voz eficaz para los pequeños propietarios. De este modo, por primera vez en la historia moderna de Bolivia un producto primario de exportación caía bajo el dominio de pequeños productores campesinos. Dada la naturaleza de trabajo intensivo del cultivo y el poderoso movimiento sindical campesino, los comerciantes internacionales estuvieron conformes con dejar el cultivo de la hoja en manos de pequeños productores, y se dedicaron sólo a procesar y comerciar su cosecha. Aunque los comerciantes bolivianos producían base de cocaína (o pasta) para mediados de la década de 1980, la cristalización final y la comercialización del producto en el mercado mundial permaneció en manos de intermediarios colombianos. El Chapare, vecina región del Beni, y las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, se volvieron los centros de este nuevo comercio de exportación, en tanto los yungas continuaron la

producción de hoja de coca para sus mercados internos, de consumo tradicional.

En tanto que obviamente hubo problemas para calcular el grado de importancia de esta economía clandestina, que formaba parte del llamado mercado informal o no registrado, es evidente que, incluso en los cálculos más conservadores, las exportaciones de coca eran tan importantes, si no es que más, como las exportaciones legales para mediados de 1980. La producción física siguió al aumento en las exportaciones. Mientras que sólo 12 000 hectáreas se dedicaron a la producción de la hoja de coca en 1976, para 1985 el área de cultivo había aumentado a más de 66 000 hectáreas. La producción en este mismo periodo pasó de un poco menos de 15 000 toneladas a aproximadamente 153 000, de las que sólo la región de Chapare produjo más de 100 000 toneladas en 1986, en unas 40 000 a 45 000 hectáreas. Para este momento se calculó de manera conservadora que 250 000 campesinos cultivaban la planta. Sin duda, la hoja de coca se volvió, durante un tiempo, el producto agrícola más importante para la nación, aunque, incluso en el Chapare, los campesinos también cultivaban alimentos.

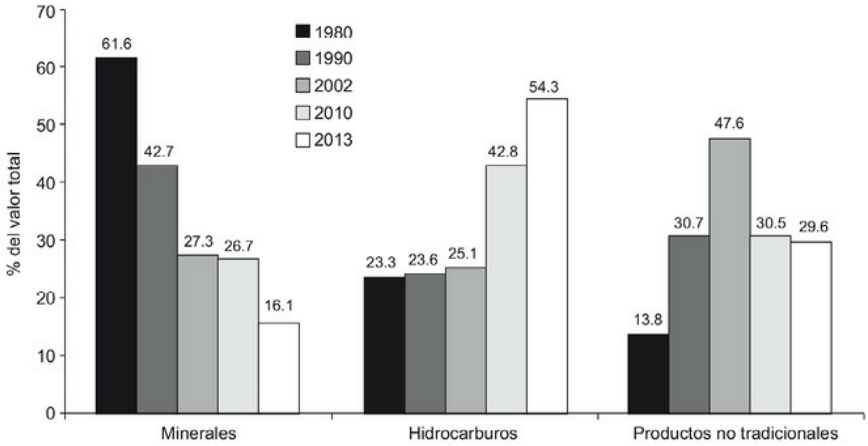
Pero las exportaciones de cocaína boliviana comenzaron a enfrentar controles internacionales cada vez más estrictos, y una presión cada vez mayor de los Estados Unidos, que remplazó la Guerra Fría con la guerra contra las drogas, lo que convirtió el tema en un aspecto fundamental de la relación entre ambos países desde los años ochenta hasta la actualidad. Igualmente importante, sin embargo, fue la competencia de otros productores. La producción no sólo se expandió al vecino Perú, sino que en Colombia se empezó a producir hoja de coca por primera vez. Para principios de la década de 1990, una combinación de precios bajos, una competencia en aumento y los esfuerzos de control internacionales habían reducido en gran medida la importancia de la producción boliviana. Hacia 1992 los plantíos de coca boliviana se habían reducido a 40 000 hectáreas, mientras Perú utilizaba 113 000 y los campesinos colombianos 89 000. Para 1999 sólo 14 000 hectáreas generaban 70 toneladas métricas de cocaína, en comparación con las de 300 a 400 que se producían en Colombia y las 175 a 240 en Perú. Dada la caída de los precios y de la producción, los envíos de cocaína ya no eran

elemento dominante en las exportaciones nacionales. A finales de la década de 1990, la intervención gubernamental también dio por resultado una importante reducción en las exportaciones ilegales de cocaína.

En la década de 1980, no cabía duda de que la pasta de coca y las exportaciones de cocaína eran en extremo importantes para la economía boliviana, y el gobierno hizo todo lo posible por alentar la reinversión de estas ganancias clandestinas en la economía nacional, ganancias que otorgaron a Bolivia una fuente relevante de crecimiento económico en los años ochenta, especialmente porque los nuevos sectores de crecimiento, como el gas natural y la agricultura comercial, apenas comenzaban a adquirir relevancia. Aunque la economía comenzó a crecer de nuevo en los años noventa, las tasas de crecimiento aún eran relativamente bajas. No obstante, para la última década del siglo XX hubo una profunda reorganización de la economía nacional, que tuvo mucho que ver con las políticas e inversiones gubernamentales. Las dos nuevas áreas de crecimiento que con el tiempo llegaron a dominar las exportaciones fueron el gas natural, desarrollado por la YPFB en conjunto con compañías privadas y extranjeras propiedad de gobiernos, y la exportación de cultivos comerciales, en especial de soya. A la construcción, en 1972, de un gasoducto para gas natural de Santa Cruz a la frontera argentina, le siguió, en su momento, la construcción conjunta de un ducto similar por la YPFB y Petrobras, compañía brasileña, desde los campos de Santa Cruz hasta la metrópolis industrial de São Paulo. El nuevo gasoducto, terminado en 1999, creó una salida para el gas boliviano, y estas exportaciones a Brasil rápidamente superaron las exportaciones del mismo producto a Argentina, con un volumen total que se elevó de cerca de 100 000 millones de pies cúbicos a finales de 1990, a más de 500 000 millones en 2008. Si los dos siglos previos se conocieron, en Bolivia como de la plata y el estaño, el siglo actual bien podría etiquetarse del gas natural. Para 2008 era evidente que había sucedido una transformación relevante en la mezcla de productos que Bolivia exportaba, con un drástico descenso de los minerales tradicionales y su remplazo por hidrocarburos, principalmente gas natural. También hubo un incremento importante en las exportaciones no

tradicionales, tales como la soya y otros cultivos comerciales (véase la gráfica 9.1).

Gráfica 9.1. Cambios proporcionales del valor de las exportaciones bolivianas, 1980-2013



Fuente: Humérez & Dorador, "Una aproximación... del crecimiento económico en Bolivia, 1960-2004," pp. 8-9; e INE cuadro 5010102, en <http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=50101>.

Aunque Santa Cruz se había vuelto, como nunca antes, el área de agricultura comercial más importante, compuesta por grandes unidades de producción ya a finales de los años cincuenta, fue la expansión de la frontera occidental brasileña de la soya, a finales de la década de 1990, la que volvió a la región de Santa Cruz un destacado exportador internacional de productos agrícolas. El frijol de soya se volvió recientemente una de las exportaciones más valiosa de Bolivia, con 5% del valor de todas las exportaciones en 2008. La soya, junto con el azúcar, las semillas de girasol y las maderas tropicales, conformaban una décima parte del total de exportaciones. Lo que resulta impresionante en torno a estos productos agrícolas es que la eficiencia de la producción boliviana está casi a la par de los productores brasileños de soya, hasta hoy de los más productivos del mundo. Desafortunadamente se ha hecho poca inversión, ya sea por el Estado o por inversionistas privados, en las regiones del altiplano productoras tradicionales de alimento y así, quienes cultivaron papa en los altos cosecharon por hectárea sólo 12% de lo que obtuvieron en 2008 los productores de papa en sus tierras de cultivo. La construcción de carreteras y los créditos agrícolas provistos por el gobierno de La Paz a partir de mediados de los años cincuenta, junto con los fondos

generados por la exportación ilegal de cocaína, finalmente crearon un sector agrícola moderno en Bolivia, pero han tenido sólo un efecto menor sobre la productividad de los campesinos tradicionales.

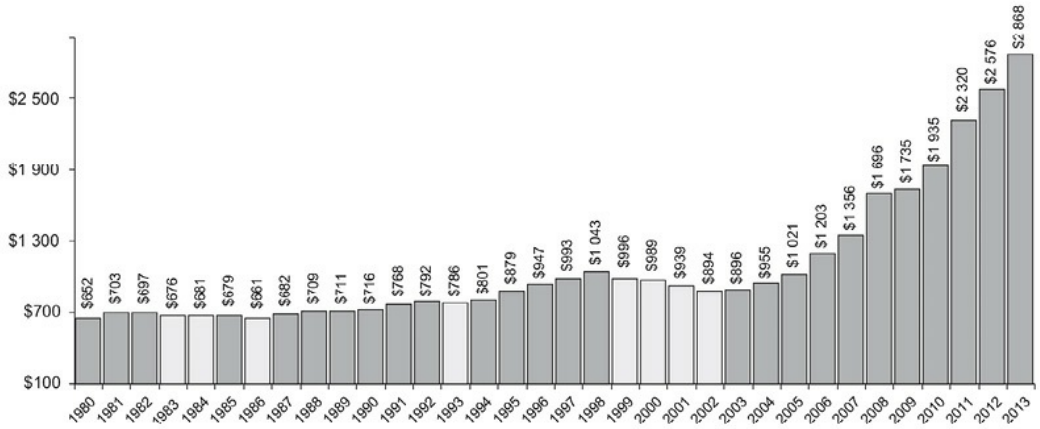
Incluso la zona tradicional de exportación de minerales ha tenido modificaciones elementales. El zinc se ha vuelto el mineral tradicional de mayor importancia y tuvo el doble de valor como producto de exportación en el año 2000 que el estaño, a pesar de que Bolivia aún sigue siendo un productor menor de dicho metal. Incluso las exportaciones de plata son más valiosas que las de aquel producto, alguna vez vigoroso. No obstante, Bolivia sigue teniendo reservas importantes de estaño, cuya producción, aunque menor que la de Perú y la de Brasil, se ha mantenido de manera estable entre 10 000 y 20 000 toneladas durante las últimas dos décadas.

Bolivia incluso ha exportado cantidades menores de estaño refinado proveniente de sus refinerías subutilizadas. Aunque los minerales tradicionales siguen perdiendo importancia como productos de exportación, el rápido aumento de exportaciones de gas natural ha implicado que la abrumadora mayoría de las exportaciones bolivianas aún se integren por recursos no renovables. La producción de gas natural se desarrolló con lentitud, para finalmente volverse el principal producto de exportación en Bolivia en 2001, y creció de manera tan veloz que para 2013 tan sólo el gas ascendía a 54% del valor de todas las exportaciones, el zinc 6%, la plata 7% y el estaño menos de 1%. También ha habido un crecimiento estable de las exportaciones renovables y no tradicionales, desde maderas y nueces de la India hasta café, azúcar, algodón, frijol de soya y aceite de girasol. El frijol de soya y los aceites vegetales aportaban 9% del valor de las exportaciones para el 2013. El crecimiento de estas nuevas industrias, que alcanzaron su producción total en la década de 1990 y la primera del siglo XXI, significó que la economía de Bolivia comenzaba a expandirse a tasas no vistas desde la década de 1960, hasta alcanzar un crecimiento por encima de las tasas generales para América Latina en los años noventa, y una vez más durante la primera década del nuevo siglo.

No obstante el rápido crecimiento de las exportaciones, que se ha más que duplicado en sólo algunos años de la década de 2000, Bolivia aún se

mantenía al final de la lista de los países latinoamericanos en cuanto al valor total de sus exportaciones de bienes y servicios en 2012, sólo un poco por arriba de Haití y Nicaragua. Así, pese al aumento de nuevas fuentes de riqueza, como gas y frijol de soya, Bolivia sigue siendo un país pobre. A pesar de que el ingreso per cápita ha aumentado en precios constantes, de 716 dólares en el año 1990 a 2 868 dólares en 2013 (véase la gráfica 9.2), Bolivia aún permanece como el segundo país más pobre de América Latina, justo antes de Haití, y aún recibe grandes cantidades de ayuda extranjera, aunque ésta ha venido disminuyendo con el tiempo. Incluso para 1999, 30% del ingreso del gobierno central provenía de ayuda extranjera, pero este porcentaje bajó 3% en el presupuesto de 2010, gracias a un ingreso fiscal en aumento, al crecimiento de los ingresos por regalías y a las remesas de los migrantes.

Gráfica 9.2. PIB per cápita en USD corrientes, 1980-2012
(se marcan los años en que hay descenso)



Fuente: UN Data, en <athttp://data.un.org/Data.aspx?d=SNAAMA&f=grID%3ausd%3BpcFlag%3a1>; Banco Mundial para el año 2013, en <athttp://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx>.

Del mismo modo que continúa evolucionando la estructura económica de Bolivia, también la estructura política de Bolivia se ha modificado en los últimos 20 años. Sin duda el establecimiento de un sistema multipartidista, el surgimiento de un legislativo poderoso, la creciente importancia de la política municipal y regional, y el uso de pactos multipartidistas para gobernar el país se habían vuelto nuevos elementos en la evolución política de Bolivia. La lucha por los derechos civiles fundamentales al final del interregno militar

había debilitado a la izquierda revolucionaria, así como a la extrema derecha, dentro de la política nacional. Asimismo, la base de la izquierda radical se ha transformado con el descenso tanto de la vieja federación laborista como del sindicato minero, y con el surgimiento de nuevas organizaciones campesinas. En 1971 los kataristas, con su programa de derechos aymaras, se volvieron aún más poderosos en los sindicatos locales del altiplano, para luego dominar la nueva y poderosa confederación campesina, la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), fundada en 1979. Pronto la CSUTCB tuvo una participación significativa en la COB, y con el tiempo ocuparía su liderazgo y reorientaría sus demandas lejos de preocupaciones de clase exclusivamente, para centrarse en problemáticas tanto étnicas como de clase. Aunque algunos sindicatos permanecieron con la izquierda radical, de manera especial la POR trotskista, que controlaba la confederación de maestros de primaria, la mayoría adoptó posturas más moderadas.

A su vez, la incapacidad de cualquiera de los tres partidos más grandes —el viejo MNR, la ADN de Banzer y el nuevo MIR— para obtener una mayoría absoluta, ya fuera en el Congreso o en las elecciones presidenciales, forzó a los partidos a negociar pactos multipartidistas para poder gobernar, lo que condujo a la transición entre gobiernos más ordenada en la historia de la nación. El establecimiento de un tribunal electoral con poder significativo también llevó a la era electoral más libre de fraudes de la historia democrática boliviana. Todos estos cambios crearon un clima de consenso y negociación política entre los partidos en contienda, algo nuevo en el escenario político. Al mismo tiempo, los regímenes postmilitares debatieron para por último implantar algunos de los cambios más importantes en las instituciones gubernamentales desde la fundación de la república.

Muchos de estos cambios comenzaron con el régimen de Siles y continuaron durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro. El último régimen de Paz Estenssoro también fue importante porque dio lugar a una nueva generación de líderes políticos. El más importante de estos jóvenes líderes fue Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los nuevos mineros medianos, educado en los Estados Unidos, que surgiría en el periodo

posterior a 1952. Con el tiempo obtuvo el liderazgo del Senado, para luego ocupar el cargo de ministro de Planeación y encabezar el equipo económico gubernamental; Sánchez de Lozada fue un formidable opositor de la vieja camarilla de Paz Estenssoro, profundamente involucrada con el sangriento régimen de Natusch Busch, de 1980-1981.

Paz Estenssoro trabajó muy de cerca con su exrival Hugo Banzer y su partido ADN para aprobar su plan económico. Con los dos partidos líderes en el Congreso era fácil para el gobierno del MNR controlar tanto la aprobación de la legislación como al ejército y a otras fuerzas del Estado de las que se dependía para controlar la protesta obrera. Pero el costo fue alto para su propio partido. Aunque Sánchez de Lozada finalmente tomó el control del MNR histórico y participó como su candidato presidencial en las elecciones de mayo de 1989, en ese momento se enfrentaba a una poderosa oposición dirigida por Hugo Banzer y la creciente fuerza del MIR, que se había mantenido distante de los ataques más agresivos contra la fuerza de trabajo del régimen del MNR.

La elección de 1989 marcó el paso de una generación completa de líderes políticos que habían dominado la vida nacional desde la década de 1940. Los candidatos presidenciales de los tres partidos eran, por vez primera, hombres que habían alcanzado prominencia política después de la revolución de 1952. Con Lechín fuera del movimiento laboral, Siles en desgracia y Paz Estenssoro demasiado viejo para volver a gobernar, sólo quedaba Banzer de la generación anterior, e incluso él había entrado a la escena política apenas a finales de la década de 1960. Aunque Banzer había ganado las elecciones de 1985 en términos de votación total, esta ocasión llegó en segundo lugar, después de Sánchez de Lozada. El gran ganador de las elecciones de 1989 fue el MIR, que se había llevado sólo 9% de los votos en 1985, pero que ahora contaba con 20% del total. Dada la fortaleza mostrada por el MIR, Banzer concedió la elección y pactó con este partido para designar a Jaime Paz Zamora presidente de la república. Mediante este acto, Banzer llevó al poder, por vez primera, a un integrante de la nueva izquierda post-revolucionaria.

Esta elección también mostró que se había establecido sólidamente una compleja división, tanto entre partidos como de preferencias políticas en la

nación. Las tendencias que se notaron en las elecciones de 1980 y 1985 estaban presentes en 1989, en el hecho de que tres partidos importantes dominaron el escenario político. Pero el potencial de cambio también se vio en el surgimiento de dos nuevos partidos populistas importantes, creados justo antes de la elección de 1989: el partido Condepa (Conciencia de la Patria), fundado en 1988 por Carlos Palenque, una personalidad de los medios de comunicación, con una base de amplio apoyo en La Paz y entre mestizos y hablantes de aymara del altiplano, y la UCD (Unión Cívica Solidaridad), creada en 1989 por el industrial cervecero Max Fernández, con amplio apoyo en Santa Cruz. A ambos partidos les fue bien en las elecciones, y más tarde se consideraría al Condepa el origen de la mayor parte de los partidos de masas de base indígena que surgirían en la primera década del siguiente siglo. Fue impresionante descubrir que los tres partidos más grandes —el MNR, la ADN y el MIR— recibieron cantidades significativas de votos de todas las clases y de todas partes del país. Esta elección también atestiguó el intento del movimiento katarista por entrar directamente a la política, y aunque les fue bien al Condepa y a la UCD, los kataristas reunieron sólo 23 000 votos. Los días de un Estado unipartidista, que jamás estuvo completo, ni siquiera en los primeros días de la Revolución Nacional de 1952, encabezada por el MNR, así como del voto en masa entre las poblaciones rurales, eran cosa del pasado. Aunque algunas comunidades aún podían votar en bloque, muchos campesinos en las regiones rurales empezaron a dividir sus votos entre diversos partidos, lo que implicaba que la vuelta a los días de la alianza campesino-militar ya no era posible.

Algo igualmente impresionante de la campaña de 1989 fue el hecho de que ninguno de los tres partidos principales enfrentó la nueva política económica de Paz Estenssoro ni el desmantelamiento del sistema de capitalismo de Estado, que en los hechos pudo haber sido uno de los factores, a largo plazo, que influiría en su declive. Hasta el MIR prometió respetar los programas de estabilidad económica y se rehusó a apoyar la reconstrucción de las viejas empresas estatales, aunque esto en efecto ocasionó que perdiera a su facción de extrema izquierda. Más bien, el esfuerzo se centraba en poner énfasis en los temas de crecimiento y desarrollo. El MIR aseguró no ser más radical,

cuando asumió el poder, que los viejos partidos, en especial porque trabajaban de manera cercana con el conservador partido ADN, de Banzer. Continuaron racionalizando la participación estatal en la industria estannífera y apoyaron la apertura de la economía al capital extranjero y privado. También retiraron el apoyo gubernamental de la COB y la FSTMB. Pero el MIR, pese a su abandono del movimiento sindical, al principio no perdió su base y siguió representando a parte de la izquierda. Aunque un partido fraccionado del MIR ganaría cierto terreno en los años noventa, el MIR en sí recuperó la mayor parte de su viejo apoyo, e incluso se volvió un partido significativo en El Alto, la clásica ciudad mestiza hasta mediados de la década de 2000.

Sin embargo, aunque el MIR tenía problemas de gobernanza cuando llegó al poder, se trató de un periodo de gran debate intelectual sobre la naturaleza del Estado y el orden social y económico tradicional. La viabilidad del presidencialismo, el centralismo y otras ideas previamente incuestionadas se pusieron a debate. El gobierno también tuvo éxito en la condena y encarcelamiento del dictador militar Luis García Meza, por su violento derrocamiento del gobierno civil en 1980 —uno de los pocos gobiernos democráticos que logró encarcelar a uno de los líderes de la era militar previa—. También se dio la primera manifestación nacional, debido a las condiciones de pobreza que experimentaban las poblaciones indígenas de oriente. En 1990, protagonizando una dramática marcha de La Paz al Beni, unos 800 hombres, mujeres y niños de 12 naciones indígenas de oriente exigieron protección para sus tierras contra la invasión y explotación de personas no indígenas. Por primera vez, la CSUTCB unió fuerzas con estos nuevos grupos indígenas que representaban a los chiquitanos, los guaraníes y otros pueblos antes ignorados. Al igual, la política municipal se volvió un centro de actividad más relevante, ya que muchas de las ciudades de la nación dejaron de estar en manos de los partidos nacionales para pasar a los de nueva creación. De este modo, el Condepa, bajo el liderazgo del “compadre” Palenque y de su segunda al mando, Remedios Loza, la llamada “comadre” Remedios, tomaron el gobierno de la ciudad de La Paz. Además, en 1989 Remedios Loza fue la primera “mujer de pollera” (mestiza con vestido

tradicional) elegida al Congreso, y encabezó este importante partido tras la muerte de Carlos Palenque en 1997.

La elección de 1993 llevó al MNR de vuelta al poder, con un sustancial 34% del voto para Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero el MNR debió apoyarse en los kataristas de la zona rural para poder ganar; le ofreció la vicepresidencia a uno de sus líderes, Víctor Hugo Cárdenas. Esta designación fue el reconocimiento de la élite a la nueva importancia de los mestizos y las poblaciones indígenas urbana y rural en la política nacional. La esposa del vicepresidente no sólo creó el hábito de vestirse con ropa tradicional indígena para los eventos políticos y sociales, sino que el nuevo gobierno reformó la Constitución de 1967 en 1994, al declarar en su artículo primero que: "Bolivia [no era sólo un] país libre, independiente y soberano", sino que también era "multiétnico y pluricultural"; se trató de la primera vez que esto se reconocía, de manera formal, en la historia republicana. También se aprobó un importante conjunto de leyes que igualmente reconocían la personalidad legal de las comunidades indígenas, además de la de las asociaciones y sindicatos campesinos. La Constitución revisada también garantizaba a ayllus y a comunidades sus derechos tradicionales de propiedad de la tierra, al estipular de manera inequívoca la existencia de las "propiedades comunitarias"; esto es, los derechos de propiedad comunal se otorgan a las comunidades más que a los individuos, e incluso se dieron garantías respecto a su derecho a usar la legislación tradicional local.

En apoyo a esta visión de reciente nacimiento de una nación multiétnica, el régimen de Sánchez de Lozada, 1993-1997, haría cambios fundamentales en la organización del Estado y la participación política. Con los decretos de la Ley de Participación Popular (1994) y la Ley de Descentralización (1995), el MNR intentó modificar la naturaleza centralista del Estado al otorgar mucha más autonomía política y económica a los municipios. Antes de la Ley, sólo habían existido un par de docenas de municipios, todos ellos ubicados en centros urbanos mayores y en capitales departamentales, pero el gobierno anunció la creación de 311 gobiernos municipales, cada uno con su propio alcalde y concejales, todos puestos de elección, y los estableció a lo largo del país; esto implicó que hubiera municipios tanto rurales como urbanos.

Mediante esta medida el gobierno aumentó la cantidad de funcionarios locales electos, de 262 antes de la promulgación de la Ley, a 2 900 después de ésta. Al mismo tiempo, estos nuevos regímenes locales debían ser supervisados por comités de vigilancia designados de manera legal, compuestos por organizaciones locales de base registradas. En los próximos tres años, el gobierno reconoció de manera formal 13 827 organizaciones territoriales, que iban desde comités vecinales, urbanos hasta sindicatos campesinos. Se suponía que estos comités debían supervisar al gobierno local y podían presentar impugnaciones formales por infracciones cometidas por funcionarios en el cargo.

Por último, estos gobiernos recién elegidos adquirieron además un poder económico considerable, esto es, los municipios ahora controlaban sus propios presupuestos, 20% de los ingresos estatales se les devolvían y el total del financiamiento que recibían se basaba en el tamaño de su población. El gobierno estableció organizaciones investigadoras para ayudar a los municipios y grandes cantidades de ayuda del extranjero fluyeron hacia este programa de descentralización. Los nuevos municipios también controlaban la educación local, hasta cierto punto, gracias a una Ley de Reforma Educativa promulgada en 1994, y tenían autoridad sobre el plan de estudios no centralizado, sobre los costos de infraestructura y sobre el abasto escolar.

Esta transformación política y administrativa fue tan profunda que se calculó que casi dos terceras partes de los 1 624 alcaldes y concejales elegidos en el cargo después de la promulgación de la Ley de Participación Popular eran campesinos o indígenas. La política nacional comenzó a cambiar conforme se forzó a los partidos principales a entrar a la política local como una importante medida. En elecciones municipales subsecuentes, se eligió a muchos líderes locales de partidos pequeños, a menudo radicales, lo que socavó a los viejos partidos nacionales. El hecho de que estos nuevos gobiernos municipales tuvieran cerca de 3 000 empleos clientelares para distribuir, se volvió importante incluso para los partidos políticos de base nacional. El gobierno también decidió aumentar la representatividad democrática, al dividir a los disputados en dos grupos: aquellos electos de entre las listas partidistas nacionales (plurinominales) y aquellos que

contendían, como en el sistema estadounidense, por su propia candidatura (uninominales), incluso si pertenecían a un partido nacional, otro factor que debilitaba a los viejos partidos tradicionales. Sin menoscabo de cuáles fueron los problemas a corto plazo enfrentados por este programa, hay pocas dudas respecto al comienzo de uno de los procesos más profundos de transformación política y administrativa en la historia de Bolivia.

Pero el régimen de Sánchez de Lozada también amplió significativamente las políticas económicas neoliberales que habían comenzado a mediados de los años ochenta, al emprender una gran privatización de las compañías estatales. En 1992 se había promulgado una ley de privatización que el gobierno se esforzó por poner en vigor. La mayor parte de las pequeñas compañías se vendieron a inversionistas privados, pero las grandes empresas gubernamentales se vendieron mediante estrategias de capitalización. Esto implicó que el Estado conservara 50% de las compañías y entregara otro 50% a grupos privados, que también administrarían las compañías. Entre estas compañías privatizadas están la YPFB, a cargo del petróleo y el gas; la ENDE, compañía nacional de la energía eléctrica; la ENFE, que controlaba los ferrocarriles; ENTEL, a cargo de todas las comunicaciones, y LAB, la aerolínea nacional. Para suavizar el impacto, el gobierno destinó su parte de los fondos a Bonosol, un programa del gobierno que sufragaba las pensiones para los trabajadores jubilados que no participaban de planes de retiro laboral.

De todas estas nacionalizaciones, la que tendría el mayor impacto fue la privatización de la YPFB en 1996. La organización pasó inmediatamente de casi 6 000 trabajadores a 2 000 después de su capitalización, y con el paso del tiempo abandonó la exploración activa, la producción y el transporte de petróleo y de gas durante un periodo en el que se transformó en una compañía llamada YPFB-Residual. Se firmaron contratos con numerosas compañías extranjeras, tanto privadas como gubernamentales, y se redujeron drásticamente las regalías por los nuevos descubrimientos de petróleo y gas. Estos contratos y el papel pasivo de la YPFB generarían un enorme conflicto político en los siguientes años.

Como consecuencia de la privatización y la descentralización, el MNR tuvo una mala jornada electoral en 1997, cayendo a 18% del voto nacional, detrás

de la ADN (21%) y del aún poderoso MIR (20%). Dadas las alianzas previas, no resultó sorprendente que el MIR respaldara a la ADN en el Congreso postelectoral, que nombró a Hugo Banzer presidente de la república. De este modo, el exdictador y general volvió a gobernar el país, esta vez por un lapso de cinco años, como ordena el cambio propuesto en las revisiones constitucionales de 1994. Banzer, que ni era un populista modelo Perón, ni un líder con poderoso apoyo militar, fue un inusual caso de dictador militar vuelto político, que lideraba un respetable partido de centro-derecha. Sin menoscabo de cuáles fueran sus habilidades administrativas, no cabe duda de que Banzer representó un fenómeno único en la política latinoamericana del siglo pasado. Sin embargo, su mala salud a mediados de 2001, tanto como una economía debilitada, con tasas de crecimiento negativas, forzaron a Banzer a renunciar, para ser sustituido por el vicepresidente Jorge Quiroga.

La elección de junio de 2002 fue testigo una vez más del triunfo del candidato a la cabeza, por menos de una cuarta parte de los 2.8 millones de votos emitidos, con un voto parlamentario de segunda vuelta que otorgó la presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada para un segundo periodo. Así, un MNR en apariencia revitalizado bajo su nueva generación de líderes, parecía destinado a volver al poder como partido dominante. Empero, esta elección fue un hito fundamental en la historia política boliviana moderna. El sistema de gobierno de partidos políticos que fungía desde 1985 estaba a punto de terminar. Durante este periodo el sistema presidencial de Bolivia se había modificado de manera significativa debido a la creciente importancia del gobierno parlamentario. A su vez, la legislatura bicameral se había reorganizado para hacerla más receptiva al voto directo de la población. Entre el fortalecimiento efectivo, la ampliación del gobierno municipal y el creciente poder del Senado y de la Cámara de Diputados, Bolivia se alejó de su tradicional sistema de gobierno centralista, presidencialista. Sin embargo, los partidos que habían creado este sistema más descentralizado estaban cercanos a dejar de existir. Tanto la vieja ADN de Banzer como el MIR decrecieron como partidos nacionales significativos durante este proceso electoral, y el candidato que llegó en segundo lugar respecto al MNR, con una

cuarta parte de los votos, provenía de un nuevo partido y era líder indígena aymara.

Este cambio fundamental fue la culminación del surgimiento de los partidos políticos indígenas, que había evolucionado desde la década de 1970, con el ascenso del movimiento Túpac Katari, seguido del extraordinario crecimiento del Condepa, el primer partido verdaderamente indígena, a finales de los años ochenta y principios de la década siguiente. Las reformas del Estado bajo la Participación Popular a mediados de los años noventa condujo a una mayor cantidad de líderes rurales, indígenas y mestizos, a puestos gubernamentales. Por último, un nuevo núcleo de movilización política indígena apareció lejos de las regiones usuales del altiplano y del Valle de Cochabamba. Este nuevo movimiento cocalero fue consecuencia de la política estadounidense contra las drogas, que había llevado a una enorme intervención de los Estados Unidos en la política boliviana a finales de la década de 1980 y a lo largo de los noventa, así como al conflicto, a menudo violento, entre el gobierno y los cocaleros, sus sindicatos y federaciones. Todos estos movimientos tradicionales y nuevos ayudan a explicar el origen de la masiva movilización contra las más extremas políticas neoliberales, llevadas a cabo por los partidos tradicionales desde 1985.

Mientras que algunos grupos radicales aymaras participaron en las elecciones de la década de 1990, en especial bajo el liderazgo de Felipe Quispe, que se volvió jefe de la CSUTCB en 1998, el más notable de estos nuevos movimientos fue el que organizaron los cocaleros de la región del Chapare durante el gobierno de Evo Morales, quien había obtenido el liderazgo de una de las federaciones sindicales regionales más relevantes, la FCT (Federación de Cocaleros Trópicos), en ese mismo año. Morales y sus seguidores crearon la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), antecedente inmediato del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Echando mano básicamente de los sindicatos campesinos, su nuevo partido pudo captar gobiernos municipales, no sólo en las zonas cocaleras, sino también a lo largo del departamento de Cochabamba; el propio Morales fue electo por abrumadora mayoría al Congreso Nacional por Chapare en 1997, año en que

se eligieron cuatro líderes indígenas como diputados, todos de Cochabamba. Aunque fue expulsado de la Cámara de Diputados en 2002, Morales y su partido sorprendieron a la escena política tradicional durante las elecciones presidenciales de aquel año, al llegar en segundo lugar, después del MNR. De hecho esta elección otorgó una tercera parte de las diputaciones a dos partidos indígenas, el MAS de Morales y el Movimiento Indio Pachakuti (MIP) de Felipe Quispe; el MAS incluso obtuvo ocho senadurías. Estos nuevos líderes indígenas presentaron entonces una serie de demandas relativas a problemáticas específicas, económicas y sociales, ligadas con la pobreza urbana y las masas rurales. También propusieron un cambio en la naturaleza de la economía política boliviana con una vuelta al control estatal de los recursos naturales, una nueva identidad nacional, así como un nuevo papel para los pueblos indígenas en la moderna sociedad boliviana.

Este movimiento no sólo llevó al desarrollo de nuevos partidos y grupos de presión en los ámbitos local y nacional, sino que también creó una nueva era de creciente movilización política y masivas protestas violentas en calles y carreteras de Bolivia. Esta era comenzó justo antes de la elección presidencial con la "guerra del agua", en enero de 2000, en el Valle de Cochabamba. El intento del gobierno por privatizar las obras de aguas públicas y comunales de la región para después vendérselas a Bechtel, una multinacional estadounidense, desató una creciente protesta popular. Después de tres meses de movilización masiva de grupos locales, en la que hubo huelgas generales y una importante participación de los agricultores hablantes de quechua, el gobierno abandonó finalmente su esfuerzo por privatizar el sistema de aguas en el valle. Pero aunque la decisión gubernamental de renunciar a la privatización calmó las protestas, es un hecho que se trató de la primera movilización popular significativa, que combinó demandas económicas inmediatas con debates a gran escala sobre políticas gubernamentales, al igual que la exigencia de los grupos indígenas por tener un mayor poder político.

La apertura de la moderna industria del gas natural a la participación extranjera, aunque muchas de estas compañías eran, de hecho, empresas estatales de otras naciones, fue la segunda problemática en torno a la que se

organizó un ataque popular en masa contra las políticas de privatización posteriores a 1985. El segundo gobierno de Sánchez de Lozada estaba decidido a usar este nuevo recurso de gas natural lejos del control de la YPFB, y deseaba vender el gas boliviano a mercados trasatlánticos exteriores. La decisión de construir un gasoducto que transportara este recurso natural sobre los Andes hacia los puertos chilenos condujo a la guerra del gas de 2003, y a la gigantesca movilización, casi siempre violenta, de campesinos y mestizos contra el MNR y su líder. El uso de territorio chileno para el propuesto gasoducto y la continua privatización de este nuevo recurso natural fundamental, tal y como lo estipulaba la Ley de Hidrocarburos de 1996, fueron los factores clave que crearon un movimiento, tanto nacionalista como de izquierda, que dio lugar a un poderoso ataque frontal contra las políticas de privatización gubernamentales relativas al recurso natural. En septiembre de 2003 se realizaron protestas urbanas en La Paz y Cochabamba, y luego una masacre de campesinos en el crucial centro urbano del altiplano: Warisata. Un bloqueo de las vías de comunicación entre El Alto y La Paz, efectuado por los opositores a las políticas gasíferas el 13 de octubre, provocó que Sánchez de Lozada enviara tropas al altiplano, lo que resultó en una gran cantidad de muertes entre los desarmados manifestantes. La consecuencia fue un escalamiento inmediato de bloqueos a las carreteras, el cierre de la ciudad de La Paz a manos de una población proveniente de la ciudad de El Alto, así como un aumento en los enfrentamientos y violencia entre policía y opositores. La simpatía que las élites sentían por el MNR se evaporó con los constantes bloqueos y las protestas cotidianas que frenaban la economía de la ciudad capital. El 17 de octubre de 2002, Sánchez de Lozada renunció a la presidencia y abandonó el país; entonces el vicepresidente, Carlos Mesa, una personalidad de los medios de comunicación e historiador, sin partido ni grupo que lo respaldara, asumió el cargo de nuevo presidente de una Bolivia muy transformada. Como un reconocimiento, y sabedor de los súbitos y profundos cambios que se sucedían en el país, Mesa asumió el cargo, no en el tradicional palacio presidencial de La Paz, sino en la ciudad mestiza de El Alto.

10. EL SURGIMIENTO DE UNA ÉLITE MESTIZA E INDÍGENA, 2002-2014

La conmoción del proceso electoral de 2002, seguida de gigantescos bloqueos violentos, cada vez más eficaces, patrocinados por grupos mestizos e indígenas, crearon el bagaje para el surgimiento del primer partido político de masas, coherente y poderoso, encabezado por líderes mestizos e indígenas. Para el momento de la elección presidencial de diciembre de 2005, la mayor parte de los partidos tradicionales habían sido sustituidos por un nuevo partido no indígena, conocido como Podemos, al tiempo que, conducido por el MAS, dirigido por Evo Morales, se daba a conocer como el partido más importante del país. En diciembre de ese año, el MAS y el MIP, el otro partido indígena, obtuvieron 56% del total de los 2.9 millones de votos emitidos. De este modo, en sólo un breve periodo de tres años, todos los partidos tradicionales perdieron su importancia para ser remplazados por nuevos agrupamientos de movimientos no indígenas, así como por una multiplicidad de partidos indígenas, el más importante de los cuales fue el MAS, guiado por Morales, quien finalmente asumió el poder en las elecciones de 2005. Por primera vez en la historia republicana se eligió a un presidente que se definía a sí mismo como indígena.

Después de 2002 no sólo cambiaron las políticas partidistas, sino que surgieron nuevas alianzas regionales en este Estado más descentralizado. De manera lenta y con algunas variaciones locales, emergió una nueva división política, entre los departamentos centrales del altiplano y un grupo de departamentos orientales y de las tierras bajas (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), que formaron lo que los bolivianos comenzaron a llamar el grupo de la “media luna” (ya que en los mapas del país parecían una media luna en

relación geográfica con los departamentos del altiplano). Las tensiones entre los líderes indígenas militantes en La Paz y los otros departamentos alteños, y estas regiones periféricas ricas en gas, petróleo y empresas agrícolas comerciales controladas por grupos no indígenas, ayudaron a definir una nueva realidad política. Esta realidad no significaba que todos los partidos nacionales no estuvieran representados en todas las sumas, ni que las tensiones regionales entre las poblaciones urbana y rural de cada área no constituyeran otro elemento divisivo. Además, dichos estados centrales y periféricos cambiarían de una elección a otra en los años siguientes, de modo que los conjuntos regionales se mostraban muy fluidos, e incluso las divisiones étnicas no se definían geográficamente por completo. Ninguna región contempló la independencia política en serio, y cada uno de los conflictos terminó en algún compromiso entre dos grupos o regiones. Pero la división, por muy imprecisa que fuera, definía una nueva realidad política entre una élite tradicional y una nueva clase indígena que había asumido el poder representado por el gobierno central, cuestión bien ilustrada por las elecciones presidenciales de 2005 (véase el mapa 10.1 que muestra los departamentos que el MAS ganó y los que perdió).

Mapa 10.1. Elecciones presidenciales de 2005.
Partidos triunfantes por departamento.

Fuente: CNE, *Boletín estadístico*, III, 7 de noviembre de 2007, mapa 7, p. 1.

El origen del surgimiento de esta nueve élite nacional mestiza e indígena data de la Revolución Nacional de 1952. No hay duda de que este suceso tuvo un profundo impacto en sus consecuencias tanto intencionales como no intencionales. Las dos acciones más relevantes de este periodo revolucionario

temprano fueron la Reforma Agraria y el otorgamiento del voto a toda la población adulta, sin menoscabo de su nivel de alfabetización, por vez primera en la historia republicana. El decreto de reforma agraria de agosto de 1953 confiscó de manera efectiva todas las tierras de las haciendas del altiplano y las entregó a los trabajadores indígenas mediante sus sindicatos y comunidades, con la estipulación de que tales tierras no podían venderse de manera individual. Las únicas tierras que el Estado no confiscó fueron las de la región de Santa Cruz, escasamente pobladas, y las de las regiones de los valles suroccidentales, conformadas por haciendas de tamaño medio, como en Monteagudo, y la región vinícola de pequeñas propiedades del valle de Cinti, que contaba con una agricultura modesta, de capital intensivo, y no tenía poblaciones indígenas residentes. En los demás sitios se abolió la hacienda, se destruyó la clase hacendada y se entregó la tierra predominantemente a campesinos indígenas. Para 1993 se habían emitido unos 831 000 títulos de propiedad, que daban cuenta de 44 millones de hectáreas —o alrededor de 40% de la superficie total de Bolivia—, que fueron entregados a 626 998 personas. A esta reforma agraria se añadieron los dos periodos de hiperinflación acaecidos a mediados de la década de 1950 y principios de los años ochenta, que debilitaron y en muchos casos destruyeron a las élites blancas rurales tradicionales que habían gobernado en los pequeños poblados y en las comunidades rurales. En todas partes éstas fueron remplazadas por una nueva clase mestiza, esto es, por indígenas que entraron al mercado laboral, adoptaron normas urbanas, el bilingüismo, y se mudaron a pequeños poblados y ciudades por toda la nación. Los mestizos se volvieron entonces los intermediarios entre los mundos rural y metropolitano que se desarrollaban en Bolivia.

La concesión del derecho al voto a la población indígena fue igualmente crucial. En uno de los primeros actos del régimen del MNR de 1952 se estableció el sufragio universal al eliminar el requisito del alfabetismo. De golpe, las masas campesinas indígenas tuvieron derecho al voto, y la población votante se elevó de 126 000 en 1951 a 955 000 en 1956, para llegar a 1 300 000 votantes en la elección de 1964. Como a las masas indígenas les tomó varias generaciones encontrar su voz política independiente, se exigió

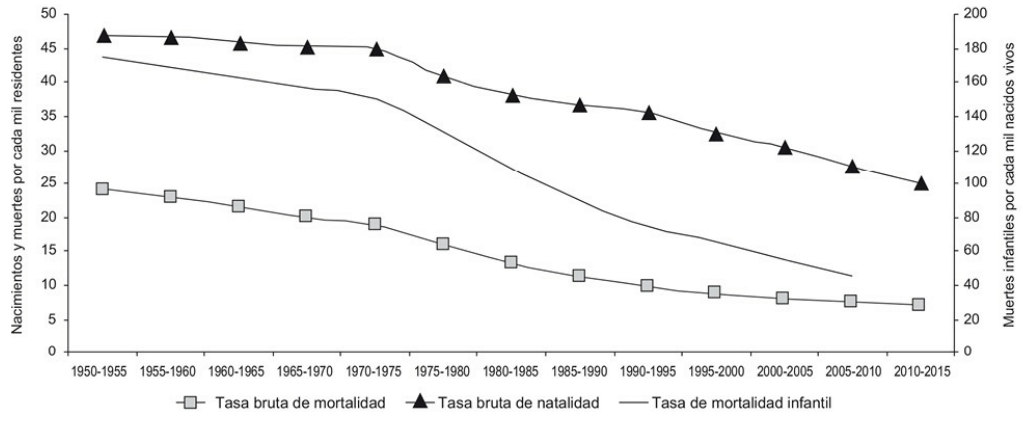
de cada gobierno sucesivo, ya fuera militar o civil, expresar su postura en cuanto a satisfacer sus demandas de escuelas, vivienda, electricidad, sanidad y apoyo económico general, y aunque el gobierno fue el que menos colaboró en la entrega de este apoyo, y las demandas del grupo cambiaban con el tiempo, la transformación en la vida nacional fue profunda.

Junto con sus estipulaciones en torno a la tierra, la Reforma Agraria de 1953 también liberó a todos los campesinos indígenas y trabajadores rurales de cualquier servicio personal (el *pongueaje* y el *colonato*) que los hubiera atado a la cuestión hacendaria. Esta ley por sí misma impulsó una movilidad mucho mayor entre la población pobre, como nunca antes en la historia. La migración hacia centros urbanos de muy rápida expansión ofreció nuevas oportunidades educativas, laborales y de bienestar. Al mismo tiempo, el establecimiento de una red carretera viable y la apertura de las áreas rurales a los mercados nacionales llevó nueva riqueza al campo. Las organizaciones sindicales y comunales aseguraron apoyo para proyectos en común, así como la capacidad de plantear demandas efectivas para conseguir mejores servicios educativos y de salud. De hecho, estas organizaciones fueron tan importantes que se volvieron la norma en las nuevas tierras que se abrían a la migración, desde el altiplano hasta los distritos orientales.

Con un nuevo compromiso a favor de la salud y el bienestar de su ciudadanía, los gobiernos posteriores a 1952 instauraron o profundizaron iniciativas relevantes planteadas antes en cuanto a salud y educación, que con el tiempo tuvieron un impacto social y demográfico significativo. Mientras que algunos esfuerzos anteriores en salubridad y en la mejora de los servicios de salud habían comenzado a disminuir la mortalidad en general, las importantes inversiones en salud llevadas a cabo por los gobiernos posteriores a 1952 condujeron a un rápido descenso en la mortalidad infantil, así como a una disminución significativa en la tasa bruta de mortalidad (véanse las gráficas 10.1 y 10.2). Según la encuesta nacional a hogares, en 2010 alrededor de 83% de los nacimientos ocurrió en una clínica u hospital, y los últimos datos de mortalidad infantil, producidos por el INE, muestran que la tasa había caído a 38 decesos por cada mil nacidos vivos para 2013. Además, la importancia relativa de la muerte neonatal y postneonatal se

transformaba lentamente. Mientras que las muertes postneonatales daban cuenta de 55% de la mortalidad infantil en la década de 1970, para 2010 sólo representaban 47% del total de la misma tasa de mortalidad, lo que representa otro avance positivo. Mientras que las muertes infantiles hasta 28 días después del nacimiento (neonatales) se relacionan con condiciones genéticas, las muertes postneonatales (de 29 días a un año) se relacionan principalmente con las condiciones económicas y sociales de la familia. Al tiempo que las tasas de mortalidad infantil y materna son aún altas respecto a estándares hemisféricos, su descenso continuo, así como la disminución relativa de las muertes postneonatales, son indicadores importantes de la mejora en el escenario de la mortalidad, todo lo cual tendría un impacto importante sobre la esperanza de vida de los bolivianos.

Gráfica 10.1. Tasas brutas de natalidad y mortalidad en Bolivia, 1950-1955 a 2010-2015



Fuente: INE, cuadro 2.01.19, en <http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20119.HTM/>.

Los bolivianos experimentaron un aumento rápido y contundente en su esperanza de vida durante el periodo que inició en 1950. En dicho año, la esperanza de vida promedio para los hombres era de sólo 38 años al nacimiento, y para las mujeres, de 42. Para el momento del primer censo postrevolución, llevado a cabo en 1976, la esperanza de vida promedio había aumentado en más de 10 años tanto para hombres como para mujeres. Las crisis económicas y el estancamiento relativo de los años ochenta y principios de los noventa no tuvieron un paralelo en cuanto a los índices demográficos.

Para 2010, la esperanza de vida había aumentado para ambos sexos la extraordinaria cantidad de 26 años en promedio, a lo largo de los 60 años que transcurrieron desde el censo de 1950, y se espera que aumente cada quinquenio hasta alcanzar, a medio siglo, cifras cercanas a las tasas latinoamericanas contemporáneas (véase la gráfica 10.2). Aunque se trata de una tendencia mundial, que deja a Bolivia todavía con una de las tasas de esperanza de vida más bajas del continente americano, la brecha entre ricos y pobres ha disminuido. En comparación con las tasas para América Latina en su conjunto, las tasas de esperanza de vida bolivianas han cerrado la brecha de manera progresiva, pasando de 11 años para ambos sexos en 1950, a sólo 7 en 2010-2015.

El descenso de la mortalidad infantil entre los niños menores de cinco años se debió a programas de salud gubernamentales, en especial a la inmunización masiva en décadas recientes: para 1980 se había inmunizado de 10 a 15% de los niños menores de tres años; para 2008, un programa de inmunización estándar, más amplio, cubrió de 80 a 95% de los infantes, y abarcaba todas las vacunas principales. Además, el programa de inmunización gubernamental es muy eficaz, tanto entre las poblaciones rurales pobres como entre las urbanas. Así, en el año 2009, 83% de niños menores de tres años se vacunaron contra la polio en las zonas urbanas; entre los menores rurales la cobertura fue de 84%. También ha habido un aumento lento, pero estable, en cuanto a la consulta médica prenatal y la atención al parto, todo lo cual colaboró, de manera efectiva, en la disminución de la mortalidad materno-infantil. El Ministerio de Salud informó que sólo 16% de las muertes registradas en 2010 correspondieron a infantes menores de cinco años, y que las enfermedades infecciosas dieron cuenta de sólo 10% de la mortalidad. De hecho, las dos causas de muerte más significativas en el plano nacional ese año fueron las mismas que se encuentran en las sociedades industriales avanzadas: las enfermedades cardiacas y el cáncer. Por último, la creciente disponibilidad de agua potable y el alcantarillado moderno en hogares bolivianos claramente desempeñaron un importante papel en la disminución de las altas tasas de desórdenes intestinales, los mayores homicidas de menores. Mientras que dos terceras partes de los hogares

bolivianos no tenían agua potable en 1976, esta proporción disminuyó a sólo poco más de una tercera parte de las unidades domésticas para el 2011. Además, 48% de los hogares contaba con un sistema interno de tubería para ese año.

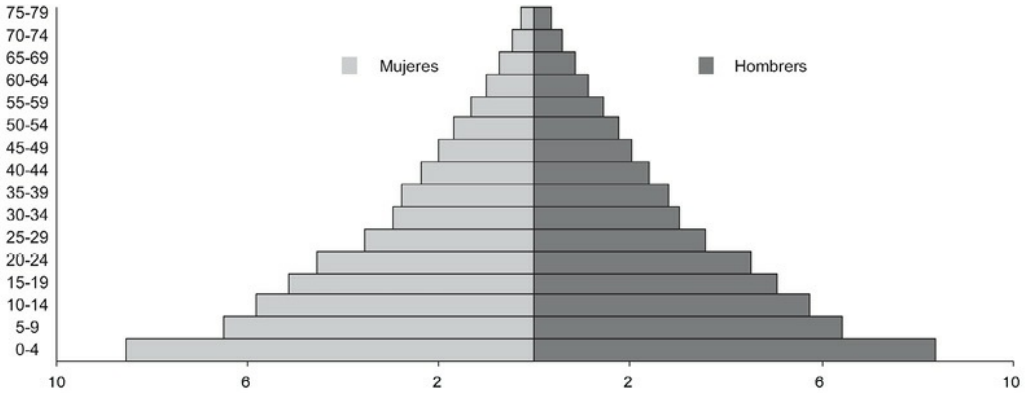
Aunque ha habido diferencias importantes regionales, de clase y étnicas, en términos de mortalidad y fecundidad, no hay duda de que la orientación de estas tendencias es igual para todas las regiones y grupos. Entonces surge la pregunta respecto a cuántos de estos cambios fueron responsabilidad de los gobiernos posteriores a la Revolución Nacional y cuántos fueron responsabilidad de los cambios hemisféricos generales. De cierto modo, ambas influencias pueden verse en estadísticas demográficas mundiales comparables. Lo que resulta impresionante es que Bolivia no ha cambiado de rango —está entre los peores países del continente— en términos de mortalidad o esperanza de vida, comparada con las demás naciones del hemisferio occidental, aunque la brecha entre la mayor mortalidad de la población boliviana y las tasas latinoamericanas se ha reducido de manera consistente a lo largo del tiempo.

El efecto de este enorme crecimiento poblacional debido a la disminución de la mortalidad, y el correspondiente aumento del nivel educativo, así como la disponibilidad de métodos anticonceptivos, condujeron, por último, a un contundente descenso de la fecundidad hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado. En Bolivia, como en otros sitios del mundo en desarrollo, los embarazos no deseados comenzaron a disminuir a un ritmo cada vez mayor durante la segunda mitad del siglo XX, aunque este descenso ocurrió en Bolivia muy tarde respecto a estándares mundiales. La alta tasa global de fecundidad, de 6.5 hijos por cada mujer en edad fértil, aún era la norma incluso a mediados de la década de 1970; pero entonces los nacimientos comenzaron a caer velozmente, y las tasas totales de fecundidad han bajado a 3.4 hijos para 2010. El INE calcula que la fecundidad en Bolivia sólo caerá por debajo de los niveles de remplazo para el periodo 2035-2040, unos 20 años después de que esto suceda en el resto de América Latina.

El descenso de la mortalidad y la fecundidad también ha tenido un efecto obvio sobre el crecimiento poblacional. Mientras que la tasa de mortalidad

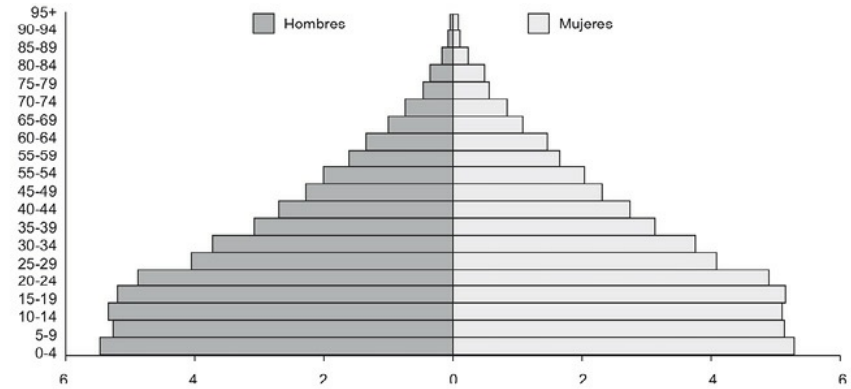
cayó inicialmente de manera significativa, antes de que disminuyera la tasa de nacimientos, tuvo lugar un explosivo crecimiento poblacional. En tanto que a principios de la década de 1980 el crecimiento poblacional aún era menor a 2% anual, para la década siguiente alcanzó 2.7%, y sólo descendió a menos de 2% en 2009. Se estima que este ritmo de crecimiento seguirá descendiendo a lo largo del siglo. Sin embargo, la alta tasa de crecimiento alcanzada en los años noventa significa que la población nacional se duplicaba cada 25.7 años. Desde finales del decenio de 1980, el crecimiento poblacional boliviano ha sido siempre más alto que las tasas latinoamericanas en general. La población se había duplicado, de 3 millones a 6.4 millones, entre los censos de 1950 y 1992, y se añadieron unos 2 millones más para el censo de 2001. Se estimó que la población había superado los 10 millones en 2012; este crecimiento significa que Bolivia tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Aunque las tasas de nacimiento en descenso y el aumento en la esperanza de vida modifican con lentitud la estructura poblacional, la edad media de la población del país pasó de 18 años en 1992 a 21.9 en 2010. Según la CEPAL, Bolivia tiene una de las poblaciones más jóvenes de América, con 35% de personas menores de 15 años de edad en 2010, en comparación con un promedio de 28% en esta categoría etaria para América Latina. Una mirada a la distribución etaria por sexo muestra una transformación significativa de la clásica forma piramidal presente en 1950 (véase la gráfica 10.2), para comenzar a verse más como una estructura tipo tarro, típica de sociedades industriales avanzadas, con tasas menores de nacimientos y muertes en 2012 (véase la gráfica 10.3).

Gráfica 10.2. Pirámide poblacional de Bolivia en 1950
(2.7 millones de habitantes)



Fuente: CEPAL/Celade, División de Población, *Boletín Demográfico*, núm. 66, julio de 2000, "Bolivia".

Gráfica 10.3. Pirámide poblacional de Bolivia en el censo revisado de 2012



Fuente: <http://censo.comunicacion.gob.bo/binbol/RpWebEngine.exe/Portal?&BASE=CPV2012COM>.

Si la fecundidad y la mortalidad de los bolivianos han permanecido como unas de las más altas de la región, indicando que Bolivia ha cambiado de manera más lenta que los otros países latinoamericanos, éste no es el caso respecto a la alfabetización. Bolivia ha superado su rango anterior en términos de alfabetización y educación, a tal grado que ya no se encuentra entre las naciones más pobres del hemisferio en estos aspectos. Aunque se ha sugerido que el aumento de las inversiones en educación y en la inscripción escolar precedió a la Revolución Nacional, no hay duda de que los cambios más rápidos sucedidos en los últimos 50 años se cifran precisamente en la educación y la alfabetización. En 1950, el país sólo otorgaba educación a una

cuarta parte de los menores en edad de asistir a la escuela primaria; para 2010, su porcentaje de matriculación neta se había elevado a 87%. No obstante, sin menoscabo de los problemas actuales presentes en el sistema, hay una tendencia hacia la cobertura universal, al menos para el nivel de primaria, y hacia el incremento de las tasas de inscripción neta en el nivel de secundaria. Esto ha implicado que el número promedio de años de escolaridad también aumente de manera continua durante este periodo, para pasar de 4 a 9 años, y que la proporción de aquellos que no tienen educación formal haya caído a 9% para el año 2011 (4% en zonas urbanas y 19% en el área rural, según la encuesta nacional de hogares de dicho año). Como era de esperarse, las generaciones más jóvenes cuentan con más años de escolaridad terminados que el promedio nacional.

A diferencia de la mayor parte de los indicadores sociales y económicos, que consistentemente muestran que la porción no indígena de la población boliviana es más rica y más saludable que el sector indígena, en cuanto a la asistencia a la escuela primaria virtualmente no existe diferencia entre ambos grupos. Para este siglo, 93% de menores, tanto indígenas como no indígenas, de entre 6 y 11 años, asisten a la escuela (donde sólo las tasas rurales muestran una ligera diferencia a favor de los menores no indígenas, esto es, 90 contra 87%). Como era de esperarse dada la mayor pobreza de las poblaciones indígena y rural, las tasas varían en el nivel de la escuela secundaria. De manera semejante respecto a las tasas de terminación de la escuela primaria para los adolescentes de entre 15 y 19 años, los estudiantes no indígenas tienen una tasa de 85% de terminación, comparada con 75% de los estudiantes indígenas. Resulta obvio que el logro educativo a nivel avanzado no es el mismo entre ambos grupos, ni siquiera entre niños y niñas. No obstante, el gobierno de Bolivia ha progresado en gran medida en cuanto a ofrecer acceso a la educación a la población total, y las tendencias actuales indican que la cantidad de estudiantes inscritos en la educación secundaria va en aumento.

Todos estos sucesos en el campo educativo han tenido un efecto directo sobre la alfabetización. Dadas las complejas divisiones lingüísticas del país, lograr tasas de alfabetización tan altas ha sido un logro extraordinario. En

1950, la mayoría de la población ni siquiera hablaba español; por supuesto, menos lo leería. Sólo 31% de la población mayor de 15 años se consideraba alfabetizada en 1950, pero para 1976 la cifra había aumentado a 67%, y para 2011, a 92%. De hecho Bolivia pasó, en este periodo de 61 años, de ocupar un rango igual al de Haití, en la parte inferior de las naciones latinoamericanas, a colocarse por encima de Perú y de Brasil, y en paralelo con Ecuador. Se encontraba muy por encima de las repúblicas centroamericanas, de acuerdo con los últimos datos sobre alfabetización de la CEPAL.

El que Bolivia ahora pueda educar casi al total de su población infantil a nivel primaria ha dejado una honda impresión en todos los aspectos de la sociedad, pero en especial en la lengua nacional. El español finalmente se volvió la lengua mayoritaria de la nación para el censo de 1976, cuando más de 83% de la población de seis años o más hablaba español, aunque sólo 42% era monolingüe en dicha lengua. De manera semejante, 62% de la población total se declaró indígena; esto implica que mediante la educación, la población indígena ahora es principalmente bilingüe y está alfabetizada en la lengua nacional. En el censo de 2001, alrededor de 74% de los 3.7 millones de hablantes de lengua indígena eran bilingües en español. Vale la pena anotar que los hablantes de aymara son considerablemente más bilingües que los de quechua, lo que puede ayudar a explicar su mayor militancia política. De entre 1 300 000 hablantes de aymara, alrededor de 80% era bilingüe, mientras que de los 2 millones de hablantes de quechua, sólo 69% era bilingüe. Diversos investigadores han señalado que existe un *continuum* entre los hablantes alfabetizados de alguna lengua indígena, con un movimiento constante del monolingüismo hacia el bilingüismo, que fue la norma hasta principios de la década de 1990, y a lo largo de este siglo, dicha constante aumenta del bilingüismo hacia el monolingüismo en español. Esto explica el origen de los hablantes monolingües de español que se identifican como indígenas. No obstante, el tamaño de la población que conoce y habla una lengua indígena sigue siendo impresionante. El crecimiento poblacional más acelerado de los pueblos indígenas al principio se tradujo en que aquellos que hablaban una lengua indígena pasaron de alrededor de 1 800 000 personas en

1950 a 4 millones en 1992. Pero esta cifra descendió a 3.7 millones en el censo de 2001. A pesar de que la población rural creció a un ritmo sin precedentes, la cantidad de hablantes indígenas monolingües siguió disminuyendo. Las personas monolingües en quechua cayeron a 632 000, y los de aymara a 263 000, para el año 2001. Además, en 2001 estas personas monolingües eran básicamente habitantes rurales, y la mayor parte vivían dispersos (sólo entre 10 y 17% respectivamente, de ambos grupos, vivía en poblados o ciudades con una población superior a 2 000 habitantes). Al mismo tiempo, la cantidad de personas bilingües ha comenzado a descender lentamente, conforme una mayor cantidad de pueblos indígenas abandonan su lengua nativa pese a la introducción de la educación bilingüe en la década de 1990. El lugar mayoritario alcanzado por el español para 1976 fue prueba del efecto que tuvieron las escuelas en las zonas rurales. La población mestiza no sólo se había ampliado en gran medida, como indican estas cifras, sino que, de manera más importante, los campesinos indígenas del medio rural ahora utilizaban el español frecuentemente, a la par de su lengua tradicional.

Pese a la lenta desaparición de las lenguas originarias, la cantidad de personas que se autoidentifican como indígenas ha permanecido bastante alta. Aunque sólo 45% de la población total en el 2001 era monolingüe o bilingüe en alguna lengua indígena, se calcula que 5.4 millones de personas (o dos terceras partes de la población nacional) eran, en efecto, indígenas. En una encuesta nacional de hogares del año 2005 se reportó que 53% de la población se autoidentificaba como indígena, pero sólo 42% hablaba una lengua originaria. Mientras que existe cierta transición de estatus de indígena a no indígena, la identidad sigue siendo muy poderosa para la mayor parte de la gente, pese al descenso en la cantidad de hablantes, tanto monolingües como bilingües, de estas lenguas. Además, aquellos que se identifican como quechuas o como aymaras son, en realidad, urbanos en gran medida, aunque muy pocos hablantes monolingües habitan zonas urbanas. Por último, se calculó en la encuesta nacional de hogares de 2007 que 79% de la población nativa hablante de lengua indígena estaba alfabetizada. En el área urbana 87% lo estaba, y en las zonas rurales, 73%. El hecho de que las personas que

se identifican a sí mismas como indígenas sean principalmente hablantes de español y estén primordialmente alfabetizadas, incluso si hablan una lengua indígena, en las zonas tanto urbanas como rurales, sugiere que hay una población indígena altamente integrada a la sociedad y a la entidad política nacional, pese a sus altos niveles de pobreza.

La creciente urbanización de la sociedad tuvo un profundo efecto sobre los cambios en el uso de la lengua y en el nivel de alfabetización, así como en los resultados demográficos y de salud entre la población boliviana. De ser una sociedad principalmente rural en 1950, la nación se transformó en primariamente urbana a lo largo de los últimos 60 años. En 1950, sólo 20% de la población vivía en poblados de más de 20 000 personas, y para el censo de 2001, más de la mitad de la población vivía en centros urbanos. Las dos ciudades de La Paz-El Alto y Santa Cruz en conjunto, que en 1950 albergaban sólo a 364 000 personas y daban cuenta tan sólo de 12% del total poblacional, se elevaron a 3.4 millones de habitantes, o una tercera parte del aproximado de 10 millones de la población total para 2010. En 2011 se calculó que dos terceras partes de la población nacional residían en ciudades. Esta urbanización de la población nacional trajo consigo una elevación del estándar de vida. Cada uno de los índices de salud, bienestar y educación mostró de manera consistente que había mejores condiciones para las poblaciones urbanas que para las rurales.

Todos estos cambios han sucedido en el contexto de una economía de exportación en un auge poco usual. De finales de los años noventa y hasta 2014, Bolivia ha multiplicado por cuatro el valor de sus exportaciones, con el impulso principal de la expansión de sus exportaciones de gas natural. La ley de hidrocarburos de 1996 dio paso a importantes inversiones extranjeras, en su mayor parte provenientes de compañías petroleras estatales de otros países, lo que permitió que Bolivia multiplicara las exportaciones de gas a mercados extranjeros, en especial al nuevo mercado de Brasil, que tomaría la mayor parte de la producción boliviana. Desde entonces y hasta el año 2005 hubo un aumento decisivo en la producción y en la riqueza que generaba. Al mismo tiempo, hubo un incremento en los precios mundiales de las materias primas, lo que también condujo a un extraordinario crecimiento del valor de

las exportaciones bolivianas y al consiguiente aumento en las reservas internacionales. Por primera vez en años, el gobierno mantiene una balanza positiva en cuanto al gasto gubernamental.

Pero la producción gasífera, a la cabeza de las exportaciones, no es el único ítem que ha experimentado crecimiento. El efecto de la industrialización china y la creciente demanda de minerales colaboraron a incrementar el volumen y el valor de las exportaciones bolivianas de zinc, plata, estaño, oro, plomo y otras exportaciones tradicionales de metales, así como han mantenido los precios internacionales de las materias primas en niveles inusualmente altos. Al mismo tiempo los productos tradicionales, en especial en las zonas agrícolas comerciales de las tierras bajas, comenzaron a alcanzar niveles internacionales de productividad, modernizando cuando menos un sector de la agricultura.

Todo este auge exportador fundamentado en los altos precios internacionales, así como la creciente carga fiscal gubernamental y los cobros por regalías sobre el gas y los minerales producidos por compañías privadas, ha aumentado en gran proporción las entradas gubernamentales y permitido una creciente acumulación de reservas, junto con una balanza consistentemente positiva respecto al gasto del gobierno. Éste ha tenido éxito respecto a no permitir que esa bonanza afecte los precios en el plano nacional, y ha mantenido baja la inflación. Aunque las exportaciones han aumentado de súbito, el país ha podido mantener una balanza comercial positiva desde 2004. Con estos nuevos fondos, el gobierno de Evo Morales ha aumentado el gasto social mediante transferencias condicionales de fondos, al igual que mediante inversiones en educación, salud y bienestar social.

No obstante lo inusual de este periodo de crecimiento, que vio casi una triplicación del PIB per cápita en la última década (de 989 dólares en 2000 a 2 868 en 2013), el gobierno ha tenido dificultades para generar transformaciones significativas en la economía local, en términos de diversificación y desarrollo de nuevas fuentes de riqueza y de empleo desde 2006, a pesar de serios intentos por crear nuevas industrias. Además, el gobierno se ha visto en dificultades para invertir en la exploración y

desarrollo de nuevos yacimientos de gas. De este modo, la producción de gas o se ha estancado o ha crecido lentamente a pesar de la existencia de reservas impresionantes. Sin menoscabo de la validez de un modelo capitalista estatal, ponerlo en marcha sin una burocracia bien capacitada y bien pagada sólo conduce a un desperdicio de recursos. Así, a pesar del ingreso que ha impulsado a Bolivia a un nivel mucho más alto de PIB de lo que hubiera tenido nunca antes, la estructura de la economía y la dependencia del Estado de los impuestos tradicionales sobre los bienes de exportación se ha mantenido relativamente inmóvil. Se calcula que 48% del presupuesto estatal proviene de impuestos, regalías y otros cargos sobre la industria del gas natural. Además, estas regalías por el gas han tenido un gran efecto sobre las economías locales. Mientras que Santa Cruz gana más durante los años de exportaciones petroleras, Tarija ha obtenido la mayor parte de los fondos por producción de gas, recibiendo 62% de las regalías por hidrocarburos en 2011. En tanto que a algunas de las provincias les ha ido bien, el gobierno central también ha obtenido nuevos ingresos significativos y, en los hechos, ha aumentado su proporción de todos los gastos gubernamentales a lo largo de la última década. Estos gastos del gobierno central actualmente se dedican a inversiones en infraestructura (37%), una tercera parte a inversiones en minería y casi una cuarta parte a gasto social. El monto real de tal gasto gubernamental, por supuesto, aumenta de 641 millones de dólares en 2003 a alrededor de 3.3 miles de millones en 2011.

Aunque el renacimiento de las exportaciones minerales ha sido muy relevante, fue el desarrollo de una moderna industria de gas natural lo que ha impulsado gran parte del cambio desde finales del último siglo. Con la instauración del gasoducto a Brasil, Bolivia se volvió la fuente más importante de gas extranjero para su vecino, y se integró de manera más completa a la economía brasileña, gracias al vínculo de la frontera del frijol de soya con el Mato Grosso, que ahora incorporaba a Santa Cruz. El PIB creció rápidamente durante este periodo, e incluso el PIB per cápita, a pesar de caer detrás de las tasas de crecimiento de la economía total, resultaba impresionante. Se calcula que la economía aumentó dos veces y media entre 1990 y 2010, y que el ingreso per cápita aumentó 1.5 veces respecto a la cifra

original. Al tiempo que hubo declives periódicos, la economía boliviana sobrevivió adecuadamente a las diversas crisis internacionales de finales de la década de 1980, y creció con intensidad especial después de 2005, cuando los precios internacionales volvieron a alcanzar altos niveles.

Las exportaciones de gas aumentaron su valor, de 266 millones de dólares en 2002 a 3.8 miles de millones en 2011; para entonces representaban 43% del valor total de las exportaciones del país, mientras que otro 27% de las exportaciones nacionales consistía en minerales. La producción real pasó de unos 100 millones de pies cúbicos a finales de la década de 1990 a más de 400 millones en 2005. Ha permanecido aproximadamente en ese nivel, o un poco por encima de éste, desde dicho año (véase el cuadro A en el apéndice). De esta producción total de gas, sólo 20% se consumía a nivel nacional en 2013; Argentina se llevaba aproximadamente una cuarta parte, y mucho más de 55% se enviaba a Brasil. Mientras que el gobierno había alentado activamente el uso del gas natural en los hogares, los autos y la industria por todo Bolivia, ha tenido menos éxito para ampliar la producción. La YPFB ha aumentado la producción de gas al explotar de manera más intensiva los yacimientos tradicionales, pero se ha llevado a cabo poca exploración para desarrollar nuevas fuentes. 70% de la producción proviene sólo de tres de los llamados "megacampos": San Alberto, Sábalo y Margarito. Las exportaciones no tradicionales, al tiempo que aumentan, aún representan una parte menor del valor total de los bienes que exporta Bolivia. El frijol de soya, cuyo valor de exportación se duplicó entre 2002 y 2011, aún daba cuenta sólo de 7% de las exportaciones, y el castaño amazónico, sólo de 3%. Los metales brutos y refinados y el gas natural representaban algo así como las tres cuartas partes del valor de las exportaciones en 2011. De hecho, Bolivia exporta más productos primarios que sus vecinos andinos: 92% del total de sus exportaciones caen en esta categoría.

La interrogante que ha preocupado a muchos economistas gira en torno al hecho de que toda esta riqueza no haya tenido un impacto en cuanto a modificar la estructura de la economía nacional, o para generar nuevas industrias y aumentar el empleo. Sin importar los intentos por forzar la industrialización, emprendidos por el gobierno del MAS, ha habido poco

desarrollo industrial exitoso desde 2005. Más aún, sus políticas han desalentado la inversión extranjera directa y el gobierno ha sido incapaz de compensar el déficit que afecta a la economía local. La consecuencia es que la economía informal, según la UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas), daba cuenta de 59% de la población urbana económicamente activa en 2011. Se estima que Bolivia tiene la economía informal más grande de América Latina, sector que incluye todo tipo de actividad, desde trabajadores indocumentados hasta comerciantes y productores ilegales de drogas, pasando por mineros no registrados.

Aunque la distribución del ingreso en Bolivia, y en toda América Latina, permanece en extremo desigual, parece que hubo una modificación importante en tiempos recientes. Como resultado de los programas de transferencias condicionales de efectivo, así como de la mayor expansión de la economía legal e informal, ha habido un descenso del índice de Gini, que mide el nivel de la desigualdad. Según el Banco Mundial, el índice de Gini, respecto a la distribución del ingreso, era de un alto 0.56 para el tardío momento de 2008; pero según fuentes gubernamentales bolivianas, el Gini ha descendido constantemente a lo largo de los últimos años, y supuestamente cayó por debajo de 0.50 en 2011. Aunque esta medición aún indica una alta tasa de desigualdad para estándares mundiales, resulta evidente que Bolivia ya no se encuentra entre los casos más extremos de desigualdad en la región.

La tasa de pobreza, o como quiera que se defina, también ha disminuido en las últimas décadas en Bolivia. En las áreas tanto urbanas como rurales ha habido una reducción significativa de todos los tipos de pobreza. De este modo, la pobreza extrema, medida por las encuestas nacionales de hogares entre 1999 y 2011, cayó de 59 a 41% en las áreas rurales, y a 11% en las urbanas. Empero, los niveles de pobreza nacional generales (pobreza extrema y pobreza promedio) permanecen altos. Incluso en 2011 se calculó que 45% de los bolivianos eran pobres y que 21% vivía en pobreza extrema.

Dadas las aún altas tasas de pobreza, las recientes décadas de agitación económica y política y los niveles de educación en ascenso, no sorprende que haya sucedido una migración significativa hacia el exterior de Bolivia a lo largo de las últimas dos décadas. La migración temporal tradicional a

Argentina se ha vuelto, a últimas fechas, más permanente. Después, en las décadas de 1980 y 1990 hubo una migración constante a los Estados Unidos, seguida de una masiva efusión de emigrantes a España después del cambio de siglo. Para 2008 esta migración a España culminó con 236 000 bolivianos (Padrón Municipal 2008), aunque ha disminuido desde entonces a 165 000 (Padrón Municipal 2013). Aproximadamente 232 000 bolivianos residen en Argentina (conforme al censo de 2001), otros 99 000 en los Estados Unidos (censo de 2010) y se calcula que hay unos 20 000 en Brasil (censo de 2001). En el censo de 2012, el gobierno boliviano calculó que había unos 562 000 bolivianos en el extranjero. Estos emigrantes han enviado un constante flujo de remesas a Bolivia a lo largo de las últimas décadas. Su volumen alcanzó una cifra pico en el 2007, cuando representó 7.4% del PIB —los inmigrantes en España y en los Estados Unidos daban cuenta de la mayor parte de estos fondos—. Compárese esta cifra con la ayuda del exterior, que sólo representaba 1.5% del PIB. Sin embargo, con la reciente recesión mundial estas remesas, aunque siguen siendo significativas, han disminuido a menos de 5% del PIB.

Al igual que la migración internacional, la migración interna también ha sido importante para la evolución reciente de Bolivia. La urbanización durante la segunda mitad del siglo XX también trajo consigo grandes transformaciones en la distribución poblacional. A principios del siglo XX, el eje primario de la nación era La Paz-Oruro-Potosí, una línea norte-sur que señalaba el núcleo dinámico de la nación. Ahí se encontraba el centro de la minería, del comercio y la agricultura, en tanto que Santa Cruz era una región aislada y deprimida, y Cochabamba tenía una economía relativamente contenida y retrasada. Con la reducción progresiva de la minería, en especial después de mediados del siglo XX, el centro comercial se ha mudado lentamente hacia oriente, desde La Paz, y ahora engloba a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en tanto que el eje Oruro-Potosí-Sucre ha entrado en severo descenso. En esencia, el nuevo corredor nororiente-suroccidente, que conecta a tres ciudades: La Paz-El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, y a sus respectivas provincias, da cuenta de la mayor parte de la actividad económica de la nación. Los tres departamentos proveían 93% de

los impuestos del Estado en 2009 y producían 71% del PIB en el año 2000. Las tres provincias también albergan a las ciudades más avanzadas y de mayor crecimiento. Los viejos centros mineros de Potosí y Oruro se han estancado, y sus poblaciones urbana y rural se encuentran entre las más pobres del país. El gobierno calculó recientemente que más de 80% de los pobladores que residen en estas dos provincias mineras, antes acaudaladas, eran pobres, y que más de 60% vivía en pobreza extrema. Incluso sus poblaciones urbanas eran considerablemente más pobres que la norma. Mientras que los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba daban cuenta de 34% de la población nacional en 1950 —cifra muy semejante a la de 1900—, para el censo de 2001 estas tres provincias sólo incluían 20% de la población. Santa Cruz, que sólo albergaba 10% de la población en 1950 —una vez más, cantidad casi idéntica a la de 1900—, contenía una cuarta parte de la población total para el censo de 2001. Entre las tres ciudades (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) se pasó de haber contenido un poco más de la mitad de la población en 1950, a más de 70% en el censo de 2001. Se calculó que en ellas vivía 72% de la población del país en 2010.

Aunque la población rural ha caído drásticamente respecto de la población total, la agricultura boliviana, excepto en nuevas áreas bien definidas de cultivo, ha permanecido sorprendentemente estable. Incluso para 1976, la agricultura aún absorbía 54% de la fuerza de trabajo masculina, cifra que mudó a 34% en 2007. Sin embargo, los agricultores no eran más eficientes y su actividad sólo representaba 13% del PIB en el mismo año. La mayor parte de dicha agricultura, en especial en el altiplano y en los valles de oriente, aún se compone de cultivos alimentarios tradicionales, de baja productividad. Durante el último medio siglo hubo, empero, una transformación radical en las tierras bajas bolivianas. En las últimas décadas los cultivos industriales se han vuelto una nueva empresa para la región de Santa Cruz; así, en 1980 los cultivos industriales (sobre todo algodón, azúcar, frijol de soya y semillas de girasol) representaron 12% de la tierra dedicada a la agricultura. Para 2008 esa proporción había aumentado a 47% del total de la tierra cultivada, lo que equivalía, aproximadamente, a la de todos los cultivos gramíneos y de tubérculos producidos en Bolivia. Los productos comerciales, como el frijol

de soya y la semilla de girasol, se producen en las tierras bajas cruceñas con niveles de rendimiento cercanos a los estándares mundiales. Pero los productos alimenticios del altiplano eran menos productivos que los cultivos similares producidos en los vecinos altiplanos peruanos. Gran parte de esta baja productividad está relacionada con el hecho de que Bolivia gasta menos en investigación agrícola y en programas de extensión que cualquier otro país latinoamericano. La agricultura tradicional, que aún absorbe a la mayor parte de la fuerza de trabajo, ha permanecido subcapitalizada e ineficiente. El rendimiento de los cultivos tradicionales andinos por hectárea, en 2010, se ubicaba, según la FAO, muy por debajo del de su vecino, Perú. Los agricultores bolivianos alcanzaron la mitad de la producción de quinua por hectárea en relación con Perú en aquel año, y una tercera parte de la producción de papa por hectárea en comparación con el mismo país. De hecho, la producción agrícola total a finales de 2013 apenas estaba por encima de la de 1999 —el único sector, aparte del comercio, que no experimentó un gran crecimiento en este periodo—. A pesar de las transformaciones agrícolas recientes en Santa Cruz y en algunas de las regiones de las llanuras vecinas, Bolivia es todavía una de las naciones agrícolas más rezagadas de América.

La imagen de Bolivia que surge a partir de este análisis de más de medio siglo de desarrollo social y económico ilustra enormes transformaciones sociales, combinadas con una pobreza persistente y un relativo atraso económico; la educación y la salud han sido escenario del avance más notable. Pero esta pobreza persistente y este aumento parcial en los estándares de vida, comunes a todo el continente, se ha llevado a cabo en el contexto de un sistema social de cambios radicales. Aunque el lento crecimiento económico no ha promovido gran movilidad social, la migración urbana y el surgimiento del poder político campesino rural y mestizo urbano han implicado una profunda diferencia en la respuesta de todos los gobiernos bolivianos ante las demandas de mejores condiciones sociales. Lo que sólo puede llamarse el mestizaje de la sociedad boliviana se ha vuelto un fenómeno relevante después de medio siglo de revolución social y dos periodos de hiperinflación, que han destruido gran parte del poder económico

tradicional de la población blanca. La creciente esperanza de vida y el aumento en los años de educación de las clases populares bolivianas ayudan a explicar su capacidad de participación significativa, como actores autónomos, en el escenario político nacional. El nuevo siglo marcó con claridad una gran transformación en el equilibrio relativo del poder político, social y hasta cierto punto económico entre los grupos étnicos del país. Durante la última década, el poder político de la población mestiza ha encontrado participación no sólo en los partidos tradicionales y radicales, sino también en el gobierno, y en especial en la transformación del poblado mestizo por antonomasia, en la segunda ciudad más grande de la nación. En 1988, el suburbio de clase obrera de El Alto, ubicado en los márgenes de La Paz, finalmente se incorporó como ciudad independiente y su administración quedó a cargo de la nueva élite mestiza. Este poblado, ubicado a gran altitud, en que entonces habitaban unas 307 000 personas, tenía la mitad del tamaño de La Paz, pero ya era abrumadoramente bilingüe y se asociaba de manera cercana con las comunidades rurales aymaras que lo rodeaban. Era la cuarta ciudad en tamaño cuando se creó, pero para el censo de 2001 se había vuelto la tercera, con 695 000 personas, de las cuales 86% se contaban como indígenas. Para 2005 tenía alrededor de 872 000 residentes, y finalmente sustituyó a La Paz como la segunda ciudad más grande del país. Aunque El Alto tenía tasas de pobreza más elevadas y peores condiciones de vida que La Paz, su población contaba con un nivel de vida mayor que el de las zonas rurales que rodeaban el altiplano, de las que provenían los migrantes, por lo que ha sido un factor de extraordinaria importancia en la creciente movilidad social de la clase mestiza. El Alto también es un centro de intensas interacciones entre los pueblos indígenas y no indígenas, para los que el español se ha vuelto la lengua de contacto, incluso para la predominante población aymara.

Al mismo tiempo, la integración de las economías regionales con las ciudades centrales, así como la eliminación de las viejas élites rurales españolas, han creado una élite regional mestiza más poderosa. De esta élite proviene la población mestiza urbana con movilidad ascendente, de la que ha surgido toda una generación de estudiosos con educación secundaria y universitaria. En tanto que algunos mestizos obviamente habían asistido a la

universidad desde su creación, eran una clara minoría, forzada a abandonar su lengua, cultura y orígenes para adaptarse a las normas de la "cultura blanca". La nueva estirpe de mestizos con educación, mucho más numerosa que nunca antes, ahora parece tener la opción de mantener sus lazos étnicos, de identificarse a sí mismos como indígenas y en ocasiones aun de hablar sus lenguas originarias, junto con el español. Así, estos mestizos urbanos proclaman su identidad como mestizos o como aymaras, quechuas u otro grupo indígena, rehusándose con ello a adoptar la identidad "blanca". Esto ha tenido profundas consecuencias sociales y políticas para Bolivia; se trata, también, de un desarrollo relativamente único para estándares latinoamericanos, y de que aun cuando la cantidad de hablantes monolingües de lenguas indígenas descienda, a mayores niveles educativos la identidad indígena sigue siendo una fuerza poderosa e incitante en la política nacional.

Desde las elecciones de 2002 hasta las presidenciales de diciembre de 2005, las clases indígenas y mestizas tomaron caminos y carreteras del país durante un extraordinario periodo de movilización popular. El estallamiento de la guerra del gas en 2003 se dio tras la caída del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre, a la que entonces siguió la tumultuosa presidencia, de un semestre, de Carlos Mesa. Su ceremonia de toma de poder en El Alto, y no en el palacio presidencial del centro de La Paz, fue un reconocimiento del poder de esta nueva movilización. No obstante que Mesa fue capaz de parar la sangría al retirar a la policía y al ejército del enfrentamiento contra los manifestantes, no pudo terminar por completo con los bloqueos; así que se le forzó a renunciar cuando fue obvio que no podía controlar el Congreso. Eduardo Rodríguez Veltzé, a la cabeza de la Corte Suprema, fue designado presidente interino en junio de 2005. Él pudo finalmente lograr cierto nivel de calma política, misma que no había existido durante dos años. Aunque la mayor parte de las encuestas preelectorales dieron a Evo Morales una pluralidad de votos potenciales para la presidencia, existía la creencia generalizada de que cualquier vuelta a negociaciones postelectorales en las cámaras llevaría al retorno de las masivas protestas indígenas populares. En este momento, la mayor parte de la élite decidió que era preferible dar una victoria total a Evo Morales, quien fue capaz de duplicar los cálculos del voto

preelectoral y de ganar las elecciones con 56% de votos, y quien se volvió el primer presidente en recibir más de 50% del sufragio en la era postmilitar. De los 2.9 millones de votos válidos emitidos en la elección presidencial de 2005, Morales obtuvo 1 500 000, y el MIP, 62 000. El MAS consiguió 12 de los 27 puestos al Senado y 72 de las 130 curules disponibles.

La elección de Evo Morales ha mostrado ser una transformación mucho más radical de lo que al inicio se supuso. Se esperaba que hubiera una gran participación de líderes políticos indígenas y mestizos en cargos de poder en el gobierno de La Paz, y así fue. Del mismo modo, dado el conflicto de largo tiempo en torno a la producción de coca, y la conexión que tiene Morales con los sindicatos de productores del Chapare, se esperaba que sucediera algún cambio en la política de la erradicación de la coca, a la par de una mayor independencia respecto a los Estados Unidos. Todo esto en efecto sucedió, incluso al grado de expulsar al embajador estadounidense; lo que fue menos esperado fue el rechazo total al programa privatizador que había dominado a las políticas gubernamentales desde la década de 1990. De manera lenta y cuidadosa, el gobierno de Morales ha vuelto a nacionalizar el gas y la producción petrolera, tomado todas las telecomunicaciones y las compañías de producción de electricidad, incluso las cooperativas nacionales; ha propuesto la eliminación de los planes privados de pensiones, recreado la compañía aérea nacional, nacionalizado dos refinerías suizas y ha impulsado de manera sistemática el control del Estado sobre los recursos minerales, desde el hierro hasta el litio. De manera lenta pero constante, el Estado se vuelve el actor dominante en la economía nacional mediante las compañías estatales que se han creado o revitalizado, programa que sólo un par de otras naciones latinoamericanas han lanzado, incluso cuando muchas rechazaron las políticas más extremas de la era neoliberal en los años noventa. Gran parte del apuntalamiento ideológico para esta nueva economía de Estado ha provenido del vicepresidente, Álvaro García Linera, un académico radical no indígena, que ha presionado por la socialización de la economía nacional, desde el principio de la primera administración de Morales.

El decreto más importante fue el de la nacionalización del gas y de los depósitos petrolíferos bolivianos, trabajados o explotados por diversas

compañías extranjeras, muchas de las cuales eran empresas estatales de otras naciones —sobre todo de la compañía brasileña Petrobras—. El 1° de mayo de 2006, el gobierno de Morales se apoderó de los *holdings* de gas de todas las principales compañías extranjeras; se le dio control activo sobre yacimientos e instalaciones a la YPFB, que había quedado como socia pasiva de las nuevas exploraciones y desarrollos de petróleo y gas. A todas las compañías que operaban en Bolivia se les retiró 50% de sus operaciones en manos de propietarios locales, para trasladarlas a la YPFB. Las compañías extranjeras aún administrarían las instalaciones, pero sólo se les pagaría 18% de las entradas totales para sus gastos de operación. El Estado tomaría 32% de la facturación, la YPFB otro 32% y el 18% restante se destinaría a regalías para el Estado, lo que efectivamente hacía que la proporción total de las ventas por petróleo y gas estatales se elevaran 50% (82% si tomamos en cuenta la parte de la YPFB). En mayo de 2007 el gobierno también se retiró del Banco Mundial, sosteniendo que este organismo apoyaba a esas multinacionales. Después, en mayo de 2008 se efectuó la nacionalización de la compañía italiana de telecomunicaciones Telecom, que desde 1995 había sido socia a 50% en la empresa Entel, propiedad del gobierno, y había administrado el monopolio de telecomunicaciones en Bolivia. Más tarde, en mayo de 2010, llegó la nacionalización de todas las compañías de electricidad.

Todas estas nacionalizaciones y regalías aumentadas inicialmente elevaron los ingresos del gobierno a un nivel impresionante. Asimismo, Bolivia ha corrido con un excedente comercial desde 2003 y, por tanto, ha acumulado reservas importantes de divisas. Sin embargo, la constante nacionalización de compañías extranjeras ha afectado gravemente la inversión directa extranjera en el país, que se ha mantenido a la baja desde la primera mitad de la década y ahora representa menos entradas de capital de las que se obtienen gracias a financiamientos extranjeros para ayuda, y por remesas de trabajadores en el exterior. Del mismo modo, el total de inversiones en capital extranjero pasó de 12.6% del PIB en 1999 a sólo 3.9% en 2012. Desafortunadamente, la menor importancia de las inversiones en capital extranjero tiene el potencial de impactar de manera negativa, a largo plazo, a la economía nacional, ya que

traen consigo nuevas tecnologías y recursos al fondo perdido para la exploración de nuevas reservas. Debido a que las exportaciones de minerales y de gas son sensibles a los precios mundiales, no queda claro si los ingresos por exportaciones de las compañías nacionalizadas y de los pocos productores privados serán suficientes para remplazar la falta de inversión extranjera en el desarrollo a largo plazo del país.

Al mismo tiempo, la ausencia de una inversión significativa, en especial en los productos elaborados con mano de obra intensiva, ha llevado a que Bolivia ostente uno de los mercados informales de mano de obra más grandes de América. En 2007 se estimó que 88% de la población boliviana no contaba con un plan de retiro y que 82% no obtenía el tradicional aguinaldo, garantía de los empleados en el sector formal. En el mismo año, sólo 27% de los bolivianos tenía un número de identificación tributaria (NIT). Pese al crecimiento reciente, que es sustancial, Bolivia no ha podido generar una cantidad significativa de empleos para modificar esta dinámica.

Además de sus nacionalizaciones, el gobierno de Morales también tuvo progresos relevantes en cuanto a proveer acceso a la tierra para los grupos más pobres de la sociedad boliviana. Aunque la Reforma Agraria de 1953 había devuelto la mayor parte de las tierras del altiplano, así como una gran proporción de la tierra de los valles, a sus trabajadores indígenas, las vastas áreas de tierras bajas no fueron tocadas, ya que, en general, no estaban desarrolladas. Sin embargo, la sistemática apertura de las regiones de Santa Cruz, Beni y Pando a la agricultura moderna y a la colonización, en el periodo posterior a 1953, llevó al surgimiento de una nueva zona de latifundios, ya que estas tierras se distribuyeron en escala masiva, de manera libre y a menudo corrupta, a las élites. En especial durante los regímenes militares, extensas zonas se otorgaron a individuos como propiedad privada. Ya durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada se reconoció que debía frenarse este sistema corrupto, no sólo en nombre de la justicia para los grupos indígenas de las tierras bajas, sino, al igual, por el bien de la mayor eficiencia económica de las regiones agrícolas comerciales, que ahora requerían de estas tierras abandonadas, propiedad privada. En 2002 se aprobó un nuevo Decreto de Reforma Agraria, diseñado para eliminar estos largos

trechos de tierra abandonada y devolver alguna parte de ella a los grupos indígenas de las tierras bajas, recientemente empoderados, así como a agricultores privados productivos. El nuevo gobierno de Morales dio un gran impulso a este programa, que entre 2006 y mediados de 2009 distribuyó unos 31 millones de hectáreas a 154 000 personas (cantidad de superficie unas cinco veces mayor que la que se distribuyó durante el periodo previo a 2006), con una proporción mayor que antes, entregada a pueblos indígenas.

El nuevo gobierno del MAS también se comprometió a realizar una realineación relevante en cuanto a la política internacional de Bolivia. Bajo el liderazgo de Evo Morales, Bolivia se ha distanciado de la esfera de influencia de los Estados Unidos como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial; esto ha llevado a una política exterior activista e independiente, en la que el gobierno confirma su alianza con grupos indígenas en el ámbito internacional, desde América Central hasta Europa del Norte. También ha propiciado una campaña para la protección ambiental sobre una plataforma internacional. Sin duda este gobierno ha tenido un papel mucho más activo en los asuntos internacionales que cualquier gobierno boliviano previo y ha sido más independiente de los Estados Unidos que cualquier régimen anterior.

Menos sorprendente que su programa de nacionalizaciones y de política exterior fue el empuje del MAS y de Evo Morales para crear una nueva Constitución que ampliara en gran medida tanto los conceptos de Estado plurinacional como de Estado descentralizado, tema principal de su partido y seguidores mucho antes de 2005. Ya que se votó por los delegados a la convención constituyente en una elección separada, se trató de un organismo mucho más radical y representativo que el Congreso nacional. Casi la mitad de los delegados eran menores de 40 años, alrededor de 34% eran mujeres y un significativo 56% se identificaba como parte de algún grupo indígena. Dada esta representación, era evidente que la carta magna generada por esta asamblea expresaría la mayor parte de las ideas favorecidas por los líderes indígenas radicales a lo largo de varias décadas. Durante un debate amargamente discutido, se redactó la nueva Constitución en 2008, y se aprobó por referéndum en 2009. Entró en vigor total para 2010, cuando por

primera vez en la historia de Bolivia los departamentos eligieron a sus propios gobernadores y legislaturas.

La Constitución de 2009 no sólo garantizó los derechos tradicionales de los gobiernos comunitarios indígenas y reforzó la descentralización mediante autonomías departamentales, regionales, comunales y municipales, sino que, sobre todo, fue una excelente expresión de las exigencias que los líderes mestizos e indígenas habían planteado a lo largo de los últimos 40 años. Estas demandas exigían el reconocimiento elemental de sus necesidades y deseos por el Estado y por la sociedad blanca de élite. Por encima de todo, convocaban al reconocimiento de su dignidad y valía como ciudadanos cabales, en especial aquellos que podían llevar sus orígenes a la época previa a la Conquista. El respeto, la dignidad y el reconocimiento de los derechos comunitarios individuales y tradicionales, así como de sus creencias, se declararon aspecto fundamental de la política estatal. No sólo se reconoció y subrayó la importancia de los grupos indígenas usuales del altiplano, sino que también se extendió la propuesta a los pueblos indígenas de las tierras bajas, e incluso se distinguió a las comunidades afro-bolivianas en cuanto al apoyo del Estado.

La Constitución de 2009 declara que Bolivia es un Estado unitario fundamentado en el derecho comunal plurinacional, democrático, descentralizado y con regiones autónomas (que a grandes rasgos incluía departamentos, municipios, regiones, grupos étnicos y comunidades de autogobierno). El artículo 5 estipula que las lenguas oficiales del Estado son el español y las otras 37 lenguas indígenas habladas en Bolivia, y que se requiere que los gobiernos nacional y local utilicen dos lenguas, español y una lengua indígena, dependiendo de las condiciones locales. La Constitución habla de “interculturalidad” como algo fundamental para el mantenimiento de un Estado unificado (artículo 98) y a lo largo de ella hay una constante repetición del tópico del respeto para individuos y comunidades, desde su modo de vestir hasta su sistema de creencias. De hecho, en la promulgación de esta Constitución se dice que el nombre oficial de Bolivia es Estado Plurinacional de Bolivia.

Los derechos civiles de los ciudadanos, asentados en el artículo 21, van más allá de los ítems usuales para incluir cuestiones tales como "la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad", así como la autoidentificación cultural. La nueva carta magna prohíbe cualquier discriminación de la ciudadanía debido a su lengua, raza, color, género, religión o cualquier otra característica humana. También delinea los detalles de un Estado de bienestar social muy ambicioso, que establece que el gobierno proveerá agua, alimento, atención a la salud gratuita, pensiones, vivienda y educación para toda su ciudadanía; incluso propone que el Estado deberá garantizar un medio ambiente saludable para todos y todas. De hecho, la Constitución contiene muchos artículos que estipulan la protección del medio ambiente, de la biodiversidad y una serie de observaciones relativas a estas preocupaciones modernas. Además de plantear todas las declaraciones usuales a favor de la familia, la Constitución también reconoce de manera específica las uniones libres estables con los mismos derechos de las parejas casadas de manera legal, en términos patrimoniales y de relaciones personales (artículo 63, inciso II).

Los derechos comunitarios a la tierra de las comunidades tradicionales indígenas deben estar respaldados por el Estado (artículo 30), al igual que su cosmología, medicina, rituales, símbolos y atuendos tradicionales, cuyo respeto e incluso promoción se asientan en el artículo 30, inciso IX; del mismo modo, se les permite ejercer sus propios sistemas políticos, judiciales y económicos, tal como se definen en su propia cosmología (artículos 30, 190-192). Incluso hay una sección completa dedicada a la protección de las culturas tradicionales como patrimonio nacional (artículos 98-101). El Estado debe también ser garante de la educación intra e intercultural, así como plurilingüe (artículo 30). En una ampliación de la autonomía verdaderamente inusual, el Estado también permite que las comunidades indígenas de originarios se declaren a sí mismas entidades autogobernadas, con independencia de los gobiernos municipal o departamental, con derechos de autogobierno iguales a los que ostentan estas instituciones. Todos los pueblos o comunidades indígenas amenazados con la extinción, así como aquellos grupos indígenas aislados y sin contacto, deben recibir protección, y a los

primeros, incluso se les debe permitir permanecer en aislamiento si así lo desean.

Claramente se trata de una "Constitución social", como se definiera antes en la Constitución mexicana de 1917, y en la boliviana de 1938. El derecho a la propiedad privada (individual y comunal) queda limitado por su necesidad de cumplir una función social, y no puede perjudicar el interés colectivo de la sociedad (artículo 56). Al igual, sanciona en específico el derecho del Estado a participar de manera directa en la economía para producir bienes y servicios (artículo 316). La Constitución da prioridad al capital nacional sobre el extranjero y estipula que toda inversión extranjera debe sujetarse, por completo y sin excepciones, al derecho boliviano (artículo 320). Además de reafirmar los tradicionales derechos sobre el subsuelo y los minerales, la Constitución contiene un capítulo entero sobre hidrocarburos, que deben quedar bajo el control exclusivo del Estado y de su representante, la compañía YPFB (artículos 359-368). Por último, en respuesta a la colocación de grupos del ejército estadounidense en el país, como parte de las campañas anticocaína, prohíbe también, de manera específica, la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional (artículo 10).

Junto con el voto obligatorio de todos los adultos —a partir de los 18 años — y del derecho significativo de los bolivianos en el extranjero de ejercer su voto en las elecciones presidenciales, la Constitución también permite que las comunidades indígenas utilicen sus normas tradicionales para elegir líderes, con la única intervención del Estado si el voto no fuera "igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio" (artículo 26). Los derechos a huelga y a la negociación colectiva también quedan garantizados. Por último, la organización política descentralizada del Estado boliviano, que había comenzado en 1995, se finalizó con la elección de gobernadores y legislaturas departamentales (artículos 277-279). La Constitución también da cabida a las regiones autónomas y a que se establezcan comunidades indígenas autónomas de "originarios", aunque sus límites y poderes parecen haber quedado registrados para una promulgación postconstitucional (artículos 289-296).

Además de la revisión de la Constitución, el régimen de Morales ha ampliado en gran medida los programas de bienestar, dando énfasis especial a las transferencias de ingresos con base en los fondos generados por las nacionalizaciones. El gobierno ha hecho un esfuerzo considerable por expandir los programas de redistribución del ingreso que comenzaron en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada. El programa de pensiones Bonosol, de los años noventa, se convirtió en Renta Dignidad, que provee de pensiones mínimas a todos los bolivianos mayores de 65 años, sin menoscabo de si han contribuido o no al plan de jubilación. Para mediados de 2012, unos 920 000 bolivianos de la tercera edad recibían esta pensión. Otro programa, que se vuelve común en América Latina, consiste en pagos en efectivo, condicionados a la asistencia a la escuela, llamados "bono Juancito Pinto", que se otorgan a familias que mantengan a sus hijos en el colegio. Por último, se instauró un programa llamado "bono Juana Azurduy", que otorga fondos a las mujeres embarazadas, para que obtengan exámenes médicos trimestrales y apoyo postparto; está diseñado para reducir la alta incidencia de mortalidad infantil y muerte materna. Mientras que los programas anteriores se generan con fondos gubernamentales, el programa Azurduy se sostiene por importantes financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo. El que estos programas resulten significativos puede verse tanto en términos de su cobertura como en términos de la porción del PIB que reciben. En 2010, Renta Dignidad, por ejemplo, daba cuenta de 1.9% del PIB (cifra muy alta para este tipo de transferencia condicional de efectivo); el Bono Juancito Pinto, de 0.3%, y el bono Juana Azurduy, de otro 0.2%. El programa Pinto otorgó pagos en efectivo a 1 700 000 estudiantes de escuelas primarias en 2012, y las nuevas transferencias de efectivo Azurduy llegaron a 683 000 madres para el año 2012. En conjunto, estos fondos, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, financiaron a 3.3 millones de bolivianos, o a 31% de la población, para mediados de 2012. No obstante, en lugar de que el Estado proveyera estos fondos de los programas de privatización, ahora provienen del aumento en las regalías generadas por el Estado mediante la renacionalización de diversas industrias.

En muchos sentidos el gobierno de Morales ha sido afortunado debido a lo oportuno de su momento. La creciente demanda china de materias primas ha mantenido altos los precios internacionales de las exportaciones minerales básicas, y las entradas gubernamentales, en aumento. El hecho de que el gobierno brasileño de Lula tuviera simpatías por el régimen de Morales implicó que la nacionalización de los yacimientos de gas pudiera lograrse con relativamente poco conflicto, manteniendo el compromiso de Petrobras de exportar gas, aun cuando ya no estaba dispuesta a invertir generosamente en nuevas exploraciones o instalaciones. El ambiente internacional también era propicio. Los Estados Unidos habían abandonado una política intervencionista activa en América Latina desde principios de siglo, debido a su concentración en Medio Oriente. Por último, la existencia de gobiernos amigos en Venezuela y Ecuador, a la par de gobiernos a la izquierda del centro en Argentina, Brasil y, durante la mayor parte del periodo, Chile, ha ofrecido a Bolivia un buen espacio en lo internacional, con pocas consecuencias negativas inmediatas ante la nacionalización de las compañías extranjeras, muchas de las cuales eran propiedad estatal. Tampoco ha dañado a Bolivia, entre sus vecinos, el asumir posturas activas antiestadounidenses en la arena internacional.

Sin embargo, ha habido costos. El partido MAS y sus líderes han tenido la creciente intención de atacar a instituciones democráticas fundamentales, comprometidos con su visión de una sociedad revolucionaria. No queda claro cuán lejos llegarán en esta dirección el partido y sus líderes para justificar sus reformas sociales y económicas. También han provocado tensiones políticas constantes en el interior. Por último, su vuelta a la nacionalización de la explotación de los recursos naturales, así como la reconstrucción de empresas estatales, se ha llevado a cabo con altos costos económicos; ha significado la pérdida de la inversión extranjera directa, y el mercado de capital nacional tampoco se ha desarrollado lo suficiente como para lograr un crecimiento económico sostenido, a largo plazo. Lo anterior ha sucedido al tiempo que el gobierno ha perdido o expulsado a algunos de sus técnicos expertos y ha debilitado a la burocracia justo cuando la necesita para llevar a término estas nacionalizaciones de manera eficiente.

Las recientes convocatorias para juzgar a algunos presidentes previos elegidos de manera democrática por las políticas económicas que emprendieron son ejemplo de un régimen que se siente amenazado por las élites anteriores y que en ocasiones no está dispuesto a negociar con fuerzas de oposición. Los ataques al eficiente y crucial Tribunal Supremo Electoral, después de la elección de abril de 2010, cuando el voto no produjo los resultados deseados por el partido en el gobierno, fue otra expresión inquietante de ciertas tendencias autoritarias dentro del MAS. Para terminar, la campaña bastante consistente para socavar a los líderes de oposición electos en los ámbitos nacional, departamental y municipal sugiere la existencia de un gobierno que aún enfrenta problemas para practicar las normas de la política democrática de manera normal.

Dada la fragmentación del viejo sistema político, y de la compleja organización política local, nueva, en la que se elige a gobernadores estatales y a legisladores desde una serie de tipos de unidades diferentes —desde lo geográfico hasta lo organizativo—, la política nacional se ha vuelto mucho más complicada desde la elección de 2002. Los viejos partidos en esencia no existen, y han surgido nuevas coaliciones para hacer frente al MAS. En el plano nacional éste aún domina; obtuvo casi dos terceras partes del voto en la elección presidencial de 2009 y en la votación para la convención constitucional. Pero en la legislatura nacional, así como en las estatales, no tiene el mismo dominio y debe compartir el poder con varios partidos. Durante las elecciones presidenciales de 2009 se formó una coalición temporal de centro derecha, la PPB-CN (Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional), bajo el liderazgo de Manfred Reyes Villa, que obtuvo 26% del voto y una representación muy significativa en el Congreso nacional —unos 37 de los 130 diputados y 10 de los 36 senadores—. En el área provincial surgieron una serie de partidos locales que compartieron el poder con el MAS. De entre éstos, muchos de creación reciente tienen presencia en más de una provincia, como el Partido Verde de Bolivia y el MSM (Movimiento Sin Miedo). El MSM tiene base en La Paz y en las elecciones locales de 2010 se anexó las municipalidades de La Paz y Oruro. Aunque el MAS sigue siendo el partido nacional más grande y continúa su

gobierno de manera segura, con un claro apoyo de la mayoría, en los ámbitos provincial y municipal divide su poder con una serie de partidos locales. Varias provincias y municipalidades importantes son controladas por la oposición. De este modo, a pesar de su dominio en el Estado, de su capacidad para ganar las elecciones presidenciales y de controlar la asamblea nacional, el MAS enfrenta una oposición constante de grupos locales, al tiempo que no parece haberse consolidado como partido monolítico, a la usanza del viejo PRI en México o del PT en Brasil.

El partido mismo también ha comenzado a deteriorarse, conforme algunos líderes indígenas y mestizos se comportan de manera más independiente y más local en cuanto a sus compromisos políticos. El MAS ha tenido problemas para controlar las ciudades e incluso algunos de sus centros tradicionales de apoyo. Así, durante las elecciones departamentales y municipales de abril de 2010, la oposición obtuvo apoyo crítico en El Alto, y también ganó la ciudad de La Paz. El MAS, asimismo, enfrenta algunas dificultades en el altiplano, donde líderes de la oposición se enfrentan a los candidatos del partido nacional. También perdió tres departamentos —Santa Cruz, Tarija y Beni— ante sus contrincantes. Pero a pesar de todos estos reveses, aun en los departamentos que perdió en la "media luna" el MAS llegó en un respetable segundo lugar. En estos departamentos de las tierras bajas, que son el centro neurálgico de la agricultura comercial, así como de los depósitos petrolíferos y de gas natural, el MAS ahora está bien instituido. De este modo, no obstante el inevitable debilitamiento del movimiento, aún es un poderoso partido nacional, encabezado por líderes indígenas recientemente empoderados. Además, el propio Morales se considera todavía un líder dinámico y carismático, con el apoyo mayoritario de la población. Aunque existen límites a los periodos de gobierno en la Constitución de 2009, Evo Morales y Álvaro García han declarado que su primera administración sucedió antes de que se estipularan, y por tanto se presentarían para un tercer periodo consecutivo en las elecciones de octubre de 2014, que ganaron con 61% de los votos.

CRONOLOGÍA POLÍTICA

2500 a.C.	Comienza la agricultura de asentamiento.
1800 a.C.	Aparición de la cerámica.
800 a.C.	Chavín, primera civilización panandina.
100 a.C.	Estados regionales: Tiahuanaco temprano.
600-1200 a.D.	Estado de Tiahuanaco (Formativo Medio).
1400	Surgimiento de los reinos aymaras.
1460	Conquista inca de los reinos aymaras y creación de Kollasuyo.
1470	Revuelta aymara contra los incas.
1532	Llegan los españoles a Perú.
1537	Rebelión de Manco Inca.
1538	Comienza el asentamiento español en el altiplano boliviano.
1545	Descubrimiento de plata en el Cerro Rico (Potosí).
1558	Creación de un gobierno independiente para la región, con el nombre de Audiencia de Charcas.
1560	Colonización final de las regiones bolivianas de frontera.
1572-1576	Visita del virrey Francisco Toledo al Alto Perú: principios de la mita, amalgama de minerales de plata por mercurio y reasentamiento forzado de la población india.
1580	Se comienza a erigir la basílica para la Virgen de Copacabana en el lago Titicaca.

1584	Publicación de la primera gramática aymara.
1624	Creación de una universidad en Chuquisaca.
1650	Comienza una crisis en la producción de plata en Potosí, que durará un siglo.
1695	Descubrimiento de plata cerca de Oruro.
1734	Se extiende el impuesto tributario a los forasteros y a los yanaconas.
1751	Creación del Banco de San Carlos en Potosí, para la compra de minerales.
1776	Establecimiento del virreinato de Río de La Plata en Buenos Aires y transferencia de la Audiencia de Charcas, de Perú al nuevo virreinato.
1780-1782	Rebelión de Túpac Amaru en ambos Perúes. Túpac Katari, Tomás Katari y Andrés Amaru, líderes del Alto Perú, toman parte en la rebelión. Revuelta criolla, chola e india en Oruro, el único movimiento multiétnico presente en la rebelión.
1784	Reorganización administrativa de la Audiencia de Charcas, con la creación de intendentes.
1796	España en guerra contra Inglaterra; principios de una crisis mayor en el comercio internacional, que afecta severamente al Alto Perú.
1808	Invasión francesa a España y colapso del gobierno real.
1809	Rebelión de la élite en Chuquisaca (el 25 de mayo). Rebelión popular por la independencia en La Paz (16 de julio).
1809-1825	Guerras de independencia en el Alto Perú.
1810	Independencia del virreinato de Río de La Plata (25 de mayo) y regreso de la Audiencia de Charcas, reconquistada, al control de Lima y al viejo virreinato de Perú.

1824	Batalla de Ayacucho. Sucre y su ejército colombiano derrotan al último ejército realista en Alto Perú, en diciembre.
1825	Liberación del Alto Perú y declaración de la independencia boliviana (6 de agosto).
1825-1828	Primer gobierno republicano al mando de Antonio José de Sucre y nacionalización de la Iglesia católica romana.
1829-1839	Gobiernos dominados por Andrés de Santa Cruz.
1836-1839	Bolivia forma parte del gobierno de la Confederación Perú-Bolivia, finalmente derrotado por las invasoras tropas chilenas.
1841	La batalla de Ingavi pone fin a la participación peruana y boliviana en los asuntos políticos internos mutuos.
1841-1847	Gobiernos dominados por José Ballivián.
1847-1855	Gobiernos dominados por Manuel Isidoro Belzu.
1850	Principios de la moderna industria minera de plata.
1860-1870	Descubrimiento, por los chilenos, de grandes depósitos minerales de guano, plata y nitratos en la provincia boliviana de Atacama.
1864-1870	Gobierno de Mariano Melgarejo. Intensas negociaciones con gobiernos y empresarios extranjeros.
1879	Invasión chilena a los puertos bolivianos del Pacífico; principios de la Guerra del Pacífico.
1880	Batalla de Tacna (26 de mayo) y fin de la participación boliviana en la Guerra del Pacífico, con la derrota total de los ejércitos bolivianos. Aprobación de una nueva Constitución que se volvería la carta magna fundamental de la nueva era civil; duraría hasta 1938.
1880-1899	Gobiernos civiles bajo el control del Partido Conservador. Dominio de los propietarios de las minas

de plata en el gobierno y el Congreso.

1899	Revolución federal del Partido Liberal que derrocó a los conservadores y a la oligarquía ligada a Sucre. La ciudad capital se vuelve La Paz de manera efectiva, para toda actividad gubernamental de relevancia.
1899-1903	Las rebeliones separatistas de trabajadores del caucho, en el territorio de Acre, llevan por último a la cesión de territorio a Brasil.
1899-1920	Gobiernos civiles bajo el control del Partido Liberal. Dominio del líder liberal Ismael Montes.
1902	El estaño supera a la plata como producto de exportación boliviana de mayor valía; da cuenta de más de 50% del valor de todos los productos de exportación.
1920-1934	Gobiernos civiles bajo el control de los partidos republicanos. Periodo cumbre en la producción de estaño en la década de 1920, así como de la Gran Depresión. Los líderes clave fueron Bautista Saavedra, Hernando Siles y Daniel Salamanca.
1932-1935	Guerra con Paraguay por el territorio del Chaco. La derrota más costosa de la historia boliviana.
1936-1939	Gobiernos militares al mando de David Toro y de Germán Busch, de naturaleza populista de izquierda, conocidos como “socialismo militar”.
1937	Nacionalización de la Standard Oil de Bolivia y creación de la YPFB, la compañía petrolera nacional del país.
1939-1943	Régimen civil conservador al mando de Enrique Peñaranda.
1942	Fundación del partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
1943-1946	Gobierno radical militar-MNR, bajo el liderazgo de Gualberto Villarroel.

1944	Fundación del primer sindicato nacional de trabajadores mineros: Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).
1945	Primer Congreso Nacional Campesino.
1946	"Tesis de Pulacayo"; declaración radical del congreso de la FSTMB, después del derrocamiento de Villarroel.
1946-1952	Regímenes conservadores civiles-militares.
1952	Revolución Nacional del MNR en abril.
1952-1964	Gobiernos civiles al mando de los líderes del MNR Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo. Nacionalización de las minas y creación de la Comibol, reforma agraria en 1953, sufragio universal y creación de la federación nacional del trabajo Central Obrera Boliviana (COB).
1964-1970	Gobiernos militares populistas al mando de René Barrientos y Alfredo Ovando.
1967	Constitución, modificada en 1994.
1965-1967	El Che Guevara en Bolivia.
1970-1971	Gobiernos militares populistas radicales, al mando de Juan José Torres, y establecimiento de un régimen de "asamblea popular".
1971-1978	Régimen militar conservador al mando de Hugo Banzer.
1978-1979	Regímenes militares de transición y reorganización política de partidos civiles.
1979-1980	Elecciones nacionales y surgimiento de Siles Zuazo a la cabeza de una coalición de izquierda de partidos nuevos y viejos. Gobiernos civiles temporales a cargo de Walter Guevara Arze y Lydia Gueiler.
1980-1982	Régimen militar reaccionario con masivas protestas populares.
1982-1985	Se elige presidente a Hernán Siles Zuazo con la vuelta al régimen civil, pero con el problema de la hiperinflación.

1985-1989	Última administración de Víctor Paz Estenssoro e implementación de un "choque ortodoxo" radical, el 29 de agosto de 1985.
1989-1993	Jaime Paz Zamora y gobierno del MIR.
1993-1997	Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR en el poder. Leyes de participación popular y descentralización. Privatización y primer plan universal de pensiones (Bonosol).
1995	Fundación del partido MAS (Movimiento al Socialismo).
1997-2001	Hugo Banzer y la ADN en el poder.
1997	Se elige a Evo Morales al Congreso.
2002-2006	Segundo periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada inconcluso, con Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) completándolo.
2006-2010	Primera administración de Evo Morales. Nacionalización del gas natural y la electricidad. Reconstrucción de YPFB y la Comibol. Se crean el Plan Dignidad y otros programas de transferencia condicional de efectivo.
2009	Nueva Constitución plurinacional.
2010	Segunda administración de Evo Morales.

APÉNDICE ESTADÍSTICO

Cuadro 1. Población de Bolivia en los departamentos principales y ciudades capitales según el censo nacional, 1846-2001

Departamento	*Capital*	*1846*	*1900*	*1950**	*1976**	*1992*	*2001*	*2010*	*2012*****	*Km²*
La Paz		412 867	426 930	854 079	1 465 078	1 900 786	2 350 466	2 839 946	2 706 351	133 985
	La Paz**	42 849	52 697	321 073	654 713	713 378	792 499	835 361	766 468	
	(El Alto)					405 492	694 749	953 253	848 452	
Cochabamba		279 048	326 163	452 145	720 952	1 110 205	1 455 711	1 861 924	1 758 143	55 631
	Cochabamba	30 396	21 881	80 795	205 002	397 171	778 422	618 376	632 013	
Oruro		95 324	86 081	192 356	310 409	340 114	391 870	450 814	494 178	53 588
	Oruro	5 687	13 575	62 975	124 121	183 422	202 010	216 724	264 943	
Potosí		243 269	325 615	509 087	657 743	645 889	709 013	788 406	823 517	118 218
	Potosí	16 711	20 910	45 758	77 334	112 078	133 268	154 693	191 302	
Chuquisaca		156 041	196 434	260 479	358 516	453 756	531 522	650 570	576 153	51 524
	Sucre	19 235	20 907	40 128	62 207	131 769	194 888	284 032	261 210	
Santa Cruz		78 581	171 592	244 658	710 724	1 364 389	2 033 739	2 785 762	2 655 084	370 621
	Santa Cruz	6 005	15 874	42 746	256 946	697 278	1 114 095	1 616 063	1 454 539	
Tarija		63 800	67 887	103 441	187 204	291 407	391 226	522 339	482 196	37 623
	Tarija	5 129	6 980	16 869	39 087	66 900	135 651	194 313	205 375	
Beni		48 406	25 680	71 636	168 367	276 174	362 521	445 234	421 198	213 564
	Trinidad	3 194	2 556	10 759	27 583	57 328	75 285	92 587	106 596	
Pando		1 560	7 228	16 284	34 493	38 072	52 525	81 160	110 436	63 827
	Cobija***				1 725	10 001	20 987	41 948	46 267	
Total nacional		1 378 896	1 633 610	2 704 165	4 613 486	6 420 792	8 274 325	10 426 155	10 027 254	1 098 581

* Los censos de 1950 y 1976 se han corregido en el plano departamental en algunas publicaciones recientes. Véase INE, cuadro 2.01.11, "Bolivia: población por censos según departamento… censos de 1950-1976-1992-2001".

** Para el censo de 1992, la ciudad de La Paz pierde el distrito de El Alto, que se vuelve independiente en 1985.

*** La provincia de Pando no tenía centros urbanos significativos antes de 1976.

**** INE, Bolivia: Características de población y vivienda, Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, cuadro 1.3 y para las ciudades, véase <http://censosbolivia.ine.gob.bo/censofichacomunidad/>.

Cuadro 2. Producción de plata por década en Bolivia (en marcos de plata), 1550-1909

Década	*Producción anual promedio*	*Rendimiento máximo anual*	*Rendimiento mínimo anual*
1550-1559	278 055	379 244	207 776
1560-1569	241 348	284 443	216 516
1570-1579	278 093	613 344	114 878
1580-1589	750 073	865 185	668 517
1590-1599	803 272	887 447	723 591
1600-1609	*762 391*	*844 153*	*624 666*
1610-1619	666 082	746 947	620 477
1620-1629	590 900	646 543	536 473
1630-1639	598 287	793 596	530 674
1640-1649	520 859	619 543	463 799
1650-1659	461 437	523 604	424 745
1660-1669	362 425	398 459	321 889
1670-1679	343 478	380 434	289 216
1680-1689	370 646	409 338	326 904
1690-1699	290 526	375 459	236 935
1700-1709	*198 404*	*226 186*	*178 087*
1710-1719	152 696	198 682	114 310
1720-1729	145 555	200 693	119 576
1730-1739	140 186 e*	169 707	82 811
1740-1749	92 119 e	111 947	81 081
1750-1759	123 864 e	126 957	115 373
1760-1769	142 114	158 883	117 323
1770-1779	170 381	242 067	150 746
1780-1789	378 170	416 676	335 848
1790-1799	385 283	404 025	369 371
1800-1809	297 472	371 416	194 535
1810-1819	208 032	338 034	67 347
1820-1829	156 110	177 727	132 433

(continúa)

Cuadro 2. *(concluye)*

Década	*Producción anual promedio*	*Rendimiento máximo anual*	*Rendimiento mínimo anual*
1830-1839	188 319	228 154	169 035
1840-1849	191 923	256 064	142 029
1850-1859	201 482	224 313	189 573
1860-1869	344 435 e	391 304	312 174
1870-1879	955 629 e	1 150 770	391 304
1880-1889	1 111 568 e	1 660 804	597 686
1890-1899	1 655 762	2 630 907	1 202 927
1900-1909	799 791	1 288 452	385 522

Fuentes: Peter Bakewell, "Registered Silver Production in Potosí District, 1550-1735", *Jahrbuch für geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft lateinamerikas* 12 (1975), cuadro 1, pp. 92-97; Ernesto Rück, *Guía general de Bolivia. Primer año* (Sucre, 1865), pp. 170-171 para 1755-1859; [Lamberto de Sierra], *"Manifiesto" de la plata extraída del cerro de Potosí, 1556-1800* (Buenos Aires, 1971), pp. 35-37 para los años 1735-1754; Adolf Soetbeer, *Edelmetallproduktion und werthverhältniss zwischen gold und silber seit der entdeckung Amerika's bis zur gegenwart* (Gotha, 1879), pp. 78-79 para 1860-1875; *The Mining Industry, Its Statistics, Technology and Trade*, vol. I (1892), p. 207, vol. II (1893), p. 333 y vol. VII (1898), p. 203 para 1876-1884; República de Bolivia, Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y Propaganda Geográfica, *Geografía de la república de Bolivia*, La Paz, 1905, pp. 354-355 para 1895-1905, y Walter Gómez, *La minería en el desarrollo económico de Bolivia, 1900-1970*, La Paz, 1978, pp. 218-220 para 1905-1909.

Notas: *La letra "e" significa producción estimada. Todas las cifras posteriores a 1859 se han convertido de kilogramos a marcos, utilizando la siguiente conversión: 230 gramos = 1 marco. Ya que no existen datos de producción para los años 1734-1755, utilicé las cifras fiscales que aparecen en Serra. Se utilizó un multiplicador de 5.2 para convertir pesos corrientes a marcos de plata; esta cantidad fue la más alta en un rango de proporciones entre las cifras de producción de Rücks y los recibos de impuestos de Serra para 1756-1760.

Cuadro 3

Producción de estaño en Bolivia, 1900-2008

Década	*Producción anual promedio*	*Rendimiento máximo anual*	*Rendimiento mínimo anual*
1900-1909	14 909	21 342	9 739
1910-1919	24 710	29 100	21 324
1920-1929	33 216	47 191 (1929)	19 086
1930-1939	25 864	38 723	14 957 (1933)
1940-1949	38 827	43 168	33 800
1950-1959	28 861	35 384	18 013
1960-1969	24 705	29 961	19 718
1970-1979	29 731	32 626	25 568
1980-1989	18 557	27 655	8 128 (1987)
1990-1999	14 630	18 634	11 308
2000-2009	16 142	19 574	12 039
2010-2012	20 087	20 372	19 701

Fuentes: Walter Gómez, *La minería en el desarrollo económico de Bolivia, 1900-1970*, La Paz, 1978; James W. Wilkie y Peter Reich (eds.), *Statistical Abstract of Latin America*, Los Ángeles, 1980, vol. X, p. 255 para 1971-1976; U.S. Department of the Interior, *Minerals Yearbook, 1978-1979*, Washington, 1980, vol. I, p. 926 para 1977-1979; Ministerio de Minería y Metalúrgica, *Estadística del Sector Minería y Metalúrgica, 1980-2008*, La Paz, 2009, cuadro 11.1, pp. 39-41 para 1980-2008, e INE, <http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=40106> para los años 2000-2012.

Cuadro 4. Producción de petróleo
y de gas natural en Bolivia

Año	*Petróleo*[1]	*Gas*[2]
1980		79.0
1981		78.0
1982		81.0
1983		84.3
1984		92.0
1985		89.0

(continúa)

Cuadro 4. *(concluye)*

Año	*Petróleo*[1]	*Gas*[2]
1986		92.0
1987		91.4
1988		98.2
1989		107.4
1990		107.0
1991	8.1	105.2
1992	7.8	107.6
1993	8.1	107.6
1994	9.4	115.8
1995	10.4	116.4
1996	10.7	117.6
1997	11.0	106.5
1998	12.6	109.7
1999	10.7	92.2
2000	10.1	127.0
2001	11.4	186.3
2002	11.3	226.7
2003	12.2	261.3
2004	14.2	362.2
2005	15.4	442.7
2006	14.9	474.4
2007	15.0	505.0
2008	14.2	526.0
2009	12.3	451.6
2010	12.6	527.0
2011	13.0	571.6
2012	15.1	652.4

Fuente: Entre 1991 y 2008, INE, <http://www.ine.gov.bo/indice/general.aspx?codigo=40105>. Consultado el 14 de febrero de 2014; para el periodo 1980-1990, US Energy Information Administration, <http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=26&aid=2&cid=BL,&syid=1980&eyid=2008&unit=BCF>.

Notas: [1] En millones de barriles.

[2] En millones de pies cúbicos.

Cuadro 5. Indicadores socioeconómicos básicos

Indicador	*Cifra*	*Año*
Cálculo actual de población, INE (millones)	10.6	2014
Densidad poblacional por km²	8.6	2005
Porcentaje de población urbana	66%	2010
Porcentaje promedio anual de crecimiento poblacional	1.9%	2010
Tasa global de fecundidad (en mujeres de 15 a 45 años)	3.3	2010
Porcentaje de población entre 0 y 14 años	39%	2001
Tasa bruta de natalidad (por cada mil habitantes)	26.3	2010
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil habitantes)	7.3	2010
Mortalidad materna (por cada 100 000 nacidos vivos)	180	2008 uw
Esperanza de vida al nacimiento (en años)	66.3	2010
Mortalidad infantil (menores de 1 año por cada 1 000 nacidos vivos)	42	2010
Tasa de mortalidad de menores de 5 años (por cada 1 000 nacidos vivos)	87	2003 u
Porcentaje de menores bajos de peso para su edad	5%	2011
Porcentaje de menores desnutridos de menos de 3 años	26%	2008 u
Porcentaje de menores de 5 años que tuvieron diarrea aguda	25%	2009
Porcentaje de menores de 1 año vacunados con la tercera dosis de DPT	80%	2012 u
Porcentaje de menores de 1 año vacunados con la tercera dosis contra la polio	83%	2009
Porcentaje de menores de 1 año vacunados con la BCGN	98%	2008 u
Porcentaje de nacimientos atendidos por profesionales de la salud	90%	2008
Porcentaje de mujeres embarazadas con atención prenatal adecuada	46%	2012 u
Porcentaje de población que no recibe atención médica	22%	2000
Índice de Desarrollo Humano (ONU)	0.675	2012 un
Coeficiente de Gini de desigualdad en ingresos	0.563	2007
Porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza	51.3	2009
Porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza extrema	26.1	2009
PIB (US$ millones)	$13 223	2012 nu
Ingreso nacional bruto per cápita (US$)	$1 284	2012 nu
Valor de las exportaciones (bienes y servicios) (US$ millones)	$11,967	2012 bc
Valor de las importaciones (US$ millones)	$8,281	2012 bc
Balanza comercial (US$ millones)	$3,687	2012 bc
Deuda externa total (US$ millones)	$3,582	2012 bc

(continúa)

Cuadro 5. *(continúa)*

Indicador	*Cifra*	*Año*
Porcentaje de la población económicamente activa (PEA)		
en agricultura	31.2%	2009
en minería	1.0%	2009
en la construcción	7.4%	2009
en la industria	11.3%	2009
en comercio y servicios	49.1%	2009
Porcentaje de la PEA en el sector informal	58.5%	2011 u
Porcentaje de la población que tiene una cédula de identidad	79.0%	2012
Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable entubada	68%	2012
Porcentaje de viviendas con acceso a instalaciones sanitarias interiores	57%	2012
Porcentaje de viviendas con acceso a electricidad	82%	2012
Porcentaje del PIB per cápita gastado en educación (primaria)	18.5%	2011 bm
Porcentaje de personas analfabetas de uno y otro sexo (mayores de 15 años)	13.2%	2001
Población en escuelas públicas inicial, primaria y secundaria (en millones)	2,708	2011 u
Porcentaje de menores en edad escolar que asisten a la escuela primaria (inscripción neta)	82%	2011 u
Porcentaje de menores en edad escolar en educación secundaria (inscripción neta)	67%	2011 u
Años promedio de escolaridad completa (15 años y mayores)	9.2	2011 u
población urbana	10.6	2011 u
población rural	5.9	2011 u
Lengua más hablada (6 años y más)		
español	58.3%	2000
aymara	15.7%	2000
quechua	22.9%	2000
guaraní	0.6%	2000
otras lenguas nativas	0.4%	2000
lenguas extranjeras	2.0%	2000
Etnicidad de la población, 15 años y más (autoidentificación)		
quechua	1 555 641	2001
aymara	1 277 881	2001
chiquitano	112 216	2001

(continúa)

Cuadro 5. *(concluye)*

Indicador	*Cifra*	*Año*
mojeño	78 359	2001
guaraní	43 303	2001
otras etnias indígenas	75 237	2001
Porcentaje de población católica	78	2001
Porcentaje de población protestante/evangélica y otras denominaciones cristianas	19	2001

Notas: A menos que se indique lo contrario, todas las cifras provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE). Todas las estadísticas con una u provienen de la UDAPE (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas), gubernamental; todas las que tengan bc provienen del Banco Central de Bolivia. Todas las que incluyen bm son del Banco Mundial; las que tienen nu son de Naciones Unidas, y con uw del Institute of Health Metrics & Evaluation, University of Washington, Seattle.

BIBLIOGRAFÍA

I. OBRAS BÁSICAS

Existen varias obras generales que ofrecen un planteamiento coherente del desarrollo nacional. Las obras clásicas de historia más importantes e influyentes son: Alcides Arguedas, *Historia general de Bolivia* (La Paz, 1922), y Enrique Finot, *Nueva historia de Bolivia* (Buenos Aires, 1946). Una visión alternativa de la historia nacional la ofrecen Xavier Albó y Josep M. Barnadas, *La cara campesina de nuestra historia* (La Paz, 1984).

Sobre la economía y la sociedad se pueden ver obras más especializadas que incluyen: Luis Peñaloza, *Nueva historia económica de Bolivia* (7 vols., La Paz, 1981-1987); Guillermo Lora, *Historia del movimiento obrero boliviano* (La Paz, 1980); León Enrique Bieber, *Las relaciones económicas de Bolivia con Alemania, 1880-1920* (Berlín, 1984), y su *Pugna por influencia y hegemonía. La rivalidad germano-estadounidense en Bolivia, 1936-1946* (Fráncfort del Meno, 2004). Sobre la evolución de la población boliviana, véanse Asthenio Averanga Mollinedo, *Aspectos generales de la población boliviana* (3a. ed., La Paz, 1998), y Augusto S. Solís Sánchez, *La población de Bolivia* (La Paz, 2001),

Sobre política en general debe verse: Rossana Barragán, *Las asambleas constituyentes en la historia de Bolivia* (La Paz, 2006); Mario Rolón Anaya, *Política y partidos en Bolivia* (3a. ed. rev., La Paz, 1999), y Carlos Hugo Cordero Carraffa, *Historia electoral de Bolivia, 1952-2007* (La Paz, 2007). La mejor obra sobre relaciones internacionales es la de Valentín Abecia Baldivieso, *Las relaciones internacionales en la historia de Bolivia* (2a. ed., 2 vols., La Paz, 1986); véase también Eduardo Caviers F. y Fernando Cajias

de la Vega (eds.), *Chile-Bolivia, Bolivia-Chile: 1820-1930. Desarrollos políticos, económicos y culturales* (Valparaíso, 2008).

Sobre cultura véase: Enrique Finot, *Historia de la literatura boliviana* (4a. ed. rev., La Paz, 1975); Blanca Wiethüchter y Alba María Paz-Soldán, *Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia* (La Paz, 2002); Teresa Gisbert, *Literatura virreinal en Bolivia* (La Paz, 1963); Teresa Gisbert y José de Mesa, *Historia del arte en Bolivia* (La Paz, 2012); Perla Zayas de Lima, *La novela indigenista boliviana de 1910-1960* (Buenos Aires, 1985); Teresa Gisbert, *Bolivia: Monumentos históricos y arqueológicos* (México, 1970); Pedro Querejazu (ed.), *Pintura boliviana del siglo XX* (Milán, 1989); José Sánchez-H., *The Art and Politics of Bolivian Cinema* (Lanham, Maryland, 1999). Finalmente, la filosofía es el tema de Guillermo Francovich, *La filosofía en Bolivia* (Sucre, 1945).

Sobre geografía de Bolivia el examen más reciente y completo es el de Ismael Montes de Oca, *Geografía y recursos naturales de Bolivia* (3a. ed., La Paz, 1997). Las zonas ecológicas se examinan en C.E. Brockman (ed.), *Perfil ambiental de Bolivia* (La Paz, 1986).

II. MUNDO PRECOLOMBINO Y COLONIAL

Las bases agrícolas de las civilizaciones avanzadas del altiplano se han resumido en Alan L. Kolata, *The Tiwanaku: Portrait of an Andean Civilization* (Cambridge, 1993), y en los dos volúmenes que editó, *Tiwanaku and Its Hinterland. Archaeology and Paleoecology of an Andean Civilization* (2 vols., Washington, D.C., 1996-2000). Véanse, de Juan Albarracín-Jordán, *Tiwanaku, arqueología regional y dinámica segmentaria* (La Paz, 1996), y de Juan Albarracín-Jordán y James Edward Mathews, *Asentamientos prehispánicos del Valle de Tiwanaku* (La Paz, 1990). Entre los numerosos estudios regionales precolombinos que se han publicado, véase, por ejemplo: Charles Stanish, *Ancient Titicaca: the evolution of complex society in southern Peru and northern Bolivia* (Berkeley, 2003). Los grupos aymara de antes de la Conquista, que controlaban las salinas de Uyuni, han sido

estudiados por Patrice Lecoq, *Uyuni prehispanique. Archeólogie de la Cordillère intersalar (Sud-Ouest Bolivien)* (Oxford, 1999).

Para interpretar la naturaleza de la civilización andina durante su desarrollo más completo antes de la Conquista española, la obra de John Murra ha sido fundamental. Véase su *Formaciones políticas y económicas en el mundo andino* (Lima, 1975); "An Aymara Kingdom in 1576", en *Ethnohistory* 15:2, 1968, su edición de García Diez de San Miguel, *Visita hecha a la provincia de Chuquito*, *1576* (Lima, 1964), y más recientemente su edición de *Visita de los valles de Sonqo en los yunka de coca de La Paz [1568-1570]* (Madrid, 1991). Thierry Saignes, *En busca del poblamiento* étnico *de los Andes bolivianos (siglos XV y XVI)* (La Paz, 1986). Sobre el papel de los metales en las sociedades andinas amerindias antes y después de la Conquista, véase Mary Money, *Oro y plata en los Andes: significado en los diccionarios de aymara y quechua, siglos XVI-XVII* (La Paz, 2004). Sobre los aymaras, véase Therêse Bouysse-Cassagne, *La identidad aymara: Aproximación histórica (siglo XV, siglo XVI)* (La Paz, 1987), y sobre la frontera oriental amerindia: Thierry Saignes, *Los Andes orientales: historia de un olvido* (La Paz, 1985), y su *Ava y Karai: ensayos sobre la frontera chiriguano (siglos XVI-XX)* (La Paz, 1990). Véanse también Ana María Lema y Mario Alvarado, *Pueblos indígenas de la amazonia boliviana* (La Paz, 1998), y *Espacio, etnias, frontera, atenuaciones políticas en el sur del Tawantinsuyu, siglos XV-XVIII* (Sucre, 1995), y Pilar García Jordán, *Fronteras, colonización y mano de obra indígena en la Amazonia Andina (siglos XIX-XX): la construcción socio-económico amazónica en Ecuador, Perú y Bolivia (1792-1948)* (Lima, 1998); sobre la evolución comparada de la frontera oriente andina, véase: Pilar García Jordán, *Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia, 1820-1940* (Lima, 2001). Nathan Wachtel, *Le retour des ancêtres les indiens Urus de Bolivie, XXe-XVIe siècle, essai d'histoire régressive* (París, 1990), es un análisis de la civilización de los urus; Pedro Querejazu y Plácido Molina Barbery, *Las misiones jesuíticas de Chiquitos* (La Paz, 1995); Eric Langer, *Expecting Pears from an Elm Tree: Franciscan Missions on the Chiriguano Frontier in the Heart of South America, 1830-1949* (Durham, 2009).

La sociedad colonial se ha examinado en: Josep M. Barnadas, *Charcas, orígenes históricos de una sociedad colonial, 1535-1565* (La Paz, 1973); Eduardo Arze Quiroga, *Historia de Bolivia... siglo XVI* (La Paz, 1969); Alberto Crespo, *Historia de la ciudad de La Paz, siglo XVI* (Lima, 1961); *El corregimiento de la Paz, 1548-1600* (La Paz, 1972), y *La guerra entre vicuñas y vascongados, Potosí, 1622*-1625 (Lima, 1956); Herbert S. Klein, *Haciendas y ayllus en Bolivia: la región de La Paz, siglos XVIII y XIX* (Lima 1995); Alberto Crespo *et al*., *La vida cotidiana en La Paz durante la guerra de independencia, 1800-1825* (La Paz, 1975); Roberto Choque Canqui, *Sociedad y economía colonial en el sur andino* (La Paz, 1993); Laura Escobari de Querejazu, *Caciques, yanaconas y extravagantes. La sociedad colonial en Charcas, siglos XVI-XVIII* (La Paz, 2001).

La minería colonial española y Potosí mismo fueron materia de diversas crónicas en el periodo colonial en las obras de Peter Bakewell, *Miners of the Red Mountain: Indian Labour in Potosí, 1545-1650* (Albuquerque, 1984); *Silver and Entrepreneurship in Seventeenth Century Potosí* (Albuquerque, 1988); Jeffrey Cole, *The Potosí Mita, 1573-1700: Compulsory Indian Labor in the Andes* (Stanford, 1985), y Ann Zulawski, *They Eat from Their Labor: Work and Social Change in Colonial Bolivia* (Pittsburgh, 1995); Rose Marie Buechler, *The Mining Society of Potosí* (Ann Arbor, 1981), y Enrique Tandeter, *Coacción y mercado: la minería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826* (Buenos Aires, 1992). El impacto económico regional de la minería del Alto Perú se ha analizado en una obra de Carlos Sempat Assadourian, *El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico* (Lima, 1982). El clásico estudio sobre mercados regionales y élites en conflicto relacionadas con el Alto Perú fue escrito por Guillermo Céspedes del Castillo, *Lima y Buenos Aires, repercusiones económicas y políticas de la creación del virreinato del Plata* (Sevilla, 1946). Sobre el ingreso de la Corona y la estructura fiscal de Bolivia colonial, véase Herbert S. Klein, *Las finanzas americanas del imperio español: 1680-1809* (México, 1994). Sobre la economía no minera, Mary Money, *Los obrajes, el traje y el comercio de ropa en la Audiencia de Charcas* (La Paz, 1983).

La rebelión de Túpac Amaru fue tema de varios libros: Boleslao Lewin, *La rebelión de Túpac Amaru* (Buenos Aires, 1957); Scarlett O'Phelan, *La gran rebelión en los Andes. De Túpac Amaru a Túpac Catari* (Cuzco, 1995); Jurgen Golte, *Repartos y rebeliones. Túpac Amaru y las contradicciones de la economía colonial* (Lima, 1980); Sinclair Thomson, *We Alone Will Rule: Native Andean Politics in the Age of Insurgency* (Madison, 2002); Sergio Serulnikov, *Subverting Colonial Authority. Challenges to Spanish Rule in Eighteenth-Century Southern Andes* (Durham, 2003). También véanse las clásicas obras de Teresa Gisbert, *Iconogafía y mitas indígenas en el arte* (2a. ed., La Paz, 1994), y *El paraíso de los pájaros parlantes: la imagen del otro en la cultura andina* (La Paz, 1999).

III. EL TEMPRANO SIGLO XIX

Para el periodo de las guerras de independencia véanse: René Danilo Arze Aguirre, *Participación popular en la independencia de Bolivia* (La Paz, 1979); Charles Arnade, *The Emergence of the Republic of Bolivia* (Gainesville, Florida, 1957); Estanislao Just, *Comienzo de la independencia en el Alto Perú: los sucesos de Chuquisaca, 1809* (Sucre, 1994); Jorge Silves Salinas, *La independencia de Bolivia* (Madrid, 1992); José Luis Roca, *Ni con Lima ni con Buenos Aires: la formación de un Estado nacional en Charcas* (La Paz y Lima, 2007), y Eduardo Arze Quiroga, *Bolivia, el proceso de lucha inicial por la independencia: la insurrección de Cochabamba, 1808-1815* (La Paz, 1998).

Algunos estudios sobre los primeros gobiernos republicanos son: Lee Lofstrom, *El Mariscal Sucre en Bolivia* (La Paz, 1983); Philip T. Parkerson, *Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana, 1835-1839* (La Paz, 1984); Víctor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui Victoriano, *Por la concordia, la fusión y el unitarismo: Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880* (Madrid, 2000); Manuel Carrasco, *José Ballivián, 1805-1852* (Buenos Aires, 1960); Andrey Ščelčkov, *La utopía social conservadora en Bolivia: el gobierno de Manuel Isidoro Belzu (1848-1855)* (Moscú, 2007); Rossana

Barragán *et al*., *El siglo XIX: Bolivia y América Latina* (La Paz, 1997). Una historia económica y social bastante completa del desarrollo temprano del litoral boliviano es el de Fernando Cajías, *La provincia de Atacama, 1825-1842* (La Paz, 1975), y Rossana Barragán, *Espacio urbano y dinámica étnica, La Paz en el siglo XIX* (La Paz, 1990).

IV. EL SIGLO XIX TARDÍO

La mayor parte de la literatura política del periodo se cita en Herbert S. Klein, *Orígenes de la revolución nacional boliviana: la crisis de la generación del Chaco* (La Paz, 1968, y México, 1993); Marta Irurozqui, *La armonía de las desigualdades; élites y conflictos de poder en Bolivia, 1880-1920* (Madrid, 1994); Danièle Demelas, *Nationalisme sans nation? La Bolivie aux XIX–XX siècles* (París, 1980). Sobre la Guerra del Pacífico: Roberto Querejazu Calvo, *Guano, salitre, sangre: historia de la Guerra del Pacífico* (La Paz, 1979) y *La Guerra del Pacífico: síntesis histórica de sus antecedentes, desarrollo y consecuencias* (La Paz, 1983); consúltese también Edgar Oblitas Fernández, *Historia secreta de la Guerra del Pacífico: de 1879 a 1904* (La Paz, 2001). Antonio Mitre ofrece un excelente análisis de la industria minera de la plata en el siglo XIX, en: *Los patriarcas de la plata. Estructura socio-económica de la minería boliviana en el siglo XIX* (Lima, 1981).

Estudios de la evolución regional incluyen: Brooke Larson, *Indígenas, élites y Estado en la formación de las repúblicas andinas, 1850-1910* (Lima, 2002); Erick D. Langer, *Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia, 1880-1930* (Stanford, 1989); Tristan Platt, *Estado boliviano y ayllu andino. Tierra y tributo en el norte de Potosí* (La Paz, 1982); Gustavo Rodríguez O., *Poder central y proyecto regional, Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y XX* (La Paz, 1993), y *La construcción de una región. Cochabamba y su historia, siglos XIX-XX* (Cochabamba, 1995). Para el periodo más reciente, véanse los estudios de Gonzalo Rojas Ortuste, Luis Tapia Mealla y Óscar Bazoberry Chali, É*lites a la vuelta del siglo. Cultura política en el Beni* (La Paz, 2000); Fernando Prado (ed.), *Poder y élites en*

Santa Cruz: tres visiones sobre un mismo tema (Santa Cruz de la Sierra, 2007). Sobre movimientos indígenas: Ramiro Condarco Morales, *Zárate, el "temible" Wilke. Historia de la rebelión indígena de 1899* (2a. ed. rev., La Paz, 1982); Laura Gotkowitz, *A Revolution for Our Rights. Indigenous Struggle for Land and Justice in Bolivia, 1880-1952* (Durham, 2007); Tristan Platt, *Los guerreros de Cristo: cofradías, misa solar y guerra regenerativa en una doctrina Macha (siglos XVIII-XX)* (La Paz, 1996).

V. LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX

Algunos estudios sobre la era liberal incluyen los trabajos de Juan Albarracín Millán, *El poder minero en la administración liberal* (La Paz, 1972); *Bolivia: el desentrañamiento del estaño. Los republicanos en la historia de Bolivia* (La Paz, 1993); *El poder financiero de la gran minería boliviana* (La Paz, 1995); Luis Antezana Ergueta, *La guerra entre La Paz y Chuquisaca (1899)* (La Paz, 1999). Existen dos biografías sobresalientes del periodo de 1920 y 1930, una por Benigno Carrasco, *Hernando Siles* (La Paz, 1961), y la otra por David Alvestegui, *Salamanca, su gravitación sobre el destino de Bolivia* (3 vols., La Paz, 1957-1962). Augusto Céspedes, en dos volúmenes, *El dictador suicida, 40 años de historia de Bolivia* (Santiago de Chile, 1956), y en los primeros tres volúmenes de la serie de cinco escrita por Porfirio Díaz Machicado, *Historia de Bolivia. Saavedra, 1920-1925* (La Paz, 1954); *Historia de Bolivia, Guzmán, Siles, Blanco Galindo, 1925-1931* (La Paz, 1954); *Historia de Bolivia, Salamanca, La guerra del Chaco, Tejada Sorzano* (La Paz, 1955). La mayor rebelión indígena del periodo se ha examinado en Roberto Choque y Esteban Ticona, *La sublevación y masacre de 1921* (La Paz, 1996).

La historia económica de este periodo se analiza en Walter Gómez, *La minería en el desarrollo económico de Bolivia, 1900-1970* (La Paz, 1978); Antonio Mitre, *Bajo un cielo de estaño: fulgor y ocaso del metal en Bolivia* (La Paz, 1993), y en *El enigma de los hornos: la economía política de la fundición de estaño: el proceso boliviano a la luz de otras experiencias* (La

Paz, 1993); Charles F. Geddes, *Patiño: The Tin King* (Londres, 1972); Alfonso Crespo, *Los Aramayo de Chichas: tres generaciones de mineros bolivianos* (Barcelona, 1981); Helmut Waszkis, *Dr. Moritz (Don Mauricio) Hochschild, 1881-1965* (Fráncfort, 2001). La economía no minera del periodo también se comienza a estudiar; véanse María Luisa Soux, *La coca liberal: producción y circulación a principios del siglo XX* (La Paz, 1993), y Antonio Mitre, *Los hilos de la memoria: ascensión y crisis de las casas comerciales alemanas en Bolivia 1900-1942* (La Paz, 1996); Margaret A. Marsh, *Bankers in Bolivia: A Study in American Foreign Investment* (Nueva York, 1928); Pilar Gamarra, *Amazonía norte de Bolivia: economía gomera (1870-1940): bases económicas de un poder regional, la casa Suárez* (La Paz, 2007). Sobre el crecimiento y desarrollo de Oruro, véase Pilar Mendieta (ed.), *Vivir la modernidad en Oruro: 1900-1930* (La Paz, 2010). Sobre la vida cotidiana en dos centros mineros clave, véase Luis Oporto Ordóñez, *Uncia y Llallagua. Empresa minera capitalista y estrategias de apropiación real del espacio (1900-1935)* (La Paz, 2007); María Luisa Soux, *La coca liberal: producción y circulación a principios del siglo XX* (La Paz, 1993).

Sobre educación: Françoise Martínez, *"Régéneérer la race", Politique educative en Bolivie (1898-1920)* (París, 2010); Karen Claure, *Las escuelas indigenales: otra forma de resistencia comunitaria* (La Paz, 1989); Roberto Choque Canqui y Cristina Quisbert, *Educación indigenal en Bolivia: un siglo de ensayos educativos y resistencias patronales* (La Paz, 2006).

VI. DE LA DÉCADA DE 1930 AL PRESENTE

Roberto Querejazu Calvo, *Masamaclay: Historia política, diplomática y militar de la guerra del Chaco* (3a. ed., La Paz, 1975); David H. Zook Jr., *The Conduct of the Chaco War* (Nueva York, 1960), y René Danilo Arze, *Aguirre, guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco* (La Paz, 1987) son buenas introducciones a la historia de esta guerra. Augusto Céspedes, *El presidente colgado* (La Paz, 1971), así como en los últimos dos volúmenes de la historia de Porfirio Díaz

Machicado: *Historia de Bolivia, Toro, Busch Quintanilla, 1936-1940* (La Paz, 1957), e *Historia de Bolivia, Peñaranda, 1940-1943* (La Paz, 1958); Sergio Almaraz, *El poder y la caída. El estaño en la historia de Bolivia* (2a. ed., La Paz, 1969). Estudios clásicos de carácter general de la sociedad boliviana son: René Zavaleta Mercado, *El poder dual en América Latina. Estudio de los casos de Bolivia y Chile* (México, 1974), y *La nacional-popular en Bolivia* (México, 1986); Tristan Marof, *La tragedia del altiplano* (Buenos Aires, 1934), y Carlos Montenegro, *Nacionalismo y coloniaje* (3a. ed., La Paz, 1953).

Sobre la evolución política de la Revolución Nacional de 1952, véase Robert J. Alexander, *The Bolivian National Revolution* (Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, 1958); James Malloy, *Bolivia, the Uncompleted Revolution* (Pittsburgh, 1970); James Dunkerley, *Rebelión en las venas* (La Paz, 1987); James Malloy y Eduardo Gamarra, *Revolution and Reaction: Bolivia, 1964-1985* (Nuevo Brunswick, Nueva Jersey, 1988); Jean-Pierre Lavaud, *L'instabilité politique de l'Amérique Latine, le cas bolivien* (París, 1991); Luis Peñaloza, *Historia del Movimiento Nacionalista Revolucionario, 1941-1952* (La Paz, 1963); Luis Antezana E., *Historia secreta del Movimiento Nacionalista Revolucionario* (7 vols., La Paz, 1984-1988); Guillermo Lora, *José Aguirre Gainsborg, fundador del POR* (La Paz, 1960), y S. Sándor John, *Bolivia's Radical Tradition. Permanent Revolution in the Andes* (Tucson, 2009). Philippe Labrevuex, *Bolivia bajo el Che* (Buenos Aires, 1968), y la colección de escritos del Che Guevara en Juan Maestre Alfonso (ed.), *Bolivia: victoria o muerte* (Madrid, 1975); Jorge Gallardo Lozada, *De Torres a Banzer, diez meses de emergencia en Bolivia* (Buenos Aires, 1972); Jonathan Kelley y Herbert S. Klein, *Revolution and the Rebirth of Inequality: A Theory Applied to the Bolivian National Revolution* (Berkeley, 1981). Un expresidente boliviano, quien cubriera uno de los periodos presidenciales más breves, ha escrito una memoria política inusual: Carlos D. Mesa Gisbert, *Presidencia sitiada. Memorias de mi gobierno* (La Paz, 2008).

Zulema Lehm y Silvia Rivera, *Los artesanos libertarios y la ética del trabajo* (La Paz, 1988), trata de los anarquistas del siglo XX. La federación obrera en Jorge Lazarte Rojas, *Movimiento obrero y procesos políticos en*

Bolivia: historia de la C.O.B., 1952-1987 (La Paz, 1989); John H. Magill, *Labor Unions and Political Socialization: A Case Study of Bolivian Workers* (Nueva York, 1974); John Sandor, *Bolivia's Radical Tradition: Permanent Revolution in the Andes* (Tucson, Arizona, 2009). Sobre los mineros véase Gustavo Rodríguez, *El socavón y el sindicato. Ensayos históricos sobre los trabajadores mineros, siglos XIX-XX* (La Paz, 1991); Domitila Barrios de Chungara, *Let Me Speak!* (Nueva York, 1978); June Nash, *We Eat the Mines and the Mines Eat Us* (Nueva York, 1979); Juan Rojas y June Nash, *I Spent My Life in the Mines: The Story of Juan Rojas, Bolivian Tin Miner* (Nueva York, 1992).

Los estudios sobre el campesinado incluyen, de Silvia Rivera: *Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980* (4a. ed., La Paz, 2003); Jorge Dandler, *El sindicalismo campesino en Bolivia: los cambios estructurales en Ucureño* (México, 1969); Xavier Albó, *Achacachi: medio siglo de lucha campesina* (La Paz, 1979); José M. Gordillo, *Campesinos revolucionarios en Bolivia. Identidad, territorio y sexualidad en el valle alto de Cochabamba, 1952-1964* (La Paz, 2000); José Antonio Rocha, *Con el ojo de adelante y con el ojo de atrás: ideología étnica, el poder y lo político entre los quechua de los valles y serranías de Cochabamba (1935-1952)* (La Paz, 1999). La ideología indigenista se revisa en Josefa Salmón, *El espejo indígena, el discurso indigenista en Bolivia, 1900-1956* (La Paz, 1997), y Javier Hurtado, *El Katarismo* (La Paz, 1986).

La economía boliviana desde la década de 1920 también ha sido objeto de trabajos como los de Cornelius H. Zondag, *The Bolivian Economy, 1952-1965* (Nueva York, 1966); George Jackson Eder, *Inflation and Development in Latin America: A Case History of Inflation and Stabilization in Bolivia* (Ann Arbor, 1968); Óscar R. Antezana Malpartida, *Análisis de la Nueva Política Económica* (La Paz, 1988); Samuel Doria Medina, *La economía informal en Bolivia* (La Paz, 1986); Rodney Pereira Maldonado, Ernesto Sheriff Beltrán y Valeria Salinas Maceda, *Finanzas públicas. Comportamiento e impacto en el desarrollo nacional y regional (1990-2010)* (La Paz, 2012); Carlos Gustavo Machicado, Osvaldo Nina y Luis Carlos Jemio, *Factores que inciden en el crecimiento y el desarrollo en Bolivia.*

Análisis nacional y regional (1989-2009) (La Paz, 2012); Horst Grebe López, Mauricio Medinaceli Monroy, Rodrigo Fernández Ortiz y Cristina Hurtado de Mendoza Carranza, *Los ciclos recientes en la economía boliviana. Una interpretación del desempeño económico e institucional (1989-2009)* (La Paz, 2012); Rubén Ferrufino Goitia, Iván Velásquez Castellanos y Marco Gavincha Lima, *Suficiencia y eficacia de la inversión en Bolivia. Análisis macro y microeconómico (1989-2009)* (La Paz, 2012); J.L. Evia, , R. Laserna y S. Skaperdas, *Conflicto social y crecimiento económico en Bolivia* (Cochabamba, 2008); Fundación Jubileo, *Situación de los hidrocarburos en Bolivia* (La Paz, 2013). En cuanto a la minería, véase: Mahmood Ali Ayub e Hideo Hashimoto, *The Economics of Tin Mining in Bolivia* (Washington, 1985); Manuel E. Contreras y Mario Napoleón Pacheco, *Medio siglo de minería mediana en Bolivia, 1939-1989* (La Paz, 1989); Ricardo Godoy, *Mining and Agriculture in Highland Bolivia* (Tucson, Arizona, 1990); Leonith Hinojosa (ed.), *Gas y desarrollo: dinámicas territoriales rurales en Tarija, Bolivia* (La Paz, 2012). Para una visión general de la sociedad y economía, véase Fernando Campero Prudencio (ed.), *Bolivia en el siglo XX* (La Paz, 1999).

Sobre los profundos cambios producidos por la Reforma Agraria de 1953, véase Jane Benton, *Agrarian Reform in Theory and Practice: A Study of the Lake Titicaca Region of Bolivia* (Aldershot, 1999); William J. McEwen, *Changing Rural Society: A Study of Communities in Bolivia* (Nueva York, 1975), y evaluaciones más detalladas sobre regiones: Roger A. Simmons, *Palca and Pucara: A Study of ... Two Bolivian Haciendas* (Berkeley, 1974), y Libbet Crandon-Malamud, *From the Fat of Our Souls: Social Change, Political Process, and Medical Pluralism in Bolivia* (Berkeley, 1991), entre muchos otros trabajos.

En cuanto a las migraciones contemporáneas a la frontera oriental y nuevos centros urbanos, véase: Leslie Gill, *Peasants, Entrepreneurs, and Social Change: Frontier Development in Lowland Bolivia* (Boulder, Colorado, 1987); Ximena Soruco Sologuren, *La ciudad de los cholos, mestizaje y colonialidad en Bolivia, siglos XIX y XX* (Lima, 2013); Xavier Albó, Tomas Greaves y Godofredo Sandoval, *Chukiyawu, la cara aymara de La Paz* (4

vols.; La Paz, 1981-1987); Sian Lazar, *El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia* (Durham, 2008). Sobre cultura aymara véase: Xavier Albó (ed.), *Raíces de América: el mundo aymara* (Madrid, 1988); Jacques Monast, *L'Universe religieux des aymaras de Bolivie* (Cuernavaca, 1966); Olivia Harris, *To Make the Earth Bear Fruit: Essays on Fertility, Work, and Gender in Highland Bolivia* (Londres, 2000); María L. Lagos, *Autonomy and Power: The Dynamics of Class and Culture in Rural Bolivia* (Filadelfia, 1994). Se encuentra una indagación sobre la demografía y las lenguas de estos numerosos grupos en Pedro Plaza Martínez y Juan Carvajal Carvajal, *Etnias y lenguas de Bolivia* (La Paz, 1985). Respecto a identidad indígena: Ramiro Molina B. y Xavier Albó, *Gama étnica y lingüística de la población boliviana* (La Paz, 2006), y Xavier Albó y Víctor Quispe, *Quiénes son indígenas en los gobiernos municipales* (La Paz, 2004). Sobre grupos indígenas del oriente, véase el clásico estudio de A. Holmberg, *Nomads of the Long Bow. The Siriono of Eastern Bolivia* (Washington, D.C., 1950), y Jürgen Riester, *Los Guarasug'we. Crónica de sus últimos días* (La Paz, 1977).

Se debe mencionar también una serie de importantes antologías. Varias cubren sucesos políticos, económicos y sociales en Bolivia desde 1952. Éstas incluyen: James M. Malloy y Richard S. Thorn (eds.), *Beyond the Revolution: Bolivia Since 1952* (Pittsburgh, 1971); J. Lademan (ed.), *Modern Day Bolivia: Legacy of the Revolution and Prospects for the Future* (Tempe, Arizona, 1982); Fernando Calderón y Jorge Dandler (eds.), *Bolivia: La fuerza histórica del campesinado* (Cochabamba, 1984); John Crabtree y Laurence Whitehead, *Towards Democratic Viability: The Bolivian Experience* (Nueva York, 2001), y de ellos, *Unresolved tensions: Bolivia past and present* (Pittsburgh, 2008); Merilee Grindle y Pilar Domingo (eds.), *Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective* (Cambridge, Massachusetts, 2003); Xavier Albó y Carlos Romero, *Autonomías indígenas en la realidad boliviana y su nueva constitución* (2a. ed., La Paz, 2009); Rossana Barragán R. y José L. Roca, *Regiones y poder constituyente en Bolivia* (La Paz, 2006).

Nuevos estudios sobre el MAS y la administración de Evo Morales incluyen a Martin Sivak, *Evo Morales. The Extraordinary Rise of the First Indigenous*

President of Bolivia (Londres, 2008); Jeffrey Webber, *From Rebellion to Reform in Bolivia: Class Struggle, Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales* (Chicago, 2011); Sven Harten, *The Rise of Evo Morales and the MAS* (Londres, 2011), y Adrian J. Pearce (ed.), *Evo Morales and the Movimiento al Socialismo in Bolivia: The First Term in Context, 2006-2010* (Londres, 2011).

SOBRE EL AUTOR

HERBERT S. KLEIN. Es profesor emérito Gouverneur Morris de la Universidad de Columbia, y antiguo profesor de Historia y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Sobre Bolivia ha escrito dos libros más: *Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana: la crisis de la generación del Chaco* (La Paz, 1963; México, 1993) y *Haciendas y Ayllus en Bolivia: la región de la Paz, siglos XVIII y XIX* (Lima, 1995); además es coautor de un tercero, *Revolution and the Rebirth of Inequiality: A Theory Applied to the National Revolution of Bolivia* (Berkeley, 1981). Su trabajo incluye asimismo *Las finanzas americanas del imperio español: 1680-1809* (México, 1994), *El tráfico de esclavos en el Atlántico* (Lima, 2011) y la coautoría de *Evolução da sociedade e economía escravista de São Paulo, 1750 a 1850* (São Paulo, 2006), entre otros libros sobre Brasil.

Historia mínima de Bolivia
Portada: Pablo Reyna.
Cuidó la edición la Dirección de Publicaciones de
El Colegio de México.

libros.colmex.mx
video-comentarios de libros COLMEX

Epub trabajado por PIXE*LEE*
www.pixelee.com.mx

Marzo 2016

Bolivia, una nación creada a fuerza de conquistas imperiales y adaptaciones nativas, con una singular población acostumbrada a vivir en las alturas, es aún la más amerindia de las repúblicas americanas, al tiempo que participa de lleno en la economía mundial. La gran parte de sus periodos colonial e independiente ha estado marcada por el auge y la caída de su industria minera, desde la exportación de plata a Europa en el siglo XVI hasta la de gas natural a Brasil y Argentina en la actualidad. Durante siglos estuvo dominada por una élite blanca que controlaba a la población campesina de origen aimara y quechua, en la cual el español era el idioma minoritario. Sin embargo, ésta ha experimentado en los últimos tiempos mayor movilidad social y económica que cualquier otra población indígena o mestiza de Hispanoamérica. Lo que es más, Bolivia es actualmente el único país latinoamericano gobernado por su población amerindia originaria y la élite mestiza. Uno de los principales intereses de esta edición es revisar cómo y por qué sucedió todo esto mediante el examen de la evolución económica, social y política de esta importante nación, desde los primeros poblamientos de la región hasta el régimen actual de Evo Morales. Éstos son algunos de los temas que se analizan en este estudio histórico que en su primera edición en español fue aceptado por los propios bolivianos como una nueva historia general de su país.

EL COLEGIO DE MÉXICO

TURNER

Historia MÍNIMA